



01082
5
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DOCTORADO EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN EL PERÚ: DINÁMICA SOCIAL
EN POS DE LA DEMOCRACIA Y LA FRAGILIDAD
INSTITUCIONAL DEL ESTADO, 1930-2000.

T E S I S
PARA OPTAR EL GRADO DE
DOCTORA EN ESTUDIOS
LATINOAMERICANOS
P R E S E N T A :
RUTH MADUÑO PAULETTE

ASESORES:
DR. RICARDO MELGAR BAO
DR. ANTONIO GARCÍA DE LEÓN
DR. BRIAN CONNAUGHTON

MEXICO, D. F.



2003

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
ESCUELAS



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

ÍNDICE

	PÁGINA
AGRADECIMIENTOS	6
INTRODUCCIÓN	7
CAPÍTULO I DOMINIO OLIGÁRQUICO: AUTORITARISMO, PODER PATRIMONIAL Y DEMOCRACIA SEGMENTADA. 1930 Y 1956	18
1. EL MODELO AGRO MINERO EXPORTADOR Y LA INDUSTRIALIZACIÓN.	24
a. EL MODELO AGRO EXPORTADOR.	25
b. LA MINERÍA Y EL CAPITAL EXTRANJERO.	32
c. LA INDUSTRIA	37
2. LA EXCLUSIÓN REGIONAL. COMUNIDADES INDÍGENAS Y GAMONALES.	40
3. ENTRE LA DICTADURA Y LA DEMOCRACIA: PROCESOS POLÍTICOS. MOVIMIENTOS SOCIALES Y FRAGILIDAD INSTITUCIONAL.	44
CAPÍTULO II. ENTRE EL SOBREVIVIENTE MODELO AGRO EXPORTADOR Y LA INDUSTRIALIZACIÓN SUSTITUTIVA: REAPERTURA DEMOCRÁTICA. 1956-1968.	68
1. EL REFORMISMO CONSERVADOR DE 1963-1968.	72
a. CONTINUIDAD DE LA INDUSTRIALIZACIÓN SUSTITUTIVA.	72
b. POPULISMO Y PROBLEMA AGRARIO.	85
2. LAS PUERTAS ENTREABIERTAS A LA DEMOCRACIA: REFORMISMO CONSERVADOR Y REPRESIÓN.	91

Se a la Dirección General de Bibliotecas de
a difundir en formato electrónico e impreso
de su trabajo intelectual

NOMBRE: Ruth
Maduro de Zaldívar
FECHA: 24/11/2019
MA: Rafael

CAPÍTULO III. DEL REFORMISMO RENOVADO A LA FRUSTRACIÓN Y COLAPSO:

1968-1980.	99
1 EL REFORMISMO DEL GOBIERNO MILITAR DE LA "PRIMERA FASE": LA DEMOCRACIA ACOTADA, 1968-1975.	104
2 TENDENCIAS CORPORATIVISTAS Y LAS LUCHAS SOCIALES POR LA AUTONOMÍA.	119
3. LAS MANIFESTACIONES DE LA CRISIS Y EL FIN DEL REFORMISMO: LA "SEGUNDA FASE" DEL GOBIERNO MILITAR, 1975-1980.	129
a EL PROGRAMA DE ESTABILIZACIÓN. LA TEORÍA DE LAS "CUATRO BRECHAS".	132
b LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA. LA POBLACIÓN TOMA LAS CALLES.	135
CAPITULO IV LOS GOBIERNOS CIVILES DE LA DÉCADA DE 1980.	145
1 LA VUELTA DE FERNANDO BELAUNDE TERRY: CRISIS ECONÓMICA, ENTRE EL NEOLIBERALISMO Y LA ORTODOXIA	148
2 ALAN GARCIA: ENTRE EL NEOLIBERALISMO Y LA HETERODOXIA.	156
3 CRISIS POLITICA E INSTITUCIONAL. LA RUPTURA DE LOS REFERENTES DEMOCRATICOS, EL CAOS ECONOMICO Y LAS ASPIRACIONES SOCIALES DE ORDEN.	161
4. LA EMERGENCIA DE LOS SECTORES POPULARES EN EL ESCENARIO SOCIAL. LA RECONFIGURACIÓN DEL PERÚ COMO PAIS ANDINO. - EL TERRORISMO.	165
4.1. EL "DESBORDE POPULAR" DE LA DÉCADA DE 1980.	168
a. LAS MIGRACIONES.	170

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

b. LA ECONOMÍA INFORMAL.	174
4.2. LAS NUEVAS ORGANIZACIONES POPULARES.	179
a. LOS CLUBES DE MADRES Y DE MUJERES EN GENERAL.	180
b. LOS COMITES DEL VASO DE LECHE.	181
c. LOS COMEDORES POPULARES.	182
d. LAS ASOCIACIONES DE POBLADORES.	184
e. LOS MUNICIPIOS.	185
4.3. EL NUEVO ESCENARIO RURAL. LAS RONDAS CAMPESINAS.	187
CAPÍTULO V. FUJIMORISMO. DICTADURA CIVIL-MILITAR EN LA DÉCADA DEL 90.	195
1. NEOLIBERALISMO Y LAS POLÍTICAS DE CHOQUE.	198
2. LA INSTITUCIONALIDAD POLITICA Y DEMOCRATICA QUEBRADA, LOS ACTORES Y LOS PROCESOS SOCIALES CONTROLADOS. EL CHINO CHOLO: IMAGINARIO SOCIAL Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA.	210
3. LA REELECCIÓN DE FUJIMORI: EL FINAL DEL TUNEL .	227
4. NUEVOS PROCESOS: RESTAURACION DE LA DEMOCRACIA.: EL GOBIERNO DE TRANSICION, ALEJANDRO TOLEDO: EL CHOLO CHOLO.	236
CONCLUSIONES.	239
BIBLIOGRAFÍA.	249



 TESIS CON
 FALLA DE ORIGEN

Dedico este trabajo a Virgilio, Sara y Ana María siempre presentes en mi vida. A Luz, Sara y Patricia, entrañables, por su permanente apoyo y cariño. A mis hermanos.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi reconocimiento a la Dra. María Soledad Cruz, Jefa del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, quien nos estimuló con frecuencia y ofreció el apoyo institucional necesario para la elaboración de este trabajo. De manera especial, agradezco a mis colegas del Grupo de Investigación de Sociología Rural, con quienes discutí los primeros capítulos recibiendo la calidez de sus estímulos para continuar y sus útiles sugerencias.

El Dr. Ricardo Melgar Bao nos ha ofrecido su asesoría y nos ha hecho reflexionar sobre distintos temas contemplados en la tesis, a él va mi agradecido reconocimiento y espero haber plasmado muchos de sus lúcidos comentarios y las preocupaciones que nos hermanan con el Perú. Igualmente, expreso mi agradecimiento a los doctores Antonio García de León y Brian Connaughton quienes aceptaron la responsabilidad de asesorarnos, leyendo con cuidado el texto y haciéndonos comentarios que estimularon la conclusión de este trabajo. A los doctores Michelle Chauvet, Francis Mestries, Mario Miranda Pacheco y Juan Arancibia, les agradezco haber leído y comentado este trabajo con detenimiento y profundidad y haber realizado algunos comentarios y correcciones al mismo.

Gracias al trabajo de Myriam Vargas en casa, a su gran apoyo y amistad, a ella le debemos el haber podido dedicar a este trabajo todo el tiempo necesario para culminarlo.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

INTRODUCCIÓN

La transformación del gobierno civil de Alberto Fujimori, elegido democráticamente y altamente respaldado por la mayoría de los peruanos, en una dictadura civil-militar durante la década de 1990 nos conmocionó profundamente. Hemos analizado los acontecimientos políticos y sociales previos que habían confluído para que tal situación se diera, argumentando la condición de pobreza y exclusión mayoritaria de la población acentuada por las políticas neoliberales y la globalización, desde la crisis política y social que atravesaba el país, la crisis institucional y de representación, el nuevo perfil de los movimientos sociales y los cambios en la estructura social peruana; pero esas líneas de análisis no parecían haber sido suficientes para lograr una explicación de mayor alcance, ya que muchos de esos argumentos debían ser necesariamente relacionados con las condiciones históricas estructurales de largo aliento tanto a nivel del funcionamiento de la economía, como de la política y la sociedad peruana.

Cuando decidimos iniciar este trabajo, nuestro cuestionamiento básico se encaminaba a formular preguntas tales como: ¿Cómo fue posible la instauración de un régimen dictatorial que quebrara no sólo el funcionamiento del sistema político, sino el sistema institucional del Estado?, ¿Cuáles fueron los referentes sociales democráticos construidos históricamente en el país y que el régimen fujimorista pudo tan fácilmente desgajar?, ¿Qué relación tenían esos procesos con los cambios en la estructura social peruana?, ¿Cuáles han sido en el Perú, los soportes institucionales del poder político, y cómo la sociedad civil ha sido excluida o ha participado en su construcción?, ¿Ha existido en el país un sistema político democrático desarrollado con cierta consistencia, o se han producido acontecimientos que socavaron su consolidación?, ¿A qué tipo de democracia nos estamos refiriendo en la actualidad si la remontamos a la historia política del país?

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Todas esas y otras preguntas connotan, sin duda, una toma de posición crítica, connotan, asimismo, un sentido de la ética y la moral de hacia donde debe transitar lo público y la política, una aspiración a la tolerancia y la inclusión, al debate, al consenso y a la disidencia; no podemos excluirnos de la búsqueda de esos valores en la política y en la vida de los ciudadanos.

Este trabajo tratará precisamente de desbrozar los elementos que favorecieron la constitución de los principales actores políticos y sociales en el Perú, en el contexto de los regimenes dictatoriales que socavaron y limitaron ese proceso durante el siglo XX. Tratará asimismo, de analizar la construcción de una experiencia social democrática que, aunque limitada y llena de escollos, trascendió las circunstancias políticas más adversas para surgir y recrearse en los últimos años como respuesta al régimen dictatorial de la década del 90.

En relación a esa dinámica, abordaremos los acontecimientos que abonaron la creación de duras restricciones en el ejercicio y afirmación de la ciudadanía de grandes segmentos de la población, y las limitaciones que se erigieron respecto a la acción política partidaria de diversos actores sociales del país. En esa dirección, nos interesa identificar las trabas que se impusieron para la consolidación de un sistema político y democrático de mayor consistencia y durabilidad.

Si en la década del 80, los problemas de gobernabilidad y legitimidad eran comunes en el análisis realizado por politólogos y científicos sociales peruanos y de otros países de América Latina; la experiencia Fujimorista de la década de 1990, provocó sorpresa borrando los horizontes teóricos convencionales sobre las dictaduras y democracias, y nos hizo volver los ojos a la comprensión de ese presente y a la historia peruana. En la actualidad podemos elogiar la vuelta del Perú a una democracia y a una institucionalidad política, pero aún debemos estar pendientes respecto a su consolidación. El debate teórico nos obliga no sólo a volver los ojos al pasado para lograr una mejor comprensión del presente, sino a conocer los cambios políticos y sociales ocurridos en las últimas décadas en el país y a lograr una comparación con otros procesos ocurridos en América Latina..

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Cuáles fueron los factores disruptivos de estos acontecimientos en el Perú?, y en qué sentido se podían engarzar con la historia?. En términos generales sabemos que "dominantes y dominados se construyen mutuamente. En ese sentido, es cierto que el gobierno... (ha recogido y expresado)... ciertos rasgos de nuestra cultura peruana. Pero en vez de separar la paja del grano y potenciar sus aspectos más vitales, democráticos y solidarios como correspondería a una verdadera elite modernizadora, el fujimorismo ... (ha concentrado y acentuado)... el lado oscuro de esa nueva cultura y la ha lanzado de regreso como rayo de luz negra sobre la sociedad, amenazando con reducir a cenizas lo poco de ética y valores democráticos que todavía nos quedan".¹ Qué sucedió entonces, como para que las fuerzas vitales de la sociedad sufrieran el embate arrollador del autoritarismo y se le impusiera como algo inexorable la aplicación de medidas neoliberales extremas que comprometieran su capacidad de resistencia

Acudimos como explicación a la historia, pero sabemos que ella no es una construcción lineal de acontecimientos que se suceden unos a otros y dan como resultado uno u otro fenómeno, aunque sí se pueden formular "argumentos acerca del proceso histórico que, asumiendo ciertas características, produjo, ...(por ejemplo)... el capitalismo europeo...(y su propio sistema institucional y democrático)...., por un lado, y, asumiendo otras, contribuyó a moldear las estructuras del atraso y del subdesarrollo".² moldeando, a su vez, las estructuras políticas y sociales, así como, el terreno institucional y la democracia.

En este sentido, la democracia no es una construcción mecánica y lineal, es más bien una construcción social a veces llena de contradicciones, como lo son la de los actores sociales y los ciudadanos, y en ese proceso influyen tanto los acontecimientos históricos específicos y particulares de largo aliento, como las coyunturas y las disrupciones, las creaciones nuevas y las aportaciones desafiantes. Hay pues en ella, elementos de continuidad y de ruptura, de experiencia acumulada y creatividad que se renueva socialmente.

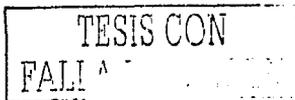
¹ Degregori, Carlos Ivan. "La década de la antipolítica. Auge y caída de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos". Instituto de Estudios Peruanos. Lima-Perú. 2000. Pp15.

En esa perspectiva, la década de 1990 en el Perú es explicable por los procesos económicos, políticos y sociales que le antecedieron durante gran parte del siglo XX, pero también porque en la década anterior afloraron la fragilidad constitutiva de la nación, los elementos básicos de las estructuras de poder excluyentes que prevalecieron históricamente en el país, las discontinuidades y rupturas en la construcción de la democracia, la frágil institucionalidad estatal y la vida política del país.

Es en este sentido que nos interesa la determinación de algunos de los rasgos que han caracterizado la evolución política del Perú y no la deductibilidad a partir de ciertas reglas que inexorablemente se tenían que reproducir; pues si bien la política y la cultura política son resultado de una construcción social, también tiene que ver con las aspiraciones y desafíos que impone la búsqueda del bien común en el presente, con sus componentes éticos y morales; ellas en sí son complejas, como lo es el ejercicio parcial o acabado de la democracia. Ésta no le ha sido extraña a la sociedad en las fases previas a pesar de los avatares de las dictaduras, y no le es ajena en la actualidad, como bien ilustran los acontecimientos de los últimos años.

Desde 1919, la historia del Perú está plagada de procesos dictatoriales que han interrumpido la continuidad de los gobiernos civiles. Con otras características, la propia experiencia fujimorista, de autogolpe de Estado en 1992, se había producido durante el gobierno de Leguía en 1919; de allí hacia delante hemos tenido en el Perú seis gobiernos militares: Sánchez Cerro (1931 a 1933), Benavides (1933 a 1939), Odría (1948 a 1956), la Junta Militar de gobierno de 1962, Velasco Alvarado (1968 a 1974) y Morales Bermúdez (1975 a 1980), los cuales recortaron parcial o totalmente los derechos ciudadanos, cancelaron el sistema de partidos y mermaron el funcionamiento institucional y democrático del Estado. Sólo uno de ellos (Velasco Alvarado) se orientó claramente hacia la democratización económica y social del país, pero no a su democratización política.

² Ugo Pipitone: "La salida del atraso. Un estudio histórico comparativo". Centro de Investigación y Docencia Económica y Fondo de Cultura Económica, México 1994. Pp. 14.

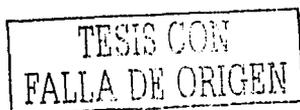


Hemos tenido, igualmente, diez gobiernos civiles: dos periodos presidenciales con Leguía (1919 a 1930), aunque durante su régimen el Presidente propició un golpe militar con apoyo de los militares; Prado (1939 a 1945), Bustamante y Rivero (1945 a 1948), Prado nuevamente (1956 a 1962), Belaúnde Terry (1963 a 1968 y, más tarde, de 1980 a 1985), García (1985 a 1990), en la década de 1990 dos periodos con Fujimori, un Gobierno Provisional con Agustín Paniagua en el 2001, y a partir de julio de ese año a Alejandro Toledo. Dos de esos gobiernos civiles se transformaron, por la acción de un autogolpe o golpe de Estado avalado o impulsado en alianza con los militares, en regimenes autoritarios: Leguía y Fujimori. Otros recurrieron a la fuerza militar para contrarrestar a los movimientos sociales: primeros gobiernos de Prado y Belaúnde Terry.

Este trabajo constituye un acercamiento a esa historia política del Perú del siglo XX, y se sitúa en lo que E. H. Carr propusiera respecto al pensamiento histórico como herramienta para "fomentar nuestra comprensión del pasado a la luz del presente y la del presente a la luz del pasado"³. Por lo mismo, no pretendemos una revisión histórica que explique la magnitud del presente, pero sí aportar elementos para su comprensión, tampoco se trata de un trabajo que agote los múltiples acontecimientos de esa historia, sino se centrará en algunos fenómenos seleccionados con nuestro propio criterio, y que nos parecieron fundamentales para la comprensión de los procesos políticos ocurridos en el Perú durante la década de 1990 y lo que devino en la siguiente: la restauración de la democracia con el Gobierno Provisional que ejerció mandato en el país entre el 2000 y 2001, y el ascenso de Alejandro Toledo a la Presidencia en julio de este último año.

Se trata de un trabajo que no constituye un vuelco hacia las fuentes primarias para reconstruir el pasado, está mas bien basado en fuentes secundarias, en análisis parciales realizado por múltiples estudiosos de la realidad peruana, en algunos de nuestros propios trabajos, análisis y reflexiones. Nuestro

³ E. H. Carr, "¿Qué es la historia?" Ed. Planeta, Barcelona- España, Pp.144



aporte se centra, especialmente, en el acercamiento que intentamos realizar a la historia política de todo el siglo XX, una mirada crítica de conjunto a los acontecimientos esenciales y que, en nuestra opinión, han influido en el zigzagueante proceso de construcción de la democracia y de la vida institucional del país.

Para tal efecto, hemos periodizado la historia del Perú combinando algunos criterios centrados en el análisis de las características básicas de los modelos de acumulación y su crisis, pero también los procesos políticos que han estado detrás de los regimenes dictatoriales y democráticos que gobernaron el país, enfatizando el papel ejercido por las organizaciones partidarias y los movimientos sociales en cada periodo.

Metodológicamente optamos por exponer primero los procesos económicos al interior de cada modelo de acumulación, para enseguida enmarcar las transformaciones en la vida política y social, relacionándolos no sólo con la acción de diversos actores sociales, sino con los movimientos sociales y los cambios ocurridos en la estructura social en diversas etapas.

Así, en el primer capítulo: dominio oligárquico: autoritarismo, poder patrimonial y democracia segmentada. 1930 Y 1956, exponemos los aspectos esenciales del modelo agro-minero exportador, concentrado en la costa peruana y su característica básica de exclusión de la sierra y selva y la mayoría de la población del país. La exclusión regional que engarza el dominio de la hacienda tradicional sobre la población indígena, y de los colonizadores sobre la población nativa de la selva, subordinados y aliados ambos con el poder de la oligarquía exportadora agrícola y minera. Este capítulo abre nuestras reflexiones acerca de los procesos políticos y sociales impulsados por diversos sectores de la sociedad y sus esfuerzos por abrir espacios institucionales de democratización del país.

Abordamos el surgimiento, desarrollo y resistencia de diversos actores sociales en el contexto de dictaduras militares que tendieron a socavar los derechos ciudadanos y la vida política partidaria, así como el fracaso de la primera experiencia democrática de 1945 a 1948. Tratamos de analizar los procesos de

maduración de la sociedad civil y sus esfuerzos por lograr una apertura institucional y democrática, aunque a los regímenes civiles les fue difícil consolidar los avances políticos surgidos al calor de las elecciones y no les fue posible establecer mecanismos orientados a cuajar un sistema político partidario estable en el país.

En el segundo capítulo: Entre el sobreviviente modelo agroexportador y la industrialización sustitutiva. Reapertura democrática. 1956-1968, tratamos precisamente sobre ese proceso contradictorio que impedía una industrialización consistente porque ella significaba comprometer los intereses oligárquicos, por lo mismo, la forma cómo fue imponiéndose la transacción política y económica entre las fracciones dominantes, a la vez que ellas daban continuidad a un modelo de industrialización y agro exportador altamente dependiente del capital internacional.

Analizamos cómo en esas condiciones, la vida política transitó entre una institucionalidad democrática de corte conservador que favoreció la emergencia de nuevos partidos políticos y un reformismo que no pudo resolver los problemas nacionales más urgentes. Nos referimos en este periodo a los grandes movimientos campesinos en la sierra, al surgimiento de un sistema partidario y a la democratización e institucionalización política y estatal del país, combinados con el uso del recurso represivo militar frente a las demandas sociales

En el tercer capítulo: Del reformismo renovado a la frustración y el colapso. 1968-1980, abordamos dos periodos: el primero, trata sobre las reformas estructurales emprendidas por el gobierno militar de Velasco Alvarado, al que denominamos el de la primera fase (1968-1975), y el proyecto político de control corporativo de las organizaciones políticas y sociales, en el que el "no partido" y "la acción participativa controlada" se constituyeron en los ejes ideológicos del resquebrajamiento de la democracia y del desarrollo político institucional.

El segundo periodo, trata sobre las manifestaciones de la crisis interna e internacional y las políticas de reestructuración y ajuste llevadas a cabo por el gobierno militar de la segunda fase (Morales Bermúdez, 1975-1980), bajo el mandato del Fondo Monetario Internacional. Tratamos de esclarecer las

TESIS CON
FECHA DE ORIGEN

características del modelo neoliberal y el impacto que ejerció la crisis como la aplicación de las políticas económicas en la población, las mismas que dieron lugar a movimientos sociales de magnitud nacional, siendo ésta la primera oportunidad en que esos movimientos se expresaron con la movilización masiva de la población de diversas regiones del país en los ya conocidos "paros regionales". Esta dinámica social, así como la acción de distintos actores políticos actuaría como presión y serían el preludio de la constitución de un sistema político partidario de mayor alcance y consistencia, y asumirían un papel fundamental respecto al retorno a la democracia y a la institucionalidad democrática con la elección de una Asamblea Constituyente, la cual debatiría y redactaría una nueva Constitución y convocando a elecciones generales en 1980.

La vuelta a la democracia en la década de 1980 constituye el objeto de análisis del capítulo IV, en él se exponen los dos periodos presidenciales que abarcaron la década: El primero, de Fernando Belaúnde Terry (1980-1985) que resultó siendo una combinación de dos vertientes contrapuestas; de un lado, la evocación de su pasado populista conservador y, de otro, las exigencias neoliberales de reestructuración y ajuste de la economía. Durante este régimen las fuerzas armadas mantuvieron una influencia decisiva no sólo porque ellas instrumentaron las acciones de contrainsurgencia, sino porque conformaron el gabinete civil-militar encargado de llevar adelante una política económica orientada a contrarrestar la crisis⁴. En el trayecto de este gobierno no sólo se profundizó la crisis económica, sino la crisis política e institucional del estado. Ésta será la fase en que el país verá surgir a uno de los movimientos sociales más radicales de su historia, con el terrorismo implementado por Sendero Luminoso, y, evocando a las guerrillas de la década del 60, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru.

⁴ Información proporcionada por Ricardo Melgar Bao

El segundo, por primera vez y desde su fundación en 1930⁵, la instauración de un gobierno populista nacionalista de origen aprista con la elección presidencial de su dirigente Alan García (1985-1990). Durante este gobierno no disminuyó la influencia ni la presencia política de las fuerzas armadas en los aparatos de Estado, especialmente en el Ejecutivo, y se produjo el desencuentro histórico entre un Estado que pugnaba por políticas populistas y una fuerte intervención del Estado en la economía, y los requerimientos nacionales e internacionales de reestructuración neoliberal de la economía. La opción por la llamada línea heterodoxa derivaría no sólo en la ruptura con los organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial y el aislamiento internacional del país, sino en el agravamiento de la crisis económica, acompañada de una crisis institucional y de los referentes democráticos tan costosamente reestablecidos a principios de la década de 1980.

Durante este decenio, destacamos la gran transformación en la estructura social del país, la renovada "andinización" del territorio y la población nacional como elemento constitutivo de la nación peruana. Destacamos, igualmente, la crisis institucional del Estado, de los mecanismos de intermediación política y social y su impacto sobre la experiencia social acumulada en términos de la ruptura de los referentes sociales con respecto a la democracia impulsada desde las instituciones del Estado.

Un tema central en este capítulo, abordado con cierto detenimiento, trata sobre la emergencia masiva de nuevos actores sociales en el escenario social urbano y rural del país y su movilización innovadora para desarrollar múltiples estrategias de convivencia social, de solidaridad y sobrevivencia, impulsando con ello, nuevas formas de gestión y de organización democrática que el gobierno subsiguiente no tomará en cuenta con miras a la reafirmación del sistema político y de la democracia, por el contrario buscará su control clientelar y cooptación para instaurar un régimen autoritario.

⁵ Planas, Pedro: "Los orígenes del APRA, el joven Haya" Okura Editores, 1986. Lima Perú, Pp. 110, 111. Sánchez, Luis Alberto: "Apuntes para una biografía del APRA". Tomo I. Ed. Mosca Azul, 1978. Lima Perú, Pp. 193.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

El capítulo V, que versa sobre la dictadura civil-militar instaurada por Alberto Fujimori en la década del 90, tratamos, en primer lugar, su ascenso democrático a través de elecciones generales, pero la adopción de un proyecto económico y militar en el que resaltan su adscripción radical al neoliberalismo y la implementación de medidas económicas extremas mediante las "políticas de choque", estrechamente vinculadas con las políticas de contrainsurgencia y derrota del terrorismo. En segundo lugar, abordamos el perfil social de su personalidad (el "chino cholo"), relacionándolo con los acontecimientos masivos que llevaron adelante los migrantes que se desplazaban por todo el territorio nacional.

Seguidamente, analizamos la transformación de este gobierno civil en uno de corte autoritario basado en una férrea alianza entre una cúpula civil y los militares, los soportes clientelares y de corrupción de esa alianza, la destrucción de las instituciones del Estado, de todo referente democrático en el funcionamiento del Congreso y demás poderes del Estado, el aplastamiento de toda forma de expresión política partidaria y la cancelación del sistema político previo, al cual diversos estudiosos han dado por calificar como la década de la antipolítica. Es en esta dirección, que tratamos, especialmente, el quiebre de la institucionalidad política y democrática y los procesos de control instrumentados frente a los actores políticos y sociales.

A contracorriente de esos procesos, en que el autoritarismo se enseñoreaba en el país afirmando el clientelismo político y la corrupción, rescatamos los aspectos centrales de la resistencia civil llevada adelante con distintas estrategias y concepciones, especialmente a partir de 1995 en que se produjo la primera reelección de Fujimori.

Nos detenemos en el análisis de las limitaciones de una política económica de corte personalista, caudillesca y concentrada en los éxitos obtenidos respecto a la erradicación del terrorismo, para abordar los elementos de la crisis recurrente que afectará al país a fines de la década del 90. El correlato político de tal crisis será, sin duda, la acentuación del control de los mecanismos de intermediación, la

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

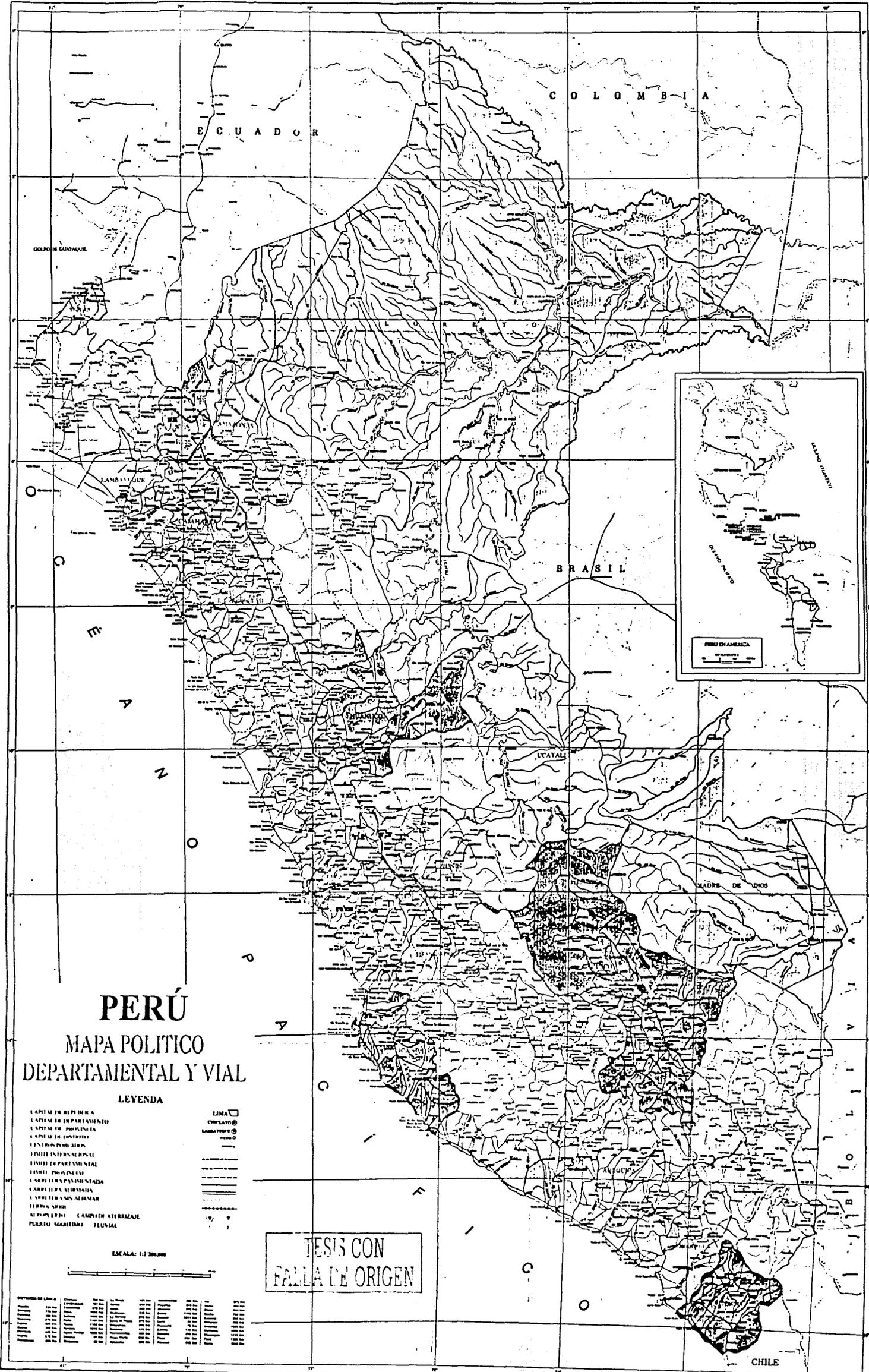
concentración y afianzamiento del poder autoritario, la implementación de nuevos métodos para socavar toda acción opositora, tanto a nivel de los movimientos sociales como para la persecución de los actores políticos de oposición.

Finalmente, tratamos sobre los aspectos relacionados con la resistencia política y social aunada a la pérdida de legitimidad del régimen a nivel internacional, especialmente durante la campaña y las elecciones en las que Fujimori logró su segunda reelección mediante un fraude electoral gigantesco. Seguimos su caída, acompañada por el desenmascaramiento televisivo de la corrupción a la que había llegado el régimen, la movilización masiva de la sociedad civil y la censura internacional.

Nuevamente, la restauración de la democracia con la nominación por el Congreso rescatado de los escombros de la intolerancia fujimorista, de un Gobierno Provisional que recreó una capacidad de convocatoria y consenso, y estableció referentes de legitimidad, de ética y tolerancia, aunque esta vez estaban presentes los nuevos actores sociales surgidos al calor de los cambios políticos y de las transformaciones en la estructura social del país. Una evaluación de los elementos históricos presentes en este proceso, nos remite a la experiencia social acumulada en las últimas décadas, especialmente aquellas que reafirmaron la solidaridad y un sentido ético del bien común, aquellas que nos remiten tanto a un rescate de la memoria histórica de la sociedad, como a sus aspiraciones recientes por constituir un sistema político y democrático más estable y duradero.

CAPÍTULO I

EL DOMINIO OLIGÁRQUICO: AUTORITARISMO, PODER PATRIMONIAL Y DEMOCRACIA SEGMENTADA. 1930 Y 1956



PERÚ

MAPA POLITICO DEPARTAMENTAL Y VIAL

LEYENDA

- | | |
|-------------------------|--------------|
| CAPITAL DE REPUBLICA | LIMA □ |
| CAPITAL DE DEPARTAMENTO | CHICLAYO ○ |
| CAPITAL DE PROVINCIA | LAMBAYEQUE ○ |
| CAPITAL DE DISTRITO | PIURA ○ |
| CENTRO PUEBLO SIERRA | |
| FINQUE INTERNACIONAL | |
| FINQUE DEPARTAMENTAL | |
| FINQUE PROVINCIAL | |
| CARRILERA PAVIMENTADA | |
| CARRILERA SERRADA | |
| CARRILERA SIN SERRAR | |
| TERMINO AEREO | |
| AEROPUERTO | |
| CAMPESIN ATERRIZAJE | |
| PUERTO MARITIMO | |
| FLUVIAL | |

ESCALA: 1:120,000



TESIS CON FALLA DE ORIGEN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

CAPÍTULO I

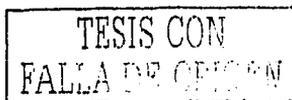
EL DOMINIO OLIGÁRQUICO: AUTORITARISMO, PODER PATRIMONIAL Y DEMOCRACIA SEGMENTADA. 1930 Y 1956

A diferencia de otros países de América Latina, la dominación oligárquica se prolongó en el Perú hasta promediar la década del sesenta. A pesar de que ese dominio fue sufriendo un inexorable proceso de deterioro, mantuvo, sin embargo, la suficiente fuerza económica y política como para dificultar una industrialización sostenida, debido a que las bases estructurales que dieron preeminencia al modelo agro minero exportador se mantuvieron casi intactas y continuaron siendo los ejes centrales de valorización del capital, aunque paralelamente se perfilaban cambios en la economía con el incremento del peso relativo de la producción manufacturera.

La oligarquía y la burguesía emergente encontraron en la mutua concesión una forma de coexistencia que mediatizó algunos esfuerzos para que ésta lograra imponer una nueva hegemonía política, de forma tal que el relativo crecimiento de la industria, de las clases medias y presencia activa de los sectores populares³ se efectuó en el contexto de un modelo agro minero exportador que, a diferencia de etapas precedentes de fuerte presencia del capital inglés, se vio fortalecido por la penetración del capital norteamericano. Aún así, ese modelo operó en un mercado interno restringido que sólo se ampliaba con cierta consistencia en el ámbito urbano y especialmente concentrado en Lima.

El predominio capitalista se abrió paso en medio de entornos contradictorios, unas veces, como los tres primeros años de Leguía, con propuestas y políticas democratizadoras que convocaban a la participación de los sectores medios y populares, para luego imponerse en el contexto de la

³ Burga, Manuel y Flores Galindo, Alberto: "Apogeo y Crisis de la República Aristocrática", Ediciones Rikchay Perú, Lima Perú, 1995. Pp. 127



transformación de esos gobiernos en gestiones de corte dictatorial o de regímenes surgidos mediante golpes militares, sustentados ambos en una alianza cívico militar que actuaría como mecanismo de contención de las demandas populares y represión de las movilizaciones sociales. Los casos de Leguía y el primer y segundo gobierno de Prado, ilustran la primera tendencia, mientras que Sánchez Cerro, Benavides y Odría son claros ejemplos de las dictaduras.

En ese contexto, el debilitamiento de la oligarquía no mermó significativamente su poder político frente a una emergente burguesía industrial: Es en parte debido a esta situación que el ejercicio del poder se sustentará en las sucesivas concesiones entre ambas fracciones dominantes,⁷ las fuerzas armadas y en menor medida los gamonales⁸. Esta afirmación enfatiza los procesos ocurridos de manera tendencial y en el largo plazo, ya que en los distintos periodos gubernamentales es posible identificar inclinaciones populistas de los regímenes civiles o militares, o la iniciativa de los sectores medios y populares que con sus movilizaciones presionaron por su inclusión en los sistemas de representación política y social, aunque ello no significara su alianza o presencia firme y constante en el ejercicio del poder controlado por la oligarquía y los industriales sujetos al dominio del capital norteamericano.

Ellos sustentaron esa hegemonía compartida ejerciendo un poder carente de respuestas significativas a las exigencias de desarrollo nacional en el largo plazo: por el contrario, la economía basó su crecimiento en la captación de recursos provenientes de la minería y de la agricultura de exportación, en la ausencia de una política agraria que no sólo transformara la estructura agraria tradicional sino que creara las condiciones de acceso de los campesinos a los adelantos técnico productivos, a un sistema educativo eficiente, a programas de asistencia técnica y financiera y, entre otros, a medios de comunicación que los proyectara como sujetos económicos a diferentes regiones y los articulara a nivel nacional.

⁷ Degregori, Carlos Ivan. "Sendero luminoso: 1. los hondos y mortales desencuentros, 2. Lucha armada y utopía autoritaria". Documentos de trabajo no. 4 y 6. Instituto de Estudios Peruanos. Lima-Perú. 1986.

Esas fracciones dominantes dieron continuidad a la construcción de un país cuyos circuitos productivos y comerciales más importantes se articulaban a intereses que se definían fuera del ámbito nacional, privilegiaron la Costa sobre la Sierra y Selva, y a Lima sobre el conjunto del territorio, y contribuyeron a profundizar la marginación económica, social y política de regiones importantes del país. A ese proceso contribuyó el limitado desarrollo de los medios de comunicación y que las políticas económicas y sociales no se orientaran a integrar a las regiones en la nueva dirección que el capital asumía a nivel nacional e internacional. Debido a ello, algunos mercados y poderes regionales, como los que se desarrollaron en el sur del país alrededor de la comercialización de la lana y la producción textil, operaron por largo tiempo con una autonomía relativa respecto al mercado de Lima y al resto de la costa peruana y sostuvieron escasas relaciones de intercambio con la mayor parte del territorio nacional.

“El débil y tardío desarrollo de los medios de comunicación y la forma de su desarrollo, desde los centros de producción hacia los puertos, grafica la falta de integración de la sociedad, del mercado interno y la fragmentada articulación de la economía nacional al mercado mundial”.... No es exagerado señalar que.... “el carácter de clase de la oligarquía peruana y su alianza con los gamonales ha bloqueado toda posibilidad de desarrollar un programa de integración nacional, expresado en condiciones materiales a las clases subalternas, a través de la cual se neutralicen las contradicciones de clases y se sienten las bases materiales para el surgimiento de una voluntad colectiva nacional”⁴. La profunda heterogeneidad en el desarrollo regional se mostraba así como uno de los síntomas de la frágil articulación del país como Nación.

Como correlato de la situación expuesta, la extensión de los aparatos del Estado y la ampliación de sus funciones durante la primera mitad del siglo XX, se forjaron en base a un quehacer político de las clases dominantes vinculado al

⁴ Los gamonales: terratenientes tradicionales generalmente ubicados en la Sierra, a la vez que detentaban el poder económico ejercían o controlaban el poder político.

⁵ López, Simelio. “El Estado oligárquico en el Perú: Un ensayo de interpretación.” *Revista Mexicana de Sociología*, Año XI, vol. XI, No. 3, Julio-Septiembre, 1978. Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, México Pp. 995.

ejercicio autoritario y clientelar del poder. En general, se produjo en las primeras décadas del siglo una suerte de privatización de las funciones públicas por los hacendados y gamonales debido a sus vínculos y muchas veces control del aparato militar, jurídico y aún educativo, especialmente en la Sierra.

En la medida en que el desarrollo capitalista abría espacios a las nuevas fracciones sociales que surgían bajo su sombra, el carácter de esas relaciones políticas y sociales se fueron descomponiendo lentamente en tanto que la modernización del estado se constituía en un imperativo real a pesar de la resistencia de las clases hegemónicas. Por ello es importante enfatizar la relevancia adquirida por la confluencia de distintas fuerzas sociales provenientes de los sectores medios, obrero, popular y campesino que, sin duda, ejercieron presión sobre una estructura social y política conservadora y lograron arrancar un ordenamiento legal y espacios políticos e institucionales más democráticos que respondieran a sus intereses básicos, de tal suerte que en el Perú se habría producido lo que Sinesio López llama un proceso de "evolución burguesa sin revolución burguesa"¹⁰.

Tal como analiza José Matos Mar en un excelente trabajo, en el Perú "la clase dominante se desarrolló en las ciudades, influida por patrones culturales europeizantes. Ella no tuvo como referencia al conjunto del territorio, fue ajena al universo de las mayorías y construyó un aparato económico, social, institucional y cultural diferente y separado de aquella cuya marginalidad era intrascendente, a la que tarde o temprano el desarrollo de la civilización haría desaparecer"¹¹. Aunque a lo largo del siglo XIX y el XX se verificaron algunos cambios, en la primera mitad de éste último, subsistían en el Perú las condiciones de marginación que sucedieron a la independencia, es decir, una "República sin ciudadanos....la marginación de los indios constituía la marginación de la inmensa mayoría de la población a la que no se le reconocía ningún derecho. Ella era vista como ajena a

¹⁰ López Sinesio, Op. Cit. Pp.996.

¹¹ Matos Mar, José. "Desborde popular y crisis del Estado. El nuevo rostro del Perú en la década de 1980". Serie Perú Problema 21. Instituto de Estudios Peruano. 1985. Lima-Perú.

la Nación – a la que había que integrarla- y estaba completamente excluida de toda participación en el manejo del Estado".¹²

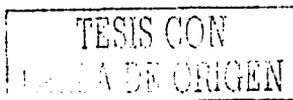
Así, la forma de constitución de la clase propietaria, sus referencias culturales y sus límites estructurales se reflejaron en su imposibilidad ideológica y política para impulsar un proyecto de alcance nacional que impactara y comprometiera el apoyo de los sectores medios, obreros, campesinos y populares. Ella se fortaleció bajo la concepción de que "era depositaria de la identidad y del poder".

Aunque diferentes regímenes dictatoriales establecieron vínculos con los sectores medios y populares, ellos resultaron ser coyunturales como en los casos de Benavides con los sectores medios y populares, Sánchez Cerro con los sectores populares, y Odria, quien intentó reeditar la política peronista creando barrios obreros orientando su política asistencial hacia los pobladores de las barriadas recientemente constituidas. Durante este régimen, sin embargo, se desató una feroz persecución a los miembros y simpatizantes de los partidos aprista y comunista

Con distintas características los dos gobiernos civiles de Prado convocaron a una participación democrática restringida de los ámbitos medios, desarrollando políticas de corte popular con la construcción de viviendas. En un sentido más profundo, la vocación democrática de Bustamante encontraba en la movilización de los sectores medios y populares un importante estímulo para establecer alianzas, sin embargo, ellas serán desbordadas por el propio curso de las demandas sociales y movilizaciones de los sectores medios y populares.

La fragilidad de esas alianzas con sectores subalternos hasta fines de la década del 50, muestra de alguna manera la incapacidad de las fracciones dominantes no sólo para proponer un proyecto nacional de desarrollo económico, político y social, sino para forjar las bases institucionales de una cultura política nacional. Tampoco lograron producir en el Perú "un grupo intelectual que les...

¹² Manrique, Nelson. "Violencia e imaginario social en el Perú contemporáneo". En " Tiempos de ira y amor". Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, DESCO Lima Peru, 1990. Pp. 53



(diera).. homogeneidad y autoconciencia por un lado y que les... (permitiera)... forjar una cultura nacional"¹³.

Nos interesa resaltar los factores sobre los que se fueron construyendo la lenta integración del territorio, la identidad nacional, la difícil y precaria comunicación ideológica y política entre los distintos sectores de la sociedad y entre las regiones del país. y, en general, el cúmulo de problemas políticos por resolver que aún subyacen en la sociedad peruana.

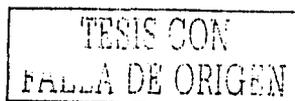
Si bien es cierto que entre las décadas de 1930 y 1950 se había logrado afirmar un sesgo industrializador y se ampliaron los espacios geográficos, económicos y sociales sobre los que se iba construyendo la nación; sin embargo, quedaban aún por resolver los problemas estructurales que marcaban al Perú como una realidad profundamente heterogénea y contradictoria en la que aún no se habían dado pasos firmes para su desarrollo y para su reconfiguración como país andino. Quedaba, pues, pendiente la resolución de los graves problemas derivados de la fragmentación territorial provocada desde el dominio colonial.

1.- EL MODELO AGRO MINERO EXPORTADOR Y LA INDUSTRIALIZACIÓN

En este apartado trataremos de presentar tanto el contexto de las actividades económicas prioritarias que comprometían a las fracciones dominantes, como los límites que se fueron imponiendo respecto al desarrollo democrático e institucional del país, para cuyo análisis esbozaremos el perfil de los acontecimientos políticos y sociales más importantes que marcaron este periodo.

A pesar de su lenta descomposición, el modelo agro extractivo de exportación fue vigente en el Perú hasta promediar la década del 60, en tanto que la agricultura de alimentos no había entrado en la órbita de los intereses de las clases dominantes ni del estado peruano. Antes bien y debido a la lógica de articulación con el mercado mundial, la estructuración económica del país y las

¹³ Lopez, S. Op. cit. Pp. 996.



políticas estatales privilegiaron el crecimiento del sector agrícola de exportación anclado en la costa y de una explotación minera en la sierra que operaba como enclave, mientras que el mundo andino constituía una gran reserva de mano de obra indígena y de provisión de alimentos para las haciendas de la costa, los centros mineros y las ciudades.

a. EL MODELO AGRO EXPORTADOR.

La crisis internacional de 1930 provocó en el Perú la caída del valor en dólares de las exportaciones azucareras de 67% en 1930, a 41% en 1932, y 45% en 1936 con respecto al año 1929, y algodonerías de 71% y 35% en esos primeros años, recuperándose para 1936, repercutiendo negativamente en la mano de obra al producirse el despido de más de la mitad de los trabajadores, al suspenderse el "enganche" de 40.000 campesinos para la producción de algodón y bajar los salarios casi a la mitad.¹⁴

Desde antes de la crisis, y con más énfasis después de ésta, se produjeron amplios procesos de recomposición de la propiedad agraria; la producción azucarera, mayormente controlada por el capital extranjero, se concentró en la costa norte del país, en los Departamentos de Lambayeque y La Libertad, disminuyendo considerablemente este producto en la zona central. Por su parte, la producción algodонера se mantuvo en algunas áreas importantes en el norte y se amplió en la zona central y sur de la costa, combinándose en ella la inversión de capitales foráneos, muchos de ellos de migrantes extranjeros, y la de un sector diverso propietarios peruanos.

Las consecuencias económicas y sociales de la alta concentración de la propiedad en ambos casos fueron devastadoras en el mediano y largo plazo, como también lo fue la política económica permisiva del estado respecto a las importaciones de artículos de consumo. La costa norte fue dominada por 26 latifundios mayormente azucareros, mientras que en el lado de los hacendados

¹⁴ Cotler, Julio: "Clases, Estado y Nación en el Perú". Instituto de Estudios Peruanos 1976. Lima Perú. Pp. 277.

algodóneros, algunas familias, como los Romero, monopolizaban la comercialización del producto y extendían sus intereses en el sistema financiero a través del Banco de Crédito; en el mismo sentido que la familia Prado consolidada desde antes en este sector con el Banco Popular.

Un ejemplo que ilustra la miopía estatal es la instalación de un puerto en la hacienda Casa Grande a través del cual los propietarios importaron, por largo tiempo, productos manufacturados para consumo de la mano de obra, los mismos que eran directamente comercializados en las "tiendas mercantiles" instaladas en las haciendas¹⁵, provocando la casi desaparición de los flujos comerciales que habían ido construyendo los artesanos de distintos poblados de la costa y sierra norte, cancelándose así toda posibilidad de desarrollo de una producción manufacturera. Las ciudades de Trujillo y Chiclayo vieron anulada su capacidad de transformación industrial y, eso sí, se convirtieron en centros de provisión de algún tipo de maquinaria e insumos agrícolas importados y de comercialización de alimentos que provenían de los pueblos cercanos, de las haciendas menores y de las comunidades indígenas serranas.

Los habitantes de los pequeños poblados convertidos con el tiempo en trabajadores de las haciendas azucareras, las clases medias golpeadas por el estrangulamiento de las actividades manufactureras, comerciales y de servicios, y los sectores de propietarios medianos y pequeños cuyas tierras habían sido absorbidas por las haciendas, constituyeron en gran medida la base social del APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), organizada en México en 1924 y cuya sección peruana fue fundada como partido por Víctor Raúl Haya de la Torre el 20 de septiembre de 1930 en Lima, siendo su primer Secretario General Luis Eduardo Henríquez.¹⁶

La alta concentración de la propiedad acelerada por efecto de la crisis del 30, propició a lo largo de los años venideros una firme proletarización de estratos medios y populares: es allí donde el APRA mostraría una gran capacidad

¹⁵ Klaren, Peter. "La formación de las haciendas azucareras y los orígenes del APRA". Ed. Moncloa. Lima, Peru. 1973. Pp. 62

¹⁶ Planas, Pedro O. Cit. Pp. 110-111, y Sánchez, Luis Alberto. Op cit. Pp. 193.



organizativa en importantes regiones de la costa peruana, y cuyos frutos se expresarían en el gran impulso al naciente sindicalismo en el sector azucarero y textil, en las luchas y huelgas de los trabajadores cañeros y en los movimientos sociales que terminaron con el enfrentamiento entre la militancia de este partido y el ejército durante las décadas del 1930 y 1940.

A nivel nacional, esta forma de operación de las haciendas, así como la de los centros mineros, propiciaron el establecimiento de economías de enclave en el país. Durante la década del 30 y parte de la del 40 ambos sectores sólo estimularon de manera marginal el desarrollo de actividad conexas y constituyeron un factor de escaso dinamismo como para impulsar una articulación consistente de carácter vertical u horizontal con otros sectores de la economía.

CUADRO 1

Porcentaje del PIB por sectores, tasa de crecimiento del PIB						
Años	Agricultura	Minería	Industria	Gobierno	Otros	PIB real %
1942	32	12	12	-	--	
1945	28	9	19	7	37	3.6
1946	28	8	21	8	35	9.2
1947	29	8	19	6	38	0.2
1948	35	8	18	5	34	-3.6
1949	35	11	17	10	27	22.5
1950	37	11	15	9	28	43.0

Fuente: Banco Central de Reserva. Anuario Estadístico 1950-1956

Si bien la crisis afectó algunas de las bases importantes de la dominación oligárquica, ello no significó un cambio en el patrón de acumulación vigente sino su debilitamiento: en el mediano plazo se hicieron más bajas las tasas de ganancia en la agricultura de exportación, a pesar de que se recuperó rápidamente en el sector algodonero al producirse un desplazamiento del cultivo de caña de azúcar al de algodón en la década del 30, tanto por que este producto era más atractivo en el mercado internacional por el desarrollo en el Perú de una variedad extra larga que podía ser cosechada todo el año, como por los incentivos crediticios aprobados por el estado en 1934 y el crecimiento interno de la

producción manufacturera textil. Es así que se duplicó el consumo interno de algodón, mientras que el de caña de azúcar aumentó del 12.6% en 1930 a 26% en 1938, y en proporciones similares se incrementó el consumo de lanas y pieles.

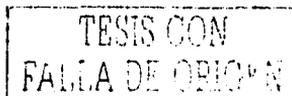
CUADRO 2

Valor en dólares de las exportaciones de azúcar y algodón
1930-1939 (Índice 1929 = 100)

Año	Algodón	Azúcar
1930	71	64
1931	42	57
1932	35	41
1933	55	47
1934	91	45
1935	93	45
1936	110	46
1937	109	60
1938	66	43
1939	68	57

Fuente Throp, R. Bertram G. Perú 1890-1977. Crecimiento y Políticas en una Economía Abierta. Ed. Mosca Azul. Lima, Perú 1985. Pp. 22

En la década del 40 la producción azucarera se recuperó generando mayores utilidades; sin embargo, los empresarios no efectuaron reinversiones en esta actividad debido a su resistencia a las políticas gubernamentales que gravaron con mayores impuestos las exportaciones, a la política cambiaria que no los favorecía y a las restricciones impuestas por la guerra a las importaciones para la renovación de equipo y maquinaria; tampoco realizaron inversiones significativas en otros sectores de la economía, el gasto suntuario y la compra de inmuebles de lujos era común, sólo en pocos casos, como los de las familias Prado y Romero, orientaron sus intereses hacia otros sectores de la economía, el financiero y la construcción de edificios para su venta como vivienda popular.



CUADRO 3

Producción azucarera 1930 – 1949. (Promedio anual).

Años	Producción (Miles de tn.)	Exportaciones (Miles de tn)	Consumo interno (miles de tn)	Area cañera (Miles ha.)	La Libertad y Lambayeque % de prod.
1934	393	342	56	56.6	74.8
1939	383	297	75	50.6	79.3
1944	427	298	103	50.0	85.4
1949	428	300	147	50.2	83.9

Fuente: Thorp, R. Bertram, G. Op. Cit. Pp 255

A diferencia de la caña de azúcar, la producción algodonera se sustentó en la coexistencia del gran latifundio con la mediana y pequeña propiedad desarrollándose distintos sistemas de relación con la mano de obra: el alquiler de predios, la medianía y el yanacónaje. Esta tercera opción obligaba a los campesinos a trabajar por un salario en la gran propiedad y a producir, además de sus alimentos, una dotación importante de algodón que debía ser vendida en las empacadoras instaladas en las haciendas. Aunque el peso de la hacienda en la región norteña era importante, es en la costa central y sur del Perú donde se aprecia una mayor difusión de la mediana y pequeña propiedad (sólo el 5% de las tierras podían ser consideradas como latifundios), de las relaciones mercantiles y de valorización extendida pero limitada del capital, y es hacia ella donde se orientó gran parte de la migración extranjera, especialmente la de origen japonés.

CUADRO 4

Producción algodonera 1925-1949. (Promedio anual)

Años	Area algodonera (miles de has.)	Producción algodonera (miles de tn.)
1925-1929	123	141
1930-1934	133	160
1935-1939	171	227
1940-1944	152	191
1945-1949	133	182

Fuente: Thorp, R. Bertram, G. Op. Cit. Pp 267

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

El sistema de relación que adscribía al campesino como yanacona a unidades pequeñas de cultivo controladas por los grandes propietarios, permitió a éstos contar no sólo con la cantidad suficiente de fuerza de trabajo sujeta, sino con un volumen considerable de algodón a ser procesado en las desmotadoras para su comercialización a gran escala. El adelanto de dinero a los campesinos funcionaba como mecanismo para asegurar la compra de la totalidad de sus cosechas a precios bastante bajos. Aún antes de la década del 30, los campesinos sujetos como yanaconas se organizaron y movilizaron para luchar por mejoras de sus condiciones de trabajo y de vida, mas tarde y debido a la renovada presión que ejercieron, este sistema de relación y explotación de la tierra fue lentamente sustituido por el alquiler, instrumento a través del cual los productores independientes podían acceder a los créditos proporcionados por el Estado, especialmente en aquellos periodos en que se vio estimulada la expansión de la producción algodonera.

Por la forma diferenciada y extendida de la propiedad de la tierra, por sus menores requerimientos tecnológicos y por la necesidad de un uso intensivo de la mano de obra, la producción algodonera parece haber ejercido un papel más redistributivo del ingreso que el sector azucarero. Ambos sectores ejercieron, sin embargo, una función importante al constituirse en un mercado laboral al que podía incorporarse temporalmente la mano de obra campesina de la Costa y, especialmente la de la Sierra, amortiguando así la presión por el empleo en el campo y en las ciudades escasamente industrializadas.

Tal como se afirmó anteriormente, a mediados de la década del 30 se había producido un incremento significativo del cultivo de algodón, en la década siguiente el comercio internacional de este producto se vio sometido a presiones derivadas del conflicto bélico además de que las ganancias fueron minadas por los bajos rendimientos, por lo cual el Estado emitió un Decreto gubernamental que obligaba a la sustitución de los cultivos de algodón por productos alimenticios, llegando a utilizarse el 30% de las tierras entre 1942 y 1943. A partir de 1949 esa

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

situación cambió en favor del algodón debido a la reorientación de la política estatal.

Hasta parte de la década del 50 las exportaciones de azúcar y algodón constituyeron la principal fuente de divisas aún por encima de los productos mineros, hacia la mitad de la década del 30 la participación de esos productos en las exportaciones alcanzó aproximadamente un 35%, superando el 50% entre 1945 y 1950, mientras que la participación de los productos mineros bajaba significativamente.

La combinación del dominio del capital extranjero y de los grandes propietarios nacionales en la agricultura de exportación, se tradujo en una forma de ejercicio del poder político orientado a satisfacer las exigencias de esos capitales. La clase política que concebía al progreso como algo que vendría de fuera, no se preocupó por crear condiciones para que emergieran otras fuerzas económicas, por el contrario, en muchos casos las canceló incrementando la importación de productos de consumo (telas, confecciones, alimentos en conserva, etc.) e insumos agrícolas y productos de empaque (fertilizantes, pesticidas, sogas, sacos y tejidos de yute).

Las clases medias y los sectores obreros emergentes no fueron considerados como fuente de legitimación, se socavaron sus demandas y las posibilidades de creación de mecanismos institucionales de representación e intermediación política y social. Esta dimensión del poder acumulado por la fracción agro exportadora ilustra, en parte, su fuerza y resistencia a los cambios institucionales del estado y la renovación del sistema patrimonial de representación política y social; ilustra, asimismo, las dificultades económicas y políticas de las fracciones industriales emergentes que optaron por el camino de la transacción antes que por el desafío de construir el país con una lógica más emprendedora orientada a fortalecer la industria y un proyecto político que diera cabida a sus propias aspiraciones de democratización, y a resolver medianamente las demandas de los sectores medios, de los trabajadores, sectores populares y campesinos del país.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

b. LA MINERÍA Y EL CAPITAL EXTRANJERO.

Debido a la importancia de la producción minera en el proceso de articulación de la economía peruana con el capital y el mercado internacional, los efectos depresivos de la crisis de 1930 no se hicieron esperar en el sector, disminuyeron la producción de minerales y la participación del cobre, la plata y el petróleo en las exportaciones. La aparición y crecimiento del sector pesquero ejerció efectos importantes en el desarrollo de centros de procesamiento de aceite y harina de pescado, la construcción de embarcaciones y una variedad de servicios e industrias conexas.

CUADRO 5

**Participación porcentual de la principales exportaciones por valor
1930-1950 (Valores a precios corrientes).**

Años	Azúcar Algodón	Lana Café	Prod. Pesqueros	Cobre Plata	Plomo Zinc	Petróleo
1930	28.5	3.3	--	20.1	5.8	19.7
1935	34.4	3.0	--	17.7	2.2	37.8
1940	28.2	5.2	--	22.3	3.1	24.8
1945	52.9	3.3	0.9	9.6	7.4	12.5
1950	50.5	4.6	2.9	9.4	11.7	13.1

Fuente: Thorp. R. Bertram G. Op. Cit. Pp 224

Con la crisis se produjo una retracción significativa de las inversiones extranjeras en el sector minero, en tanto que el capital nacional encontró nuevos espacios de inversión especialmente en los yacimientos de oro, plata, zinc y plomo. Las grandes empresas norteamericanas, principales propietarias de los yacimientos, no sólo disminuyeron sus inversiones sino el volumen de extracción y procesamiento final de los minerales, retuvieron, eso sí, el control de los yacimientos e incrementaron el procesamiento final de los minerales provenientes de las medianas y pequeñas empresas controladas por capitales nacionales. Debido a ello, descendió la participación de las tres empresas extranjeras más importantes en las exportaciones, Cerro de Pasco Corp., Northern Perú Mining y

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

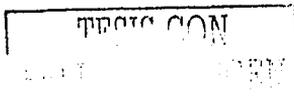
Vanadium Corp., de 97% en 1929 a 85% en 1935, para situarse por debajo del 70% en 1939.

Tanto en la minería como en la industria se habían creado condiciones de expansión de los capitales nacionales y de desarrollo de una política económica que tendiera consolidar un aparato productivo que afianzara la presencia de algunas fracciones nacionales; sin embargo, y contrariamente a lo que sucedió en otros países, esa tendencia no logró plasmarse en el Perú. Al promediar la década del 50, las tres grandes empresas antes mencionadas retomaron el ritmo expansivo anterior a la crisis y junto con otras nuevas consolidaron un control casi absoluto sobre la minería peruana, siendo similar el proceso en los sectores más importantes de la industria.

Algunos datos sirven para ilustrar la dinámica anterior. Durante la década del 30 se extendió la mediana y pequeña propiedad vinculada a la producción de algunos minerales, aumentó la explotación del plomo por empresarios locales del 41% en 1935 al 67% en 1949; la producción de zinc creció en el mismo periodo de 0% a 64%; a su vez, el Estado priorizó la explotación de oro estimulado por el incremento de los precios internacionales y mediante un sistema de créditos y concesiones de yacimientos a productores nacionales promovió la creación de 38 nuevas empresas, de manera que entre 1933 y 1939 disminuyó la presencia del capital extranjero en la producción de oro, de 57% a 29%, mientras que se incrementó la participación de los capitales nacionales elevándose de 43% a 71%, aumentando la producción en 69% entre 1930 y 1948.

Sin duda este proceso se vio favorecido por la creación del Banco Minero en 1941, durante el gobierno de Manuel Prado; sin embargo, la expansión de los capitales nacionales en la minería se caracterizó por una baja composición de capital y el uso intensivo de mano de obra, así como el uso de una tecnología que se ubicaba lejos del nivel desarrollado por las empresas extranjeras aún antes de 1930, lo cual explica su baja productividad.

Para 1950 esa situación había cambiado significativamente, las cinco mayores empresas extranjeras que operaban en la minería controlaban el 49% del



procesamiento final y el 42% de la producción en las minas, y en 1965 esas cifras se elevaron a 72% y 64% respectivamente.¹⁷ Sólo una política de carácter nacional y de largo plazo habría roto con el control que adquirió el capital foráneo sobre los recursos naturales y "podría haber despejado el camino para que la empresa nacional intentara el gran salto hacia adelante...la presión política interna estaba del todo ausente"¹⁸.

Como en los otros sectores de la economía, la minería constituyó uno de los puntales de la presencia del capital extranjero en el Perú y fue el soporte de una concepción de política económica que privilegió la visión de que el progreso vendría con las inversiones foráneas. Antes que el esfuerzo por transformar el país se impuso entre las clases dominantes la opción por la subordinación económica al exterior reteniendo para ello el control de un poder político que, a su vez, garantizaba su reproducción económica y social en el corto y mediano plazo. Las concesiones otorgadas a grandes empresas norteamericanas para la explotación minera y petrolera, -de acuerdo al Código de minería aprobado en 1950- dejaron de lado todo interés por la planeación económica de un desarrollo nacional sostenido, por el contrario, la economía así fragmentada quedó sujeta a los vaivenes y tendencias expansivas del capital internacional.

En esa dinámica, el mundo andino fue constituyéndose en una reserva de mano de obra y en provisor de alimentos a las minas, haciendas y ciudades emergentes. En este orden de cosas, es importante analizar el origen comunero de la fuerza laboral utilizada en la minería anclada básicamente en la sierra central peruana. Ese origen imprimió de un sello especial al proceso de proletarianización en las minas, debido a que las comunidades indígenas constituían una realidad social con la que difícilmente el campesino-comunero buscaría romper de manera definitiva. Las relaciones de reciprocidad que allí se practican, compensando en diferente magnitud los problemas de escasez, y la indiscutible referencia social y cultural que la comunidad ejerce, propiciaron que gran parte de la fuerza laboral

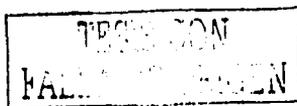
¹⁷ Thorp, R. Y Bretram G. "Peru 1890-1977: Crecimiento y Políticas en una Economía Abierta". Ed. Moseca Azul., Lima, Peru, 1985. Pp 322.

¹⁸ Thorp, R. Y Bretram G. Op. Cit. Pp 321.

en las minas combinara su situación de trabajador minero con la de campesino comunero.

A modo de ejemplo, vale la pena analizar ese proceso en la Sierra Central del país donde se ubicaron los principales intereses de la empresa norteamericana Cerro de Pasco Corporation en la minería y en grandes haciendas laneras; aunque en éstas también tenían intereses propietarios nacionales. En esta región se conjugaron distintos grados de desarrollo de las determinaciones capitalistas debido a que la empresa mencionada impulsó la explotación minera y ganadera en tierras pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas. El desarrollo de las relaciones salariales en ambos sectores tomó distintos caminos. En la minería estas relaciones se extendieron en mayor escala los empresarios incorporaron desde inicios de las operaciones de la mina (en la primera década del siglo XX) una tecnología con la que no podían competir los productores nacionales y cada uno de los yacimientos requirió de una fuerte concentración de trabajadores asalariados. Aún hasta la década del 50, el desarrollo de este capital se enfrentó con la fuerte referencia y adscripción de los trabajadores mineros a sus comunidades, debido a que en éstas se practican una diversa gama de relaciones de reciprocidad, constituyendo el espacio seguro que les permite concebir un futuro con derechos y obligaciones al formar parte de un universo económico, social y afectivo propio y estable

Esta dinámica contradictoria se explica porque el proceso de proletarianización del campesinado de esta zona fue chocando con la protección económica y social que los miembros de las comunidades recibían en su lugar de origen. "La resistencia de los campesinos a migrar a las minas, si bien se explica en última instancia por la disponibilidad de recursos, particularmente la tierra; sin embargo, el mecanismo que frenó este movimiento fue más complejo. En las áreas adyacentes a los yacimientos mineros las dos formas básicas de asentamiento rural son las comunidades campesinas y las haciendas. En el caso de las primeras, el campesino en posesión de la tierra está inmerso dentro de una red de lazos recíprocos de solidaridad comunal. Su partida a las minas...no sólo le impide el cumplimiento de sus obligaciones con los otros, sino que implica el grave riesgo



de perder la ayuda de los demás comuneros. En las haciendas, el campesino usufructuaba parcelas de tierras a cambio de la entrega de su trabajo en los terrenos controlados por los hacendados. Su salida comprometía esta posibilidad de continuar en la posesión de parcelas de cultivo dentro de la hacienda"¹⁹

Es esa resistencia campesina la que, en parte, explica que la empresa Cerro de Pasco Corp. recurriera, en las primeras décadas del siglo XX, a un mecanismo típicamente colonial de fijación de la mano de obra mediante "el enganche" y el "endeudamiento". El enganche consistía en el adelanto de dinero y el uso de intermediarios-fiadores para que los campesinos efectivamente cumplieran con los compromisos de trabajo contraídos con el enganchador. Este sistema mostraría más tarde sus límites debido a las condiciones extremadamente duras de trabajo en las minas y a los bajísimos salarios, así como, la complicidad de los aparatos represivos del Estado en el uso de la fuerza extra económica para lograr la retención de la mano de obra en las minas.

Este proceso significó, asimismo, que la reproducción de la fuerza de trabajo se hiciera a costos muy bajos dado que las empresas mineras encontraron en la producción rural un complemento muy importante, de manera que sus ganancias provenían no sólo de la apropiación de la plusvalía producida por los mineros, sino también de la extorsión de los excedentes generados por los campesinos en sus comunidades, sea porque parte de la reproducción de la mano de obra se efectuaba en los periodos en que los mineros volvían a sus lugares de origen en las épocas de siembra o de cosecha, o porque gran parte de los productos alimenticios consumidos por trabajadores en las minas provenían de las comunidades y zonas rurales aledañas, los cuales eran adquiridos por las empresas a precios muy bajos y vendidos a los obreros en las tiendas "mercantiles" instaladas especialmente en los centros mineros. Este sistema terminaba por establecer el "endeudamiento" como otra forma de retención de la mano de obra en las minas.

¹⁹ Bonilla, Heráclio. "El minero de los Andes" Instituto de Estudios Peruanos, 1974. Lima Perú. Pp. 37-38.

No es casual que en el curso de desarrollo de ese proceso, la organización y movilización del proletariado minero –dentro del cual el Partido Comunista ejerció una influencia importante- reivindicando mejores condiciones de trabajo, la disminución de la jornada laboral y el incremento de sus salarios, se haya combinado muchas veces con las movilizaciones campesinas por la recuperación de sus tierras apropiadas por las haciendas ganaderas de la Sierra. Como veremos más adelante, las luchas campesinas de la década del 50 y 60 se nutrieron de la experiencia adquirida por los trabajadores mineros y éstos, a su vez, incorporaron en sus organizaciones y luchas muchas de las tradiciones de solidaridad y reciprocidad provenientes del mundo andino.

C.- LA INDUSTRIA.

A partir de la década del 30 se desarrolló en el Perú un proceso más firme de industrialización orientado fundamentalmente al abastecimiento del mercado interno. El origen nacional de los capitales que impulsaron ese proceso es quizás el rasgo más importante a señalar; sin embargo, un intento por desentrañar los límites del mismo nos lleva a esbozar algunos de los problemas que lo caracterizaron.

El periodo de 1930-1950 puede ser considerado como una fase en que la industrialización estuvo firmemente articulada a las fluctuaciones sufridas por el sector agro exportador como consecuencia de la crisis, a la lógica del poder económico y político ejercido por esta fracción y a la debilidad constitutiva de los industriales. La industrialización se desarrolló con un carácter limitado y se efectuó en el contexto de mutuas transacciones y concesiones políticas entre las fracciones dominantes, sin que para ello se comprometieran los intereses económicos de los grandes propietarios mineros y terratenientes tradicionales de la sierra, ni de los exportadores de la costa.

El modelo implementado se caracterizó por la importación indiscriminada de una tecnología intermedia para la industria, lo cual no sólo acentuó la dependencia con el exterior respecto a la reposición de maquinaria y equipo, sino el uso de un

alto componente de insumo importado. Ese equipamiento expandió la producción de artículos de consumo inmediato, de bienes intermedios (papel productos químicos y cemento) y algunos bienes de capital para el sector minero (siderurgia y metalurgia) y el floreciente sector pesquero.

Este proceso combinó el impulso de las elites locales y sus aliados extranjeros, aunque una gran proporción de las inversiones foráneas se hicieron con base al acceso a fuentes de financiamiento -los bancos- controladas por las fracciones dominantes nacionales.²⁰ Tal sistema de intereses económicos y políticos permitió la canalización de los excedentes nacionales hacia las grandes empresas internacionales que operaban en el país, la expansión de éstas sólo comprometió a parte de las utilidades obtenidas internamente y no representó una inversión significativa de recursos financieros provenientes del exterior.

Tal como mencionamos anteriormente, desde 1938 se produjo una caída de las exportaciones de algodón debido al control de precios impuesto por los países aliados durante la Segunda Guerra, se retrajeron las importaciones de productos manufacturados y se crearon condiciones para el desarrollo de la industria, la cual creció a una tasa anual de 9% entre 1938-1942, 3% en los años de 1942-1946 y 6% entre 1946-1950. (ver cuadro No 1). Durante estos 12 años la participación del sector industrial en el PIB total llegó a su nivel más alto en 1946 con el 21% y descendió al 15% en 1950, mientras que la participación de la agricultura en el PIB, entre 1948 y 1950, fue superior al alcanzado por la minería e industria juntos. Es posible afirmar que durante el periodo considerado, el grado de participación de la industria en el PIB total ha tenido un comportamiento inverso al ascenso o descenso de PIB minero y agrícola, (ver cuadro 1).

Aunque la industria creció a una tasa anual del 8% entre 1950 y 1955 y mantuvo una tasa aproximada entre 5 y 6% hasta 1965, el crecimiento de un poco más de un tercio de la manufactura se relacionaba directamente con el sector agrícola y minero exportador; sólo en la década del 50 se pudo verificar un proceso más extendido de sustitución de importaciones con la instalación de

²⁰ Thorp, R. Bertram G. Op. cit. Pp.404

empresas más modernas de papel, llantas, cemento, textiles, siderurgia además de la orientación de grupos de industriales hacia la producción de bienes durables, químicos y farmacéuticos.

Una explicación de esta dinámica nos aproxima al análisis de la fracción social vinculada a la industria. Al promediar la década del 40 parecía constituirse en el Perú un sector social nacional que se articulaba a la producción industrial, a consolidar su presencia en la economía, estimular la ampliación del mercado interno y ejercer una influencia en el Estado con miras a que éste pudiera implementar una política económica encaminada a impulsar el desarrollo del país; sin embargo, ese sector no logró establecer intereses sólidos en la industria ni pudo disputar la hegemonía oligárquica. buscó, en cambio articular su actividad a las necesidades del sector exportador (procesamiento de derivados de la caña, hilado y tejido de algodón y transformación de los productos mineros), conformándose con que la acción estatal supliera su debilidad al obtener el otorgamiento de concesiones y la adopción de medidas proteccionistas coyunturales y fragmentarias mientras fraguaba su asociación subordinada con el capital internacional.

Las razones de la debilidad de los industriales se relaciona, entre otros factores, con las características de su surgimiento y desarrollo básicamente cobijado y subordinado al poder del sector exportador, a la temprana dominación que ejerció sobre ellos el capital internacional y a su forma tradicional rentista de uso de los excedentes. En periodos de retracción de la economía, una parte importante de los exportadores agrícolas prefirieron convertirse en rentistas y alquilaron sus propiedades, otros, invirtieron en la compra de tierras para dedicarlas a la producción de algodón y en menor proporción al cultivo de arroz.

Una elevada porción de los excedentes provenientes de las exportaciones se retuvieron fuera del país o fueron canalizados a la compra de bienes inmuebles de lujo y en muy pocos casos se realizaron inversiones en la industria textil y química. Gracias a una política estatal orientada a que el capital internacional operara sin restricciones, gran parte de las utilidades fueron retenidas en las casas

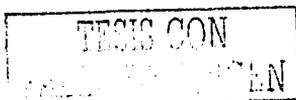
matrices de las empresas norteamericanas que dominaban la minería, la industria metalmecánica, siderúrgica, farmacéutica, química; mientras que un sector de industriales nacionales que habían logrado desarrollar una industria pesquera y de construcción de embarcaciones con niveles importantes de competitividad y capitalización, también vieron abiertas sus puertas a la inversión extranjera.

Los emigrantes europeos que tardaron en arraigarse en el Perú, generalmente tuvieron en sus lugares de origen un referente de ahorro y consumo de sus utilidades y sólo invirtieron en el país un margen reducido de sus excedentes en actividades que garantizaran un alto nivel de capitalización.

2. LA EXCLUSIÓN REGIONAL. COMUNIDADES INDÍGENAS Y GAMONALES

El carácter andino del Perú se quebró con la conquista y la exacción de la sierra pasó por afianzar Lima como el centro más importante de la dominación española en América del Sur: ciudades como Cuzco, Cajamarca, Ayacucho y Arequipa no constituían sino centros administrativos coloniales y ejes de una actividad comercial de productos alimenticios, manufactura textil menor e insumos mineros, además de cumplir la función de ejercer el control y distribución de la mano de obra indígena proveniente de las comunidades hacia las haciendas interandinas y costeñas y a los centros mineros de Huancavelica, Potosí. Esas ciudades eran rutas de paso para un comercio de productos agrícolas, mineros y lanas al exterior a través de los puertos de Ilo y el Callao, mientras que en Lima se conjugaban las aspiraciones de poder de los aristócratas españoles y criollos en el ejercicio centralizado de la administración colonial.

La etapa republicana no hizo sino afianzar esos rasgos de segmentación del territorio peruano. A la precaria articulación del país con el mercado mundial después de la independencia sobrevino el auge de las exportaciones guaneras y de las haciendas de la costa productoras de caña de azúcar.



Más tarde, a fines del siglo XIX y la primera mitad del XX, la extracción de minerales para el mercado mundial coexistía en la sierra con la producción de alimentos en las haciendas tradicionales y en las comunidades indígenas, ambas orientadas a la provisión de un mercado interno restringido o al autoconsumo. La explotación de caucho, madera y otros productos tropicales en la ceja de la selva, subsistieron como sectores productivos básicamente desarticulados con respecto a Lima y a zonas costeras donde se ubicaban las haciendas exportadoras, se mantuvieron conectados eso sí con el mercado de Londres.

La Sierra constituía una región diversa y de escaso desarrollo de las determinaciones capitalistas. El sur andino, principalmente el llamado trapecio andino que conforman los Departamentos de Ayacucho, Puno y Cuzco, se especializaba en la producción de lana de alpaca y vicuña de alta demanda en el mercado inglés, y basaba esta actividad en el trabajo de unidades domésticas y comunales sujetas a una red de intermediarios de las casas comerciales inglesas asentadas en las ciudades de Arequipa y Cuzco. Ese sistema de explotación y comercialización de la lana no propició el desarrollo extendido de relaciones salariales ni constituyó un factor de impulso a un capitalismo moderno, exceptuando el relativo desarrollo de la manufactura textil en Arequipa. En ese espacio geográfico, la hacienda tradicional también contribuyó a recrear muchas de las relaciones coloniales que sujetaban a la mano de obra indígena al poder económico y político de los "gamonales".

En la sierra central se combinaron los latifundios ganaderos, controlados por la empresa minera Cerro de Pasco Corporation y propietarios nacionales. Esas formas de propiedad coexistieron con las comunidades indígenas que desde etapas previas habían sido despojadas sistemáticamente de sus tierras por los hacendados ganaderos; habiéndose desarrollado un sistema de relaciones por la que mucho de los campesinos comuneros pastaban su ganado en las haciendas a cambio de trabajo pagado con alimentos o un jornal. A su vez, la producción de alimentos en los valles interandinos permitió a un difundido número de productores medianos y pequeños que, al igual que las comunidades indígenas, podían abastecer a los mercados cercanos de la costa, especialmente el de Lima. La

sensibilidad por el salario, los empresarios caucheros recurrieron...al castigo físico, la extorsión y el secuestro. Se hicieron famosas las "correrías" (expedición de reconocimiento y recolección del caucho) donde los caucheros entraban a la selva liquidando a la población nativa"²¹. Las pocas vías que comunicaban a esa región con la sierra y costa eran caminos abiertos como trocha, de terracería y escasos tramos asfaltados; en el sureste se construyó una línea férrea que comunicaba Quillabamba y el Valle de la Convención con la ciudad del Cuzco.

Tanto la selva como la sierra no constituyeron una fuente de preocupación para los gobernantes ni para las clases dominantes peruanas, esas regiones se articularon con la costa en tanto las exigencias de transporte de los minerales y de otros productos a los puertos y a las ciudades se fueron imponiendo lentamente. Ambas regiones no fueron objeto de políticas de desarrollo ni de políticas agrarias u otras formas de redistribución del ingreso; por el contrario, su profundo rezago agudizó la marginación y diferenciación regional, propició un sostenido proceso migratorio no sólo de los estratos altos y medios sino de la población indígena hacia las ciudades y centros productivos de la costa.

Esta visión sucinta del panorama peruano nos permite afirmar que mientras en Lima y contadas ciudades se construían con dificultad instancias de mediación social y política y se forjaba un limitado e inestable sistema institucional democrático, en las provincias serranas se fue recreando una estructura social aristocrática de corte más tradicional que reproducía una fragmentación social rígida: por lo mismo, los estratos altos mostraron mayor incapacidad para abrir espacios de democratización y ciudadanización de los sectores más bajos, especialmente de la población indígena, socavaron la posibilidad de desarrollo de referentes políticos e institucionales más incluyentes propios de un estado moderno y limitaron la acumulación social de una experiencia cívica y política que no fuera la vinculada a las posiciones conservadoras y patrimoniales de las fracciones dominantes de las provincias y del país. Con mayor crudeza, la región

²¹ Contreras, Carlos y Cueto, Marcos. "Historia del Perú Contemporáneo" Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad del Pacífico, Instituto de Estudios Peruanos, 2000 Lima Perú. Pp. 203.



de la selva permanecía simplemente en el olvido y sujeta al poder construido por los colonizadores.

3. ENTRE LA DICTADURA Y LA DEMOCRACIA: PROCESOS POLÍTICOS, LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y LA FRAGILIDAD INSTITUCIONAL.

La democracia es resultado de un proceso de construcción social que involucra de manera diferenciada a los distintos estamentos de la sociedad, ella constituye el fundamento de individuos que confrontan sus intereses sociales diversos en la búsqueda de formas de organización y representación política, por lo mismo, no son ajenas a esa dinámica las condiciones sociales de existencia gestadas históricamente en las que se desenvuelven los grupos, sectores y clases sociales. Cuando ese proceso se verifica en una sociedad altamente excluyente como el Perú, la construcción de la democracia, del sistema político y de sus instituciones se produce de manera fragmentada y terminan siendo resultado de la manipulación de intereses económicos adversos a las mayorías. Las acciones políticas devienen en métodos que favorecen la consolidación de privilegios y del poder de unos pocos, socavando las posibilidades de ciudadanía de amplios sectores de la sociedad y limitando su capacidad de incidencia en la creación de mecanismos institucionales que regulen sus relaciones con el conjunto social y de ejercicio de sus derechos democráticos.

Una vez expuesto el basamento material de las clases dominantes peruanas se cuenta con elementos como para inferir no sólo el alto grado de exclusión del modelo económico vigente, sino su limitada capacidad de transformación política, la cual discurrió sesgada por su origen estructural consolidando a un tipo de clase propietaria, cuyo dominio se prolongó retroalimentado por sus referentes constitutivos básicos y su interrelación con la sociedad: las relaciones patrimoniales, autoritarias y paternalistas.

A pesar de ello, en este apartado nos interesa resaltar los acontecimientos políticos y sociales impulsados por distintos sectores de la sociedad nacional que

lentamente intentarían revertir los efectos más perniciosos de la línea autoritaria que primaba en el país, arrancando al poder establecido las más elementales respuestas a sus demandas y aportando a la construcción de una legalidad institucional y política que finalmente los incluyera. De manera especial, nos interesa tratar de desentrañar las profundas dificultades que esos sectores tuvieron que confrontar en el largo y duro proceso de acumulación social de su experiencia política, socavada por la cultura excluyente y miopía de las clases dominantes, y por la presencia política de las fuerzas armadas que cabalmente suplían a la sociedad en el ejercicio de sus derechos políticos ciudadanos y en la búsqueda de formas democráticas de organización y ejercicio del poder.

Así, regimenes militares dictatoriales y civiles elegidos más democráticamente, pero que terminaron recurriendo a los métodos autoritarios, constituirán el sello característico de la vida política peruana en gran parte del siglo XX, con su correlato de fragilidad democrática institucional tanto en el sistema de representación política en los aparatos de estado, como en la organización de un sistema político que abonara al juego político y la acumulación de una experiencia democrática en los partidos y en la sociedad.

Con excepción del APRA, del Partido Comunista y del Partido Socialista dirigido por Luciano Castillo, hasta fines de la década del 50 prevaleció en el Perú un sistema de organización partidaria de tradición patrimonial, cuya duración era a veces coyuntural y generalmente presente en las principales ciudades pero no en el conjunto del territorio nacional. Veamos estos problemas con mayor detenimiento.

En la primera mitad del siglo XX las fuerzas políticas dominantes peruanas mostraron un manifiesto conservadurismo en el ejercicio del poder. Oligarcas, industriales emergentes y militares construyeron una suerte de alianza fraguada en función de intereses que se fueron redefiniendo según la coyuntura y siempre que se asegurase a los primeros una continuidad en el manejo de los hilos del poder. Los avatares de la modernización permearon sin duda esos procesos, como también la organización y luchas emprendidas por los trabajadores urbanos,

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

los campesinos, las clases medias y los intelectuales por sus reivindicaciones laborales, por abrir nuevos espacios de participación política y social y el derecho de formular nuevos planteamientos acerca del futuro del país.

A inicios del siglo, la lucha por la jornada de ocho horas y mejoras en las condiciones de trabajo fueron el motor de las movilizaciones obreras. Los esfuerzos organizativos y el planteamiento activo de sus demandas reivindicativas convocaron a una gama heterogénea de trabajadores agrupados en la Federación de Obreros y Panaderos "Estrella del Perú"(1904) -iniciadora de la lucha por la jornada de ocho horas-, en organizaciones como los Obreros Textiles de Vitarte, la Unión de Trabajadores de Tejidos, la Federación Obrera de Lima y los Trabajadores Portuarios del Callao, los cuales no sólo impulsaron huelgas y distintas formas de protesta, sino se agruparon en círculos culturales, fundaron revistas, crearon grupos de teatro proletario apoyados por intelectuales como Manuel González Prada y José Matías Manzanilla, logrando la aprobación de la jornada de ocho horas por el gobierno de Billinghurst en 1913, aunque esta medida fuera acatada parcialmente.²²

En el ámbito rural, los problemas sociales generados por la alta concentración de la propiedad y las condiciones de trabajo en las haciendas azucareras, donde primaban los salarios extremadamente bajos y subsistían el enganche, el endeudamiento y otras formas de sujeción de la mano de obra, abonaron el camino para las luchas de los trabajadores cañeros en el Valle de Chicama en 1912, frente a las cuales la respuesta de los hacendados no se hizo esperar, acudieron al poder central de Lima y al ejército para acallar y reprimir brutalmente a los trabajadores provocando un saldo numeroso de muertos, heridos y encarcelados. Igualmente, las protestas y movimientos de los yanaconas adscritos a la producción de algodón en el centro y sur de la costa peruana fueron reprimidos.

Entre 1900 y 1920, en la zona sur andina fueron importantes las constantes movilizaciones y lucha de las comunidades indígenas del

²² Contreras y Cueto. Op.cit. 218 a 222-

Departamento de Puno por la recuperación de sus tierras comunales expropiadas por los hacendados laneros y contra la voracidad y los abusos cometidos por los gamonales con la mano de obra.

Contreras y Cueto reseñan la crítica social formulada por Víctor Andrés Belaúnde en la ciudad de Arequipa, en 1915, respecto a la mentalidad política y social que primaba en el Perú, especialmente la relacionada con las condiciones sociales que prevalecían en la región andina y en gran parte de las haciendas de la costa: "No ha desaparecido la colonia. Alguna vez dije que todos tenemos almas de encomenderos y de corregidores. La ficción de que el indio podía ser propietario individual nos llevó a la abolición de las comunidades. Faltas éstas de personalidad jurídica y de defensa por el Estado, han ido perdiendo sus terrenos. El enganche ha sustituido a la mita, por último, se mantiene la adscripción del indio al suelo y una forma de servidumbre que nos lleva, por analogía, al pleno medioevo. El indio está adscrito a la tierra, como el antiguo siervo, pero ¿qué distinto es el vínculo que le une al señor, comparado con el que existe entre el indio y el gamonal?"²³. A pesar de esa crítica, Belaúnde no podía desprenderse de su adscripción conservadora, él "defendía la aristocracia de la inteligencia y se oponía al voto de los analfabetos argumentando que ello significaba un privilegio e implicaba destruir la igualdad política a favor de los menos capaces"²⁴.

En el mismo periodo, la pugna sostenida entre el positivista Alejandro Deustua y el liberal Vicente Villarán (uno de los representantes de la generación del 900) acerca de la educación que debía impartirse en el Perú, traducía el agotamiento de una fase civilista de corte modernizador, vinculado con el fortalecimiento del capital bancario y los hacendados y atado aún a planteamientos positivistas, pero que no había logrado enfrentarse a los desafíos que iba imponiendo la modernización capitalista. Mientras que Deustua sostenía la importancia de la educación moral y la consolidación de la elite dirigente con valores humanistas evitando el utilitarismo de la educación técnica, y ubicaba a la población indígena y a "¡los analfabetos!... Esos infelices no deben preocuparnos

²³ Contreras y Cueto. Op. Cit. Pp. 215.

tanto. No es la ignorancia de las multitudes, sino la falsa sabiduría de los directores lo que constituye la principal amenaza contra el progreso nacional"²⁵.

Villarán, por su parte, concebía a la educación como una forma eficaz de lograr la incorporación de los indígenas y la socialización de los inmigrantes, y como un factor de desarrollo y promoción del progreso del país, aunque ante "el dilema de dar representación a la gran masa de la nación peruana o no dársela por "incapaces", se decide por lo segundo y argumenta encubriendo el racismo que aún lo domina que "el indio ignorante no puede tener voto individual, pero cabe estudiar un medio para darle voto colectivo tomando como base las comunidades, y ensayar algún plan que permita subsanar, siquiera de modo parcial e imperfecto, la injusticia de que la mayoría indígena carezca enteramente de representación en los municipios y en el congreso".²⁶

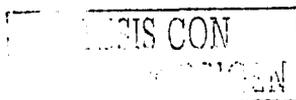
Con diferente matiz, ambos planteamientos reproducen bien no sólo las ataduras al dominio oligárquico, sino los límites ideológicos que definían finalmente todo proyecto modernizador. La visión de la problemática indígena estaba signada por la exclusión y el racismo, por la reafirmación de su sujeción como mano de obra que, como Deustua concluye, "no es ni puede ser sino una máquina".

A fines de la década de 1910, se iban agotando los partidos que agrupaban a las fracciones dominantes del país: el Partido Civil vinculado con los hacendados azucareros y el capital bancario, el Demócrata, cuyo líder había fallecido en 1913, y el Constitucional que resultaba de las aspiraciones de orden promovidas por Andrés Avelino Cáceres después de la guerra con Chile en los años finales del siglo XIX. Para las elecciones de 1919, sólo quedaron el representante del Partido Civil y Augusto B. Leguía apoyado por sectores medios urbanos y universitarios, quien, ante el temor de que su triunfo le fuera arrebatado,

²⁵ Lopez, S. 1979. Op. Cit. Pp. 966

²⁶ La Cultura Nacional. Lima: San Marcos, 1937, Pp. 20. Citado por Contreras C y Cueto, M. Op. Cit. Pp. 214

²⁷ Lopez, Sinesio "El Perú de los 80. Sociedad y Estado en el fin de una época". En Varios Autores: Estado y Sociedad. Relaciones peligrosas. Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, DESCO, Lima - Perú, 1990. Pp. 255



finalmente se inclinó por un golpe de estado que le abrió el camino para que una Asamblea Nacional acorde con sus aspiraciones lo declarara Presidente, disolviera el Congreso, aprobara una nueva Constitución y estableciera el periodo de cinco años para la renovación del poder ejecutivo y legislativo.

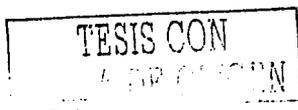
Durante su régimen, que duró hasta 1930, Leguía continuó con nuevos bríos la apertura al capital extranjero e implementó una política de industrialización articulada al procesamiento secundario de algunos minerales para su exportación y la producción manufacturera para el mercado interno, modernizó el estado y amplió la red de funcionamiento de algunas instituciones como educación y salud, el ejército, el sistema bancario, etc; además de dar un gran impulso al desarrollo urbano de las principales ciudades contribuyendo al crecimiento de la burocracia, a la incorporación creciente de las clases medias y profesionales al estado y a la presencia de los sectores populares en un escenario ocupacional más diverso.

Durante este gobierno se desarrolló, asimismo, la construcción de una infraestructura de riego que amplió las áreas dedicadas al cultivo de caña de azúcar, algodón y frutales (Chira, Olmos e Imperial), de carreteras como la construida hacia la sierra central, la panamericana y otras, y de líneas férreas que comunicaron la ciudad de Huancayo con el Departamento de Huancavelica y la ciudad del Cuzco con la región de Quillabamba en la selva sur oriental; durante su gobierno inició sus operaciones a nivel nacional la compañía aérea Faucett.

Eso sí, el régimen recreó formas de sojuzgamiento de la población indígena sobre la base de la reproducción de mecanismos típicamente coloniales; como bien señala Ricardo Melgar, "en el campo peruano se agudizó aún más la discriminación étnica, a raíz de que Leguía promulgó la Ley de Conscripción Vial, que obligaba a la población indígena masculina a realizar faenas obligatorias en la ampliación de la red caminera y ferroviaria, motivando una gran agitación proletaria a nivel nacional"²⁷

En términos políticos y sociales la década significó la puesta en el escenario nacional de nuevas aspiraciones políticas y sociales que fueron

²⁷ Melgar Bao, Ricardo: "El movimiento obrero Latinoamericano" Alianza Editorial, 1988, España, Pp. 222.

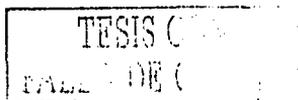


plasmándose en propuestas de mayor alcance. De un lado, la formación de partidos de oposición y, de otro, una creciente organización sindical y lucha reivindicativa de los trabajadores, de los sectores medios, especialmente los universitarios, y del urbano popular, el cual crecía rápidamente por efecto de la intensa migración campesina.

En ese panorama, las fuerzas sociales emergentes buscaron abrir espacios de expresión política y social. En 1924, la creación del APRA en México por Víctor Raúl Haya de la Torre, como un frente antiimperialista, y su refundación como partido político en el Perú en 1930, la organización del Partido Socialista y de la Confederación General de Trabajadores del Perú por José Carlos Mariátegui, en 1928-1929²⁸, abonaron el terreno para la puesta en escena de nuevos referentes teóricos y político-ideológicos que contribuyeron al surgimiento de un pensamiento social que impugnaba la visión positivista y el conservadurismo político hasta entonces vigente. Esos líderes orientaron sus esfuerzos de análisis al estudio e interpretación de los problemas estructurales que afectaban al país, asignándole, respectivamente, a los sectores sociales emergentes de las clases medias y al proletariado un papel primordial como actores sociales capaces de lograr la transformación nacional.

La reforma universitaria de 1919, las nuevas corrientes de pensamiento derivadas de la generación del 900, la radical nacionalista con Haya de la Torre y la socialista con Mariátegui, que debatieron sobre el carácter de la revolución y el tipo de desarrollo del país, acerca del problema indígena, la educación y, entre otros temas, la constitución de la nación; la fuerza de los primeros historiadores de oficio como Basadre, de poetas y literatos como Eguren, Vallejo, Valdelomar y Sánchez; en fin, una dinámica opositora más abierta y universal plasmada en revistas como La Sierra y Amauta y el periódico Labor, muestran un periodo glorioso en la cultura y quehacer político peruano, pero, también un reto que no

²⁸ Madueño Ruth. "El debate político sobre la revolución en el Perú: La Influencia de la Revolución Mexicana" Revista Sociológica No. 9, enero-abril 1989. Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. Departamento de Sociología. Pp.56. México.



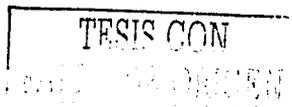
fueron capaces de procesar y enfrentar los intelectuales y políticos vinculados a las clases hegemónicas del país.

En ese sentido, durante la década de 1920, la creciente movilización social y una dinámica política que traducían posiciones cada vez más demandantes no pudieron ser asimiladas por esas fracciones atadas a estilos paternalistas y señoriales de ejercicio del poder, por lo que ellas convalidaron o recurrieron al uso de la fuerza militar para reprimir esas movilizaciones, fueron partícipes y apoyaron la instauración de gobiernos militares impuestos mediante golpes de estado y procesos electorales controlados que terminaron por socavar los esfuerzos de construcción, afirmación y continuidad de una institucionalidad más democrática.

La coalición conservadora compuesta por el diario El Comercio, la Iglesia Católica, la oligarquía, los industriales emergentes y el capital extranjero, así como una variada gama de estratos medios y populares convocados por el discurso populista, apoyaron —a pesar de las denuncias de fraude electoral— el ascenso del coronel del ejército Luis Sánchez Cerro al gobierno (1931-1933). Se trataba de impedir el triunfo de Víctor Raúl Haya de la Torre y poner fin a las movilizaciones de las clases medias, los obreros, campesinos y universitarios, sobre todo, al peligro que significaba el partido aprista por sus propuestas políticas de cambio y sus posiciones anticlericales. Sánchez Cerro inauguró un régimen autoritario altamente represivo y paternalista encausado hacia los sectores populares más oprimidos.

La guerra civil desatada por el levantamiento aprista en 1932, en el Callao y los Departamentos de Trujillo, La Libertad, Ancash y Cajamarca, quebró los escasos hilos de mediación institucional y abonó el terreno para una represión comandada por el ejército y la aviación, así como la encarnizada persecución y fusilamiento masivo de los militantes de ese partido. "Alrededor de cinco mil insurrectos fueron fusilados en las ruinas arqueológicas de Chan Chan a las afueras de la ciudad"²⁹, además, de iniciarse la fórmula de enviar al exilio a muchos líderes políticos y dirigentes sindicales y universitarios.

²⁹ Melgar Bao, Ricardo: Op Cit. Pp.239



"Los camisas negras de la Unión Revolucionaria, guiados por el lema de "Verdad, Justicia, Integridad y Patriotismo" llegaron a movilizar a contingentes de las capas medias y aún de la clase obrera al grito de "Sólo los camisas negras salvarán al Perú"...Los gobiernos dictatoriales de Sánchez Cerro y Benavides, que sucedieron a la Gran Depresión, utilizaron a las brigadas de la UR para frenar los impetus de radicalización del movimiento obrero popular.... Los blancos de estos fascistas criollos fueron primero los comunistas ... y luego los apristas"³⁰

Tanto el partido aprista como el comunista fueron ilegalizados por el gobierno por sus "lazos con organizaciones internacionales", convirtiéndose esta medida en fuerza de Ley al ser plasmada en la Constitución de 1933. Por un largo periodo, que llega hasta un poco más de la mitad de la década del 50, el Partido Comunista y el APRA se vieron forzados a desarrollar sus actividades políticas en la clandestinidad, aunque el segundo vivió una etapa de legalidad entre los años de 1945 a 1948.

Sánchez Cerro fue asesinado en abril de 1933, "cayó bajo la violencia que cultivó...el tercer militarismo, como lo llamó el historiador Jorge Basadre, fue inaugurado por Sánchez Cerro y continuó hasta 1939 con el general Oscar R. Benavides"³¹, quien era jefe del ejército y fue nombrado Presidente por una Asamblea Constituyente que funcionaba como poder legislativo.

Dictadura y modernización sería la frase que combina dos aspectos que caracterizaron al régimen de Benavides. Tal como analizamos en la sección anterior, los efectos de la crisis aún se hacían sentir en el sector exportador azucarero y minero favoreciendo, por un lado, nuevos procesos de reconcentración de la propiedad y un relativo desplazamiento del cultivo de caña hacia sectores más heterogéneos y amplios de productores de algodón, arroz y alimentos; provocando, por otro, la retracción de la producción minera controlada por el capital extranjero y su sustitución por una red importante de medianos propietarios en la explotación de plomo, zinc, mercurio, oro y estaño.

³⁰ Melgar Bao, Ricardo. Op. Cit. Pp 234-235.

³¹ Contreras, C. y Cueto, M. Op. Cit. Pp. 242.

La modernización económica se tradujo en una política estatal orientada a estimular el desarrollo industrial, a lograr una mayor capacidad administrativa y ordenamiento jurídico de instituciones estatales como las aduanas, la recaudación de impuestos, la aprobación de un Código Civil y la creación de un sistema bancario de fomento para el financiamiento de la agricultura, minería y de una actividad industrial creciente controlada inicialmente por capitales nacionales. En esta década, en la que la participación de las exportaciones agrícolas en el PIB superaron a las mineras, el estado elevó el monto de las divisas disponibles incrementando la tasa impositiva que debían pagar las empresas exportadoras y estableció un sistema de control de precios a los productos agrícolas para el mercado interno, mermando con ello las posibilidades de capitalización del campesinado mediano y pequeño y de muchas comunidades indígenas.

En el mismo orden, el gobierno de Benavides impulsó una política social que incluyó la creación de organismos ejecutivos especializados como el Ministerio de Educación, Salud Pública, Agricultura, Trabajo y Previsión Social, instaurando un sistema de seguridad social para obreros que cubriría los gastos de enfermedad, maternidad, invalidez y vejez.

Sin embargo, ese ordenamiento y modernización del estado no tuvieron su contraparte en el terreno político. El APRA era un partido que había sido proscrito de participar en la vida política y en cualquier contienda electoral, lo mismo sucedía con el Partido Comunista, fue cerrada la Universidad de San Marcos como mecanismo de contención de las protestas estudiantiles, las organizaciones sociales, los sindicatos y sus dirigentes vieron conculcados sus derechos civiles y fueron sometidos a persecución o enviados a prisión y al exilio. Paralelamente, el Congreso resultaba un apéndice de las decisiones presidenciales y los partidos políticos como la Unión Revolucionaria (que había llevado al poder a Sánchez Cerro) y el Frente Nacional no fueron capaces de enfrentar la decisión de los legisladores de anular las elecciones de 1936, de tal suerte que Benavides no sólo



prorrogó su mandato y gobernó mediante decretos, sino canceló la vida parlamentaria al cerrar el Congreso.

Nuevamente, la vida política en el Perú vio socavada sus posibilidades de desarrollo democrático. La formación de referentes sociales e institucionales de carácter político necesarios para la maduración de una cultura política que permitiera la inclusión y tolerancia de ideas y posiciones, se cancelaron con este régimen dictatorial, quedando en el escenario un ordenamiento social que venía desde arriba pero que no contribuía a la formación política de la sociedad ni creaba condiciones para la acumulación de una experiencia civil y democrática consistente.

El país experimentó una modernización acotada por una férrea intervención del estado en la vida política y social, y, en estas condiciones, el ejército asumió una función como fuerza política al constituirse no sólo en el factor que dirimía los conflictos a favor y garantizando la hegemonía de las fracciones dominantes, sino al cancelar toda posibilidad institucional de intermediación social y sustituir las funciones y actividades políticas que pugnaban por construir los distintos sectores de la sociedad: fracciones medias, trabajadores, campesinos y sectores populares.

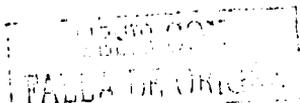
El gobierno civil del líder del Frente Patriótico, Manuel Prado, (1939-1945) resultó una continuidad del de Benavides, tanto por el apoyo que éste le prestó en las elecciones de 1939 y el reconocimiento que el nuevo presidente le dio al dictador ascendiéndolo a mariscal y nombrándolo embajador del Perú en España, como por la política económica de promoción de la industrialización y apertura al capital extranjero. Prado era miembro de una connotada familia oligárquica que tenía intereses en el sector agrícola exportador, en la industria y la banca, después de una larga residencia en Londres llegó al Perú y ocupó el cargo de Presidente del Banco Central de Reserva; él combinaba bien el arraigo señorial y la influencia de una Europa industrial que se modernizaba en la fase previa a la segunda guerra.

Tanto Prado como Benavides conciliaron los intereses de una oligarquía aún poderosa con los de la fracción industrial emergente, cuidaron especialmente las bases estructurales de funcionamiento de la economía, la cual requería de medidas que no pusieran en peligro la estabilidad de su principal eje de acumulación: el sector primario exportador. No podemos considerar al gobierno de Prado como una ruptura con el régimen oligárquico, si bien con él creció de manera relativa el sector industrial, no sólo la economía, sino la cultura, la vida política y social giraban en torno a la fuerza y al poder real construido por el sector agro exportador, prevalecían aún las relaciones patrimoniales que sustentaban el ejercicio de ese poder de manera autoritaria, paternalista y clientelar plasmándose ese ejercicio en una realidad caracterizada por su gran heterogeneidad cultural y profunda fragmentación geográfica interregional.

En primer lugar, en la sierra era posible diferenciar los poderes regionales y locales de la sierra sur de la del norte. En la sierra norte, el gamonalismo era menos compacto y el dominio de la mano de obra se extendía sobre una población indígena cuyo mestizaje había sido más amplio y estaba sujeta a relaciones semisalariales y serviles más laxas, mientras que en la sierra sur el gamonalismo era más extendido y concentrado, las relaciones serviles de las distintas nacionalidades, especialmente la quechua y aymara²², aún se mantenían de manera más abierta y acentuada. Con diferente intensidad en ambas regiones se mantuvieron casi intocadas las viejas estructuras económicas y sociales, se conservaron las bases económicas que sustentaban el poder político y social de los gamonales y los referentes de dominio que provenían de la hacienda tradicional, con su sello autoritario, paternalista, conservador, señorial y altamente excluyente, especialmente con la población indígena.

Aún en la década del 40 se preservaban esas distintas formas de sujeción de la mano de obra indígena, además de la práctica estatal impuesta por Ley

²² Especialmente los indígenas de habla Quechua, constituyen alrededor del 30 a 40% de la población total del país. No solo los vincula el dominio de espacios territoriales extensos, sino el idioma, una cultura y una identidad que marcan la configuración social y el sello cultural, especialmente de los Departamentos del Trapezico Andino: Cuzco Ayacucho Puno, además de Junín, Huancavelica y Apurímac. Con características

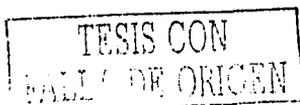


sobre todo a la población indígena de la Conscripción Militar y Vial, mediante las cuales se veían obligados al servicio militar obligatorio y al trabajo por turnos en la construcción de carreteras con jornales ínfimos, la dotación de pocos alimentos y coca. Los movimientos campesinos brutalmente reprimidos por los gamonales, pero, sobre todo las luchas y organización de los sindicatos de trabajadores mineros abrieron espacios limitados de mediación. Más allá de esos espacios, la sierra constituía una región con escasos márgenes de democratización y de desarrollo de referentes institucionales de carácter político y social incluyentes.

En segundo término, aún con las experiencias de modernización reseñadas anteriormente, también la costa constituía un mosaico diverso; las políticas económicas encaminadas a la industrialización se concentraron básicamente en Lima, abriéndose el puerto de Chimbote a una actividad industrial que tomaba fuerza con la producción de harina y aceite de pescado: las ciudades de Trujillo, Piura y Chiclayo, en el norte, conservaban su sello comercial de insumos y alimentos, de procesamiento de derivados de la caña de azúcar, empaque de algodón y comercialización de ambos productos. En la costa central y del sur medio prevalecían la producción algodonera, frutales y alimentos, la propiedad agrícola combinaba el latifundio con predios de mediana y pequeña dimensión y es aquí donde se extendió más el yanaconaje.

En la costa sur y su centro urbano serrano más importante, Arequipa, primaban las actividades de las casas exportadoras de lanas, la manufactura textil y el comercio de alimentos, insumos agrícolas y productos elaborados hacia los mercados de los Departamentos limítrofes de la sierra y la costa, en tanto que el puerto de Ilo ampliaba sus operaciones vinculadas a la exportación de minerales. A pesar de esta diversidad, es indudable que la costa verificó los más significativos procesos de transformación capitalista y fueron frecuentes los movimientos sociales que enfrentaron las distintas modalidades de dominio de los hacendados. Esa concentración del desarrollo en la costa, especialmente en Lima

muy afines a esta nación, dominando el mismo idioma y con rasgos más mestizos la población indígena quechua también habita todos los Departamentos de la Sierra centro y norte del Perú.



explica, en parte, la centralización política y económica de la capital y su papel como catalizadora de muchos de los procesos sociales hasta aquí reseñados.

Finalmente, la selva peruana se constituyó en motivo de preocupación del Estado no sólo porque representaba casi el 60% del territorio nacional, sino porque era una región con ingentes recursos inexplorados y escasamente habitada; a fines del siglo XIX esta región recibió el influjo de una limitada migración interna e internacional que explotó el caucho y las maderas. Más tarde, en las primeras décadas del siglo pasado, se renovaron esos impulsos colonizadores en la zona norte, centro y sur iniciándose la producción de café, arroz, tabaco, y otros productos, a la vez que se ampliaba la construcción de carreteras para disminuir la difícil articulación comercial de la región con otras de la sierra y costa del país.

Durante el periodo de Prado, el relativo crecimiento urbano de ciudades como Iquitos y Pucallpa se acentuó al promoverse la explotación de la goma y el caucho por la empresa Good Year, y de otros recursos naturales cuya demanda crecía en la industria química y farmacéutica norteamericana. A pesar de esos procesos, la selva constituía una región inexplorada en la que estaban ausentes gran parte de las instituciones del estado y donde los colonizadores reprodujeron los patrones de dominio de los hacendados de otras regiones sometiendo a la población nativa no sólo a sistemas ya conocidos de sujeción de la mano de obra como el enganche, sino a la cacería y persecución de los jornaleros que lograban huir de condiciones de trabajo degradantes y en el que sólo recibía maltrato y salarios miserables.

En ese contexto, una de las diferencias entre los regímenes de Benavides y Prado estribaría en que éste dio mayor continuidad a la política de industrialización promoviendo un acelerado ingreso de capital extranjero, especialmente el norteamericano, en la industria y propiciando una relativa intervención del estado en aquellos sectores de la economía donde ese capital no había logrado aún construir intereses sólidos, como la creación de la Corporación del Santa y la siderúrgica de Chimbote; además de establecer un papel más definido del estado respecto al bienestar social, aunque ello no significaría la puesta en marcha de

medidas encaminadas a lograr las transformaciones estructurales que el país requería.

En ambos periodos, la restricción de las libertades políticas se orientó básicamente a impedir el ascenso del APRA y restar posibilidades de influencia al Partido Comunista, así pues, la influencia de Benavides y de los militares – declarados enemigos de este partido- fue determinante durante gran parte del gobierno de Prado. A los renovados problemas internos enfrentados por ambos gobiernos, se agregaron otros de carácter internacional, los problemas de límites con Chile y Colombia en la década del 30, y la guerra con el Ecuador durante el gobierno de Prado, 1941-1942. Esos acontecimientos abonaron a que el ya inflado presupuesto asignado a las fuerzas armadas aumentara considerablemente, llegando a representar una parte bastante significativa del Producto Interno Bruto, y que éstas incrementaran su presencia en la escena política dando continuidad a su carácter dirimente.

A pesar de ello, las fuerzas sociales cada vez más ásperamente confrontadas con la ausencia de posibilidades de expresión política terminaron por imponer la necesidad de ciertos niveles de apertura democrática, de tal suerte que en los últimos años del periodo presidencial de Prado el país ingresaba a una fase controlada de tolerancia y democratización de la vida política con el reconocimiento de la legalidad de los sindicatos y del APRA, mas no del Partido Comunista. Se crearon diversos sindicatos y federaciones de trabajadores por rama de actividad: mineros, petroleros, azucareros y otros, y con el apoyo del partido aprista, en 1944, fue fundada la Central de Trabajadores del Perú³³.

Ese cambio en el escenario político coadyuvó al desarrollo de unas elecciones, en 1945, marcada por la presencia de las distintas fuerzas sociales que habían ido madurando en el país. Por una parte, aquella que agrupaba a intelectuales que provenían de un sector ilustrado de la burguesía aristocrática arequipeña liderada por José Luis Bustamante y Rivero en el Frente Democrático

³³ Contreras, C y Cueto, M. Op. Cit. Pp. 256.

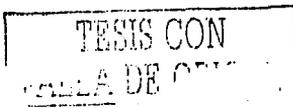
Nacional³⁴; el Partido Aprista, que había sido vetado por el ejército y por el general Benavides para lanzar directamente una candidatura que lo representara; el Partido Comunista, cuyos militantes aún no encontraban los causes legales para salir de la clandestinidad, y sectores de la clase media que encontraban en la nueva situación política un referente distinto al ofrecido por las tradicionales clases propietarias. Por otra, no podían faltar las fuerzas oligárquicas que propusieron como candidato al general del ejército Eloy Ureta.

El triunfo de Bustamante y Rivero creó grandes expectativas a nivel nacional. A pesar de la composición de su gabinete con intelectuales de primer orden, se confrontó, sin embargo, con las aspiraciones sociales contenidas por largo tiempo en el país y con el temor de una oligarquía acostumbrada a ejercer el poder de manera autoritaria y paternalista y a no conceder frente a las demandas de los sectores emergentes y de los trabajadores.

Esta combinación de contradicciones se acentuó en la medida en el APRA lograba mayor presencia en el ejecutivo y legislativo, y en tanto el gobierno permitía un juego político partidario de mayor alcance, aprobaba la formación de más de 260 sindicatos e implementaba una política social encaminada a fortalecer la educación con la gratuidad de la enseñanza, la salud y seguridad social, el control de precios de alimentos y alquileres, además de emitir una ley orientada a favorecer a los yanacunas impidiendo la continuidad de su trabajo gratuito en las haciendas, prohibiendo la obligatoriedad de la venta de su producción a los hacendados y obligando a éstos al traspaso de las tierras a esos campesinos mediante la venta con precios regulados.

En el terreno económico, Bustamante continuó la línea de promoción de la industria y apertura al capital extranjero, aunque estableció control a las importaciones y favoreció el desarrollo del mercado interno. Los debates acerca del papel de la prensa, por la que los propietarios de los diarios se vieron amenazados, y las concesiones otorgadas a la Internacional Petroleum Company con una tributación más alta a las que pagaba anteriormente, desataron la ira

³⁴ Caravedo, Baltasar "Desarrollo desigual y la lucha política en el Perú, 1948-1956. La burguesía arequipeña



"nacionalista" de la fracción oligárquica que reivindicaba ese sector para la operación de capitales nacionales.

Es indudable que esas y otras medidas abonaron el terreno para una firme oposición de la oligarquía, quien no sólo alimentó el antiaprismo ya tradicional en las fuerzas armadas sino una crítica en sectores más amplios de la sociedad, la Iglesia, por ejemplo, tenía una influencia vasta y podía inclinar la balanza acentuando la crítica a ese partido respecto a sus posiciones anticlericales. En esos procesos se conjuntaron, la fragilidad de un gobierno que si bien aspiraba a construir bases institucionales más firmes para el desarrollo de la democracia, no contaba con un proyecto político y económico consistente ni con una fuerza social, ajena al APRA, capaz de coadyuvar e impulsar ese esfuerzo³⁵. De la propia composición social del gobierno de Bustamante emanaba la ilustración y cultura de los intelectuales interesados en impulsar la modernización democrática del país, aunque el influjo que los motivaba se encontrara todavía atado a raíces conservadoras; estas raíces constituían precisamente el sustrato de sus relaciones más íntimas con las fracciones señoriales provinciales de donde provenían y los anudaba culturalmente con las clases dominantes peruanas.

Por su parte, el APRA constituía una fuerza política y social con una larga tradición de lucha y militancia de importantes sectores del proletariado agrícola e industrial y de estratos medios y populares ubicados especialmente en la costa peruana, aunque tenía también una influencia significativa en algunos Departamentos de la sierra. A pesar de que sus líderes fueron modificando su lenguaje beligerante y sus posiciones antiimperialistas, ese partido no logró convocar ni establecer alianza con la burguesía industrial emergente dado que ésta no constituía una fuerza capaz de proyectarse con relativa autonomía hacia el futuro para formular y emprender un proyecto de desarrollo nacional que le diera soporte en el largo plazo, ella no había logrado aún un margen de maniobra ni la

y el Estado peruano" Instituto de Estudios Peruanos, 1980, Lima Peru.

³⁴ Portocarrero, Gonzalo. "De Bustamante a Odría. El fracaso del Frente Democrático Nacional" 1945-1950, Ed. Mosca Azul, 1982, Lima Peru.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

ruptura de sus ataduras originarias con los intereses oligárquicos y el capital extranjero.

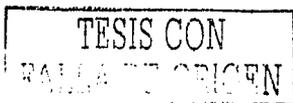
El APRA se inhibió de promover cambios en la propiedad de la tierra, la Reforma Agraria o la nacionalización de empresas, mientras tanto el gobierno establecía un control sobre la redistribución del ingreso, aprobaba el salario dominical e incrementaba sustancialmente el salario de las fuerzas armadas, además de una política laboral de contención de las demandas. Es un periodo con relativos niveles de apertura frente a las exigencias de reconocimiento de los sindicatos, entre 1945-1949 fueron reconocidos 297 sindicatos, federaciones obreras de azucareros, mineros, campesinos, empleados, petroleros. En estos procesos el APRA pugnaba por la acción directa y legal a la vez que incentivaba las luchas populares con una ambivalencia frente a las masas³⁵

En ese contexto, la alianza entre las fuerzas armadas y la oligarquía fue rindiendo frutos en la medida en que la inestabilidad política se acentuaba como producto del asesinato del director del diario La Prensa, del cual se culpó al APRA, y la sublevación de las tropas de la Marina alentada por este partido, en octubre de 1948. El gobierno de Bustamante suspendió las garantías constitucionales y desató una represión dura y generalizada a los militantes apristas. "El fin del régimen democrático ocurrió semanas después, cuando se sublevó en Arequipa el general Manuel A. Odría, exministro de Bustamante. De esta manera, el gobierno de Bustamante fue finalmente un esfuerzo fallido de un régimen democrático en el Perú... (que procuró)... la inclusión del partido reformista más importante en el poder"³⁷.

El panorama político era, en nuestra opinión, mucho más complejo. Se combinaba en el país, una apertura democrática en la que afloraron las demandas sociales largo tiempo contenidas, la presencia política del aprismo se veía seriamente desbordado en el juego contradictorio de un liderazgo que transformaba sus concepciones reformistas originales y una base social que

³⁵ Portocarrero, Gonzalo. Op. Cit. Pp. 112 a 125.

³⁷ Contreras, C y Cueto, M. Op. Cit. Pp. 274.



compartía con otros sectores sus aspiraciones de reformas más radicales, la fragilidad de una democracia recientemente inaugurada con su consecuente secuela de inexperiencia en la creación de mecanismos institucionales y políticos necesarios para encarar un juego político más complejo y diverso, las ataduras sociales y culturales de quienes componían el gobierno y, por supuesto, un ejército que asumía las funciones políticas de un partido político a la par de arrogarse la capacidad de legitimar, denostar y censurar a las organizaciones y al propio estado, y que aliado, sin duda, a una derecha económica intolerante, no podía concebir ni aceptar la necesaria transformación de la economía y del sistema político social prevaleciente en los periodos previos.

El golpe militar que fundó el llamado ochenio de Odría (1948-1956) representó precisamente eso, una vuelta dictatorial al pasado oligárquico, ahora sí, más enfáticamente liberal y proclive a las concepciones de que la modernización del país se lograría promoviendo las inversiones extranjeras en todos los sectores de la economía, sin que ello significara siquiera un control básico del destino de las utilidades obtenidas por esas empresas: por el contrario, éstas repatriaron a sus matrices la mayor parte de los beneficios acumulados en el país. Esta política económica de apertura extrema a las inversiones y a la repatriación de las utilidades, limitó gravemente las posibilidades de desarrollo de la industria nacional.

Este régimen dictatorial favoreció al sector oligárquico agro-minero estimulando su capacidad exportadora a través de la disminución de los impuestos a su comercio internacional, la flotación de la moneda y la disponibilidad de créditos para ampliar la producción agrícola y minera dada la creciente demanda internacional relacionada con la Guerra de Corea.

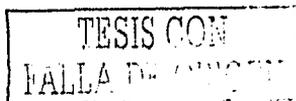
El gobierno y el capital norteamericano encontraron en este régimen al socio ideal. Con la reforma del Código de Minería ese capital no sólo expandió sus inversiones en la minería llegando a prácticamente controlar la producción y las exportaciones, sino que obtuvo nuevas concesiones para la exploración y la

explotación petrolera, expandiéndose asimismo en el sector industrial al punto de provocar una significativa disminución de los capitales nacionales en el floreciente sector pesquero, en la producción de artículos de consumo intermedio: refrigeradores, cocinas, aparatos eléctricos y otros productos, así como en las ramas de metal mecánica, producción de partes, llantas etc., además de controlar casi totalmente la naciente industria química, farmacéutica y de ensamblaje de automóviles, tractores y maquinaria menor. "Las concesiones al capital extranjero hicieron que el valor de retorno de las exportaciones fueran menores, ...se pierde una oportunidad para lograr el desarrollo nacional centrado en la industrialización y en la expansión del mercado interno"³⁸

Las políticas en el sector agrario tuvieron evidentemente ese sello conservador y oligárquico, garantizaron las operaciones de los exportadores y se orientaron a responder la presión ejercida por los movimientos campesinos al desarrollar programas de colonización de la selva y la irrigación de tierras baldías, con ello despertaron el apetito voraz de una oligarquía que reclamaba una reforma agraria a su medida al hacer productivas las zonas improductivas. Los gamonales no podían quedarse a la zaga; iniciaron una "modernización" de sus propiedades haciendo uso del viejo recurso bien conocido por ellos, el despojo y acaparamiento de tierras de las comunidades, provocando movimientos de resistencia indígena por la recuperación de sus derechos adquiridos como, por ejemplo, el pastoreo de su ganado en las tierras de la hacienda, contra las condiciones de trabajo impuesta por los gamonales y el agravamiento de sus condiciones de vida.

Los movimientos reivindicativos y de resistencia durante el periodo de la dictadura, serán el prelude de una ofensiva campesina que comprometió, entre los años de 1956 y 1965, la lucha de la población indígena de distintas regiones de la sierra por la recuperación de sus tierras y otras reivindicaciones. Todos ellos contribuyeron a la reversión de la tendencia a la concentración de la propiedad y a lo que Sinesio López denominó como la "junkerización" de la propiedad agraria en el país.

³⁸ Portocarrero, Gonzalo. Op. Cit. Pp 215.



Autoritarismo y política social formulada por expertos extranjeros no podían estar ajenos a este escenario de apertura irrestricta. El gobierno de Odría no perdió de vista algunas de las demandas sociales relacionadas con el renovado crecimiento de los sectores medios y populares y la ingente migración campesina a las ciudades; el populismo se hizo presente a través de la construcción de grandes unidades escolares, de hospitales, obras de irrigación y carreteras, además de la edificación de edificios para el funcionamiento de los Ministerios de Educación, Salud Pública, Economía, Transporte y Comunicaciones y otros. Estas medidas se convirtieron en los puntales de su política social; eso sí, acudió a la asesoría del gobierno norteamericano para instaurar un Servicio Cooperativo de Salud Pública y un programa educativo denominado Servicio Peruano-Norteamericano de Educación, encargado de la modernización de los programas, de regular el incremento salarial a los profesores y dirigir la construcción de las escuelas.

Por efecto de la creciente migración interna, la industrialización de Lima y la modernización de algunas ciudades del país las convirtieron en polos de atracción para una población serrana que no encontraba en sus respectivas regiones posibilidades de empleo, educación ni espacios de movilidad y ascenso social, de tal suerte que esas ciudades se constituyeron en focos de gran presión social y demandas de educación, trabajo, servicios básicos y regularización de predios. Profesionales de origen provinciano empezaron a ocupar los puestos de trabajo en los Ministerios, en las empresas industriales, en el comercio y los servicios, pero dado el poco potencial de absorción de mano de obra en las empresas industriales la proliferación de comerciantes al menudeo y de prestadores de servicio se iría constituyendo en la salida ocupacional para los estratos más bajos de la población migrante.

Esas migraciones contribuyeron a llenar de colores serranos el país, la construcción de urbanizaciones nuevas en las principales ciudades donde empezaron habitar los sectores pudientes de la provincia impregnarían con este sello el crecimiento de las clases medias urbanas, las cuales buscarían desarrollar un estilo de vida que reeditara su esfuerzo de ascenso y reconocimiento social;

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

así, la vestimenta formal, el enrejado de las casas rodeando a un pequeño jardín y al estacionamiento para coches, la combinación de estilos rococó y la apretujada trama del hierro forjado se irían asumiendo como símbolo de prestigio, como también se iría constituyendo en un signo de progreso y de concreción de muchas de esas aspiraciones sociales el acceso de los hijos a prestigiados centros educativos. El colegio militar Leoncio Prado, descrito por el afamado novelista Mario Vargas Llosa en su novela "La ciudad y los perros", los colegios nacionales Rosa de Santa María, Teresa González de Fanny, Nuestra Señora de Guadalupe, Alfonso Ugarte y otros se constituyeron en el reduto de lo mejor de la nueva intelectualidad provinciana, mientras que algunos de carácter privado como Santa María, Markan, la Recoleta, La Inmaculada, Villa María, Belén, el Sagrado Corazón, San José de Clunny y otros absorberían a los estratos más pudientes.

Mientras tanto, las barriadas se extendían en la periferia de las ciudades con construcciones precarias o de estera en cerros y arenales "ruralizando" el mundo urbano y marcando el entorno de los que menos tenían, los campesinos migrantes. Los clubes departamentales, provinciales y distritales creados para mantener los vínculos con las costumbres y tradiciones de origen, también plasmaban esas diferencias sociales entre los ex gamonales y los restos de una aristocracia provinciana y el mundo popular construido por estratos medios y bajos y por los campesinos que habían emigrado de las provincias y distritos.

Esas formas de asociación se constituirían en un referente social y afectivo diferenciado, donde los provincianos establecían relaciones que de una manera u otra reproducían la vida social de sus lugares de origen, y tenían como denominador común la evocación de la música y los bailes andinos, la celebración de fiestas patronales y de otros eventos importantes de la provincia. Especialmente para los campesinos migrantes, los clubes funcionaban como lugares en los que se iban renovando las relaciones entre paisanos, así como las prácticas de solidaridad y ayuda mutua provenientes de las culturas ancestrales serranas y recreadas en el mundo urbano. Estos procesos aceleraron, sin duda, el mestizaje y lo que Anibal Quijano ha denominado posteriormente como proceso de "cholíficación" en el Perú.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

La complejidad de esos acontecimientos se manifestó en que la población campesina emigrante consolidó un modelo de ocupación de los espacios urbanos, la formación de barriadas en la periferia de las ciudades y la creación de múltiples organizaciones sociales y culturales que apoyaron su instalación. Proliferaron especialmente las Asociaciones de Pobladores, a través de las cuales promovieron la formulación de proyectos de urbanización más ordenada y actividades comunales, canalizando además las demandas de los pobladores hacia las instituciones del Estado respecto a la legalización de los predios o la instalación de servicio básicos.

Tal como lo señala Eduardo Ballón, esos migrantes "toman la ciudad y mediante la autoconstrucción edifican sus viviendas de manera distinta a los señores...invaden la Pampa de Amancaes, el lugar donde antes cabalgaba José Antonio. El plebeyo se deja de lamentar para convertirse en el rebelde de hoy y en el protagonista de su ciudad"²⁹. En mismo autor expresa, citando a Carlos Iván Degregori, esos migrantes conquistaron la ciudad y se apropiaron de ella para conquistar también su ciudadanía.

La población de las barriadas, que un poco más tarde los estudiosos denominarían "marginal", fue objeto de políticas de corte paternalista y populista por parte de la dictadura de Odría: ésta no podía dejar de lado su aspiración de generarse una base social de apoyo en esos estratos sociales de menores recursos, buscando legitimarse aunque sea parcialmente. La creación de la Central de Asistencia Social, orientada a ofrecer ayuda asistencial a madres y a niños, se encaminó primordialmente al objetivo de lograr ese apoyo clientelar.

Como contraparte, la represión encarnizada, el envío a las cárceles de "El Frontón", recientemente construida en la isla de San Lorenzo frente al puerto del Callao, al *Cepa* en la región de la selva, al *Real Felipe* en el Callao y al *Sexto* en Lima, o al exilio a un sinnúmero de dirigentes políticos y sociales, a sindicalistas y militantes políticos, a intelectuales y estudiantes y aún a personajes que habían colaborado con él en los primeros años de su régimen, constituyeron los métodos

TESIS CO
FALLA DE OF. ...

de cancelación de toda oposición y de toda actividad política y cultural. A pesar de ello, el descontento social no dejó de manifestarse en los movimientos estudiantiles de Arequipa, en la revuelta y Junta de Gobierno proclamada en la misma ciudad el año de 1950, y en la actividad clandestina de los militantes apristas y comunistas.

Construcción de escuelas y hospitales, asistencialismo y paternalismo, conculcación del ejercicio de la ciudadanía, ruptura del proceso de acumulación de una cultura política institucional, especialmente del ejercicio social de los derechos políticos y partidarios y el desarrollo del juego parlamentario, el sojuzgamiento del poder judicial, la desaparición de las instituciones electorales, la presencia institucional del ejército en la vida política y social, serán los componentes esenciales de una recreación de las formas de ejercicio de un poder autoritario que favoreció la prolongación de la hegemonía oligárquica y, con ello, los referentes sociales de democratización política se desarrollaron con parámetros extremadamente limitados.

El autoritarismo permeó la cultura política nacional y socavó la constitución de los sujetos sociales y la subjetividad colectiva mermando el desarrollo de una ciudadanía más abierta a la inclusión y a la pluralidad, y generando condiciones que fueron constituyéndose en el sustrato de muchos de los acontecimientos políticos que en el futuro mostrarán la fragilidad democrática e institucional del país. todo ello, a pesar del gran esfuerzo realizado desde distintos sectores de la sociedad por construir espacios de intermediación y expresión política y social y una sociedad más democrática que los reconozca como actores fundamentales en su transformación.

Nuevamente el desmoronamiento de las instituciones que podían dar curso a la consolidación de un sistema político partidario tuvo el correlato populista democratizador de otros aspectos de la vida social, la expansión de la salud, educación, los programas de vivienda, etc. tuvieron la virtud inclusiva de nuevos segmentos de la sociedad y con cierto sesgo aumentaron las posibilidades de una

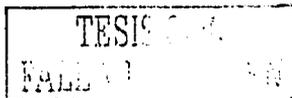
¹¹ Ballón Eduardo "Movimientos sociales: itinerario de transformaciones y lecturas". En Movimientos

ciudadanización recortada, dado que ella veía segmentada la adquisición de referentes cívicos relacionados con el ejercicio de la política. El sentido del orden institucional permanentemente quebrado trascenderá a la década de 1990, durante el gobierno de Alberto Fujimori, recreándose en términos nuevos en la sociedad, y será ésta la salida, ya no militar solamente sino civil y militar, a la que aspirarán amplios sectores cuando la crisis económica y el caos político arreciaban en el Perú a fines de la década del 80.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

CAPÍTULO II

**ENTRE EL SOBREVIVIENTE MODELO AGRO EXPORTADOR Y LA
INDUSTRIALIZACIÓN SUSTITUTIVA:
REAPERTURA DEMOCRÁTICA, 1956-1968**



CAPÍTULO II

ENTRE EL SOBREVIVIENTE MODELO AGRO EXPORTADOR Y LA INDUSTRIALIZACIÓN SUSTITUTIVA: REAPERTURA DEMOCRÁTICA. 1956-1968

El Perú de estas décadas estará signado por un desborde popular que afloró con la relativa apertura de dos nuevos gobiernos civiles (Manuel Prado y Fernando Belaúnde Terry), aunque casi al finalizar el periodo electoral del primero, un golpe de estado, en 1962, colocó nuevamente a los militares en el ejercicio de un gobierno que duró un año

Con diferente intensidad esos regímenes recurrieron a métodos autoritarios y represivos de contención social, especialmente del movimiento campesino. A pesar de ello, y también en respuesta a esos acontecimientos tanto Prado como los militares en 1962-63 y después Belaúnde implementaron políticas de corte reformista, de manera particular el tercero, desplegó un populismo conservador abriendo esferas importantes de democratización de la sociedad y dando paso a un funcionamiento institucional que parecía poder consolidarse. Los acontecimientos de los años siguientes revertirán esos avances aunque abrirán otros espacios de reformas más radicales.

El segundo gobierno del banquero y ya exitoso industrial Manuel Prado (1956-1962), mantuvo los rasgos esenciales de las políticas instrumentadas en los ocho años que duró el régimen de Odría. La creación de un movimiento más organizado, el Democrático Pradista -que más tarde se denominaría Movimiento Democrático Peruano-, la irrupción de otras fuerzas políticas que apoyaron la candidatura de Fernando Belaúnde Terry y después impulsaron la formación del partido Acción Popular, así como, la elección de Prado apoyada por el voto aprista definieron un panorama político de mayor apertura que tendería a restaurar la alicaída institucionalidad democrática. Con el funcionamiento del Congreso y el Ejecutivo se incorporaron algunos intelectuales, pero también ex funcionarios del

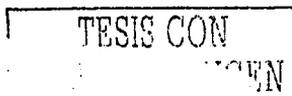
régimen odrísta como el propietario del diario La Prensa Pedro Beltrán, quien después de trabajar los primeros años con la dictadura sufrió encarcelamiento en el penal de la isla San Lorenzo.

Encargado del Ministerio de Economía, Beltrán llevó a cabo una política económica totalmente abierta a la economía internacional, él encarnaba con plenitud un liberalismo no practicado ni siquiera en los países más avanzados. Como bien lo señalaron Thorp y Bertram⁴⁰, mientras que en muchos países de América Latina prevalecían el proteccionismo y la presencia del estado en la economía, la economía peruana era una de las más abiertas del Continente.

Con la eliminación de cualquier viso proteccionista, el estado peruano propició la expansión del capital norteamericano en la economía favoreciendo su casi total control del sector minero, petrolero y las ramas fundamentales de la industria, de tal suerte que las políticas de promoción industrial y sustitución de importaciones sirvieron directamente a los intereses de las matrices extranjeras, resultando un beneficio marginal. "por efecto del goteo", para los capitales nacionales reducidos ahora a la condición de socios menores o a la esfera de medianos y pequeños propietarios. Aún el sector pesquero, inicialmente controlado por capitales nacionales, pasó a ser significativamente dominado por capitales externos, solo la recién creada siderúrgica de Chimbote podía decirnos algo sobre una presencia del estado como promotor de una industria nacional.

En esas condiciones, el mercado interno crecía por efecto de la industrialización abierta y en relación directa al crecimiento de las ciudades, pero no como resultado de la puesta en marcha de reformas estructurales que no sólo articularan a las regiones e integraran al desarrollo a las distintas naciones (quechua, aymara, ashaninka) que coexistían en el territorio, sino que crearan la infraestructura necesaria, fomentaran el establecimiento de redes productivas y comerciales de largo alcance sustentadas en programas de desarrollo social que apuntaran a la constitución de sujetos económicos y ciudadanos que, en la

⁴⁰ Thorp, R. Y Bertram G. "Perú 1890-1977: Crecimiento y Políticas en una Economía Abierta", Ed. Mosca Azul, Lima, Perú, 1985. Pp 311



pluralidad e inclusión, fueran capaces de experimentar y acumular socialmente el ejercicio de sus derechos económicos y sociales.

Los gobiernos de Odría y Prado tuvieron en común precisamente esa orientación aperturista al capital extranjero, uno dictatorial y el otro con niveles relativos de apertura política, pero ambos siendo artífices de la prolongación del resquebrajado poder oligárquico. El régimen de Prado no significó reforma alguna de las condiciones preexistentes, sino una prolongación de un liberalismo que antes se impulsó autoritariamente y después bajo el barniz de una democracia conservadora oligárquica.

En las elecciones de 1962 confluyeron el partido aprista, que convocaba a sectores importantes del norte, a las clases medias y populares con un discurso reformista y nacionalista, a pesar de sus vaivenes ideológicos y del apoyo "práctico" ofrecido a Prado en 1956; los partidos de Acción Popular y Democracia Cristiana recientemente fundados por sectores reformistas de la clase media, especialmente arequipeña; y la Unión Nacional Odríista como representante de los intereses oligárquicos.

El claro triunfo del APRA en las elecciones de 1962 no podía ser aceptado por los militares que históricamente lo habían declarado su enemigo, y en un confuso panorama de fraude electoral y de confrontaciones políticas, nuevamente, las fuerzas armadas efectuaron un golpe de estado comandado no por un caudillo sino por todas las instituciones militares. Éste fue pues el primer golpe de estado institucional. Una Junta Militar, encabezada primero por el general Ricardo Pérez Godoy y luego por Nicolás Lindley, gobernaría el Perú durante un año; el objetivo era impedir el ascenso del APRA, tomar directamente las decisiones políticas y militares encaminadas a reprimir al movimiento campesino, especialmente indígena, y guerrillero que cada vez más tomaba fuerza en regiones importantes del país, generar las condiciones para el afianzamiento de las fuerzas sociales medias y populares convocadas por el discurso reformista de la dirigencia de Acción Popular e impulsar algunas medidas que atenuaran la dureza de la



represión como la Reforma Agraria puesta en marcha, en 1963, en algunas zonas del territorio.

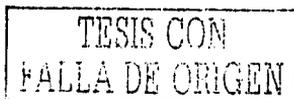
1. EL REFORMISMO CONSERVADOR DE 1963-1968

a. CONTINUIDAD DE LA INDUSTRIALIZACIÓN SUSTITUTIVA

Desde la mitad de la década del 50 se había desarrollado en el Perú una más firme industrialización basada en la sustitución de importaciones. A diferencia de otros países de América Latina, la consolidación de ese proceso en el periodo 1963-1968 combinó la acumulación de capital centrada en el sector primario exportador con el crecimiento de la producción industrial de bienes de consumo e intermedios para el mercado interno. Constituían las bases de ese desarrollo, un aparato productivo frágil y una política económica no sólo abierta, sino promotora de una modernización que privilegiaba la inversión extranjera y la incorporación de tecnologías foraneas garantizando el control de ese capital de los principales sectores de la economía

Se trató, pues, de un proceso en el que la expansión capitalista propiciada por la llamada sustitución de importaciones tuvo en el capital monopólico internacional a su principal promotor y beneficiario, el cual extendió su dominio económico en el país aliado con una burguesía industrial débil, a la cual subordinó, y aprovechó el proteccionismo estatal como uno de los mecanismos para lograr una indiscutible posición de privilegio en la definición de la política económica llevada a cabo por el Estado.

El gobierno de Fernando Belaúnde Terry (1963-1968) se sustentó en una variada gama de intereses de las clases dominantes y demandas de los sectores sociales subalternos. En él se vieron expresados los intereses de una burguesía industrial en desarrollo que débil y subordinada al capital extranjero pugnaba por consolidarse económica y políticamente, aunque ella había aprendido a mantener



"una relación utilitaria con el Estado"⁴¹; se expresaban, asimismo, los intereses del sector minero exportador, aunque la declinante oligarquía articulada a la producción agro-exportadora presionaría por el control de sus propios intereses. Ella había sufrido una merma en su hegemonía política en el curso de las tres décadas anteriores, pero mantenía aún las bases de su poder económico como para exigir garantías relacionadas con su propia reproducción.

En la medida en que anteriores y nuevas fracciones del capital internacional fueron ampliando su radio de acción en el país, parte de esa oligarquía se había ido articulando a las nuevas formas de gestión del capital; así, sin dejar de ser una clase vinculada a las actividades agro-exportadoras se orientaba también al comercio, al sistema financiero y, en menor medida, a la industria como socio menor de dicho capital internacional.

En este contexto, la burguesía industrial, que difícilmente recorría el camino de su consolidación, mostraba una debilidad estructural que la llevó a controlar secundariamente algunas ramas de la economía y a encontrar en su alianza desigual con el capital extranjero una forma inmediata de garantizar elevadas tasas de ganancia. Ella reprodujo el mismo modelo centralizador de la oligarquía, de tal manera que la modernización de la economía fue agudizando la marginación de gran parte de las regiones del territorio nacional en beneficio de la costa y la capital, provocando una mayor polarización entre el campo y la ciudad, entre las regiones de la costa, sierra y selva, y entre el norte, centro y sur del país.

Esa burguesía industrial propició con su propia expansión una ampliación limitada del mercado interno y con una visión de corto plazo tampoco pugnó por consolidar la producción agrícola, de tal forma que en el largo plazo se crearon las condiciones para que se reafirmara la tendencia previa de un país importador de alimentos. Sin la contrapartida de un desarrollo agrario sostenido, la economía campesina sufriría un sistemático y profundo deterioro generando una explosiva migración campesina a las ciudades, especialmente a la capital.

⁴¹ Jiménez, Félix. "Estado, economía y mercado: paradigmas teóricos, crisis y proyectos de modernidad en la economía peruana." En Estado y Sociedad: relaciones peligrosas. DESCO, Lima-Perú, 1990.

El régimen de Belaúnde también se hizo eco, al menos en el lenguaje populista de su campaña electoral y en la primera etapa de su gobierno, del descontento de las capas medias y de los sectores campesinos y populares que de manera diferenciada se vieron afectados por un proceso de desarrollo capitalista que los empujaba, en el primer caso, a pugnar por la apertura de espacios dentro del aparato económico, institucional y político que el capital no había logrado ampliar suficientemente como para incorporarlos; en el segundo, a movilizarse por sus reivindicaciones básicas: la devolución y el reparto de tierras agrícolas, contra los abusos cometidos por los hacendados y gamonales y por una política de apoyo al campo; y en el tercero, por el incremento de salarios y mejores condiciones de trabajo, acceso a la educación, vivienda, servicios, etcétera.

Algunas de las reformas del belaundismo apuntarán a tratar de paliar la gravedad de esos problemas, sin embargo, a pesar de la importante expansión del aparato industrial, del comercio y los servicios, en los últimos años del gobierno de Belaúnde se presentaron síntomas de crisis y agravamiento de la situación económica, se agudizaron el enfrentamiento político entre las fracciones dominantes y se hicieron más crecientes las movilizaciones de los trabajadores, de los sectores medios y populares.

Las primeras tendencias recesivas de la economía mundial, durante los años de 1967-1968, adquirieron mayor profundidad en el Perú debido, entre muchos factores, a la contención de las inversiones externas e internas y la consecuente desaceleración del proceso sustitutivo de importaciones, a la capacidad de resistencia de la fracción agro-exportadora que reclamaba políticas económicas que la beneficiaran y a los límites impuestos por un mercado interno concentrado en las ciudades y altamente restringido en el ámbito rural. La burguesía industrial no había logrado levantar un proyecto económico y político encaminado a impulsar las reformas estructurales que el país requería, de manera que pudiera atraer el apoyo de los sectores medios y populares y ampliara el mercado interno; por lo mismo, el régimen pudo contener la creciente y cada vez más autónoma movilización popular y campesina en busca de resolución de sus demandas básicas; hacerlo significaba socavar su precaria legitimidad, ya que ello

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

suponía afectar los intereses de las aún poderosas fracciones oligárquicas exportadoras y de los hacendados tradicionales.

En ese contexto y muy estrechamente vinculada con la dinámica internacional, una característica básica del populismo reformista impulsado durante el periodo de 1963-1968, fue la pérdida de importancia relativa del sector agro exportador por efecto de la ampliación del consumo interno, combinado con el florecimiento y creciente explotación de antiguos y nuevos centros mineros, un relativo crecimiento de la producción industrial y la consolidación del sector pesquero que hizo del Perú uno de los principales productores mundiales de harina y aceite de pescado.

CUADRO 6

Composición del Producto Interno Bruto Por Sectores (1950-1970)
(Porcentaje)

Composición Sectorial	1950	1955	1960	1965	1970
Agricultura	20.4	19.3	18.5	15.3	15.1
Pesca	0.4	0.6	1.4	2.1	2.7
Minería	6.8	7.5	10.4	8.5	8.2
Manufactura	16.7	18.0	20.0	22.2	23.8
Construcción	6.3	7.5	5.0	5.2	4.2
Electricidad gas agua	0.6	0.6	0.8	1.0	1.1
Gobierno	9.1	8.2	8.0	8.3	8.0
Banco, seguros, bienes inmuebles	2.3	2.6	2.8	3.0	3.2
Transporte	3.9	4.6	4.3	4.5	6.0
Comercio	11.4	11.1	12.1	15.1	13.2
Servicios	22.1	20.0	16.7	14.8	14.5
Total PIB	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Fuente: Fitzgerald E.V.K. La Economía Política del Perú: 1956-1978. I.E.P. Lima-Perú. 1981, p. 102

El deterioro de la agricultura se relacionó con el fortalecimiento de empresas industriales que ampliaron la producción de bienes de consumo humano y animal absorbiendo como insumos una buena proporción de la producción campesina (cebada, maíz), y de la agro-exportadora (caña de azúcar, algodón) reduciéndose

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

el potencial agrícola exportable. La crisis agraria de la década del 60 se remonta y explica debido al "lento crecimiento de los cultivos de alimentos, alrededor del 2% anual frente a una expansión de la demanda básica entre 4% y 5% anual debido al crecimiento de la población y del ingreso durante el último cuarto de siglo, lo cual llevó a una progresiva escasez de alimentos, satisfecha mediante importaciones y contrarrestada sólo por la contracción del nivel de vida de los estratos más pobres de la población urbana."⁴²

Durante este periodo el PIB creció un promedio anual de 5.5%, pero disminuyó el porcentaje de participación del PIB agrícola en el PIB total, de 18.5% en 1960 a 15.3% en 1965 y 15.1% en 1970. No sólo se trataba de una disminución de la importancia del sector agro exportador, sino de la crisis provocada por la ausencia de políticas agrarias que condujeran a una transformación de los productores en sujetos económicos capaces de extender y desarrollar operaciones de mercado, acceder a fuentes de financiamiento y a una educación y otros servicios que los fortaleciera para elevar su calidad de vida, su eficiencia y productividad.

CUADRO 7

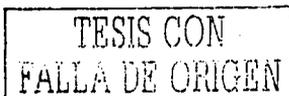
Crecimiento anual del PIB y PIB per cápita. 1950 - 1968

Año	PIB	PIB(1) Per cápita
1950-1959	5.1	3.6
1960	9.1	6.3
1961	8.5	5.3
1962	8.7	5.7
1963	3.7	0.7
1964	6.2	3.1
1965	5.0	1.9
1966	6.0	3.0
1967	2.1	-1.1
1968	0.6	-2.5
1960-1968	5.5	2.6

Fuente: Banco Central de Reserva. Cuentas Nacionales y Memorias 1950-1960. 1960-1968

(1) Tasas de crecimiento promedio anual o variación porcentual del PIB real

⁴² Fitzgerald, E. V. K. Op. Cit. Pp. 104.



La ausencia de esas políticas condujo irremediablemente a la insuficiencia alimentaria del país; ellas se orientaron hacia la opción conservadora de canalizar recursos para la importación de alimentos. Así, "el estancamiento de la agricultura derivada de una desequilibrada expansión capitalista concentrada en la minería y manufactura fue una de las principales fuentes de pobreza en el campo, de insuficientes niveles urbanos de nutrición y desequilibrios en la balanza de pagos".⁴³

En distinta dirección, la expansión del parque industrial sólo logró vincular estrechamente la producción de materias primas con la industria de primera transformación; tanto en estos sectores como en la producción de bienes de consumo durables y maquinaria se utilizó tecnología importada, afianzándose la producción secundaria de ensamblaje de partes con componentes más complejos que no se producían en el país. En el mismo sentido, se expandieron algunas ramas industriales y surgieron otras nuevas de producción intermedia y de bienes consumo que también absorbían una buena proporción de insumos importados. Tenemos, en consecuencia, una matriz de desarrollo capitalista en el que la cuarta parte de los insumos necesarios para el funcionamiento del aparato productivo eran importados y en el cual, con el mismo criterio de atender especialmente los requerimientos de los grandes productores agrícolas, mineros e industriales, el sistema bancario estatal y privado cumpliría la función de constituirse en el soporte financiero de la expansión de las empresas transnacionales.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

⁴³ Fitzgerald. Op. Cit. Pp.105.

CUADRO 8
Insumos importados con relación a los insumos totales.
(Porcentaje)

Año	Materia Prima	Industrias Intermedias	Bienes de Capital	Bienes de Consumo	Total
1963	22.8	23.9	57.3	23.1	25.1
1968	13.7	21.3	60.7	21.3	23.1

Fuente: H. Cabieses y C. Otero "Economía Peruana: Ensayo de Interpretación" DESCO. Lima, 1977 pág. 43

Esta matriz de desarrollo se caracterizó por "el crecimiento sustancial e ininterrumpido de la capacidad de importar de las exportaciones, tanto por la mayor exportación minera, resultante de las inversiones realizadas en la década anterior, como por el extraordinario crecimiento de la exportación de harina de pescado, así como el mejoramiento ininterrumpido de los términos de intercambio".⁴⁴

La evidencia fundamental es que el proceso económico se enfrentaba a los límites de un modelo de industrialización orientado a satisfacer las demandas de un mercado interno restringido, dada una redistribución del ingreso desfavorable a las propias necesidades de expansión del capital en el país y a sus escasas posibilidades de competir en el mercado internacional.

En definitiva, los estímulos industrializadores no provinieron del mercado interno sino del dinamismo expansivo del capital extranjero y de la demanda externa de productos primarios, y aunque el país transitaba hacia una modernización más extendida, como puede verse en los datos consignados en el cuadro, en términos reales se acentuó el patrón previo de producción y exportación de materias primas (minerales, azúcar, algodón) y de bienes de consumo animal como la harina y aceite de pescado complementado ahora con el desarrollo de diversas ramas industriales para el mercado interno.

⁴⁴ Cabieses y Otero sostienen que diversos estudios han demostrado que más del 50% de la llamada industria de "bienes de capital" producía en realidad bienes de consumo durable.

⁴⁵ Iguíñiz, Javier. "Perspectiva y opciones de la economía peruana ante la crisis". Lima, 1983. Pp. 5.

CUADRO 9

**Exportaciones con relación al valor bruto de la producción
(Porcentaje)**

Año	Materia Primas	Industrias Intermedias	Bienes de capital	Bienes de consumo	Total
1963	18.0	19.5	0.3	21.9	14.8
1969	12.5	28.7	0.3	20.9	10.2

Fuente Cabrese y Otero. Op cit Pp 44

Si analizamos los datos que nos ofrecen Cabieses y Otero en su obra ya citada, tenemos que las exportaciones durante el periodo se concentraban básicamente en tres sectores de la economía: extracción de minerales, harina y aceite de pescado e industrias metálicas no ferrosas, las cuales alcanzaron aproximadamente el 78% del total de las exportaciones. La única rama industrial que mostró alguna importancia fue la textil con 7.6% del total de exportaciones; Sin embargo en el curso de seis años el país había perdido su capacidad exportadora, aunque las industrias intermedias, especialmente metálicas de primera transformación, habían crecido casi en un 10%.

Esta lógica de funcionamiento, en la que la burguesía industrial peruana se articuló como socia menor del capital extranjero y con escasas posibilidades de transitar hacia una capacidad exportadora de mayor alcance, tuvo que ver, sin duda, con el carácter de las políticas económicas internas y con la fase de desarrollo del capitalismo a nivel mundial durante el periodo de 1950- 1974, el cual no sólo alcanzó "su apogeo el auge capitalista de post-guerra sino que comenzaban a manifestarse abiertamente las consecuencias internacionales de la prolongada onda expansiva del capital, acelerándose su extensión a nuevas regiones, internacionalizándose los mercados y las empresas, agudizándose la concurrencia entre los capitales y las diferentes esferas nacionales, redistribuyéndose las relaciones globales de fuerza e incubándose rápidamente

las condiciones de la gran crisis industrial de 1974-1975".⁴⁵ Proceso en el que la burguesía peruana sólo podía insertarse de forma secundaria.

En ese contexto, los industriales buscaron el camino más fácil para incrementar sus ganancias en el corto plazo, diversificando débilmente la estructura productiva del país y explotando de manera exacerbada algunos recursos naturales, al punto de comprometer gravemente el desarrollo posterior de importantes sectores productivos. Un ejemplo palpable de esta forma de gestión fue, sin duda, el sector pesquero, que observó un tumultuoso e inorgánico crecimiento que afectó la evolución de las exportaciones, arrastrando al conjunto de las actividades industriales vinculadas a ella y aumentando innecesariamente la demanda de maquinaria, equipo e insumos importados. Así, la crisis que afrontaría la industria pesquera en los años siguientes se explica por la situación generada en la década del sesenta, por la explotación irracional y posterior agotamiento de los recursos marítimos que llevaron a la paralización casi total de este sector industrial.

Como ya lo expusimos, el denominado proceso sustitutivo se desarrolló con un alto componente de capital extranjero, especialmente el norteamericano, el mismo que operó a gran escala y controló los sectores minero, petrolero e industrial, además del 60.89% de las haciendas azucareras del norte del país.

CUADRO 10
Inversión norteamericana por sectores, 1963-1968
(millones de dólares)

Año	Total	Minería y Fundición	Petróleo	Manufactura	Comercio	Servicios públicos	Otros
1963	148	240	56	64	21	21	27
1968	692	421	39	96	51	22	62

Fuente: Roca, L. "Viejas ataduras con nuevos nudos. Apuntes sobre el capitalismo monopolístico y la política económica del gobierno actual". Ed. Populares de los Andes. Lima-Perú 1974 (la sistematización es nuestra)

⁴⁵ Dabat, Alejandro. "La economía mundial y los países periféricos en la segunda mitad del sesenta". Rev. Teoría y Política No. 1. Abril - mayo 1980. México. Pp. 22.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

El gobierno de Belaúnde Terry recreó con nuevos bríos la vieja visión oligárquica del desarrollo; la apertura extrema de la economía imponía la lógica externa del capital invalidando las expresiones de un nacionalismo carente de futuro, que buscaba rescatar al "Perú profundo" sin que realmente se acometiera la tarea de forjarlo eficazmente. Con un discurso más acorde a las circunstancias, democrático, pero con una visión altamente conservadora, el régimen ignoró las exigencias de reformas estructurales que sentaran las bases para un desarrollo incluyente de la diversidad étnica y cultural del país, en cambio, removió y promovió ideológicamente el sentido de pertenencia nacional y estimuló los sentimientos más diversos vinculados con el orgullo por el pasado incaico e indígena.

La política económica implementada no tuvo sino algunas diferencias en la profundidad y oportunidad con el régimen oligárquico. Durante el siglo XX el país no había logrado construir una capacidad relativa de negociación con el capital internacional, por el contrario dependía casi totalmente de su dinámica y de que se garantizaran las condiciones internas de estabilidad social. En esas condiciones, las puertas estaban abiertas al influjo modernizador externo, debido a lo cual el capital norteamericano logró el control no sólo de los sectores primario-exportadores -que por lo demás ya controlaba desde tiempo atrás- sino de las principales ramas de la industria: Industria química, farmacéutica, metal mecánica, ligera, derivados del pescado y otros.

"En el sector industrial... 79 empresas grandes controlaban el 54.03% del valor activo fijo... la mayoría de tales empresas controladas por el capital imperialista; en la minería tres empresas norteamericanas ejercían el control del 65% de la producción minera.... en el petróleo, tres empresas controlaban el 75.92% del valor bruto de la producción, en el sector pesquero las empresas dedicadas a la pesca y su industrialización en su mayoría también pertenecían a

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

extranjeros: de los 28 grupos más importantes 17 son de propiedad de extranjeros o de sociedades de peruanos con foráneos⁴⁶.

En 1961 el capital internacional tenía una participación del 13% en el sector pesquero, en 1965 controlaba el 21%, llegando en 1968 al 50% aproximadamente. "En la industria química diez empresas controladas por el capital extranjero, detentaban el 70% del activo fijo; en la producción de papel el 81.9%, en el caucho el 76.54%, en los minerales no metálicos seis empresas controlaban el 71.94% del capital fijo"⁴⁷.

El peso adquirido por el capital internacional en la consolidación del patrón de acumulación basado en la producción industrial se puede calibrar comparando dos periodos: mientras que entre 1940-1960 operaban en el país 67 empresas transnacionales, entre 1960-1969 su número aumentó a 175⁴⁸. Gracias a la política promotora de esta forma de penetración y al proteccionismo estatal, las empresas transnacionales operaron en el Perú como monopolios; la expansión capitalista no sólo significó la hegemonía de dicho capital, sino que en la base del llamado proceso sustitutivo de importaciones actuaron como motor de sus necesidades de expansión. No se trató, pues, de una industrialización dirigida a transformar las bases estructurales de un mercado interno restringido y a eliminar las barreras que limitaban su crecimiento, sino a maximizar el consumo de la clase dominante e incorporar a aquellos sectores medios y populares que se ampliaban como resultado de ese proceso industrializador.

Las clases dominantes jugaron allí un papel secundario pero importante. Si bien se produjo un fortalecimiento de la fracción social articulada a la industria; sin embargo ésta y la oligarquía encontraron en la transacción política un medio para mantener una suerte de hegemonía compartida que se expresó en el control de los aparatos del Estado, en la implementación de una política económica que los

⁴⁶ Carlos Malpica, citado por Roca, L. "Viejas ataduras con nuevos nudos. Apuntes sobre el capitalismo monopolístico y la política económica del gobierno actual". Ed. Populares de los Andes. Lima-Perú, 1974. Op. Cit. Pp. 24.

⁴⁷ Roca, L. Op. Cit. Pp. 29.

⁴⁸ Anaya, Eduardo. "Imperialismo, industrialización y transferencia de tecnología en el Perú". Ed. Horizonte. Lima-Perú, 1977. Pp. 39.

benefició y que, en general, les permitió garantizar tanto la reproducción del capital internacional como la suya accediendo a ganancias suculentas en el corto plazo.

La penetración del capital extranjero se realizó a través de diversos mecanismos: Inversión directa, negociaciones con el sector privado nacional, créditos al gobierno central, venta de patentes, etcétera.

CUADRO 10
Inversiones de los Estados Unidos en el Perú: Utilidades,
dividendos e intereses remitidos a los EE.UU.
(Mill. de dólares)

Año	Inversión Acumulada	Ingreso neto de capital	Utilidades reinvertidas	Utilidades, intereses y otros remitidos a Estados Unidos	Dividendos
1963	448	-5	70	1	65
1965	515	55	98	-6	98
1968	692	24	104	9	95

Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Información sistematizada por Anaya E. Op cit p 30

Los datos revelan no sólo el grado y forma de operación del capital extranjero, sino que el volumen de los excedentes remitidos al exterior por las empresas norteamericanas fue superior a las inversiones efectuadas. Mientras los dividendos ascendieron a 258 millones de dólares entre 1963-1968, las inversiones, obtenidas al restar las inversiones en 1968 respecto a las de 1963, sólo sumaron 244 millones de dólares, aunque el ingreso neto de capitales solamente representó 74 millones de dólares; de manera tal que el financiamiento global de las inversiones de las empresas norteamericanas fueron cubiertas con recursos internos de la banca, produciéndose, así, una desviación de los ahorros internos y recursos financieros del país en favor de ese capital.

En 1967 nuevos desequilibrios precipitaron una situación de crisis. El endeudamiento del Estado se había acrecentado a tal grado que "las reservas de divisas del Banco Central se redujeron a 24.2 millones de dólares en 1966 y a 81

millones de dólares en enero y agosto de 1967, al haberse alcanzado el "límite" de endeudamiento del país⁴⁹. Con excepción del año 64, en todo el periodo las importaciones habían crecido más rápidamente que las exportaciones, de manera que en 1965 se tenía un saldo negativo en la cuenta corriente de la balanza de pagos de -3.2%, y en 1966 llegó a representar el 4.18% del PIB a pesar del incremento de las exportaciones. El creciente volumen de importaciones de maquinaria, insumos industriales y alimentos y la remisión de utilidades e intereses de las empresas al extranjero agravaron la situación de crisis, a tal grado que en 1967 se profundizó dando como resultado un déficit de -5.95% del PIB.

CUADRO 12

Balanza de Pagos 1963-1968.

	1963	1965	1967	1968	1969
Exportaciones (1)	555	685	742	840	882
Importaciones (1)	518	660	810	673	664
Déficit cta corriente PIB (2)	-3.3	-3.22	-5.5	-0.96	0
Capital Privado a largo plazo (1)	4	49	20	-26	-9
Capital Público a largo plazo (1)	54	124	169	74	80
Variaciones en las reservas del B.C. (1)	19	15	-31	-15	37
Déficit de Gobierno Central/PIB (2)	0	-2.82	-3.30	-2.0	1.38
Crédito del sector público (3)	3.293	4.596	7.506	9.119	9.410
Crédito del BCR al sistema bancario (3)	1.263	2.118	1.779	1.627	1.884
Crédito del sist. bancario a sector público (3)	2.169	5.318	10.192	10.283	11.594
Crédito del sist. bancario a sist. privado (3)	14.095	20.785	27.352	31.207	34.283

(1) Millones de dólares

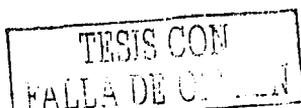
(2) Porcentaje

(3) Millones de soles.

Fuente: Cuentas Nacionales 1960-1969: Anexo Estadístico, (citado por Cabrera, Op. cit., p. 25).

Los compromisos financieros netos del gobierno, descontados los gastos implícitos en la contratación de nuevos préstamos y la amortización de los anteriores, ascendieron a 605 millones de dólares en 1963-67, mientras tanto, el

⁴⁹ Cabrera, H. "La crisis y la política de estabilización." Fundación Friedrich Ebert. Lima-Perú. 1978. Pp.23.



ingreso neto de capital privado a largo plazo totalizó 85.6 millones de dólares, siendo los préstamos mucho más importantes que la inversión extranjera directa.

Esta nueva situación comportaba un continuo aumento del endeudamiento externo del gobierno; en la década del sesenta, ese sería el mecanismo principal de obtención de recursos adicionales en divisas para facilitar el incremento del nivel de compra y, en esas condiciones, el significativo crecimiento del PBI debió ser estimulado por el crecimiento del gasto público, particularmente la inversión que se incrementó a una mayor velocidad que la producción nacional. La evolución de las finanzas públicas tendió a reflejar directamente esta realidad que se derivó del rol que asumió el Estado en el sostenimiento de la actividad económica del país. Los ingresos fiscales fueron insuficientes para atender la expansión de los gastos corrientes, teniendo entre 1964-1968 un ahorro negativo en la cuenta corriente.

Además de los compromisos financieros que había adquirido el gobierno con el extranjero, recurrió al financiamiento interno, esto es, al crédito en el sistema bancario; inclusive en los procesos de saneamiento y contracción de la economía, con las claras dificultades que eso conlleva, el Estado debió asumir la parte más esencial de la carga financiera. Así, en 1968, el saldo negativo del movimiento de capitales privados a largo plazo, la fuga de capitales y la pérdida de reservas tuvieron que ser cubiertas con los ingresos netos de capital público.

b. POPULISMO Y PROBLEMA AGRARIO.

En el trasfondo del proceso agrario puede decantarse la fragilidad del Estado con respecto a la necesidad urgente de articulación del Perú como Nación y la ausencia de un proyecto nacional de desarrollo que pueda proyectarse en el largo plazo; por el contrario, los problemas nacionales sólo podían ser tratados como una derivación de los intereses privados de las fracciones dominantes, por tanto, la política económica implementada resultó de múltiples transacciones entre el sector agro minero exportador, los industriales y el capital internacional, ubicándose la transformación de la agricultura en el terreno de una aridez y

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

vendaval político y no en el área de las decisiones fundamentales de la política económica gubernamental.

El sector agrario sí sufrió transformaciones, pero gran parte de ellas se debieron al impacto de la industrialización y de los movimientos campesinos en lucha contra el dominio de terratenientes tradicionales y hacendados, provocando la paulatina descomposición del gamonalismo, aunque no su desaparición, y la expansión de un mercado de tierras a través del cual se difundió la pequeña y mediana propiedad y la producción de alimentos para el mercado urbano, especialmente en la costa y algunas zonas de la sierra. Sin embargo, permanecieron intocados los intereses del sector exportador y las haciendas serranas o costeñas productoras de insumos para la agroindustria en expansión, de arroz, cebada, frutales y otros productos de consumo humano y animal; esos intereses constituían el sustrato del poder de las oligarquías aristocráticas regionales, de los viejos grupos oligárquicos de la costa, algunos de los cuales habían incursionado en las finanzas y la industria, y del capital extranjero.

Por su parte, las comunidades indígenas de la sierra y las de la selva, así como los pequeños y medianos propietarios no fueron objeto de una acción estatal consistente encaminada a impulsar el desarrollo de la producción agrícola y ganadera. En general, ésta se había estructurado en el contexto de una extrema marginación social, de carencia de recursos financieros, con una infraestructura de riego construida por los propios campesinos o rescatada de sus ancestros (andenes, sistemas de riego y otros aportes agrícolas prehispánicos), la falta de medios de comunicación, de mecanismos de acopio y comercialización que pudieran proyectar la producción campesina hacia mercados de larga distancia.

En los valles interandinos y en las planicies de las alturas los campesinos ponían en juego la riqueza de sus conocimientos ancestrales, sin embargo, en ese periodo -y aún en la actualidad- no se contempló la necesidad de potenciar esa herencia cultural ni la enorme variedad de los pisos ecológicos con que cuenta el país a la luz de los conocimientos científicos modernos; en estas condiciones es oportuna la denominación efectuada por Elena Álvarez (ver cuadro 13), respecto a

este sector productivo como orientado a un "mercado restringido"⁵⁰, el mismo que comprende básicamente las unidades agrícolas de explotación familiar para el autoconsumo y el minifundio.

En ese sentido, el proceso de industrialización que dominó la escena económica peruana en los años 50 y los 60 no fue acompañada por un despegue agrícola que resultara de una política económica gubernamental. "La agricultura en términos per cápita y a nivel agregado se mantuvo estancada; la industrialización, ... (sin embargo), ... y en general el desarrollo del capitalismo *en* el país con su concomitante: la urbanización y la expansión del mercado interno, sí alteró la asignación de tierras y el patrón de producción agrarios. Se abrieron oportunidades antes inexistentes para los productos de mercado urbano directo y agroindustriales, que fueron cubiertas a costa de la producción para el mercado campesino y exportación".⁵¹

CUADRO 13
Crecimiento de la producción agropecuaria según tipos de mercado
(Promedios Anuales)

	1950-1959	1960-1969	1970-1970
Consumo Urbano (a)	4.0	3.9	3.0
Mercado Restringido (b)	-0.5	-1.5	-0.6
Exportación	6.5	0.3	1.8
Promedio	2.8	1.9	1.2

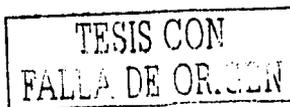
(a) Incluye maíz.

(b) Los mercados restringidos no incluyen maíz amiláceo.

Fuente: Álvarez, Elena. Op. cit. p. 48

En 1961, 33.712 haciendas, fundos capitalistas y pequeñas haciendas de terratenientes, que representaban el 3.9% del total de unidades agropecuarias, poseían el 56% de la extensión agrícola cultivable; 98,370 propiedades de explotación familiar autosuficientes, que constituían el 11.5% de las unidades agropecuarias, poseían el 3.3% de las áreas cultivables; mientras que los 719,110 minifundios, que alcanzaban a ser el 84.3% del total de unidades, controlaban el

⁵¹ Álvarez, Elena. "Política Económica y Agricultura en el Perú: 1969-1979". Instituto de Estudios Peruanos. Lima Perú. 1983.



4.2% de las áreas cultivables. Las áreas agrícolas de explotación comunal,* que sumaban 2,338, o sea el 0.3% de total de unidades, poseían el 26.5% de la extensión agrícola nacional.⁵²

Nos interesa señalar, que ese grado de concentración de la propiedad de la tierra no sufrió sino transformaciones propias de un mercado de tierras que se iba ampliando en la medida en que la estructura de la producción agrícola también sufría modificaciones y se orientaba a satisfacer la demanda tanto de un mercado urbano en expansión como de las empresas agroindustriales. A ese proceso contribuyeron los programas de Reforma Agraria y Colonización, así como algunos pocos proyectos de promoción de la producción campesina como el de Vicus, que se impulsaron en algunas de las regiones más conflictivas del país, como en los valles de la Convención y Lares, en la Sierra central, costa norte y ceja de selva, con el objetivo de neutralizar al movimiento campesino.

Ese reordenamiento rural favoreció una nueva forma de concentración de la tierra, orientada a un desarrollo intensivo de la agricultura mediante el crecimiento de la mediana propiedad; sin embargo, produjo también un fraccionamiento de las haciendas y de los minifundios. Así, entre 1960-1972 el fraccionamiento del total de las haciendas de la costa en unidades de mediana extensión creció de una tasa promedio del 10.4% al 17.9%, mientras que entre 1961 y 1972 el número de minifundios creció de 609,427 unidades de 1.7 hectáreas promedio a 1'083,775 unidades de 1.43 hectáreas⁵³.

⁵¹ Álvarez, E. Op. Cit. Pp. 48.

⁵² Matos Mar, José y Mejía José Manuel, " La Reforma Agraria en el Perú". Serie Perú Problema No. 19. Instituto de Estudios Peruanos. Lima-Perú. 1980. Pp. 27.

⁵³ Matos Mar, José, Et. al. Op cit. Pp. 52.

CUADRO 14

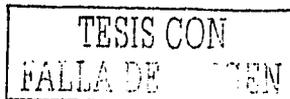
Número y extensión de las unidades agropecuarias en el Perú, según categorías económicas, 1961. (estimado).

	Número de unidades agropec	%	Total (miles has.)	Extensión %	Promedio por unidad (has.)
Haciendas	10.462	1.2	13.995	52.3	1.338.1
Fundos capitalistas y pequeñas haciendas terratenientes	23.250	2.7	1.006	3.7	42.3
Unidades de explotación familiar					
- Autoconsumo	93.370	11.5	876	3.3	8.9
- Minifundio	719.110	84.3	1.124	4.2	1.6
Áreas de explotación comunal	2.338	0.3	9.770	36.5	4.179.1
TOTAL	853.530	100.0	26.771	100.0	31.0

* Las unidades comunales se ubican en la sierra peruana, se dedican mayormente al cultivo de temporal a la crianza de ganado vacuno criollo y a la de auquénidos, se encuentran generalmente por encima de los 2.500 metros de altura y poseen ingentes recursos mineros y pastos naturales

Fuente: CIDA SINAMOS (Dirección de Organizaciones rurales). I Censo Nacional Agropecuario. Cuadro Elaborado por Matos Mar, J. y Mejía Op. cit. p. 29

En ese contexto, el desarrollo de las ciudades serranas siguió articulado a su especialización productiva previa, ellas no fueron objeto de políticas encaminadas a su transformación industrial; las más importantes, Arequipa, Cuzco, Puno, Huancayo y Cajamarca, no eran sino centros de acopio de la producción agropecuaria y, con excepción de la manufactura textil arequipeña, las tres primeras continuaron su tradición comercializadora de lanas en el mercado nacional e internacional, y todas se dedicaban a la venta de productos alimenticios hacia otras partes del territorio, al abastecimiento de insumos y bienes de



consumo y a la provisión de servicios para la población urbana y rural de su entorno regional.

Con la construcción de tramos de la carretera marginal de la selva algunas ciudades como Pucallpa e Iquitos prosperaron con la explotación y procesamiento de madera y otros productos y una agricultura de alimentos (café, té, arroz, frutales) que lograba un relativo acceso a los mercados urbanos e internacionales. Todas esas ciudades, así como las de la costa, Piura, Trujillo, Chiclayo e Ica, crecieron y se desarrollaron vinculadas a la producción agrícola de su entorno y al procesamiento de alguno de esos productos, no habiendo en ellas un importante proceso de diversificación industrial; eso sí, las ciudades de Trujillo y Arequipa mantenían el sello aristocrático respectivo, de los hacendados azucareros y algodoneros y de los comerciantes de lanas, industriales textiles y gamonales.

En términos políticos, se fue produciendo un resquebrajamiento de la forma de dominación tradicional debido al deterioro de las condiciones de reproducción económica y social en gran parte de las regiones de la sierra, a la salida de los estratos altos y medios de las provincias que vendieron o traspasaron sus propiedades atemorizados por los movimientos campesinos ocurridos en la década del 60 y que los volcó establecerse en las principales ciudades, y a la extensa migración campesina en busca de alternativas de empleo en las ciudades, de trabajo fijo o eventual en las minas, en las grandes haciendas y unidades medianas de producción de la costa y unas pocas de la sierra. En el mediano y largo plazo, los efectos de esa dinámica social abonarán a una mayor difusión del mestizaje y a lo que en el Perú se ha dado por denominar como proceso de "cholificación" del país.

TESIS CON
REALIDAD DE PERÚ

2. LAS PUERTAS ENTREABIERTAS A LA DEMOCRACIA: REFORMISMO Y REPRESIÓN

En las elecciones presidenciales de 1963, el Perú se abrió finalmente a la posibilidad de una competencia política más abierta a la sociedad. No habían desaparecido los viejos actores sociales como la oligarquía agro exportadora, ni el ejército renovando sus funciones políticas al apoyar la candidatura de Fernando Belaúnde Terry, pero se habían fortalecido otros. No solamente el APRA, que una vez más realizaba un viraje "práctico" para aliarse con las fuerzas más conservadoras del odriismo y la oligarquía y desarrollar una función opositora en el Parlamento a todo proyecto de reforma impulsado por el belaudismo, sino una derecha ilustrada y más democrata aglutinada en el Partido Acción Popular, fundado poco antes de la campaña presidencial de Belaúnde, y en el Demócrata Cristiano.

Acción Popular y la Democracia Cristiana removieron la adhesión de sectores de la clase media y popular que buscaban un proyecto político alternativo a los apristas y al de sectores más radicalizados de la sociedad, constituyéndose en un referente político de organización partidaria más moderno y de mayor convocatoria social que los coyunturales partidos creados por la oligarquía en etapas precedentes. El APRA era un contendiente formidable, pero a estas alturas de la historia peruana se habían desdibujado sus planteamientos reformistas-nacionalistas originales para dar paso a alianzas espurias con las fuerzas más conservadoras de la oligarquía, el odriismo y Prado, las cuales le restaron legitimidad y presencia política en buena parte de la sociedad civil

Con el belaudismo, llegaba el segundo momento de las clases medias, pero como antes, en 1945, ahora ellas tampoco contaban con la fuerza política como para convocar la adhesión de la burguesía industrial como para emprender la transformación de la situación económica vigente y finalmente romper sus ataduras con la rémora oligárquica, a efecto de consolidar una economía moderna que sienta las bases para un desarrollo incluyente de las regiones y de los

hombres del territorio nacional, y que busque, asimismo, encaminar al país hacia una consolidación de la experiencia democrática a través del fortalecimiento de las instituciones del estado y de las instancias de mediación política y social.

En dirección distinta, otros sectores de la sociedad se habían orientado a la intensa búsqueda de opciones políticas diferentes que dieran respuesta a los problemas que aquejaban al país. En el ámbito urbano, se radicalizaron sectores estudiantiles universitarios y se produjeron desprendimientos en el APRA y en el Partido Comunista; en el primero, por la crítica de su militancia joven respecto al apoyo brindado a Prado con cuyo gobierno se inauguró lo que los políticos denominaron "el régimen de convivencia", y luego, por su alianza con su antiguo y feroz perseguidor, el dictador Odría; en el segundo, debido a que algunos sectores de este partido consideraban como una traición a sus planteamientos revolucionarios originales, -a partir de la Segunda Guerra y contra el nazismo y fascismo- al haber asumido la opción de colaborar con sectores de la burguesía nacional atenuando así la lucha contra el imperialismo.

También las movilizaciones obreras y populares se hicieron más frecuentes: unos, por el restablecimiento y ampliación de sus derechos de asociación sindical y sus reivindicaciones laborales; los otros, cada vez más numerosos, renovando las modalidades de invasión de terrenos en las afueras de las ciudades y reclamando la legalización urbana de esos predios, la instalación de servicios, etc.

Se consolidaron, pues, los desprendimientos del APRA y del Partido Comunista en grupos guerrilleros e influidos por la Revolución cubana, y se produjeron formas iniciales de organización de jóvenes simpatizantes del trotskismo y de la Revolución China en partidos políticos de izquierda como Vanguardia Revolucionaria, Patria Roja y otros. Empezaron a tener cabida el activismo político y el debate abierto de los estudiantes universitarios e intelectuales; se movilizaron y organizaron Juntas Vecinales en las viejas y nuevas barriadas y se fortalecieron las tendencias centralizadoras de las organizaciones campesinas en la Confederación Nacional Campesina, controlada por los aristas,

y la Confederación Campesina del Perú, influida especialmente por Vanguardia Revolucionaria, que iba aglutinando a las ligas agrarias y a los sindicatos organizados al calor de los movimientos campesinos desarrollados en el periodo.

Otros actores también contribuirían a la transformación del panorama político y social del país: los trabajadores, entre los que los choferes de transporte público jugaron un papel especial, pugnando por la apertura de espacios democráticos de expresión y erosionando las estructuras políticas excluyentes. El proletariado minero metalúrgico y de otras ramas de la industria, los trabajadores del sector comercial y los servicios, profundizaron sus movilizaciones, huelgas, paros de protestas y marchas de sacrificio, multiplicaron la organización de nuevos gremios y lucharon con denuedo por el reconocimiento legal de sus sindicatos y de la Confederación General de Trabajadores del Perú, influida por el Partido Comunista, así como de la Confederación de Trabajadores del Perú con larga relación con el APRA y en la que estaban afiliados básicamente los trabajadores de la industria azucarera y textil.

En el ámbito rural los problemas también se habían acumulado y presentaban gran complejidad. Ya para entonces el Perú era un importador neto de alimentos, la crisis agraria se hacía sentir en todo el territorio, como también se hacía sentir lo que Matos Mar llamaría el "primer desborde popular", es decir, las grandes migraciones y los movimientos campesinos impulsados, entre las décadas del 50 y 60. Los campesinos, especialmente la población indígena de la sierra, se movilizaron en lucha por la restitución de sus tierras comunales, contra la explotación ejercida por los hacendados y gamonales y por una política agraria que atendiera los problemas acumulados en el campo. Esta dinámica social tuvo su expresión más radical en la toma de tierras y en las invasiones campesinas en casi toda la sierra del país, siendo violentamente reprimidas por el ejército.

Aunque los movimientos campesinos no lograron articularse en una organización y dirección de carácter nacional, sí tuvieron la suficiente fuerza como para convocar a amplios sectores de la población campesina, especialmente la indígena de la sierra, y promover nuevas formas de organización a nivel regional

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

como las Ligas Campesinas y los sindicatos en los Valles de la Convención y Lares en el Cuzco. A nivel nacional tomaba fuerza la organización de la Confederación Campesina del Perú influida por sectores de la izquierda marxista del momento, especialmente Vanguardia Revolucionaria..

El impacto de esos movimientos campesinos en el mediano y largo plazo puede analizarse en dos direcciones. En primer término, un efecto signado por la reversión de la tendencia de los gamonales de hacer más productivas sus propiedades mediante un renovado proceso de concentración de la propiedad de la tierra con el consecuente sometimiento de la población indígena de las comunidades como mano de obra disponible, iniciándose un proceso irreversible marcado por la lenta descomposición del gamonalismo como forma de dominio económico y social en amplias regiones de la sierra con la división de las haciendas entre los familiares y en unidades más limitadas, y la difusión de la mediana y pequeña propiedad campesina en coexistencia con la propiedad y uso comunal de las tierras, extendiéndose la economía campesina.

En segundo lugar, obligó tanto al gobierno de Prado como a los que le sucedieron, a la Junta Militar que gobernó el país entre 1962-1963 y al de Belaúnde, a realizar un reparto de tierras allí donde los conflictos tuvieron mayor fuerza y capacidad de convocatoria. Represión y reformas agrarias parciales y conservadoras, además del impulso a la colonización de la selva y la construcción de represas y sistemas de riego, constituyeron los rasgos centrales de la política agraria llevada a cabo por esos regimenes y el gobierno de Belaúnde.

En este escenario, en que las demandas sociales afloraban acumuladas por su contención brutal y autoritaria previa, el descontento rural y las movilizaciones campesinas ejercieron un impacto importante en las ciudades; a inicios de la década del 60 muchos jóvenes radicalizados se volcaron a la lucha guerrillera en distintas regiones de la sierra central y selva sur oriental del país, y otros, como Hugo Blanco, combinaron esa forma de lucha con las acciones organizativas y movilización de los campesinos en el Valle de la Convención y Lares en el Cuzco.

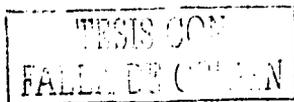
TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

A pesar de que estos acontecimientos se suscitaron en el mismo periodo, es importante señalar que los movimientos campesinos y los grupos guerrilleros desarrollaron sus acciones de manera diferenciada e independiente; los problemas analizados por los grupos guerrilleros y sus vertientes ideológicas fueron ajenos al mundo campesino y al mundo indígena, pero ambos enfrentaron a una represión encarnizada comandada por un ejército en acelerado proceso de modernización y totalmente adscrito a la doctrina de seguridad nacional suscrita en la OEA y en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), impulsado por Estados Unidos en su confrontación con la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Mediante estas acciones contrainsurgentes el ejército aplastó a los núcleos guerrilleros y quebró al movimiento campesino, el saldo fue la persecución y encarcelamiento de los principales líderes y dirigentes de mando medio y el asesinato de un número no determinado de campesinos.

Los espacios nacionales se hicieron más complejos y extensos como producto de una acelerada migración interna: la presión de una clase media más diferenciada y de un mundo popular diverso se hacían sentir en las exigencias de inclusión en la educación, el empleo, el acceso a los servicios básicos, etc., sobrepasando la limitada capacidad de un estado aún atado a los intereses y a las buenas maneras oligárquicas, y a una emoción social conservadora que no tenía capacidad de impulsar las reformas que el país requería.

En ese contexto de eclosión social, se producía una significativa democratización de la sociedad y de las instituciones del país, y es posible identificar, también, otras acciones de corte reformista que diferencian al belaudismo de los regímenes anteriores. La campaña desplegada por el Presidente Belaúnde a nivel nacional, encaminada a mostrar al país la riqueza de los recursos y la cultura de lo que él llamó "el Perú profundo", convocando la necesidad de integración nacional a la dinámica del desarrollo.

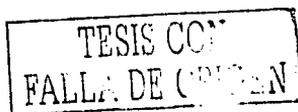
"El Perú como doctrina" se constituiría en el fundamento nacionalista del partido gobernante Acción Popular, y se plasmaría en la ejecución de proyectos de construcción de carreteras desde la selva y sierra hacia distintas regiones de la



costa, de represas y sistemas de riego de mediana escala favoreciendo a nuevos y pequeños agricultores de algodón, arroz, frutas y otros alimentos, en la puesta en marcha de un Programa de Reforma Agraria en las zonas de mayor convulsión campesina y la creación de un Sistema Nacional de Cooperación Popular, en apoyo a las comunidades indígenas para la ejecución de obras comunales de pequeña dimensión e impacto como carreteras, postas médicas, escuelas y algunos servicios públicos mediante el trabajo comunal.

Adicionalmente, contingentes de estudiantes universitarios de las clases medias fueron reclutados para trabajar en los periodos vacacionales en las comunidades más apartadas del país, logrando con ello la canalización de sus inquietudes y aspiraciones de contribuir al cambio mediante su participación en un programa especialmente creado de Cooperación Popular Universitaria. Sociólogos, economistas, antropólogos, trabajadores sociales y un sinnúmero de ingenieros y profesionales agrícolas se volcaron al campo para descubrir el Perú; las Ciencias Sociales iniciaron su auge en las universidades y la Planificación nacional y sectorial se convirtieron en instrumento referencia de las políticas gubernamentales. El estado mismo ampliaba el ámbito de su presencia institucional en la sociedad y se convertía, en parte, en un canal de realización de las expectativas de empleo y de participación social.

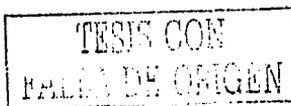
A pesar de que la política económica reformista implementada por el belaudismo se afirmó más en la retórica que sobre una realidad en la que se acentuaban los desequilibrios sociales largamente acumulados, podemos afirmar que este gobierno mostró una marcada diferencia con los regimenes anteriores debido a los procesos de apertura democrática y a un grado de institucionalización de la vida política y económica del país no antes ocurrido, aunque la emoción por el "Perú profundo" resultaba una prolongación recreada de las políticas agrarias previas y de un sistema asistencial más renovado que promovía la participación comunal, despertando adhesiones políticas de los estratos medios urbanos pero no la sujeción o incondicionalidad del mundo campesino. Ni éste ni el país en su conjunto encontraron en el gobierno belaudista posibilidad reales de solución a sus problemas en el largo plazo.



La represión a los movimientos campesinos y la derrota de los grupos guerrilleros, combinadas con un limitado reparto de tierra acotado a los lugares más conflictivos, la puesta en marcha del Programa Interministerial de Cooperación Popular que se constituyó en una nueva fuente de empleo para profesionales y estudiantes de las clases medias, la grandilocuencia del discurso reformista que tenía más relación con una admiración romántica del país y no con los hombres que poblaban los Andes, expresaban el poco alcance de las reformas y más bien eran el parapeto de una burguesía aristocrática ilustrada que, aunque había cambiado y era más demócrata, estaba aún atada a referentes señoriales que suscribían un desarrollo nacional sustentado en los avances venidos de fuera y no en las potencialidades económicas y sociales que el país debía destrabar internamente. Las "reformas" promovidas por el belaundismo tuvieron, pues, en la palabra una dimensión escandalosamente mayor a los cambios que realmente se verificaron en el país.

Un hecho importante que es necesario destacar, es la reivindicación planteada por amplios sectores de la población respecto a la nacionalización de los yacimientos petroleros de la Brea y Pariñas y que el gobierno de Belaúnde había recogido como parte de su programa de reformas. En el curso de primer semestre de 1968, las negociaciones del régimen con la empresa norteamericana International Petroleum Company dieron como resultado un escandaloso contrato que dejaba gran parte de los beneficios a futuro a la mencionada empresa. La denuncia pública hecha en un canal de televisión por funcionarios de la empresa petrolera estatal, creó un ambiente de rechazo y agitación social en grandes sectores de la población.

El golpe militar de 1968 (octubre) se inscribió, pues, en este proceso; en el aceleramiento de las contradicciones provocadas por el intento de desarrollar un proyecto de acumulación que trataba de industrializar el país mediante la sustitución de importaciones, con una política altamente conciliadora y abierta al capital internacional, sin transformar las bases de una estructura económica organizada con el sello oligárquico y los remanentes de un dominio económico y político de carácter tradicional.



La crisis política que de ello resulta es reflejo de la precaria base material de la burguesía industrial para impulsar un proyecto de largo alcance, base que la subordinaba fuertemente al capital extranjero sin que pudiera construir los fundamentos esenciales para alcanzar ciertos niveles de autonomía relativa.

Aunque el Estado intentó asumir un proyecto reformista e industrializador, ampliando sus funciones y extendiendo sus aparatos. Los límites a tal impulso estuvieron a la luz desde el inicio del régimen de Belaúnde Terry, dado el agravamiento de las condiciones internas, la falta de solución a los problemas acumulados, aunadas a las nuevas exigencias que el capital iba imponiendo a nivel mundial. Todo ello acrecentaría la crítica interna y marcaría la agonía de un proyecto reformista que renacerá con otras características con el golpe militar dirigido por Velasco Alvarado.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

CAPÍTULO III.

DEL REFORMISMO RADICAL A LA FRUSTRACIÓN Y EL COLAPSO

1968-1980

TESIS CON
FALLA DE CRÉDITO

CAPÍTULO III.

DEL REFORMISMO RADICAL A LA FRUSTRACIÓN Y EL COLAPSO

1968-1980

Son contadas las oportunidades en que los procesos de cambio en una economía y sociedad permiten identificar en el corto plazo sus características y sus efectos. Por lo general ello ha sucedido en casos de marcadas situaciones de crisis, frente a las que se han implementado programas económicos específicos y cuyos resultados se han podido evaluar rápidamente. En los dos quinquenios de la década del 70 el Perú experimentó marcadamente dos opciones distintas de política económica, una reformista y signada por un nacionalismo de corte radical y, otra, de desmontaje de esas medidas previas y aplicación de políticas de reestructuración y ajuste de la economía encaminadas a enfrentar los embates de la crisis interna y mundial mediante la adopción de medidas de corte neoliberal. En esa medida, ambas experiencias constituyen un claro ejemplo de relativo éxito y de frustración que pueden ser evaluados en el corto plazo.

En este acierto, en este capítulo pretendemos plantear la naturaleza y los efectos de la política económica y social puesta en marcha por los gobiernos militares instaurados en el Perú, al finalizar la década de 1960, mediante un golpe de estado (octubre de 1968.). El primero, encabezado por el General Juan Velasco Alvarado, al que se ha dado por llamar gobierno de la "primera fase" (1968-1975), y, el de la "segunda fase" liderada por el General Francisco Morales Bermúdez, (1975-1980.).

Con ese propósito, exponemos en el primer apartado los cambios estructurales más importantes ocurridos durante el gobierno de Velasco Alvarado, el cual se caracterizó por la mayor nitidez con que fue impulsado el modelo de desarrollo de industrialización sustitutiva, logrando implementar una política de corte nacionalista que limitó la apertura irrestricta de la economía a la dinámica del

capital internacional, al regular su presencia en la economía y desplazarlo del control de sectores importantes del aparato productivo, aunque para ello tendría que acudir a fuentes de financiamiento internacional. Sin embargo, por primera vez aparecía en el país un gobierno que, al estilo del populismo experimentado por algunos pocos países latinoamericanos, se propuso delinear y dirigir las políticas de desarrollo de mediano plazo, a la vez que intentaba consolidar su función promotora e intervención directa en la economía, combinando esas funciones con una política laboral que favorecía una relativa redistribución del ingreso a la par que buscaba el control corporativo de las organizaciones políticas y sociales.

Seguidamente, trataremos los aspectos generales de la crisis del modelo de desarrollo tardíamente adoptado, el mismo que en el tiempo coincidía con la crisis del capitalismo en 1974-1975; finalmente, abordaremos el programa neoliberal de ajuste y estabilización adoptado a partir de 1975 por el gobierno militar de la "segunda fase" y los efectos que se hicieron sentir en la economía y la sociedad.

En este contexto, nos interesa especialmente desbrozar algunos acontecimientos históricos que abonaron o retrasaron el desarrollo democrático y la institucionalidad política del país hasta entonces construidos; si los procesos ocurridos durante los dos gobiernos militares de la década del setenta coadyuvaron al fortalecimiento del aún debilitado sistema de partidos, si ellos propiciaron o por el contrario le restaron a la sociedad capacidad de construcción de consensos y niveles de tolerancia a pesar de las diferencias. En esa perspectiva, trataremos de analizar los factores que limitaron la acumulación de una experiencia política democrática a nivel social, y la forma en que la sociedad y los actores sociales vieron socavada su capacidad de contar con instancias propias de expresión y de intermediación de sus demandas y aspiraciones políticas y sociales.

Las líneas de análisis que proponemos son: En primer término, que la crisis en el Perú resultó del doble juego causado, de un lado, por seculares

problemas y contradicciones de una economía que se había desarrollado de forma altamente dependiente no sólo en el ámbito tecnológico y financiero, sino en lo que a apertura irrestricta al capital extranjero se refiere y al mayoritario control que éste ejercía en los sectores más importantes de la economía; de otro, por el intento de acelerar la industrialización de país y consolidar un modelo de desarrollo y acumulación a partir de una aplastante intervención del estado en la economía, mediante la regulación de las inversiones extranjeras y nacionales, sin que con ello se modificara el modelo previo de un país abastecedor de materias primas ni el alto grado de endeudamiento internacional para el financiamiento de los proyectos estatales en el sector agrícola y minero de exportación tradicional.

En una perspectiva de largo plazo, el gobierno militar de la primera fase no logró impulsar un programa orientado a ampliar y consolidar una producción industrial con capacidad exportadora y, aunque la Reforma Agraria significó una coyuntural recuperación agroalimentaria, el amplio despliegue de recursos económicos y humanos no devino en una transformación sustantiva en la producción de alimentos. La segunda fase, no representa sino el desmontaje de las reformas, una suerte de vuelta hacia los periodos previos al golpe del 68, y la adopción de las políticas neoliberales de ajuste y estabilización en el contexto de graves problemas económicos y sociales acumulados históricamente y también generados por el propio modelo implementado entre 1968-1975.

Una segunda línea analítica, se orienta a explicar que la estrepitosa caída del poder oligárquico devino para los militares en la necesidad de reorganizar todo proceso institucional y democrático construido previamente en el país. Nuevamente los militares se erigirán en actores de un ordenamiento a su medida, al deslegitimar en el discurso político y mediante la adopción de políticas orientadas al socavamiento de la institucionalidad democrática tan costosamente forjada. El problema de fondo es que se promovió una ruptura del sistema institucional, por ello mismo, no se trataba de si él había sido arrancado a las fracciones económicas y políticas dominantes, o que sectores ilustrados de ella contribuyeron a su gestación, o que a lo largo del siglo XX la sociedad civil y

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

distintos actores sociales le habían dado impulso fundamental con sus luchas y movilizaciones.

No desconocemos que el gobierno de la primera fase fue quizás el único que hasta el momento se había erigido removiendo los cimientos de una sociedad y una nación altamente heterogénea, excluyente y racista, al destrabar muchos de sus elementos constitutivos y el sentido de pertenencia nacional; sin embargo, nuestro interés se orienta a cuestionar los alcances y grandes limitaciones del modelo de democracia propuesto, para lo cual nos remitiremos al pasado inmediato que a pesar de sus grandes limitaciones había coadyuvado a forjar un juego partidario y algunas formas de comportamiento democrático.

Nuestro análisis tratará de abordar el impacto que tuvo la clausura del Congreso y del poder electoral por los gobiernos militares, así como la tendencia de restar capacidad de funcionamiento al sistema político de representación partidaria, además de la clara intención de lograr el resquebrajamiento de las instancias de intermediación social, como las centrales obreras, sindicatos, organizaciones campesinas y vecinales que con dificultad habían ido madurando desde mediados de la década del cincuenta, promoviendo su sustitución por organizaciones impulsadas desde el Estado y afines a la políticas implementadas mediante métodos de descalificación o cooptación para finalmente lograr su control corporativo.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

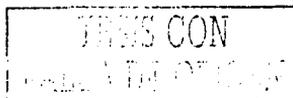
1. EL REFORMISMO DEL GOBIERNO MILITAR DE LA "PRIMERA FASE". LA DEMOCRACIA ACOTADA: 1968-1975⁵⁴.

La recesión que afectó a la economía mundial entre 1967-1968, preludio de la prolongada y profunda crisis que estallaría en 1974, el fracaso de la Alianza para el Progreso como vía pacífica para impulsar el desarrollo capitalista de América Latina, los graves problemas estructurales que resultaron de la forma como se adoptó en el Perú un modelo de desarrollo basado en la industrialización sustitutiva, la apertura irrestricta al capital internacional y, entre otros acontecimientos, los movimientos sociales tanto en el campo como en el ámbito urbano, enmarcaron el periodo que se inauguró con el golpe de estado dirigido por las Fuerzas Armadas, en octubre de 1968.

El proceso de reformas iniciado por los militares diferiría de los anteriores no sólo por que las medidas económicas, sociales y políticas adoptadas rebasaron las demandas reivindicativas que hasta el momento formulaban los sectores sociales más movilizadas y por gran parte de la izquierda, sino por que en este periodo se inauguró una fase de gran intervención del estado en la economía, aunque con ello sólo se profundizaría el modelo sustitutivo de importaciones previo y se mantendría el carácter del país como exportador de materias primas. Sin embargo, el estado asumió el control de diversos sectores productivos que llegarían a constituirse en la base del desarrollo nacional propuesto y en un eje importante de la acumulación.

En ese contexto, las medidas implementadas por los militares alteraron la correlación de fuerzas entre las distintas fracciones de las clases dominantes, promovieron la renovación de alguna de ellas respecto al papel que debían asumir en el desarrollo económico y el ámbito propio de innovación de la gestión empresarial.

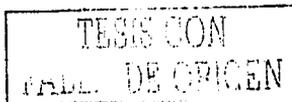
⁵⁴ Parte de la información consignada en este apartado está contenido en el Reporte de Investigación presentado a la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, Departamento de Sociología, México, en 1988: Madueño Paulette, Ruth. "Un reformismo renovado: el gobierno militar de la primera fase, Perú 1968-1975".



El ascenso de las Fuerzas Armadas, como institución, al ejercicio del poder político tiene precedentes en los golpes de estado que han atravesado la historia del país. En general, y como afirmamos anteriormente, ellas se afirmaron en el poder comandado por individuos o grupos, y ejerciendo una función política caracterizada por la sustitución de la sociedad en el ejercicio político de sus deberes y derechos ciudadanos. El ejército, no sólo ha sido una de las instituciones de mayor fuerza y desarrollo en el país sino que con el control autoritario, que en no pocas ocasiones ha ejercido sobre el estado, ha jugado un papel dirimente en claro apoyo de las fracciones dominantes socavando con ello el desarrollo de las instituciones políticas y democráticas.

Con mayor intensidad esos acontecimientos coadyuvaron a minar los esfuerzos organizativos de las instancias de mediación política y social de los sectores medios y populares. El uso de la fuerza y de las armas por los soldados se constituiría así en el medio más eficaz para la eliminación de opositores y la represión de los movimientos sociales. En este sentido, resulta constatable que la consolidación de la ciudadanía haya sido en el Perú el gran fantasma de la oligarquía; el racismo y la exclusión, así como la fuerza de los movimientos sociales, las protestas y rebeliones, han estado detrás de los golpes militares, porque esa ciudadanía se ha ido erigiendo a pesar de los escollos y sus acciones han significado y contribuido a la lenta maduración de la base institucional democrática alcanzada por la sociedad al promediar la década del 50 y 60 del siglo XX.

Con nuevos métodos, el golpe de estado de 1968 constituyó una recreación del papel de los militares en la escena política; sin embargo, esta vez su actuación aparecería inspirada en una visión nacionalista de los problemas que aquejaban al país y en importantes modificaciones de la doctrina de Seguridad Nacional que había prevalecido en América Latina hasta primeros años de la década del 60. En general, este cambio puede vincularse con el debilitamiento de la bipolaridad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética por efecto del surgimiento de otras potencias de nivel avanzado e intermedio en el plano internacional (Comunidad

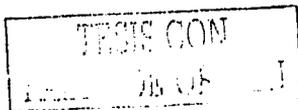


Económica Europea, Japón), y la relativa pérdida de hegemonía de los Estados Unidos en el ámbito de la competitividad internacional.

Como se ha analizado anteriormente, en el Perú los sectores populares se habían organizado impulsando fuertes movilizaciones en busca de solución a sus demandas, en el escenario urbano el descontento y las movilizaciones obreras y populares eran cada vez más intensas; en algunas regiones de la Sierra y Ceja de Selva, se había desarrollado un poderoso movimiento campesino que luchó por la recuperación de sus tierras usurpadas por hacendados, gamonales y empresas mineras de capital nacional e internacional, en parte de esas regiones, también incursionaron grupos guerrilleros influidos por la experiencia de la revolución cubana.

Las Fuerzas Armadas, que a finales de la década del 50 y gran parte de la del 60 habían reprimido a esos movimientos campesinos y exterminado a las guerrillas, entraron en contacto con una realidad aplastante, especialmente en las comunidades indígenas y tomaron para sí la tarea de diagnosticar los problemas que durante las operaciones contrainsurgentes habían logrado percibir en amplias regiones del país. Cabe señalar que en el trasfondo de estas constataciones de la realidad social se pensaba en la escasa capacidad de respuesta de la población altamente marginada, a una eventual confrontación con Chile por los problemas fronterizos que aún quedaban pendientes. El problema pasaba pues por la redefinición de la Seguridad Nacional en términos de avance y desarrollo interno para garantizarla.

Con la fundación del Centro de Altos Estudios Militares, en 1962, ese diagnóstico pasó a fundamentar las estrategias de los militares respecto a los problemas del país. En este centro de estudios se habían logrado aglutinar altos mandos militares y muchos de los principales responsables de reprimir a los movimientos sociales y a las guerrillas que emergieron en el Perú entre 1956 y 1965. Es allí donde se redefinieron los problemas de Seguridad Nacional, para ser concebida por los militares como un desafío que pasaba por la necesidad de



construir condiciones económicas y sociales internas que asegurasen la paz social y la respuesta a los desafíos internacionales.

Durante el golpe de octubre de 1968 y el derrocamiento del régimen de Belaúnde Terry, los militares expusieron sus planteamientos en un manifiesto, una declaración de principios que sustentó su programa de gobierno:

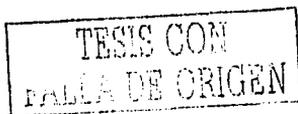
"Poderosas fuerzas económicas, nacionales y extranjeras en complicidad con peruanos indignos detentan el poder político y económico inspirados en lucrar desenfrenadamente, frustrando el anhelo popular en orden a la realización de las reformas estructurales..."

"Han quedado comprometidos nuestros recursos en condiciones de notoria desventaja para el país. lo que determina su dependencia de poderes económicos lesionando nuestra soberanía... y postergando indefinidamente toda transformación que haga posible superar nuestro estado de subdesarrollo".

"La FF.AA., ha observado... la crisis que en lo político, económico y social ha soportado el país... La culminación de desaciertos ha tenido lugar en el uso incontrolado y doloso de inconstitucionales facultades extraordinarias concedidas al Ejecutivo, así como la seudo solución entreguista al problema de la Brea y Pariñas... Es por eso que la Fuerza Armada cumpliendo con su misión constitucional defiende una de sus fuentes naturales de riqueza que al ser peruana debe ser para los peruanos".

"La acción del gobierno... se inspira en la necesidad de transformar la estructura del Estado... Transformar las estructuras sociales, económicas y culturales, mantener una definida actitud nacionalista, una clara posición independiente..."⁵⁵

⁵⁵ "Perú 1968-1973: Cronología Política". DESCO., 1974. Lima Perú. Pp:20.

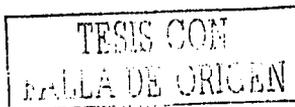


Iniciaron así, un proceso que trató de articular los requerimientos de transformación estructural de la economía nacional con las exigencias de un mercado mundial cada vez más competitivo y en el que el Perú participaba de manera débil y segmentada.

En buena medida la acción del gobierno de las Fuerzas Armadas se orientaría a realizar aquellas medidas que la propia burguesía, los otros sectores dominantes de la sociedad y las organizaciones políticas de estratos medios y altos, no habían logrado impulsar a su tiempo en el país. Las pugnas, las mutuas transacciones y acuerdos políticos entre los industriales y una oligarquía que conservaba sus intereses económicos intocados y ejercía aún un poder político declinante, explican la ausencia de solución de los problemas estructurales que la acumulación y reproducción del capital exigían en el largo plazo: el desarrollo y expansión del mercado interno, la ampliación, diversificación y descentralización del aparato productivo, la descentralización política y, entre otros, la construcción de una infraestructura básica que comunicara a las regiones de la sierra y selva con la costa del país y al interior de ellas mismas.

Con el gobierno militar, nuevamente las fuerzas armadas aparecían en el escenario sustituyendo políticamente a los actores sociales que desde distintos espacios ideológicos y sociales estaban en vías de consolidar o construir sus organizaciones políticas y sociales. A pesar de ello, con este régimen cambió sustancialmente la correlación de fuerzas entre las fracciones dominantes; las reformas iniciadas a partir del golpe significaron "la erradicación final de las bases de acumulación semicolonial que estaban en plena retirada. Se liquidaron las bases económicas y políticas de los grupos de la burguesía terrateniente y de... los terratenientes señoriales. Era esa alianza entre ambos grupos de terratenientes la que sostenía, principalmente, el modelo oligárquico de dominación política en el Perú. Asimismo, más lentamente y con otras modalidades, fueron erradicados los restos de los enclaves."⁵⁶

⁵⁶ QUIJANO, Anibal. "Imperialismo y lucha de clases en América Latina" en Movimiento obrero y acción política. Ed. ERA. Serie popular. México 1975. Pp 187.

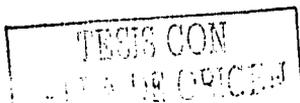


Tales medidas tendieron a expandir y profundizar las relaciones capitalistas a nivel nacional, propiciaron una mayor articulación entre sectores de la producción minera e industrial, entre ramas afines y complementarias dentro de este sector, entre en campo y la ciudad y las regiones del país. En el campo, al expropiar los latifundios transformaron las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores estables de las haciendas exportadoras de la costa y de la sierra, como la de los campesinos productores de alimentos de las comunidades indígenas, al forzar su organización como miembros de las cooperativas agrarias y sociedades agrícolas de interés social, creadas durante la fase más intensa de implementación de la Reforma Agraria.

El régimen trató, asimismo, de resolver muchas de las demandas obreras, campesinas y populares contenidas largamente, a la vez que propició la institucionalización de sus luchas y reivindicaciones mediante la legalización y control corporativo de sus organizaciones por el aparato de Estado.

Veamos algunas de las medidas más importantes impulsadas en esta primera fase del gobierno militar:

- El control de los recursos naturales disponibles. De acuerdo a distintos pronunciamientos, pero, especialmente, en la fundamentación del Decreto Ley respectivo, los militares plantearon que la presencia de los inversionistas extranjeros que operaban en los grandes yacimientos mineros había sido no sólo insuficiente, pues sus inversiones netas habían alcanzado solamente la cifra de 28.1 millones de dólares entre 1963-1967, sino que se había constituido en un obstáculo para el desarrollo dada la enorme remisión de utilidades a sus empresas matrices en el exterior. La nueva legislación, al obligar a la explotación de los yacimientos en un plazo breve, favoreció la reversión de la mayoría de los grandes centros mineros al Estado: Cerro Verde, Cuajone, Michiquillay, Quellaveco, Tintaya y otros. La disponibilidad de los yacimientos más importantes dio al poder público la posibilidad de consolidar su presencia en el sector y crear condiciones para el desarrollo de una mayor capacidad exportadora.



CUADRO NO. 15

Producción y Exportaciones en el Sector Minero. 1968 – 1974
(Millones de soles)

Minería	1968	1974
VBP (mill. de soles)	17. 444	33. 372
Consumo Interno	327	601
Exportación	17. 174	32. 771

Fuente: S. N. M. P. Perú Minero 1974 Lima Perú. 1975.
Elaboración GEPE – DESCO

La política minera comprendió además, la estatización en 1974-1975 de dos de las tres empresas más importantes que ejercían el control de casi la totalidad del sector: 76.2%. Hasta 1969 el capital extranjero norteamericano controlaba el 84.2% del valor bruto de la producción, seis años más tarde, la estructura de la propiedad había sido cambiada sustancialmente por el gobierno militar.

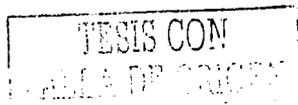
CUADRO No. 16

Porcentaje del VBP en el sector minero por régimen de propiedad
1969 – 1975

Origen del capital	1969	1973	1974	1975
Capital privado extranjero	84.2	82.3	45.4	37.1
Estados Unidos	80.3	77.0	40.4	31.8
Francia	1.8	2.0	2.4	2.4
Japón	2.1	3.3	2.9	2.9
Capital estatal	-----	-----	35.6	43.9
Capital privado nacional	15.8	17.7	19.0	19.0

Fuente: Brundenius C Chauca P "Concentración de la producción y estructura de la Propiedad" OIP – INP Lima - Perú 1976 (Citado por Cabieses y Otero. Pp. 64).

En ese contexto, el estado impulsó la creación de un aparato institucional de corte empresarial tendiente a consolidar las funciones de gestión y control de este sector de la economía: Minero Perú, encargada de la producción; Minpeco, de la comercialización; Hierro Perú, de la comercialización de este mineral. Todas estas empresas se desarrollaron gracias al financiamiento estatal, pero sobre todo con préstamos

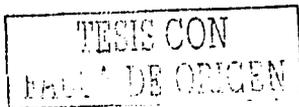


gestionados a nivel internacional, asimismo, se crearon empresas mixtas con la participación del Estado, del capital extranjero y privado nacional.

Con respecto al sector petrolero, la primera medida fue la respuesta a la reivindicación nacional de nacionalizar la empresa Brea y Pariñas controlada totalmente por la International Petroleum Company; posteriormente, se desarrolló una política económica tendiente a otorgar concesiones a diversas empresas extranjeras para la exploración y explotación de este recurso tanto en la costa como en la selva peruana; aunque el Estado asumió el control de la mayor parte de operaciones estableciendo que el 50% de las utilidades pasarían a formar parte de los recursos del gobierno.

Finalmente, en el Plan Perú de 1971-1975, se indicaba que las inversiones en dicho período alcanzarían la cifra de 1. 445 millones de dólares. Entre 1972-1974, el programa de inversiones en el sector minero ascendió a 438, 300 millones de dólares, de los cuales 253 millones correspondían a créditos contratados con diversos fuentes de financiamiento internacional.

- A fin de transformar las condiciones en las que se había desarrollado la producción agropecuaria en el país, el gobierno militar decretó en 1969 la Ley de Reforma Agraria. El fundamento de la acción gubernamental no era otro que el eliminar el peso político y económico de los hacendados y convertir a los campesinos en productores rurales, mediante la liquidación de las múltiples relaciones laborales de carácter tradicional y su conversión en socios de las Cooperativas Agrarias establecidas en la Costa y de las Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS) creadas en la Sierra.



CUADRO 17

Tierra, ganado y PEA involucrados en la reforma agraria
1980⁵⁷

	Total Nacional	% involucrado en reforma agraria
-Tierra	18 820, 300 ha	39.0
Riego	1 476, 000 ha	46.7
Secano	2 714, 000 ha	44.9
Pastos	14 135, 000 ha	37.5
-Ganado rudo*	72, 620 miles de cabezas	6.3
- PEA agrícola	2 023 500 trabajadores	18.5

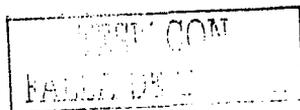
Fuente: Mejía, Jose Manuel. La Neorreforma agraria. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC). Instituto de Investigaciones Cambio y Desarrollo Lima Peru 1990 Pp 31

* Reducción a unidades de ovino

"A partir de entonces, los restos de los grupos de terratenientes señoriales constituyen una clase en extinción... los grupos de la gran burguesía agraria, antes hegemónica..., han sido totalmente eliminados y solamente se mantienen los grupos de mediana y pequeña burguesía agraria... En consecuencia, la burguesía dependiente... aparece depurada en su composición... y con... (una)... hegemonía indisputada en el núcleo industrial-urbano, asociada a la burguesía imperialista sea a través de mecanismos privados directos, o a través de la asociación entre el capital estatal y el capital monopolista internacional, que es la forma dominante de organización del capital que ahora emerge en el Perú".⁵⁸

El desmoronamiento del sector terrateniente tuvo como contrapartida el compromiso estatal de cancelar el valor de las haciendas expropiadas. Se consideraba que el dinero otorgado en efectivo y los bonos pagables en el mediano plazo, debían ser invertidos en la industria. Es indudable que estas medidas estaban encaminadas a la conversión de los terratenientes en empresarios, sin embargo, los procesos posteriores de reducción de los pagos por las dificultades económicas que enfrentaría el modelo, no

⁵⁷ A pesar de que la información aparece consignada hasta 1980, la mayor parte de la reforma agraria se implementó hasta 1975 durante el gobierno militar de la primera fase.



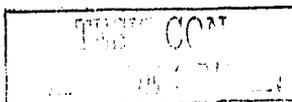
abonarán en ese sentido ni gran parte de ese sector mostrará interés por una nueva ubicación en la economía.

Las primeras en ser intervenidas militarmente fueron las haciendas azucareras y algodoneras de la Costa, luego se impulsaría un proceso distinto tendiente a la expropiación de los latifundios serranos, además de la reunificación de las tierras pertenecientes a las comunidades campesinas para su conversión en empresas asociativas. La estructura agraria transformada así, dio lugar a la creación de las grandes empresas anteriormente mencionadas y a la instalación de otras de mediana y pequeña extensión.

A efecto de controlar estas transformaciones se instaló una burocracia compuesta por asesores agrícolas y administradores de las empresas dado que, en opinión de los responsables de los organismos respectivos del estado, los nuevos socios no tenían la formación ni la experiencia como para gestionar de manera eficiente a las empresas constituidas. En esas condiciones se generaron conflictos entre los administradores y los socios, entre éstos y los campesinos no beneficiados por el proceso, (los jornaleros contratados temporalmente por las antiguas haciendas), y se desataron rivalidades entre las comunidades campesinas agrupadas bajo la modalidad de empresas asociativas.

Aunque la Reforma Agraria implementada por los militares peruanos constituía uno de los procesos más radicales de los llevados a cabo en América del Sur, para muchos de los campesinos se había instaurado una nueva administración en sustitución de los hacendados, una burocracia que suplantó y limitó el desarrollo empresarial de los beneficiarios de la Reforma Agraria, la misma que fue iniciada de manera autoritaria, desde arriba, sin la participación autónoma y activa de los campesinos y a los que, más tarde, el Estado intentaría organizar y controlar de manera corporativa.

⁴⁴ Quijano, A. Op cit. Pp: 187.

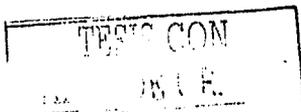


La Reforma Agraria no rescató la tradición solidaria del mundo andino. En la visión de los comuneros es fundamental el manejo del espacio productivo y su propiedad real. La reforma agraria congeló los litigios entre comunidades y entre éstas y los hacendados. La nueva organización cooperativa denominada Sociedades Agrícolas de Interés Social no resolvió los litigios, y con la Reforma Agraria no sólo delimitó los espacios sino se ignoró la lógica andina respecto al manejo de los pisos ecológicos discontinuos en contraposición al espacio limitado.

A pesar de ello, la producción agrícola en el período analizado reportó un crecimiento significativo, sobre todo en los productos de exportación, para cuya comercialización se creó una empresa estatal que asociaba a las cooperativas agrarias de la costa.

Sin embargo, el monto reducido de los créditos y del financiamiento, así como la deficiente asistencia técnica, mantuvieron latentes los problemas en el sector productor de alimentos. Al respecto, el gobierno militar continuó con el mismo patrón de desarrollo de la agricultura, de privilegiar el sector agro minero exportador tradicional como una de las fuentes de divisas a costa del productor de alimentos y del desarrollo económico y social de la gran mayoría de los campesinos del país. Aunque en el corto plazo se verificaron ligeros incrementos, en el mediano y largo plazo el agravamiento de esta situación comprometería no sólo la viabilidad del modelo sino el futuro del país.

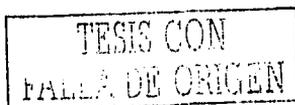
La política de subsidios al consumo implementada por el gobierno revela, en parte, los hilos de un capitalismo asistido y la falta de visión de una estrategia para construir un futuro más confiable: el 50% de los subsidios se orientaban al consumo de la gasolina y el resto al de productos alimenticios como el trigo, maíz y otros. Este tipo de subvención se iría convirtiendo en uno de los rubros del gasto público que contribuiría a los procesos inflacionarios posteriores.



- En el sector pesquero, la estatización de la industria dio lugar a la constitución de la empresa Pesca Perú, cuyas operaciones comprendieron la pesca, el procesamiento industrial de la harina y aceite de pescado, el congelamiento y la producción de conservas. En esta rama también el Estado impulsó la creación de una empresa (EPCHAP) comercializadora de aceite y harina de pescado y algodón.
- El sector industrial presentaba, en 1969, no sólo una situación de alta dependencia tecnológica sino financiera del capital internacional, "el capital extranjero controlaba el 67.4% del Valor Bruto de la Producción de las 200 mayores empresas del país, mientras que el Estado 9.9% y el capital privado el 22.7%"⁵⁹. A partir de 1970, este sector sufre una transformación sustancial.

El gobierno de Velasco Alvarado reglamentó la repartición de utilidades entre los empresarios y las recientemente creadas "Comunidades Industriales", de las que pasaban a ser miembros todos los trabajadores de las empresas. De acuerdo a cálculos realizados por las instancias de gobierno respectivas, en el lapso de ocho a quince años, las Comunidades llegarían a controlar el 50% de las acciones de las empresas. Esta medida se complementó con otra que estipulaba la presencia de un representante de los trabajadores en la gestión de la empresa como miembro del Directorio.

Muchos sindicalistas y líderes de izquierda criticaron estas medidas por considerarlas como un factor de debilitamiento la organización sindical y, sobre todo, porque su motivación básica habría sido la de construir una falsa solidaridad entre empresarios y trabajadores cancelando, así, la existencia de intereses contradictorios entre las clases sociales. Otros, sin embargo, optaron por trabajar al interior de las comunidades a efecto de tener acceso a la información financiera de las empresas y a partir de ella operar en favor de los intereses de los trabajadores y sus organizaciones



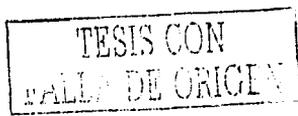
sindicales. El tema central de debate dentro y fuera de las empresas era pues el de ceder o la luchar por mantener la autonomía de los trabajadores.

El estado inició el control de algunas empresas estratégicas que no sólo generarían divisas, sino que se constituirían en el puntal para lograr el desarrollo industrial. Fueron estatizadas las industrias productores de Cemento y la Siderurgia, creándose a la vez diversas empresas estatales como Indu Perú y Sider Perú. Para 1973, el capital extranjero había bajado su participación en la generación del Valor Bruto de la Producción a 52.7%, en tanto que el Estado la incrementó a 14.9% y el capital privado a 27.5%, además de crearse un sector cooperativo que generaba el 14.3 % de ese valor.

Dentro de este conjunto de medidas, aquellas ramas que podían haber significado una alternativa estratégica para el desarrollo del país, tanto por la posibilidad de absorber y recrear procesos de innovación tecnológica como por la de construir una economía más diversificada, con mayor peso en el mercado nacional y en las exportaciones, fueron mantenidas bajo el control del capital extranjero sin el contrapeso y necesaria presencia de capitales privados nacionales. Por ejemplo, la industria metal mecánica sufrió un proceso de desnacionalización, si en 1969 el capital extranjero controlaba el 77.4 del Valor Bruto de la Producción, en 1973 dicho control se elevó a 79.4%, considerando que esta rama arrojó una de las más altas tasas de crecimiento y por su carácter estratégico contribuyó a elevar la producción en el sector industrial.

En ramas como la señalada, se profundizó el modelo de desarrollo previo. A pesar de una importante presencia del estado en la economía y de los esfuerzos por industrializarlo, el país continuaría en su calidad de proveedor de materias primas y de algunos insumos industriales, mientras que sus sectores de punta continuarían altamente articulados a la dinámica expansiva de las empresas internacionales, las cuales se constituirían junto

⁵⁴ Cabieses, H. y Otero, C. "Economía Peruana: Ensayo de interpretación". DESCO, Lima, Perú. 1977. Pp: 65.



con las empresas nacionales más fuertes, en las mayores beneficiarias del proteccionismo estatal.

El estado tuvo una mayor ingerencia en la industria básica, pasó a controlar el 20.4% en 1969 al 34.8% del Valor Bruto de la Producción en 1973; sin embargo, nuevamente, el capital extranjero controlaba el 59% de ese valor en este último año, en tanto que el capital privado nacional consignaba una presencia raquítica a pesar de que podía argumentarse la posibilidad de su alianza con el capital internacional. En este orden de cosas, es importante destacar el otorgamiento de concesiones especiales a algunas empresas extranjeras que como monopolio controlaban la industria química y farmacéutica; así, la transnacional Bayer fue eximida de la aplicación de medidas como la formación de la Comunidad Industrial.

Las políticas anteriores fueron complementadas con la constitución de empresas de propiedad social en ramas poco significativas del sector industrial. Ésta es quizás el área que dio un impulso relativo a las pequeñas y medianas empresas.

- Como mecanismos de protección y fortalecimiento de las empresas nacionales, fueron creados estímulos tributarios especiales para estimular las exportaciones no tradicionales (CERTEX), a través de los cuales se estipulaba la devolución de parte o la totalidad de los aranceles pagados por los industriales en el exterior. Esta medida, nos informa de los intentos por cultivar una vocación exportadora en la industria nacional, sin embargo, gran parte de los industriales se orientaron no a fortalecerla sino a lucrar con ella mediante la sobrefacturación y exportaciones fantasmas, generando corrupción, además de debilitar todo esfuerzo por lograr una mayor competitividad internacional y el fortalecimiento del sector industrial en el largo plazo.
- El gobierno militar de la "primera fase" constituyó además un conjunto de empresas estatales que garantizaban el control de parte de los medios de comunicación, creó Comunidades de Trabajadores en la prensa escrita, la

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

televisión, teléfonos, y en otras como la electricidad. Promovió, a su vez, la creación de una empresa especialmente encargada de la comercialización de los productos alimenticios: EPSA.

- Desarrolló, igualmente, una política financiera a partir del diseño e implementación de procesos de nacionalización de la banca, como de regulación de sus operaciones, así como la de los organismos financieros:
 - Nacionalizó el Banco Popular y creó el Banco de la Nación.
 - Reglamentó la constitución de empresas financieras mixtas, al exigir que los bancos operen con el 51% de capital estatal y 49% de capital privado nacional y extranjero.
 - Reglamentó y racionalizó el funcionamiento del Banco Central de Reserva del Perú.
 - Creó un organismo financiero encargado de promover el desarrollo de las empresas públicas: COFIDE.
 - Aunque fortaleció la Banca de Desarrollo como el Banco Agrario y el Industrial, la orientación del financiamiento privilegió el otorgamiento de créditos a la mediana y gran empresa, así como a las empresas asociativas, sin embargo, estas entidades no se constituyeron en un factor de promoción de la pequeña y micro empresa.

Uno de los aspectos esenciales del manejo de los recursos económicos, y en función del nuevo diseño de la política de Seguridad Nacional, fue el destino de considerables recursos, especialmente de los adquiridos mediante el endeudamiento con el exterior, para la compra de armamento y dotaciones especiales a las fuerzas armadas, comprometiendo con ello el impulso de programas de carácter social y la ejecución de los propios proyectos que el régimen se propuso realizar.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

2. TENDENCIAS CORPORATIVISTAS Y LUCHAS SOCIALES POR LA AUTONOMÍA.

Como correlato de los procesos económicos señalados, el gobierno militar impulsó un conjunto de medidas dirigidas a cambiar la orientación de la educación en el país, diseñando programas para los distintos niveles educativos con énfasis en su orientación hacia la formación científica y a la capacitación laboral. Otras medidas tendieron a incrementar los salarios, éstos se elevaron a su máximo nivel en 1974, "los salarios reales (teniendo como base 100 en 1965) habían alcanzado un nivel del 41% más alto, los sueldos tuvieron un incremento del 29% en relación al mismo año"⁶⁰. Con respecto al empleo, la ampliación de los aparatos del estado se constituyó así en la fuente de trabajo de los estratos medios conformando una amplia burocracia, mientras que las empresas estatales y privadas lograron absorber contingentes importantes de fuerza de trabajo disponible proveniente de distintos sectores sociales.

Paralelamente, el gobierno militar creó una serie de mecanismos institucionales dirigidos a controlar los procesos sociales acumulados y las expectativas que él mismo había generado en el curso de las reformas efectuadas. Esas instituciones se enfrentarían más tarde con las movilizaciones y organizaciones que los trabajadores urbanos, los campesinos y los sectores populares habían gestado desde direcciones diferentes.

Con la creación del Sistema Nacional de Movilización Social, SINAMOS, se instauró un aparato institucional que buscó consolidar un proyecto político de carácter corporativo orientado a organizar y controlar a los sectores sociales beneficiarios de las reformas impulsadas. Desde arriba se promovió la formación de la Central de Trabajadores de la Revolución Peruana (CTRP), de la Confederación Campesina de la Revolución Peruana (CCRP), de los pobladores de las barriadas, que eufemísticamente el régimen denominó "*pueblos jóvenes*", ya antes organizados en Asociaciones Vecinales. Todos esas organizaciones

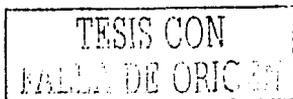
intentaron ser articuladas al control del Estado, vía SINAMOS, con el abierto propósito de debilitar a las organizaciones sociales autónomas que en medio de la intolerancia y represión habían construido los trabajadores y otros sectores de la sociedad desde etapas precedentes.

Con la intención de que los trabajadores pudieran acceder a la gestión de las empresas, igualmente fueron creadas la Confederación de Comunidades Industriales y la Confederación de Comunidades Mineras, con ello, sin embargo, se estimulaba la segmentación organizativa de los trabajadores, además de propiciarse un sinnúmero de conflictos con las dirigencias sindicales autónomas de las empresas y ramas industriales, entre ellas, la Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, la Confederación General de Trabajadores del Perú, la Central de Trabajadores del Perú, la Confederación Campesina del Perú y otras organizaciones populares.

Esta política se sustentaba en la concepción de que se estaba en vías de construcción de una sociedad "ni comunista ni capitalista"; en su lugar, y en el lenguaje de los ideólogos del régimen, se trataba de desarrollar un "socialismo participatorio". Era claro, pues, el carácter del proyecto del gobierno militar por conciliar los intereses del capital y el trabajo, aunque este proyecto político no diera frutos efectivos ni en el corto ni mediano plazo.

Las organizaciones sindicales habían surgido bajo el influjo de las luchas reivindicativas y bajo la influencia, primero del anarquismo, mas tarde, del nacionalismo radical del APRA, del Partido Comunista y otras corrientes de la izquierda marxista; sin embargo, es difícil afirmar que esas corrientes hayan sido finalmente susceptibles a la "cooptación", como la que pretendió el gobierno militar a través de SINAMOS. Podemos afirmar que la experiencia histórica de esas organizaciones las signó con el análisis social propuesto por una gama opositora de izquierda, ella les imprimió también de una práctica de lucha y movilización propias, sin ataduras políticas ni lealtades definitivas con los gobiernos de turno.

¹⁰¹ Cabieses, H y Otero, C. Op. Cit. Pp: 146



Es por ello que la autonomía se convirtió en un terreno que había que defender y en una reivindicación importante frente a los embates corporativos del régimen.

Esta orientación corporativa se expresó, asimismo, en la negación de toda posibilidad de organización política partidaria autónoma y fuera del influjo estatal. El "no partido" tuvo validez incuestionable para los ideólogos del régimen, ellos fundamentaron una crítica agria a los partidos que agrupaban básicamente a segmentos de las clases altas y medias, y a los partidos y organizaciones de izquierda, alguna de las cuales intentaron cooptar. La liberación de algunos líderes guerrilleros tuvo ese objetivo aunque el más famoso de todos, Hugo Blanco, no se prestaría al juego participatorio, manteniendo una posición crítica frente al gobierno militar. Con una alta influencia de la experiencia cardenista en México, SINAMOS debía ser pues la alternativa política de adscripción social y el fundamento para la nueva definición de un sistema político organizado desde el Estado.

Como señalamos en capítulos anteriores, la mayor parte de los partidos políticos constituidos a partir de la década del 20 tuvieron una existencia efímera; otros como el Partido Comunista y el APRA, habían sido objeto de represión, persecución y sometidos a la ilegalidad durante los largos periodos de las dictaduras militares y aún en varias etapas de gobiernos civiles. Los partidos más activos en la escena política al momento del golpe militar, se habían constituido a fines de la década del 50 e inicios del 60 (Acción Popular, la Democracia Cristiana), mientras que otras agrupaciones de izquierda aún lidiaban con los problemas de organización, sectarismo y fraccionamiento.

En estas condiciones, si bien esos partidos –aunque aquí hay que diferenciar al APRA por su ya larga historia y mayor articulación partidaria- habían ido adquiriendo experiencia y lograban una estructura interna organizada, sólo tenían influencia en Lima, en la costa norte, en las escasas regiones de mayor dinamismo urbano y algunos centros mineros del país. La construcción de un sistema político partidario estaba aún en una fase de maduración y requería de un

afianzamiento de la experiencia democrática institucional, como también requería de la acumulación social de una cultura política más amplia e incluyente.

No está demás recalcar que la democratización del país era aún incipiente, las instituciones más importantes del estado habían sufrido los embates de un ejército que, con los no pocos golpes de estado, se había colocado en la escena política sustituyendo a la sociedad civil al actuar no sólo quebrando el ejercicio de la ciudadanía, sino mermando las posibilidades de desarrollo de las instituciones políticas democráticas del Estado y de los organismos de intermediación social y política que con dificultad habían ido surgiendo en el Perú.

Podemos afirmar, que ese patrón de desarrollo político –dictadura militar y gobierno civil- ha ido permeando la cultura política peruana atravesándola, por un lado, de experiencias autoritarias y, por otro, de la necesidad arrancada por la sociedad civil de abrir espacios de expresión ciudadana al presionar por una institucionalidad más democrática e incluyente, pasando de la protesta, rebelión y revuelta autónomas de corta y mediana duración, hasta los movimientos sociales de carácter reivindicativo que si bien abarcaron espacios territoriales importantes no habían podido articular procesos más amplios y de envergadura nacional en lo que respecta a su organización social.

En un orden diferente, no podemos dejar de reconocer que el velasquismo había acelerado de manera significativa la democratización de la sociedad. En el campo, se había roto la línea de autoridad ejercida por los hacendados o sus administradores, al quebrarse la ideología señorial que habían sustentado las relaciones paternalistas y autoritarias de las cuales participaban tanto hacendados como peones, se desplazó a los terratenientes tradicionales de la sierra y a los hacendados de la costa de los poderes locales, reactivándose las energías campesinas, especialmente las indígenas, desafiadas por la necesidad de asimilar rápidamente las exigencias de la nueva situación, sea para gestionar las empresas asociativas creadas por la reforma agraria y presionar para que ella se realice en sus propios términos; o en el caso de los no beneficiados, exigir la aceleración de las reformas y extenderlas al conjunto del territorio.

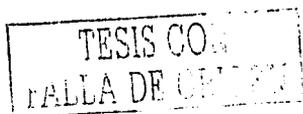
TEJES CON
FALLA DE ORIGEN

Se multiplicaron la organización de nuevos gremios campesinos que se articularon con las ya existentes federaciones por valles, provincias, distritos y departamentos en las Confederaciones nacionales, adquiere especial relevancia el fortalecimiento de la Confederación Campesina del Perú (CCP) con alta influencia de Vanguardia Revolucionaria.

A su vez, las migraciones campesinas y la formación de las barriadas en las principales ciudades continuaron desarrollándose. El Estado incrementó su apoyo a las Asociaciones de pobladores, que también se organizaron en Federaciones Provinciales y Departamentales; además de la lucha emprendida por estas Asociaciones para la regularización de los predios urbanos, ellas asumieron otras funciones relacionadas con el mejoramiento urbano como la reubicación de los vendedores ambulantes, el saneamiento urbano y la dotación de servicios públicos. Llama la atención el giro dado por estas organizaciones hacia la planeación y ejecución de proyectos de promoción e instalación de micro y pequeñas empresas es espacios denominados "parques industriales".

En esos procesos, parte de los sectores medios ya se habían consolidado al APRA y en menor medida al Partido Comunista, otros, plasmaban sus aspiraciones en organizaciones partidarias en Acción Popular y la Democracia Cristiana, mientras que las vertientes más radicales se orientaban a una diversidad de opciones de izquierda (Vanguardia Revolucionaria, Patria Roja, Bandera Roja, Partido Comunista Revolucionario, etc.) estableciendo alianzas para resistir al régimen y a veces envueltas en la vorágine de la confrontación y la ruptura por diferencias políticas e ideológicas.

Las organizaciones sociales y sindicales recreadas después de la década del 50, estaban todavía en pos de consolidar su capacidad de convocatoria y sus posibilidades organizativas con un alcance nacional; fueron significativos los reconocimientos legales de la Confederación General de Trabajadores del Perú y de la Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos. Cuando la crisis hacía sentir sus efectos sobre la minería, fueron importantes las lucha emprendidas por los trabajadores afiliados a esta federación y la inauguración de métodos de lucha



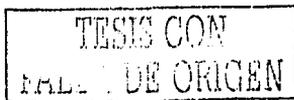
nuevos, como las "marchas de sacrificio", que comprometían no sólo a los trabajadores y sus familias sino el apoyo y solidaridad de los trabajadores de los mercados y organizaciones sociales de diferentes provincias, cuando los mineros se dirigían a pie a Lima en lucha por sus reivindicaciones. En ese proceso fue especialmente notable el apoyo de la Facultad y los estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de San Marcos.

La respuesta popular se fue acrecentando en la medida en que el modelo de desarrollo impulsado no respondía a las demandas regionales. En este sentido, fueron importantes los diversos paros regionales impulsados, durante la década del 70, en los Departamentos de Puno, Cuzco, Arequipa con una convocatoria que abarcó a distintos sectores sociales y demandas nuevas hacia el Estado de impulsar proyectos de desarrollo regional. Asimismo, en otra dirección reivindicativa salarial y en medio del cúmulo de movilizaciones sociales contra las políticas impuestas, y dada la fuerte presencia del ejército en cargos de dirección, y el reclamo por el respeto a sus mandos institucionales propios, por primera vez se produjo en el país un paro promovido por las fuerzas policiales. En 1975, y como resultado de un paro policial, Lima fue invadida por pobladores de barriadas y barrios populares, produciéndose saqueos de centros comerciales y el incendio del Centro de Convenciones⁵¹, así como una amplia represión comandada por el ejército.

Con todo, estos procesos, pero especialmente los paros regionales, significaron la instauración de un sistema de representación social propio más amplio y de transformación institucional del estado. Esas luchas y otras arrancaron un ordenamiento legal e institucional que lentamente iría involucrando a nuevos actores sociales logrando un juego partidario restringido y el funcionamiento de un sistema político básico que el Estado esperaba modificar vía su concepción corporativa.

No hay duda de que las reformas impulsadas por Velasco Alvarado tuvieron por primera vez un alcance nacional, tampoco se puede desconocer que en ese

⁵¹ Información proporcionada por Ricardo Melgar Bao



proceso se renovaron el carácter constitutivo de la nación. El Estado asumió una realidad mas vasta (también serrana y selvática) que la que había primado en el país hasta pocos años antes (costeña y relativamente mestiza), aunque ello también significara subsumir a la población indígena dentro de la concepción de campesino, desconociendo los problemas y las diferencias étnicas y culturales. "Campesino el patrón ya no comerá más del sudor de tu frente", frase con la que Velasco dio inicio a la Reforma Agraria, constituirá, sin duda, un referente distinto al de etapas anteriores donde primó la exclusión y tendrá la virtud de remover los espacios cotidianos y subjetivos abriéndolos hacia la conformación de una identidad y sentido de pertenencia más universalmente peruana, más andina.

A pesar de los procesos de democratización de la vida económica y social, debemos señalar que las instancias de representación social y política requerían aún de un sostenido proceso de maduración para consolidar su capacidad de convocatoria e intermediación más amplia y a nivel nacional. La orientación política del régimen militar coadyuvó precisamente a retardar esta posibilidad, al ignorar a las organizaciones existentes, y basarse en la pretensión de impulsar desde arriba la participación social creando nuevas organizaciones con miras a su control corporativo como si se tratara de borrón y cuenta nueva.

Ello significaba, no tomar en cuenta de que, aún con las vicisitudes expuestas, las organizaciones habían recorrido un camino propio y autónomo en el que los distintos actores sociales habían ido comprometiendo sus esfuerzos, esperanzas y demandas, y su subjetividad, así como el bagaje cultural serrano y costeño recreado con el que impulsaban sus organizaciones y una vida institucional a nivel nacional.

Como bien señala Fernando Calderón en su análisis sobre la institucionalidad democrática y autonomía social en América Latina, resulta altamente contradictorio el curso de las políticas económicas impulsadas y el papel de los actores sociales en la construcción de la democracia, ya que "al verificarse una creciente valorización de la democracia en América Latina, cada día es mas factible captar la emergencia de un nuevo y variado campo de

conflicto: el del orden institucional... Podemos reconocer en la historia latinoamericana la presencia de una suerte de péndulo asimétrico entre autoritarismo y democracia, generalmente lentísimo en los tiempos del orden impuesto, rapidísimo en momentos legítimos y legales, conformándose así una inestabilidad política crónica que ha influido seriamente sobre las posibilidades de acumulación, distribución y desarrollo económico⁶².

Este zigzagueante proceso en el Perú constituirá el soporte de lo que Barrington Moore define como los condicionamientos recíprocos entre estabilidad política y desarrollo económico. Y es precisamente en ese sentido, que a pesar del carácter democrático de muchas de las reformas impulsadas por el régimen velasquista, la esfera de la acumulación de capital continuó afirmando el curso previo del país como exportador de materias primas, ello a pesar de los esfuerzos proteccionistas al sector industrial para que éste ampliara el volumen de las exportaciones no tradicionales. Mientras tanto, la esfera política sufría el peso aplastante de un ordenamiento vertical que no podría anclarse en la perspectiva de los actores sociales.

Esa política proteccionista se combinó esta vez con un sesgo distribucionista y una aplastante presencia del estado en la economía; en tanto el desarrollo de la democracia política era violentada por un proyecto esencialmente autoritario que limitaría el desarrollo institucional, abonando a la gran inestabilidad política que históricamente había atravesado el país.

Aunque estos problemas se harán más palpables en el quinquenio que sigue, podemos adelantar que como en las fases previas, los militares y la nueva elite de intelectuales que los rodeó proyectaron "el comportamiento y la cultura de las elites...(de forma) ... rígida, vertical e intolerante, mientras que los movimientos sociales no alcanzan a resolver el problema de su representatividad y acción sociopolítica"⁶³ de manera estable y consistente. Nuevamente esta tendencia

⁶² Calderon, Fernando, "Movimientos Sociales y Política, La década de los ochenta en Latinoamérica" UNAM, Siglo XXI Editores. Serie Biblioteca América Latina: actualidad y perspectivas. México. 1995. Pp 94.

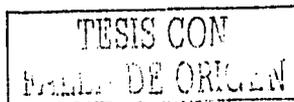
⁶³ Calderón, Op.cit. Pp. 95

acrecentó la distancia entre lo social y la política, y actuó desarticulando los elementos que solventarían la constitución de un régimen de partidos, un sistema político abierto a la pugna partidaria y un sistema institucional de representación democrática.

En una esfera distinta pero entrelazada con lo expuesto, el proyecto económico y político también contenía elementos altamente contradictorios respecto a la tradición social y cultural de grandes estratos de la población campesina. En ese sentido, consideramos que la cooperativa y comunidad son dos estructuras que combinadas pueden constituir un gran potencial para el desarrollo, tal como lo muestran algunas experiencias a nivel mundial.

Con ellas son posibles la eficiencia en los procesos de producción, comercialización, tecnificación y racionalización de los recursos, pero el requisito esencial es cómo los actores sociales construyen esos procesos, cómo se involucran realmente en la recreación de su propia experiencia histórica, de su cultura, sus conocimientos, su sentido de pertenencia y sus formas de organización comunal, para superarlas absorbiendo los elementos de creatividad e innovación propios y los aportados por la Ciencia y el mundo moderno. Dinamarca es un buen ejemplo de ello.

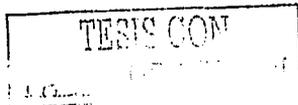
Como lo mencionamos anteriormente, la Reforma agraria impuesta por decreto y desde arriba, no contempló esta realidad social de un país permeado por una rica tradición cultural solidaria y de reciprocidad altamente reconocidos por distintos estudiosos como John Murra, María Rostorowki y otros; por el contrario, impuso una planeación y administración ajena a las comunidades, interfiriendo sobre esos elementos tradicionales e impidiendo su transformación hacia la modernidad, creando diversos conflictos no sólo entre los trabajadores agrícolas de las grandes haciendas con los administradores estatales, sino al interior de las comunidades campesinas confrontadas ahora por la nueva estructura asociativa diseñada por encima de sus organizaciones ancestrales y de las que habían creado en las últimas décadas.



No se imaginó, pues, una modalidad asociativa que incorporara esa tradición cultural para potenciarla con la participación social de quienes estaban involucrados en los proyectos de reforma, ni se estimuló las formas propias de participación solidaria, tampoco se aprovechó, además, las experiencias ocurridas en otras latitudes para buscar el apoyo en los conocimientos científicos modernos. El campesino, era finalmente visto como objeto de las políticas estatales y no como actor de su propio proceso de desarrollo.

A pesar de los esfuerzos realizados, la organización corporativa, el "no partido", etc, sólo pudo implementarse parcialmente. A medida que la política económica y el proyecto corporativo se iba impulsando, desde dentro y fuera de las organizaciones creadas emergía un movimiento social que desde distintas posiciones luchaba por su autonomía política y sindical, por mantener su propio sello organizativo dentro de la transformación estructural que se estaba dando, al mismo tiempo que exigía respuestas a los problemas económicos y sociales que el propio modelo generaba o no había tocado: entre otras cosas, por ejemplo, los problemas de desarrollo regional, el problema de los campesinos sin tierra y los trabajadores temporales.

Lentamente se fueron imponiendo límites al proyecto reformista y corporativo que pugnaba por un desarrollo capitalista de corte nacionalista, con una alta presencia del estado en la economía, así como en la vida política y social del Perú. "Un capitalismo de estado" como lo caracterizara Anibal Quijano, y un proyecto de desarrollo que en periodos previos no pudieron impulsar ni la burguesía ni los sectores medios del país. El modelo se confrontaba ahora con la crisis y las nuevas tendencias de acumulación a nivel mundial, se enfrentaba, a la vez, con la oposición de las fracciones de la burguesía que habían visto afectados sus intereses, con los trabajadores y sectores populares que veían agotadas las respuestas estatales frente a sus reivindicaciones, especialmente de aquellos no contemplados en las reformas.

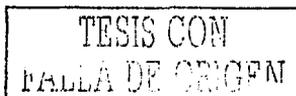


3. LAS MANIFESTACIONES DE LA CRISIS Y EL FIN DEL REFORMISMO: LA "SEGUNDA FASE" DEL GOBIERNO MILITAR, 1975-1980⁶⁴.

Hasta 1974 el programa de reformas estructurales y el dinamismo de la economía no habían tenidos mayores tropiezos. La tasa de crecimiento del PIB se había mantenido por encima del 6% anual gracias a la convergencia de un mayor gasto público, un crecimiento de las exportaciones y una relativa ampliación de la capacidad adquisitiva de buena parte de la población; al mismo tiempo, habían crecido desmesuradamente las importaciones y eran cuantiosos los empréstitos gubernamentales para el financiamiento de las obras de infraestructura y desarrollo de las empresas estatales.

Mientras se mantuviese el equilibrio externo y continuase el ritmo moderado de la inflación, todo parecía asegurar el que "modelo peruano" podía constituir el mejor ejemplo de crecimiento con redistribución del ingreso; pero tal como se ha mencionado, esta bonanza se basaba en un patrón de crecimiento extremadamente endeble y doblemente dependiente del mercado internacional, por los precios de las materias primas que ofrecía y los altos niveles de insumos estratégicos que requería, además de las contradicciones generadas por una industrialización sustitutiva que si bien favoreció el crecimiento de la producción industrial -con tecnología importada- y agrícola de exportación, no priorizó el desarrollo de los sectores industriales de mayor impacto en el desarrollo de largo plazo, como la producción industrial con tecnologías adecuadas para la exportación, ni prestó atención a los problemas que se iban acumulando en el sector agrícola alimentario.

De ahí que cuando las repercusiones de la crisis mundial de 1974 se hicieron sentir con el alza de los precios del petróleo y de las tasas de interés, con el encarecimiento de los insumos importados, el descenso de la demanda y de los



precios de las materias primas exportadas, la estructura económica reveló rápidamente su verdadera realidad y la fragilidad de sus soportes estructurales y macroeconómicos.

En 1975, la pesca y la minería, puntales del sector exportador, sufrieron sendas caídas, la primera, por una política de extracción irracional de la anchoveta y otras especies marinas que agotaron esos recursos; la segunda, por un descenso de los precios internacionales de las materias primas. La tasa de crecimiento de la economía se vio comprometida debido a los efectos multiplicadores de estas actividades sobre otras ramas como la construcción de viviendas, infraestructura, barcos para la pesca, etc. La tasa de inflación se elevó bruscamente hasta casi duplicarse y, lo que fue más grave, la caída del sector exportador no se correspondía con una tendencia semejante en las importaciones, lo cual dio lugar a un saldo negativo en la balanza comercial y a un déficit financiero que condensaba buena parte de los problemas que de golpe empezaban a aquejar a la economía.

Tanto fue así, que a fines de 1974 fue necesario duplicar el endeudamiento externo para cubrir los saldos negativos de la balanza de pagos, de tal suerte que la deuda alcanzó un poco más de los 2.500 millones de dólares. Esta medida permitió que, pese a que 1974 cerrara con 800 millones de dólares de saldo negativo en dicha balanza, hasta el primer trimestre de 1975 las reservas del Banco Central llegaran a los 700 millones de dólares, uno de los más altos para el período. Sin embargo, las tendencias recesivas tangibles en 1975, el aumento de los desequilibrios externos y la concentración de los pagos por los créditos contraídos, configuraron una situación de crisis.

Entrampado entre las dificultades que iba presentando la economía y las demandas sociales, el régimen intentó una medida política dilatoria que atrajera la simpatía de algunos sectores del país al decretar la expropiación de la Cerro de Pasco Mining Co. Se trató así de ganar tiempo para la recuperación, agitando una

¹⁴ La información esencial en este apartado está contenida en el Reporte de Investigación: Madueño Paulette, Ruth. "La crisis económica y las políticas de estabilización en el Perú, 1975-1979", presentado a la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, Departamento de Sociología, México, 1988.

bandera de reivindicación nacional y en base a la cual se pudiese reclamar a la población un voluntario "ajuste de cinturones". El resultado no fue sin embargo, el previsto, la expropiación desató una respuesta agresiva de la empresa afectada quien promovió un bloqueo internacional contra el mineral peruano, lo cual agravó aún más la difícil situación externa. A mediados de 1975 la disyuntiva era pues clara, o se perseveraba en el camino de las reformas y se avanzaba en la transformación estructural con las características que había adoptado la economía, o se daba marcha atrás y se volvía al realismo económico que reclamaba la derecha económica.

Políticamente tal situación se correspondió con el despliegue de las demandas de los sectores de la población beneficiaria de las reformas que sentía la pérdida de su capacidad adquisitiva, así como, de aquellos a los cuales las reformas no habían favorecido: los jornaleros, los campesinos minifundistas y la población marginada de las ciudades, quienes acentuaron su presión reivindicativa. Los primeros, se negaron a un retraimiento de sus reivindicaciones, se volvieron contra el patronazgo de las instituciones tutoras de la "participación social" e incrementaron sus movilizaciones y organización independiente; mientras que los segundos, comprometieron cada vez más la capacidad de movilización de amplios sectores de la población en distintas regiones del territorio nacional. Estos procesos sociales fueron respondidos con un endurecimiento gubernamental y la subsecuente pérdida de legitimidad que hasta entonces el gobierno había ganado.

Mientras los excluidos partidos de la derecha económica adquirían un nuevo influjo en su lucha por modificar las medidas de política económica hasta ese momento impuestas, las organizaciones de representación política y social de la oposición iniciaron el camino de su recomposición, aglutinando a las fuerzas sociales que habían resistido los intentos de control corporativo del régimen y a los sectores sociales que habían sido total o parcialmente involucrados en tal intento. Podríamos decir que en esta coyuntura, nuevamente se retomaron los caminos tendientes a desarrollar nuevos mecanismos de intermediación social y a reconstruir una institucionalidad política cuyo desarrollo había sido socavado.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

a. EL PROGRAMA DE ESTABILIZACIÓN

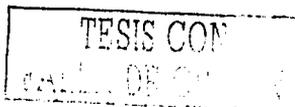
En la medida en que la salida a la difícil situación económica se relacionaba estrechamente con las modificaciones que se operaban en la estructura de poder, los primeros síntomas de la crisis no pudieron ser afrontados a través de un plan global. Fue necesario todavía que, a lo largo de 1975, el deterioro económico corriera parejo con una serie de tensiones internas en las Fuerzas Armadas producidas por la política armamentista, el recrudecimiento de las tensiones con Chile y el incremento del autoritarismo de Velasco, para que dentro de su seno surgiese una corriente institucional dispuesta al relevo del líder de la revolución y de su equipo económico.

Así, el 25 de agosto de 1975 Velasco Alvarado, afectado por una enfermedad, fue sustituido por Morales Bermúdez mediante un golpe al interior del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y fue sólo a partir del acceso de éste al poder que se ensayaría en el Perú un cambio de rumbo en la conducción de la economía mediante la aplicación de sucesivos programas económicos basados en los lineamientos neoliberales del FMI, y que lograrían su plena concreción en 1975, pero especialmente en 1976. Veamos el proceso de gestación y el contenido de este programa.

La teoría de las "cuatro brechas".

Para los analistas del Banco Central de Reserva, que representaban el sustento teórico de la política económica implementada, la crisis podía atribuirse a la confluencia de cuatro brechas estructurales en la economía nacional, éstas serían las existentes entre:

- Consumo-producción
- Exportación-importación
- Ingresos-egresos del gobierno



- Ahorro-inversión-

Desde esa perspectiva, y en primer lugar, la raíz de los desequilibrios podía encontrarse en un rápido incremento de la capacidad adquisitiva de la población generada por las reformas, y un aumento de la capacidad empresarial del Estado, factores que provocaron el crecimiento de la demanda y del consumo, además de que tal tendencia no habría sido acompañada con un movimiento semejante en la producción, generando un vacío llenado parcialmente con importaciones que tuvieron un grave efecto inflacionario.

Este diagnóstico no otorgaba ningún énfasis a la crisis agraria evidenciando una de sus más serias limitaciones. Esta crisis se manifestaba en un déficit permanente en la producción de alimentos a una tasa de crecimiento ostensiblemente menor que la de la población. La ausencia de políticas económicas encaminadas a desarrollar la agricultura de alimentos y la crisis acumulada en este sector, fue resultado del recurso fácil de cubrir las necesidades de consumo de la población con compras en el exterior, las cuales alcanzaron a representar casi el 25% de las importaciones totales.

En segundo lugar, el sector externo había llegado a una situación deficitaria tanto por esa extrema presión sobre las importaciones –que se vieron favorecidas por una tasa de cambio artificialmente baja- como por un relativo descenso del volumen y los precios de los productos de exportación (básicamente minerales y materia prima agrícola). Sobre este escenario, el aumento mundial de los precios del petróleo y de las tasas de interés de los créditos internacionales tuvieron si no un efecto determinante, sí un papel decisivo en el resquebrajamiento de los saldos relativamente equilibrados hasta entonces conseguidos en el país.

En tercer lugar, la crisis tendría relación con los endémicos déficits fiscales del gobierno financiados a costa de endeudamiento y emisiones inorgánicas de la moneda. En lo fundamental, el peso de estos déficits se cargaban a los subsidios al combustible y a los alimentos, con lo cual el Estado pretendía contener el descontento social, a los resultados negativos de las empresas estatales -mezcla de una ineficiencia administrativa que se iba generalizando y los fuertes subsidios

a las empresas que las proveían- y a la realización de grandes obras de infraestructura de naturaleza reproductiva que debían entrar en operación en el mediano plazo como las irrigaciones de Majes, Chira-Piura y el oleoducto norperuano. En ese diagnóstico no se mencionaba, en cambio, la brutal presión que sobre los limitados recursos fiscales había tenido la casi ilimitada compra de armamentos, producto de la fuerza política adquirida por las Fuerzas Armadas en el país y a las tensiones por problemas limítrofes con Chile y Ecuador a las que ya se ha hecho referencia.

El factor final de la crisis era la brecha entre inversión y ahorro, y como determinante de la misma se consideraba el que las tasas de interés no resultasen atractivas y que no hubiesen los suficientes incentivos para la promoción del ahorro interno.

En esta visión se privilegiaba pues el peso de los efectos sobre las causas estructurales de la crisis, al quedarse en el nivel de la constatación de sus manifestaciones y eludir cualquier intento de comprensión de la dinámica económica que había dado lugar a ésta. No es difícil inferir entonces las recetas que se derivaron de tal diagnóstico: devaluación para reducir la paridad cambiaria, promoción de las exportaciones y restricción de las importaciones, incremento de las tasas de interés, restricción del crédito, cancelación de los subsidios.

La aplicación de estas prescripciones no dejó, empero, de generar contradicciones tanto al interior del gobierno como entre éste y diversos sectores del capital. Fue así, que mientras determinados sectores, arguyendo la necesidad de preservar el orden y no hacer perder importancia a la actividad estatal, proponían la aplicación paulatina de las medidas optando por una posición "gradualista"; otros sectores, inspirados en la reciente experiencia friedmaniana y de la escuela de Chicago en Chile y en la urgencia de reactivar la economía en condiciones favorables al capital, plantearon una política de "shock". Ninguno de ellos avizoró, sin embargo, que la aplicación del programa de ajuste antes que una discusión de teoría económica representaba una instancia de confrontación con

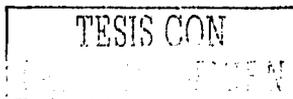
los sectores medios y populares del país. La dinámica política inmediata así lo demostraría.

b. LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA. LA POBLACIÓN TOMA LAS CALLES

El 26 de septiembre de 1975 se anunció al país la puesta en marcha de un programa para superar la crisis económica, el mismo que comprendía una devaluación monetaria del 16%, la reducción de los subsidios y un incremento de salarios destinado a compensar las alzas de la gasolina y alimentos. Los gradualistas ganaban la primera batalla y con esta base se aprestaban a emprender la refinanciación de la deuda con el FMI. Mientras ello ocurría, el año cerraba con resultados más que negativos para la economía del país. La deuda externa, que a mitad del año había sido de 2,500 millones de dólares, creció en 23.6%, el producto bruto interno disminuyó su tasa anual bajando de 6.9% en 1974 a sólo 3.3% el siguiente año, las reservas internacionales netas apenas si superaban los 115 millones de dólares.

El año de 1976 debía empezar con un nuevo "paquete" de medidas económicas, esta vez agrupadas bajo el membrete de Programa de Reactivación Económica, que incluiría nuevas alzas en los precios. Pero aún esto fue insuficiente, en junio se decidió por un nuevo paquete de medidas que llevó al dólar a 65 soles generando una espontánea reacción popular. Los primeros días de julio pararon los transportistas y escolares y se produjeron saqueos y movilizaciones en Lima y otras ciudades del país. Para que los gradualistas pudieran continuar con el plan de reactivación, todas las revistas debieron ser clausuradas y decretarse un toque de queda que se prolongaría por nueve meses.

A lo largo de todo el periodo el FMI ha mezquinado su apoyo al Perú, debido sobre todo a las reservas con que los gradualistas aplicaban los programas. Los logros de 1976 empujaron, sin embargo, a un acuerdo más estable, pero en ese momento se conoció que parte de la refinanciación de la deuda sería utilizada en la adquisición de material bélico de la Unión Soviética, las relaciones oficiales se congelaron y aumentaron las disputas entre los mandos de las Fuerzas Armadas



cuyo presupuesto, al igual que todas las instituciones del estado, había sufrido recortes con el Ministro de Economía que defendía la austeridad. Esta desigual confrontación terminó el primer trimestre de 1977 con la renuncia del Ministro y su equipo económico.

La posta política fue asumida por un empresario, Walter Piazza, que a los pocos días de asumir el cargo adoptó un nuevo paquete de devaluación y alza de los precios. En esta coyuntura, la larga y contenida reacción popular contra el programa económico, tomó forma en 1977 con la organización del primer paro nacional en la historia del país. Las acciones fueron más allá que el sólo abandono de labores y comprendió la movilización de la vasta legión de pobladores de las barriadas que circundan Lima, de los sectores populares, así como, la presencia activa de los sectores de campesinos aglutinado en la Confederación Campesina del Perú y estratos medios en las regiones de la selva, sierra y costa del país. Lima fue virtualmente sitiada por el bloqueo de las tres carreteras troncales que la unen con el interior, las masas ganaron una ciudad vacía, mientras que en el interior, especialmente en la zona sur (Puno, Cuzco, Arequipa) y en la selva (Iquitos, Huallaga) se repetían estos acontecimientos.

Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que las organizaciones sindicales, campesinas y de pobladores ganaron esta vez una dimensión nacional estableciendo vínculos con sus pares regionales, aunque las reivindicaciones en las regiones se orientaban no sólo a la crítica del modelo y a la cancelación de las medidas impuestas, sino a la exigencia de políticas de desarrollo que tendieran a revertir el gran rezago regional. Las regiones de la selva exigían, por ejemplo, el pago del canon petrolero como parte de los beneficios por la explotación de ese recurso y que debían ser utilizados para el desarrollo regional.

En el mismo sentido, las organizaciones políticas de oposición y de izquierda adquirieron mayor influencia en la escena nacional, unas más inclinadas a desarrollar una capacidad de mediación política conservadora de los estratos medios y segmentos populares y, los otros, más radicales, con una mayor interlocución de las demandas económicas y sociales de los trabajadores urbanos

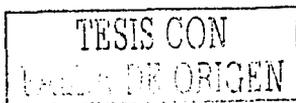
y rurales, de los pobladores de barriadas y de segmentos de la clase media radicalizada.

La renuncia del nuevo ministro fue sucedida por el nombramiento en el cargo de uno de los oficiales del ejército con mando de tropa más importantes. Como en otras ocasiones, las Fuerzas Armadas concentraba en sí misma la tarea política de sustitución de los actores más importantes y de la sociedad civil para imponer el "orden". Claramente la aplicación de las políticas de ajuste pasaba a ser un operativo estratégico del comando del ejército y estaría signado por el autoritarismo y la represión de los movimientos sociales.

Ya posesionado en el cargo, el general Saenz renovó las conversaciones con el FMI, el cual, al constatar la debilidad del gobierno, le exigió todo o nada. En la primera quincena del mes de septiembre se hicieron oficiales las medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional: reducción de la inflación a no más del 20%, devaluación a 110 soles por dólar y libertad de cambios, reducción de los plazos de los créditos para las importaciones, elevación de los precios del petróleo, baja del déficit fiscal y una severa política salarial, además de la firma de un acuerdo de crédito por 104 millones dólares. Como en las anteriores oportunidades la operación en sí misma no revestía gran importancia económica, dado que alcanzaba un porcentaje mínimo de la deuda a renegociar. En cambio, era el aval a la política gubernamental que la banca internacional requería para abrir los créditos al Perú.

Aún así, los resultados del bienio seguían siendo pobres. La balanza comercial continuaba siendo deficitaria al igual que la balanza de servicios y de pagos, como fueron coyunturales el refinanciamiento de tales déficits orientados al cumplimiento de las obligaciones y plazos en el pago de la deuda contraída. Ésta alcanzó la cifra de 4,813 millones de dólares, la tasa de crecimiento de PIB se hizo negativa (-1.2%) y las reservas internacionales desaparecieron totalmente dejando un saldo deudor de 1,100 millones de dólares.

A estas alturas no cabía sino rendirse totalmente a las nuevas presiones del Fondo, sin embargo, contra esta posibilidad conspiraba la firme oposición del



movimiento popular que no sólo desarrolló una escalada huelguística por sus reivindicaciones salariales específicas, sino que planteaba la moratoria como alternativa al entrapamiento en el que se debatía el país.

A inicios de 1978, el gobierno militar capituló totalmente y decidió aplicar los dictados del FMI hasta sus últimas consecuencias, para ello trabó una alianza política con el APRA y ofreció retirarse del poder para dar paso a la elección de una Asamblea Constituyente y a la convocatoria de elecciones generales en 1980.

Coadyuvando a su caída, el gobierno militar dictó, en mayo de 1978, un nuevo Programa económico-financiero que satisfacía las exigencias extremas del Fondo en cuanto a salarios, precios y gasto público, y el encargado de aplicarlo sería, esta vez, un ministro civil, Silva Ruete. Con él se inició una escalada económica de paquetes sucesivos que llevaron al dólar a 250 soles al finalizar el año 1979 (la cotización del dólar en 1975 era de 43.80 soles), a la anulación de subsidios a productos básicos dando lugar a permanentes subidas de precios, la reducción drástica del presupuesto, el aminoramiento de los planes de inversión, el despido de 10.000 trabajadores estatales y, entre otras medidas importantes, la reprivatización de numerosas empresas estatales.

Otro campo en el cual se afectó el gasto público es el relativo a la actividad empresarial del estado. El cese de la decidida política de apoyo que tales empresas habían tenido, provocó que ellas debían reajustar sus precios, en su mayoría la de la industria básica que producía a precios rebajados para la industria privada intermedia.

El Fondo sugirió el desmantelamiento de buena parte de la actividad empresarial del estado, transfiriéndola al sector privado, y así sucedió con la flota pesquera tempranamente nacionalizada por el gobierno de Velasco y numerosas empresas del complejo INDU-PERÚ que había sido creado en base a nacionalizaciones y expropiaciones.

Evidentemente, las medidas anteriores relacionadas con la devaluación y el encarecimiento del dólar tuvieron un efecto negativo sobre las importaciones, a las cuales se les aplicó, además, un recorte en los plazos de financiamiento. Como

contrapartida, se trató de reorientar la producción nacional "hacia fuera". El instrumento fue un régimen de promoción de las exportaciones no tradicionales que operaba a través de los Certificados de Exportación (CERTEX). Incentivo tributario, al que nos hemos referido anteriormente, y mediante el cual se reintegraba a los exportadores el valor estimado de los impuestos pagados por los insumos y servicios que intervenían en los procesos de producción. La falta de controles eficientes y la voracidad de los empresarios convertiría a esta mediada en una fuente de gran corrupción.

Para incentivar el ahorro interno se aumentaron las tasas de interés de un 19% a un 38.5% por depósitos a plazo fijo. La lógica consecuencia fue el incremento de la liquidez en el sistema bancario y una disminución sustancial del crédito hacia los sectores de la producción nacional que no alcanzaban los niveles de rentabilidad para cubrir las nuevas tasas. Por otra parte, la deuda fue refinanciada con los principales acreedores poniendo como garantía el estricto cumplimiento del programa delineado, reconociéndose la capacidad de vigilancia y control del Fondo Monetario Internacional sobre la economía peruana y, de hecho, se implantó un programa de informes semestrales para proceder a la concesión de los créditos acordados.

La política salarial se endureció severamente. Los pliegos de reclamos fueron limitados a un punto único: el de sueldos y salarios, y se prohibió la inclusión de otros reclamos como condiciones de trabajo, etc. Al mismo tiempo, se establecieron límites máximos para los aumentos a concederse a través de negociaciones colectivas.

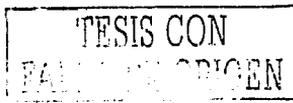
Todas estas medidas fueron respondidas con cuatro nuevos paros nacionales y la activa movilización del conjunto de la población de varias regiones que hasta ese momento habían tenido escasa presencia en la escena política nacional, especialmente los de la región amazónica. Fue en esta coyuntura cuando se produjo un notable avance de la presencia de la izquierda política dentro de los sectores sociales más afectados por la crisis y las políticas de ajuste. Fue también el momento en que las fuerzas políticas de distinto signo

reconstituyeron sus organizaciones. Entre ellos el APRA, Acción Popular, la Democracia Cristiana, transformada ahora por acción de una gran parte de su militancia en el Partido Popular Cristiano, mientras que la izquierda lograba impulsar su aglutinamiento en el ARI (Alianza Revolucionaria Independiente).

En los primeros meses de 1979 fue elegida la Asamblea Constituyente presidida por el connotado dirigente del partido aprista Víctor Raúl Haya de la Torre. Fue significativa la alta representación lograda por la izquierda, especialmente del ala troskista comandada por Hugo Blanco, -quien había mantenido su sello opositor al régimen logrando ampliar su capacidad de convocatoria social- como también lo fue la presencia y remozamiento del APRA aliado ahora a los partidos Acción Popular (contra cuyo dirigente, Belaúnde Terry, había sido dirigido el golpe militar del 68), y el minoritario de derecha Popular Cristiano.

Podemos decir, a modo de conclusión, que la década del 70 significó para el Perú un periodo de ruptura y continuidad con los regimenes anteriores y, en parte, con el modelo de desarrollo nacionalista hasta el momento implementado. Se concentraron en él, procesos largamente madurados en otros países de América Latina y en los que el estado peruano reorientó tardíamente sus funciones al asumir el control de la economía y fungir como promotor del desarrollo.

Esa reorientación, en el primer quinquenio de la década del 70, constituiría una experiencia importante en el contexto de renovación del reformismo en América Latina (como las experiencias de Chile con Allende, Torres en Bolivia, Torrijos en Panamá) a la vez que se enmarcaba en un proceso de franco envejecimiento del intervencionismo estatal en otras latitudes, apoyado primero en la liquidez financiera que sucedió a la recesión de 1967-68 y más tarde, a partir de la crisis de 1974, estrangulada por los altos costos del endeudamiento externo, produciéndose un escenario de crisis del modelo conjuntada con los efectos de la crisis internacional, y frente a los cuales no sólo se impuso la opción neoliberal conservadora con los programas de reestructuración y ajuste, sino la derrota del



movimiento social en casi toda América Latina, el mismo que hasta ese momento había tenido asideros teórico-políticos en la teoría de la dependencia.

La ruptura y continuidad, a las que hacemos mención anteriormente, se relaciona con la inevitable confluencia de distintos problemas: los grandes rezagos económicos y sociales previos, los efectos de una política estatista que mantuvo el modelo de sustitución de importaciones pero que no cambió sustancialmente el de exportación de productos primarios, una política económica que si bien reestructuró la propiedad agraria no priorizó el desarrollo del sector agrícola de alimentos, ni reorientó el aparato productivo industrial para desarrollar una capacidad competitiva en el mercado internacional; por el contrario, y como en el resto de América Latina, se agravó el déficit alimentario y la industria se orientó a satisfacer las demandas del mercado interno.

Como se ha observado, la puesta en marcha del modelo nacionalista y populista en el Perú se apoyó en un gran endeudamiento externo y en los precios internacionales de las materias primas. En esas condiciones, los efectos de la crisis de 1974 no podían sino repercutir poniendo en entredicho las virtudes de un capitalismo basado en el control del estado de gran parte de la economía y de un sector privado asistido, imponiéndose en el país la necesidad de ajustes exigidos por el Fondo Monetario Internacional con base en los nuevos requerimientos del capital internacional.

Así la "segunda fase" del gobierno militar, 1975-1980, significó la retracción de las reformas y la afirmación de un estado autoritario, una dictadura, que con disciplina puso en marcha las políticas neoliberales exigidas por el Fondo Monetario Internacional y cuya referencia más cercana en la región era el modelo impuesto por Pinochet en el vecino país de Chile. .

Como en etapas anteriores, en 1968 los militares aparecieron en la escena política peruana mediante un golpe de estado. Si bien esta vez, lo hicieron impulsando importantes reformas estructurales, y democratizando la propiedad rural, la gestión empresarial y la vida social y política del país al impulsar la creación de nuevas organizaciones controladas por el estado de manera

corporativa; esas medidas también comportaron un proceso que socavó la libre asociación, la existencia y consolidación de las organizaciones que con dificultad habían mantenido su presencia en la sociedad, la acción de los partidos de derecha e izquierda y, lo que es fundamental, el funcionamiento de las instituciones del estado como el Poder Legislativo y Electoral, y los medios de comunicación.

A pesar de ello, los límites del propio modelo y los problemas acumulados coadyuvaron a que, a partir de 1977, emergiera un renovado movimiento social que no sólo se orientó a la búsqueda de soluciones a sus reivindicaciones inmediatas, sino a exigir el control de parte de sus recursos económicos y naturales. (centralizados por el Estado vía impuestos o la absorción de las utilidades generadas, por ejemplo, por el petróleo), a efecto de impulsar programas de desarrollo regional, además de luchar por la democratización de la vida política del país.

Estas luchas, abrieron espacios de acción no sólo a los sectores populares sino a los partidos políticos, de tal suerte que la elección de la Asamblea Constituyente en 1979 y las elecciones generales en 1980 constituirían la vuelta a una democracia que debía ser largamente construida en el país. Aunque en condiciones sociales y políticas distintas, el régimen civil elegido en 1980 todavía arrastrará consigo alguno de los rasgos de los regimenes previos al golpe del 68, es decir el populismo con rasgos conservadores, afirmando el autoritarismo impuesto en la segunda fase del gobierno militar, para dar continuidad a las políticas neoliberales y se enfrentará a un renovado conjunto de organizaciones políticas y sociales que no sólo se movilizarán por sus demandas sino por desarrollar procesos de resistencia a la crisis.

Sin embargo, y a pesar de sus limitaciones, el modelo nacionalista había abierto las compuertas para una ampliación más profunda del mercado interno en el territorio y una difusión más extensa de las relaciones salariales, borrando los signos perversos de aquellas relaciones semi serviles en el campo. En ese sentido, con todas las limitaciones del caso podemos señalar que el proyecto

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

nacionalista de Velasco propició una interacción política y social más amplia entre las regiones del país, constituyendo un mercado interno de mayor magnitud que se iría modificando y ampliando con la reversión de las reformas, en un mercado de tierras, de productos y de una mano de obra que mayoritariamente se encontraba en condiciones de extrema desigualdad y pobreza.

En el terreno institucional, la sociedad civil logró mantener y extender sus instancias de representación social a pesar de los avatares propiciados por el proyecto corporativista. Nuevos influjos se hicieron presentes en el escenario no sólo en lo que a democratización de la vida económica y social se refiere, sino a la posibilidad de recomposición del escenario político. La segunda fase del régimen militar supuso, sin duda, un desmontaje de las reformas, y a pesar de poner en juego distintas formas de represión, -por ejemplo, la suspensión de garantías individuales y los toques de queda- no pudo contener las aspiraciones políticas de un orden institucional y democrático pugnados por distintos sectores de la sociedad y con distinto signo ideológico.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

CAPÍTULO IV

LOS GOBIERNOS CIVILES DE LA DÉCADA DE 1980

CAPÍTULO IV

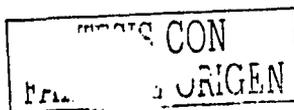
LOS GOBIERNOS CIVILES DE LA DÉCADA DE 1980

Este periodo estará marcado por la crisis y la pugna entre dos tendencias surgidas al calor de los acontecimientos de la década anterior; de un lado, aquella que sostenía el imperativo de reversión de muchas de las reformas impulsadas por el gobierno militar de la primera fase y la aplicación de las políticas de ajuste y reestructuración neoliberal de la economía, sin que esas medidas significaran necesariamente la restitución de los intereses oligárquicos. De otro, la implementación de políticas relativamente proteccionistas de corte populista e impregnadas de un planteamiento keynesiano heterodoxo para enfrentar la crisis, en abierta confrontación con las corrientes neoliberales en ascenso.

El Perú experimentó en este periodo, un conjunto de movimientos sociales que al reivindicar sus derechos ciudadanos obligaron a la confluencia de las distintas fuerzas políticas sociales existentes en el ámbito nacional; esos movimientos se constituyeron, en los primeros cinco años de la década, en un poderoso factor de presión para la unificación de agrupaciones de izquierda, algunas de las cuales se aglutinaron en frentes de carácter electoral, aunque al finalizar el decenio habían perdido legitimidad y capacidad de convocatoria política y social.

Si bien es cierto que las reformas del velasquismo no habían logrado tener un tiempo de maduración, por lo que muchos problemas no sólo no lograron ser resueltos sino se acumularon en el país. Sin embargo, esas reformas, como bien afirmaría Matos Mar, "sí liberaron las energías detenidas en el mundo andino y en los sectores populares",⁶⁵ adquiriendo un impulso extraordinario durante la crisis que ya afectaba gravemente a los sectores sociales mayoritarios del país, y

⁶⁵ Matos Mar, José. "Desborde popular y crisis del Estado. El nuevo rostro del Perú en la década de 1980". Serie Perú Problema 21. Instituto de Estudios Peruanos. 1985. Lima-Perú. Pp. 14



remeciendo los cimientos económicos, políticos y sociales sobre los que se habían construido la cultura, la identidad y la nación.

En efecto, este será un decenio de vuelta a la institucionalidad democrática, de auge de nuevos movimientos sociales signados por los enormes avances en el proceso de ciudadanía de los peruanos, de desarrollo de amplios procesos sociales organizativos, sin precedentes en América Latina, impulsados por los sectores populares, los campesinos y la población indígena, de dinamismo y declinación de las organizaciones de políticas de todas las tendencias: los demócratas de derecha, del nacionalismo aprista y de la izquierda. Será también el punto de partida de una crisis social y política de representación aflorada en medio de la profunda crisis económica que afectaba al país en el contexto de masivas migraciones, cuyos referentes de intermediación y representación política aún no habían siquiera iniciado su construcción.

No se trató de una oposición sistemática al Estado, sino de una sociedad civil que emergía masivamente "como una esfera de interacción social entre la economía y el Estado, compuesta ante todo por la esfera íntima (especial de la familia), la esfera de las asociaciones (en especial las asociaciones voluntarias), los movimientos sociales y las formas de comunicación pública"⁶⁶

Se trató de un esfuerzo colectivo que presionó y logró la apertura del escenario social, en el que la sociedad civil encontraba sus propios canales para desempeñarse voluntaria y socialmente, y en tal virtud desbrozaba " un terreno que corresponde al ámbito de lo privado dedicado a la cooperación (no coercitiva) en aras del beneficio colectivo."⁶⁷ Por lo mismo, ese proceso constitutivo comprometió la participación, la asociación libre y en grupos de más diverso tipo.

En su cometido de abrir espacios, la sociedad civil que emergía en el Perú se orientaba, aún en las condiciones de gran precariedad económica, a generar niveles de integración y colaboración social, constituyendo formas germinales de acción coordinada, con una potencialidad social que convocó a la participación de

⁶⁶ Cohen, Jean y Adato, Andrew, citados por Fernández Santillán, José: "Sociedad civil y derechos ciudadanos". En la Revista Letras Libres, Febrero 2001, Año III, número 26. México. Pp. 13

⁶⁷ Fernández Santillán, José. Op. Cit. Pp 13

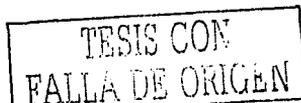
diversos estratos sociales, grupos religiosos, organizaciones no gubernamentales y a profesionistas independientes.

Sin embargo, en ese contexto en que los efectos devastadores de la crisis se presentaban de manera más descarnada y dura, y en que el entorno social organizativo de los sectores antes mencionados se hacía más fuerte y visible, emergieron algunos grupos más radicales que desarrollaron una crítica cerrada a la situación prevaleciente y a todo proceso organizativo laboral y popular, contra los cuales impulsaron estrategias y acciones de carácter terrorista y guerrilleras. Esos grupos hicieron su aparición pública los primeros años de la década del ochenta, primero, Sendero Luminoso en 1980, influido por las corrientes más sectarias del maoísmo; luego en 1984, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru organizado con fuerte influencia de la revolución cubana y nicaragüense.

1. LA VUELTA DE FERNANDO BELAUNDE TERRY: CRISIS ECONÓMICA, ENTRE EL NEOLIBERALISMO Y LA ORTODOXIA

Durante los dos gobiernos militares de la década de 1970, Belaúnde había residido en los Estados Unidos, su presencia en la escena política peruana doce años después concordaba con todos los vientos opositores de los estratos altos y clases medias, coincidía también con intensos movimientos sociales opuestos a las políticas de ajuste impuestas en la segunda fase del régimen militar y con una tendencia organizativa más consistente aunque conflictiva de las organizaciones opositoras de izquierda; de tal forma que su candidatura y elección resultaron una suerte de reivindicación respecto a la afrenta sufrida durante el golpe de estado que lo había sacado del poder en octubre de 1968.

Dos actos de carácter político marcarían el reinicio del periodo democrático inaugurado por el gobierno de Belaúnde, la devolución de los diarios y medios de comunicación masiva expropiados a sus antiguos propietarios garantizándoles la libertad de expresión que los regímenes militares habían controlado, y la convocatoria a elecciones municipales concretando por primera vez la



incorporación de las provincias a un sistema de representación local, eliminando así la costumbre de nominar alcaldes y regidores desde Lima. En el pasado, esta costumbre había favorecido a personajes que podían cultivar relaciones personales y de poder con diputados y senadores provinciales, quienes finalmente actuaban recomendándolos ante las autoridades del Ministerio de Interior encargado de este sector de gobierno.

La ruptura de estos lazos clientelares significó, sin duda, un avance importante en la vida democrática del país, como había sido la exigencia social previa que terminó por imponer a los militares la restauración de la democracia, obligándolos a la convocatoria de elecciones para la nominación de una Asamblea Constituyente de 1979 que debía elaborar una nueva Constitución, con la cual restituyó el funcionamiento institucional de todos los organismos del Estado, pero especialmente, las atribuciones del poder electoral como organizador autónomo de las elecciones presidenciales, del Congreso y las de carácter municipal en 1980.

En las elecciones municipales triunfaron en muchas de las provincias del país y en Lima distintos candidatos de las filas de Acción Popular, pero en 1983, las fuerzas de izquierda aglutinadas en una alianza alrededor de Izquierda Unida triunfaron en la mayoría de los municipios de Lima y en diversas provincias del interior del territorio. Alfonso Barrantes, un abogado provinciano y con larga trayectoria como defensor de presos y perseguidos políticos de izquierda, fue elegido alcalde de Lima y con él por primera vez la izquierda lograba un triunfo importante y lo que sería una muy buena gestión municipal.

Ese retorno a la democracia "se vio facilitado por la estabilización económica, que condujo al crecimiento del producto en los años 1979 y 1982,... el gobierno belaudista (presionado por los movimientos sociales y por esa inevitable mirada al pasado populista de su primer gobierno)... orientó su política económica bajo el signo del semiliberalismo y la ortodoxia. Sin embargo, en 1981 la balanza en cuenta corriente acusó un déficit muy alto, de menos 0.6%, anunciando la

precariedad del equilibrio externo que planteaba un altísimo endeudamiento internacional⁶⁸.

La caída de los precios de las materias primas y por supuesto el elevado proteccionismo de la economía norteamericana no harían sino agravar esta situación durante el año siguiente, y más aún en 1983 debido a los efectos devastadores del fenómeno del Niño. A pesar de esas condiciones adversas, Belaúnde intentó reactivar al sector industrial manteniendo el proteccionismo y tratando de atraer a los capitales que en la década pasada se habían establecido en otros países de la región; disminuyó el gasto público y se preocupó por atraer las inversiones extranjeras aprobando una nueva Ley de Minería y petróleo sancionada en 1981⁶⁹, combinando esas políticas con la reevaluación de la tasa de cambio real y estímulos a la demanda doméstica, más tarde, a estos esfuerzos contradictorios de recuperación de la economía le sobrevinieron años de recesión.

Como bien analizan Contreras y Cueto, la burguesía peruana se encontraba en un proceso claro de adormecimiento, la poca actividad industrial parecía aún moverse en la inercia y en la descomposición de los estratos altos sujetos ahora a la añoranza de un pasado que les debía ser repuesto vía la devolución de sus bienes expropiados o aún envueltos en la vorágine de la huida al exterior en los tiempos difíciles de las reformas velasquistas. Podemos señalar que en términos sociales este sector industrial se había debilitado, como se habían resquebrajado sus instancias de representación social y políticas; a pesar de ello, surgía en ese entorno un sector de medianos y pequeños propietarios cuyos orígenes eran cholos y mestizos, y que lentamente volcaban sus esfuerzos de capitalización articulándose con un mercado interno provinciano el cual, a pesar de la crisis, se entreteje en la escasez con un dinamismo insospechado, creciendo movido por la pobreza y el desplomamiento del campo.

⁶⁸ González de Olarte, Efraín y Samane Lillian, "El Péndulo Peruano: Políticas económicas, gobernabilidad y subdesarrollo, 1963-1990". Consorcio de Investigación Económica. Instituto de Estudios Peruanos. Lima Perú. 1991. Pp. 32.

⁶⁹ Contreras, Carlos, y Cueto, Marcos. "Historia del Perú Contemporáneo" Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad del Pacífico, Instituto de Estudios Peruanos. Lima Perú. 2000. Pp. 328.

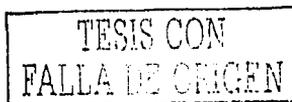
El proceso de reversión de las reformas tendrá en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry (1980- 1985) y en sus más cercanos colaboradores a sus principales representantes, entre éstos podemos considerar a personajes del mundo industrial, a expertos profesionales y a funcionarios de organismos internacionales que incursionaron en la política nacional como Manuel Ulloa, Pedro Pablo Kuczynski, Richard Webb, Carlos Rodríguez Pastor, Juan Carlos Hurtado Miller⁷⁰, quienes ocuparon los cargos más altos en el Ministerio de Economía, en el de Relaciones Exteriores y el Banco Central de Reserva. A pesar de su orientación neoliberal y presionados por su propio sector social como por los movimientos sociales, muchos de ellos no renunciaron a las políticas proteccionistas, las cuales nuevamente repercutirían negativamente en la economía dado que su aplicación reproducía el modelo previo por el "que las empresas podían vivir sin innovación porque no tenían razones para temer la competencia del exterior".⁷¹

A pesar de la tendencia a disminuir significativamente el proceso de estatización anterior, el gobierno de Belaúnde se confrontó con el problema de sostener una buena parte de las reformas velasquistas y continuar con la intervención del estado en la economía, debido a los compromisos internacionales contraídos como la deuda externa, la descapitalización y la crisis de la producción agraria, aunque las empresas estatales creadas anteriormente mostrarían con el tiempo signos de retraimiento, baja competitividad y burocratización, aunado a la caída de los precios de las materias primas y el encarecimiento de las tasas de interés internacionales que tornaron agobiante el pago de la deuda.

Con todo, los industriales nacionales volcaron sus esfuerzos hacia el mercado interno y en parte hacia las exportaciones, la carencia de divisas para las importaciones refluía sobre un problema ya permanente: la falta de posibilidades de renovación tecnológica para un aparato productivo que requería de nuevos procesos y nuevas políticas que transformaran el modelo de acumulación, orientándolo a una dinámica exportadora que exigía el proceso de globalización.

⁷⁰ Contreras C. Y Cueto, M. Op cit Pp. 326.

⁷¹ Sheahan, John. "La Economía peruana desde 1950. Buscando una sociedad mejor" Instituto de Estudios Peruanos. Lima Peru. 2001. Pp. 125.



Estos problemas afectarán sin duda el comportamiento del PIB, ya que si bien éste creció alrededor de 4.6% y 4.8% entre 1981 y 1982, en todo el quinquenio presentó un crecimiento negativo de menos 1.3%, mientras que el PIB per cápita se situó en menos 3.5%.

El gobierno mantuvo, sin embargo, casi intacta esa política económica proteccionista, "de 1980 a 1985, los aranceles fueron recortados considerablemente y muy pocas importaciones fueron prohibidas,... (manteniéndose el modelo sustitutivo y la promoción de la industrial)... quedando la protección efectiva en promedio mucho más alto que antes de 1965"⁷². Sin embargo, y como en los periodos previos de elevado proteccionismo, las exportaciones industriales de ninguna manera compensaban el volumen de las importaciones de insumos y productos terminados en el sector; la vocación manufacturera en el Perú mantenía su orientación tradicional hacia el mercado interno y no fue capaz de sostener con consistencia la dinámica económica iniciada en el segundo quinquenio de la década de 1970 hacia las exportaciones, tanto es así que el "déficit comercial creció de 700 millones hasta casi el doble en 1982, y nuevamente de 600 millones en 1985 hasta 1,100 millones en 1987"⁷³.

Belaúnde no emprendió la tarea de devolución de las grandes propiedades agrarias a sus antiguos dueños, quizás porque era común en todos los sectores de la sociedad la convicción de que la fracción oligárquica peruana ya había cumplido su ciclo, se había convertido en una rémora para el desarrollo de país y era fundamental mantener el acta de defunción que le había impuesto el régimen de Velasco. La fase más dinámica de reparto de tierras ya había sido detenida por el régimen de Morales Bermúdez, de manera que tanto éste como Belaúnde dieron pasos hacia un lento proceso de privatización de muchos predios y a la transformación de otros en sociedades cooperativas con mayor presencia de los beneficiarios, o como en el caso de las comunidades campesinas, las tierras volvieron al control directo de ellas y a la parcelación, manteniéndose en contadas

⁷² Sheahan, John, Op. Cit. Pp 121.

⁷³ Sheahan, John, Op Cit. Pp 123

situaciones un sistema asociativo para la compra de insumos y maquinaria y la comercialización de los productos.

Como ya se mencionó, y contra toda idea común respecto al gobierno de Belaúnde, éste no canceló totalmente las acciones de reforma agraria, lo que sí detuvo fueron las expropiaciones. Su idea era convertir a las unidades asociativas andinas en pequeñas y medianas propiedades, privilegiando la adjudicación a propietarios individuales y a comunidades. "Así entre 1980-1985 se adjudicaron 698,154 hectáreas beneficiando a 41,659 agricultores. De ese total se constituyeron catorce nuevas Cooperativas Agrarias de Producción y se aumentó tierras a una Sociedad Agrícola de Interés Social. En cambio se formó 106 grupos de campesinos, se incrementó tierras a 83 comunidades y se realizó adjudicaciones a 23,153 beneficiarios individuales, lo cual significa que un 98.7% de los beneficiarios pertenecían a la economía campesina."⁷⁴

Al iniciarse la década del ochenta el sector rural conservaba algunos de los elementos de contraste que previamente lo caracterizó. Se podían identificar dos grandes conjuntos: uno, de economía empresarial (formado por el sector asociativo, CAPs y SAIS, además de un segmento minoritario de pequeños y medianos propietarios individuales) que concentraba la mejor tierra, el riego, la tecnología, el crédito y el apoyo técnico; y otro, mayoritario de economía campesina, compuesto por las comunidades campesinas y nativas y los minifundistas de la sierra y selva, que controlaba los más extensos pero también los más pobres recursos⁷⁵.

Si bien se mantuvo la salida de los hacendados, el gigantismo de muchas de las empresas asociativas sólo benefició a las más articuladas al mercado mundial e interno, aun así las cooperativas de la costa (como la minería) volverían a jugar el papel de ser fuente de divisas para el desarrollo, aunque enfrentaban ya el problema de falta de innovación tecnológica y ausencia de políticas de diversificación productiva. En el mismo sentido, las sociedades agrícolas de

⁷⁴ Mejía, José Manuel "La norreforma agraria". Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC), Cambio y Desarrollo, Instituto de Investigaciones. Lima Perú. 1990. Pp. 56.

⁷⁵ Mejía, José Manuel Op. Cit. Pp. 31

interés social (SAIS) en la sierra sufrían graves limitaciones por la deficiencia de carreteras que las comunicaran con el exterior y aún con sus propias tierras de cultivo ubicadas a dos o tres días de camino, generando problemas de difícil solución a los administradores tanto para mantener el contacto con los campesinos y llevar adelante la gestión de las empresas, como para la comercialización de los productos.

A pesar de irse imponiendo las políticas neoliberales, el gobierno de Belaúnde no pudo pues enfrentar ampliamente la liberalización del campo, aunque sí propició la inversión privada a través de proyectos tendientes a lograr la diversificación de la producción y la ampliación de la frontera agrícola, estableciendo, además, la libre comercialización de los productos al disminuir la intervención del Estado e inaugurar un programa complementario de comercialización PROCOMPRA, aunada a la medida de generar procesos autónomos de investigación y extensión agropecuaria.⁷⁶ Se abrió pues la estructura de la propiedad agraria a la capacidad de los campesinos de decidir sobre las modalidades o no de asociación, desmontándose todo el aparato institucional del Estado relacionado con las formas asociativas creadas durante el gobierno de Velasco Alvarado, reorganizando el vinculado con la comercialización de productos, limitando el apoyo financiero a las empresas asociativas y, en general, restringiendo la capacidad de intervención del Ministerio de Agricultura.

Aunque la producción agrícola verificó un crecimiento cercano al 10% en 1981 y 2.5% en 1982, los problemas de la crisis en el campo se agravaría en los años siguientes: de un lado, no se sostuvieron los programas de inversión privada dado que la estructura financiera se encontraba cada vez más golpeada por los compromisos adquiridos y por los acontecimientos mundiales de la crisis. El gigantismo de algunas empresas resultaba incosteable para los cooperativistas, más aún si no se impulsaba una política de recambio tecnológico tendiente a establecer cadenas productivas agroalimentarias de corte industrial; de otro lado, la falta de apoyo a los campesinos en la creación de un contrapeso administrativo y de gestión propia en las empresas asociativas de la sierra, la ausencia de

políticas más firmes, encaminadas a los pequeños propietarios y a las comunidades campesinas de la sierra y selva que no habían sido afectas por la reforma agraria. Asimismo, las deficiencias en los programas de educación, capacitación y asesoría técnica que apoyaran la devolución de las tierras a sus comunidades, la carencia de otras medidas relativas al fortalecimiento de los pequeños y medianos propietarios, en fin, una multiplicidad de problemas acumulados que no hicieron sino abonar en una pobreza que se profundizaba sobre la ya acumulada escasez. Este rezago ancestral del mundo serrano sería el caldo de cultivo donde emergió el grupo guerrillero más violento de la historia del país, Sendero Luminoso.

Belaúnde significó, sin duda, una vuelta a la democracia, un retorno al funcionamiento institucional de los organismos del Estado, una suerte de limpieza de sus rasgos más autoritarios vía la ubicación de civiles en todos los puestos de gobierno y la depuración de las esferas más altas del aparato militar; la alianza de su Partido Acción Popular con el Partido Popular Cristiano le imprimía del sello democrático moderno de mayor desarrollo político sustentado en el apoyo de los estratos altos de la sociedad, de la más depurada intelectualidad democrática de centro derecha y de sectores de las clases medias del país.

Aunque pretendió una política de ajuste de corte neoliberal, las fuerzas sociales en ascenso, movilizadas en lucha por sus demandas y en contra de la reversión de algunas de las reformas velasquista, y debido a su propio antecedente populista, optó más bien por desarrollar una política de estímulo a las importaciones sustitutivas, y algunos programas sociales, mermando las posibilidades de coherencia y consecución de una estabilidad que el país requería para el corto y mediano plazo.

²⁰ Méjia, José Manuel, Op. cit. Pp 43.

2. ALAN GARCÍA: ENTRE EL NEOLIBERALISMO Y LA HETERODOXIA.

En 1985 sería la primera vez que el APRA accedería al poder y lo hacía sin contrapesos mayores, con el retiro de Alfonso Barrantes tras los resultados de la primera vuelta electoral en el que obtuvo un 22% de la votación, la izquierda había votado por García en la segunda vuelta. Alan García había realizado lo que el reconocido líder del aprismo Víctor Raúl Haya de la Torre no había logrado desde la fundación de su partido en 1930, ejercer la Presidencia de la República; sería pues el primer presidente aprista y con sus 36 años, el más joven en la historia del país.

"Después del ensayo semiliberal del gobierno belaudista, el APRA, con Alan García como presidente, recibió una economía en recesión y una alta tasa de inflación, aunque con un saldo positivo de reservas internacionales y un déficit fiscal no muy alto... Los resultados electorales castigaron duramente al gobierno de Acción Popular, cuyo candidato apenas obtuvo el 7% de los votos, mientras que García triunfó con un abrumador 53%. En estas circunstancias, la política económica fue una mezcla de keynesianismo y estructuralismo, subordinada al estilo populista que impondría el presidente García, ciertamente opuesto al gobierno anterior".⁷⁷

Como podemos ver, ésta será una experiencia de retorno hacia modalidades de gestión gubernamental que precisamente se encontraban en pleno proceso de cuestionamiento y eran el fundamento de la crítica neoliberal que se imponía a nivel mundial en el contexto de la globalización. Como ya se trató, la historia política del siglo XX del Perú había discurrido entre procesos dictatoriales y gobiernos civiles que, a su vez, asumieron las formas autoritarias de ejercicio del poder. En el terreno económico no hubo en el país una política de estado a la cual los distintos regímenes le dieran continuidad, aproximadamente

⁷⁷ Gonzalez de Olarte, E. Y Samamé L. "El Péndulo Peruano: Políticas económicas, gobernabilidad y subdesarrollo, 1963-1990". Consorcio de Investigación Económica. Instituto de Estudios Peruanos. Lima, Perú. 1991. Pp 34

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

en los últimos treinta años cada gobierno asumía el poder como si se tratara de borrón y cuenta nueva. El experimento aprista retomaba el carácter pendular de las políticas de los quinquenios, aunque ahora vuelto hacia algunas de las reformas impulsadas por el velasquismo.

El gran dominio del discurso y su alta capacidad de convocatoria colocarían a García en el pináculo de la fama, y serían los elementos que lo arrastrarían hacia una acelerada deslegitimación de su gobierno en el plano interno y a una confrontación con las tendencias neoliberales que ya se habían ido imponiendo a nivel mundial.

Los problemas acumulados hasta el momento y las políticas heterodoxas impulsadas por Alan García (1985-1990) llevaron al Perú a una quiebra dramática de su economía, expresando así, la síntesis explosiva de una historia plagada de inestabilidad económica, "la industria sustitutiva de importaciones devino en un débil y costoso capitalismo asistido, y el Estado fuerte e intervencionista se ha transformado en un Estado subsidiador y prebendista que ha dado origen a una de las grandes crisis fiscales de este siglo"⁷⁸.

Como bien sostiene John Sheahan, antes de los años setenta la protección se basaba principalmente en tasas de aranceles, cuando los aranceles mismos eran bajos; posteriormente, en los años setenta y entre 1985-1990, el proteccionismo se basó mucho más fuertemente en restricciones cuantitativas⁷⁹, porque se produciría en el curso de estos años grandes limitaciones para elevar el volumen de las importaciones dada la escasez de recursos financieros y la elevada cotización del dólar. Basados en esta orientación de la política económica, los sectores más importantes de la burguesía industrial restauraron una suerte de relación clientelar con el Estado, instrumentando a su favor las políticas proteccionista y populistas del gobernante de turno.

⁷⁸ Lopez, Sinesio. "El Perú de los 80: Sociedad y Estado en el fin de una época". En Varios Autores: Estado y Sociedad: Relaciones peligrosas. Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo. DESCO. Lima - Perú, 1990.
⁷⁹ Sheahan John. "La Economía peruana desde 1950. Buscando una sociedad mejor" Instituto de Estudios Peruanos. Lima Perú, 2001. Pp. 121.

Como ya expusiéramos anteriormente, segmentos importantes de ella habían optado por el camino de trasladar sus capitales y sus empresas hacia otros países latinoamericanos, ahora, con la crisis de su propio sistema de representación partidaria, los que quedaron optaron por el acomodo individual. Como antes, no tenían propuestas ni un discurso que las vinculara con las necesidades inmediatas de su propio sector social y menos aún con las necesidades del país y de la mayoría de la población. Mientras tanto los emergentes sectores de industriales medios y pequeños no encontraban aún una forma de organización corporativa propia ni la expresión partidaria que pudiera desarrollar con ellos una capacidad de interlocución e intermediación.

"García y el APRA replicaron un gobierno en el más puro estilo populista durante cinco años....su nacionalismo antiimperialista se tradujo inicialmente en su tesis de pagar sólo el 10% de las exportaciones por concepto de la deuda externa y en las relaciones conflictivas con el capital extranjero"⁸⁰, promoviendo la formación de un frente latinoamericano para lograr el refinanciamiento de la deuda externa, condicionando su pago a las posibilidades de los países y al que México no dio cabida al firmar el Plan Brady con los Estados Unidos. La insistencia en este tipo de política internacional dejaría más tarde al Perú fuera de los circuitos financieros internacionales, suspendiéndose los préstamos del Fondo Monetario Internacional, los avalados por él en los países desarrollados y los programas de cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.

El país testificaría una alta concentración del liderazgo político en la persona de García, al punto en que todas las iniciativas sectoriales debían pasar por su control carismático del poder, como bien exponen Gonzáles de Olarte y Samamé, tanto que él lanzó, a mediados de 1987, de manera inconulta y sorpresiva la iniciativa de estatización de la banca desatando la oposición de la burguesía industrial y los grupos financieros quienes lograron aglutinarse como un frente opositor, esta vez alrededor de la figura de Mario Vargas Llosa que lideraba el Movimiento Libertad, recientemente creado por él y otros intelectuales de la derecha peruana como Hernando de Soto.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Con la política económica implementada se trató de lograr la redistribución de los ingresos, orientándose básicamente a sostener el apoyo popular, y se buscó establecer estímulos sostenidos para los industriales mediante la aplicación de aranceles altos y la implementación de diversos mecanismos de control a las importaciones. Las medidas antiinflacionarias tuvieron éxito durante los dos primeros años de gobierno, reduciéndose de más de 100% alcanzada en los últimos años del régimen de Belaúnde, a un 60%. En esos dos primeros años, el crecimiento del PIB ascendió a 20%, atribuible a los estímulos al consumo social a través de las políticas redistributivas, al uso de la capacidad productiva ociosa dejada por las políticas recesivas del periodo anterior y, entre otros factores, a la disponibilidad de divisas.⁵¹

Sin embargo, este fortalecimiento del mercado interno en el que todos los sectores aparecían beneficiados dejaba a la economía en una situación extremadamente frágil, sobre todo en lo que respecta a la incapacidad de renovación de equipo y a las dificultades presentadas por el sector primario exportador debido a la política monetaria que no lo favorecía, aunándose a la reducida capacidad y baja competitividad de las exportaciones manufactureras.

La orientación hacia la vertiente nekeynesianas llevó a García a desarrollar una política económica claramente contradictoria con las tendencias del momento. "en vez de detener la inflación restringiendo la demanda a través de políticas de contracción monetaria y fiscal... lo hizo por medio de controles directos sobre salarios, precios, tasas de interés y de cambio. En contraste con la larga tendencia descendente de los salarios reales bajo los dos gobiernos precedentes, decretó un salto por una sola vez....prometió dar prioridad a la agricultura y al desarrollo rural, en lugar de pagar con las escasas divisas los compromisos de la deuda"⁵², se envolvió en la idea del pago parcial de la deuda y terminó por ser aislado en el mundo financiero internacional. Para fines de 1987 el gobierno continuó con su política fiscal a pesar de que ya se manifestaba una situación

⁵⁰ Gonzáles de Olarte, E. Y Samame L. Op. Cit. Pp. 34

⁵¹ Gonzáles de Olarte, E. Samame L. Op. Cit. Pp. 35

⁵² Sheahan, John. Op. cit. Pp. 187

crítica con la disminución significativa de las reservas internacionales, y frente a la cual no fueron suficientes los reajustes cambiarios ni nuevas medidas en la política monetaria, de forma tal que el déficit fiscal y la presión inflacionaria empezaron a desatarse con mayor virulencia que antes.

Es indudable que los dos primeros años esas medidas funcionaron, permitieron una fuerte reacción en la producción dados los estímulos importantes a la demanda. "El PNB per cápita aumentó en 14% entre 1985 y 1987. (En este último año) el gasto comenzó a sobrepasar el nivel de crecimiento de la oferta; los recortes y las presiones hacia arriba sobre los precios comenzaron a extenderse. La respuesta del gobierno fue elevar los subsidios y sujetarse firmemente a los precios fijados para las empresas públicas, a pesar de los costos crecientes. Los precios relativos de los servicios públicos y del petróleo y la gasolina ofrecidos por PetroPerú cayeron hasta niveles absurdamente bajos y crearon déficits aún mayores, financiados por créditos cada vez más grandes".⁸³

También esas políticas tuvieron un impacto positivo en el ámbito rural, el gobierno propuso la reactivación del campo mediante la creación en 1986 del Plan de Reactivación Agraria y Seguridad Alimentaria, "mediante el cual se buscaba el incremento sostenido de la producción en base a una decidida intervención estatal que tendiera a controlar los precios, administrando los subsidios al productor, manteniendo un tipo de cambio preferencial para bienes de capital y aplicando una política de crédito a tasas por debajo de su valor real, que incluso llegaban a cero en las zonas más deprimidas del Trapecio Andino".⁸⁴

En la fase inicial del gobierno, 1986 y 1987, se logró avances sustanciales con la expansión del crédito agrícola, que se elevó gracias a la forma más explosiva de implementarlo mediante fondos directos del Banco Central, creció la producción agrícola hasta casi un 20% y se produjo un incremento sustancial de los ingresos campesinos, calculándose que entre 1985-1986 éstos se elevaron, vía precios e incremento salarial, un poco más del 32%. Ésta parece haber sido la etapa de mayor capitalización del campo. A pesar de esos logros, la presión sobre

⁸³ Sheahan, John. Op cit. Pp. 189

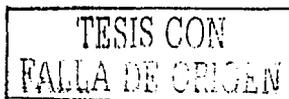
las finanzas del Estado desbordaron su capacidad desatándose un proceso inflacionario que en los tres años siguientes superaría el 10 000%.

Tanto en el ámbito industrial como en el sector agrario los elementos de la crisis hicieron eclosión, en 1988 se intentarán políticas económicas de ajuste gradual aunque ellas estaban signadas por una heterodoxia de corte populista que finalmente se adscribían a la personalidad de un líder carismático que no quería perder terreno. La crisis y definitivamente la falta de sensibilidad política del gobernante aprista para implementar una política económica de mayor consistencia, que evitara la acelerada inflación y la depauperación de la población, hicieron que en la esfera política el Estado apareciera sin brújula, perdiendo su capacidad de constituirse en un referente de manejo ordenado de la economía, vaciando de contenido a las instituciones democráticas de representación política y social y al aparato institucional del Estado, extendiéndose a nivel de la sociedad la percepción de la falta de eficiencia y legitimidad

3. CRISIS POLÍTICA E INSTITUCIONAL. LA RUPTURA DE REFERENTES DEMOCRÁTICOS, EL CAOS ECONÓMICO Y LAS ASPIRACIONES SOCIALES DE ORDEN.

El desmoronamiento del gobierno de Alan García y de las instituciones del Estado se fue tornando más palpable en la medida en que arreciaban los efectos de la crisis sobre la población, en tanto el gobierno no lograba controlar la inflación galopante, en la medida en que el discurso populista y redistributivo se convertía en el reflejo de la incapacidad para atender las demandas más urgentes de la población y se acentuaba cada vez más la corrosión de los canales de relación entre el estado y la gran mayoría de la población. Complementariamente, y rotos los controles básicos de funcionamiento, gran parte de la burocracia estatal pauperizada por la crisis encontraba en la corrupción una fuente de ingresos, de manera que esos y otros problemas fueron creando una crisis de gobernabilidad, traducida en el debilitamiento de la autoridad del Estado en vastos sectores de la población y en la mayor parte de regiones del país.

¹¹ Mejía, José Manuel. Op. Cit. Pp. 69.

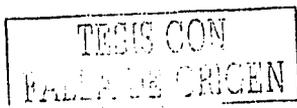


Esa decreciente legitimidad y la profundidad de la crisis agravaron los problemas sociales, debilitaron la capacidad de convocatoria de las instituciones del Estado para el ejercicio elemental de sus funciones públicas, vaciándose de contenido no solo el discurso estatal, sino el de los partidos políticos y sus dirigencias. Se profundizó la brecha entre las fracciones dominantes y el conjunto de la población, y en ese proceso de empobrecimiento generalizado ciertos estratos medios optaron por la migración internacional, mientras que la gran mayoría de ella se fue empobreciendo, tornándose más vulnerable y perdiendo el papel previo de interlocutora política de los estratos dominantes y de relativa intermediación de las demandas populares. Esos sectores vieron disminuida su capacidad de convocatoria social, por lo que con frecuencia tuvieron que establecer alianzas y movilizarse con otros sectores de la sociedad.

Es ese sentido, la crisis produjo una profunda descomposición de los mecanismos de control del Estado, al punto en que la legislación parecía haberse vaciado de contenido por la corrupción generalizada. El terrorismo, el narcotráfico, la represión indiscriminada y la violencia cotidiana no sólo se agravaron sino que actuaron debilitando los espacios democráticos que con esfuerzo habían logrado construir los trabajadores, los campesinos y pobladores de las distintas regiones del país. Peor aún, frente a esa situación, "las políticas económicas no tomaron en cuenta los efectos sociales devastadores de la violencia e inseguridad ni la implacable actividad destructiva de la subversión ni la corrupción generada por el narcotráfico, solo se orientaron a considerar el gasto militar y policial."⁵⁵

Esa dinámica se tradujo en una profunda debilidad y crisis de los partidos y elites políticas tradicionales. El APRA agotó durante el gobierno de Alan García sus referentes populistas y su sustento de convocatoria nacionalista y antiimperialista. Tanto este partido como los de izquierda, que habían jugado un papel importante en el proceso de transición de los gobiernos militares de la década del 70, con su participación en la Asamblea Constituyente de 1979 y la elección democrática de los siguientes gobiernos civiles, fueron alcanzados por la

⁵⁵ Gonzales de Olarte, Efraim. "Una economía bajo la violencia. Perú 1968-1990" Documento de trabajo No. 40. Instituto de Estudios Peruanos, Lima Perú. 1991.

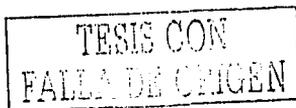


crisis política y social al punto que los llevó a su atomización y profundas divisiones.

Los partidos de izquierda habían ejercido una influencia fundamental en "el proceso de modernización y de modernidad del movimiento popular, ... (y conforme éste fue creciendo)... desarrollaron lo que Sinesio López ha llamado una 'nueva nacionalidad popular'... (Sin embargo,... los rasgos premodernos de esta izquierda se irán acentuando...(debido, en parte, a que eran)...tributarios de una cultura y de un mundo oligárquico, tal vez por la procedencia de sus elites".⁸⁶ En su dogmatismo y su mayor adhesión al discurso cerrado emanaban formas autoritarias de ejercicio del liderazgo y una verticalidad propia de aquellos que tenían acceso a los conocimientos. Se preocuparon más por la militancia adscrita a ciertos planteamientos generales que por el análisis de los procesos contradictorios y complejos que se verificaban en el país; por lo mismo, terminaron por segmentarse en grupos altamente confrontados, rompiéndose la alianza de la Izquierda Unida y atomizándose muchas de las organizaciones que la componían. En un terreno distinto al electoral, Sendero Luminoso constituirá la expresión más extrema de ese dogmatismo, radicalismo y autoritarismo de influencia maoísta.

Mientras tanto la pobreza se extendía en el Perú, como se extendieron las aspiraciones por un ordenamiento básico de la vida cotidiana y de las actividades económicas; "necesitamos un Pinochét." era parte del clamor de diversos sectores agotados por el abismo que les ofrecía el futuro, volvían los ojos hacia la opción dictatorial como recurso de salida política al "caos causado por la democracia." Frente a esta pérdida de noción del futuro y dada la inseguridad causada por el terrorismo y por el crecimiento sin precedentes de la delincuencia, la memoria histórica se aferraba al pasado rescatando sesgadamente algunos de los logros de los regímenes dictatoriales, restándole valor a los gobiernos civiles y a todo cuanto se relacionara con el desarrollo de la vida institucional democrática, signados ahora con el desorden y caos.

⁸⁶ Adrianzén, Alberto "Tragedia e ironía del socialismo peruano". Revista Pretextos No 1, agosto. División de Investigaciones del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo. DESCO. Lima- Perú. 1990.



A modo de ilustración proporcionamos algunos datos estadísticos que fríamente informan sobre el drama que aquejaba a la población del país a fines del gobierno de Alan García e inicio de las políticas de shock con el régimen de Alberto Fujimori. "El producto interno bruto por persona que en 1980 ascendía a 938 dólares, se redujo a 718 dólares en 1989; entre 1985-1986 el 20% de la población más pobre apenas recibía el 3% del ingreso, mientras que el 10% más rico recibía el 45%".⁸⁷ "Entre 1986-1990 el índice de precios al consumidor se elevó en 10,300%".⁸⁸

Como veremos más adelante, no es casual que las políticas de shock aplicadas por el gobierno de Fujimori en agosto de 1990, con el más claro intento de seguir el modelo chileno para lograr la estabilización y ajuste estructural requerido por el Fondo Monetario Internacional y destrabar las líneas de crédito y financiamiento internacional negados al gobierno anterior, fueran finalmente aceptadas por la población con un heroísmo espartano y con un sacrificio social que dice mucho sobre esas aspiraciones de orden aún en la pobreza.

Fujimori detuvo esta tendencia con medidas draconianas apoyado por una población que aún en la pobreza requería un mínimo de ordenamiento y estabilidad. En ese contexto, y como parte de la política económica implementada para reincorporar al Perú al sistema financiero internacional, se canalizaron proporciones considerables de los ingresos fiscales al pago de los servicios de una deuda externa que sobrepasaba los 15 mil millones de dólares; esto evidentemente, a costa de los salarios extremadamente bajos, de la carencia de servicios urbanos básicos que agravaron la expansión de la epidemia del cólera y otras enfermedades, de la falta de presupuesto para atender los servicios sociales más elementales y afrontar la reparación de las carreteras destruidas por efecto de los desastres naturales provocados por el fenómeno del Niño.

⁸⁷ González de Olarte, E. Op. Cit. 1991

⁸⁸ Dejo Federico: "La crisis en cifras". Universidad Nacional Agraria – La Molina. Lima Perú. Pp.6

4. LA EMERGENCIA DE LOS SECTORES POPULARES EN EL ESCENARIO SOCIAL. LA RECONFIGURACIÓN DEL PERÚ COMO PAIS ANDINO.⁸⁹

En la medida en que los procesos de descomposición del sistema económico político se iban acénuando, fue mostrándose descarnadamente un problema históricamente incubado en el Perú: la debilidad constitutiva del país como nación. La profunda diferenciación regional, en la que la mayor parte de la población indígena resultaba altamente marginada, la extrema pobreza del campesinado, los movimientos sociales y paros regionales exigiendo al Estado recursos y políticas que promovieran el desarrollo de las provincias, y, entre otros problemas, el surgimiento de grupos políticos como Sendero Luminoso que optaron por las acciones terroristas, abrieron a los ojos del país y especialmente de la costa la dimensión andina del Perú, cuya marginación económica, social, política y cultural habían sustentado su desarrollo.

⁸⁹ Gran parte de este apartado ha sido elaborado basándonos en un trabajo que publicáramos en 1993: Madueño Paulette, Ruth "Identidad y Nación en el Perú, apuntes para un análisis" en *Identidades y Nacionalismos*, libro coordinado por Lilia Granillo, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, México, 1993. Pp. 259 a 308.

EL TERRORISMO.

Es importante referirse aquí, precisamente, a la incursión de Sendero Luminoso en el panorama político y social del Perú. Aunque sus orígenes se remontan a la década de 1970, este grupo de extrema izquierda hizo su aparición el 31 de diciembre de 1980, con la voladura de las torres de alta tensión que abastecían de electricidad a gran parte del país: En realidad Sendero era resultado del aglutinamiento de diversos sectores de la Federación de estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional - La Cantuta, de la Universidad San Martín de Porras, jóvenes de distintos clubes provinciales y profesionales adscritos al magisterio, además de una serie de desprendimientos de varios grupos de la izquierda peruana como Bandera Roja y algunos ex militantes de Vanguardia Revolucionaria. Inició su maduración como grupo guerrillero en la década de 1970, a partir de la acción de los normalistas que trabajaban como maestros rurales en diversas provincias de la zona norte del Departamento de Ayacucho, los cuales asistían a cursos vacacionales de capacitación en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, centro laboral de Abimael Guzmán y de otros de sus dirigentes.

Ayacucho es uno de los Departamentos de mayor atraso en el Perú, forma parte del llamado trapecio andino junto con los Departamentos de Puno y Cuzco: En él, no se han impulsado políticas de desarrollo agrario consistentes ni cuenta con una base mínima manufacturera que diera cabida laboral a los hijos de los campesinos que se educaban en la región. Los jóvenes no tenían salida hacia el futuro ni emigrando a otras partes del país y menos aún quedándose en sus lugares de origen, dado el grado de deterioro de la producción campesina y la pobreza rural extrema. Fueron precisamente los jóvenes el sector más dispuesto al discurso y a la militancia senderista, su adoctrinamiento se llevó a cabo a través de maestros rurales que sabían el idioma quechua y conocían profundamente la cultura y tradiciones locales, la mayoría de ellos eran originarios de la región, y fue a través de los maestros, que los senderistas lograron también la simpatía de sectores de la población indígena.

La noción prioritaria de Sendero se basó en una interpretación propia de los planteamientos originales y más radicales maoístas. Se trataba de iniciar la revolución en el campo para llevarla a la ciudad, estratégicamente había que atacar toda expresión de explotación en el campo dado que la cadena imperialista había extendido sus tentáculos a todo los rincones del territorio nacional a través de propietarios agrícolas locales, comerciantes, autoridades, etc.

Lo que inicialmente se conoció como la guerra de guerrillas, lentamente fue apareciendo a los ojos del país como el desarrollo de estrategias y tácticas terroristas en la que se vieron envueltas gran parte de la comunidades andinas del sur y centro del país. Al ajusticiamiento en las plazas públicas de aquellos calificados como explotadores y representantes de la cadena imperialista, le sucedieron incursiones en las comunidades para obligarlas al abastecimiento de alimentos a la militancia de Sendero, amenazándolas por si ellas "cooperaban" con las fuerzas represivas. Una vez desatada la represión indiscriminada por parte del Estado, también el ejército incursionaria en las comunidades abasteciéndose de alimentos, asesinando aquellos considerados sospechosos de pertenecer a Sendero, encarcelando a cientos de campesinos y amenazando a los pobladores por si "ofrecían" su colaboración a esa organización y a los "terrucos".⁹⁰

Comunidades indígenas y pueblos enteros se vieron colocados entre dos fuegos; más tarde, la expansión de las acciones de Sendero a zonas de la sierra, a otras regiones del territorio nacional como la ceja de selva y algunas ciudades de la costa peruana, especialmente Lima, y la represión indiscriminada, repercutieron gravemente en el escenario social y demográfico del país, provocando el vaciamiento de un número indeterminado de zonas rurales y la migración de casi la totalidad de la población de muchas comunidades indígenas.

No hay duda del impacto social ejercido tanto por las acciones terroristas de Sendero como las de contrainsurgencia de los aparatos represivos del Estado no sólo alimentaron condiciones reales y anímicas de inseguridad en gran parte del

⁹⁰ Las comisiones y organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos calculan que como resultado de la represión, iniciada por el gobierno de Alan García y acentuada durante el régimen de Fujimori, y de las acciones terroristas murieron en el Perú aproximadamente 22, 000 personas.

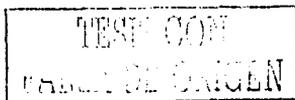
país, sino profundizaron la ausencia de noción de futuro, la pobreza y la carencia de institucionalidad estatal que contrapesara la presencia del ejército, por el contrario, en vastas regiones del territorio nacional los aparatos básicos del estado pasaron a ser controlados dictatorialmente por los militares.

Estos acontecimientos no solo reconfiguraron la distribución demográfica de la población en todo el territorio y definieron modificaciones sustanciales en la estructura social de muchas de las provincias y distritos, sino que reprodujeron de forma potenciada la experiencia social ya vivida en otros momentos de la historia del país: el vuelco de un gobierno civil que pierde la brújula y retoma el camino de la represión indiscriminada a los más excluidos entregando a los militares la facultad discrecional de ejercicio del poder. En otras regiones menos asediadas por el terrorismo y la represión como la sierra norte, la corrupción y la frágil presencia institucional del Estado generó respuestas organizativas innovadoras de los campesinos, las cuales se extendieron por diversas partes del territorio nacional.

4. 1. EL "DESBORDE POPULAR" DE LA DÉCADA DE 1980.

En el contexto de estos acontecimientos, y a contracorriente de esos y otros desencuentros históricos, tanto la crisis como el terrorismo y la represión potenciaron otros procesos sociales que venían desarrollándose desde décadas anteriores, llamando la atención y golpeando los ojos de cualquier observador. Nos referimos a las profundas transformaciones sociales que gestaron los de abajo, precisamente esos pobladores andinos y los sectores populares, de origen también andino, y que adquirieron un dinamismo insospechado en todo el Perú durante las décadas de 1980 y 1990, pero especialmente en la de 1980.

Se trató de una dinámica signada por la presencia de los sectores populares en el escenario social, dándole a éste una nueva fisonomía dado que esos sectores marginados habían "penetrado todos los ámbitos de la sociedad civil imprimiendo un modo popular, informal de nacionalizar el país, imponiendo



formas de vida cotidiana, estilos de sobrevivencia, y sobre todo, planteando aspiraciones y demandas que ya nunca podremos darnos la ilusión de ignorar."⁹¹ Esos sectores no sólo exigirían ser incluidos en el discurso, sino que, como sus antecesores de las clases medias, trabajadores y campesinos, abrieron los espacios políticos y sociales de participación, ciudadanizando más universalmente a los peruanos, y ejerciendo su papel como actores sociales de las transformaciones que ocurrían en el país.

Se trató de "un desborde en toda la dimensión de las pautas institucionales que encausaron la sociedad nacional... (Esa)... dinámica procede de la movilización espontánea de los sectores populares que, cuestionando la autoridad del Estado y recurriendo a múltiples estrategias y mecanismos paralelos, están alterando las reglas de juego y cambiando el rostro del Perú."⁹²

Esos procesos transformaron la sociedad, la cultura y la política, redefinieron la percepción del mundo urbano y rural, y cambiaron la vida cotidiana porque crearon, "sutil e incesantemente, nuevas pautas de conducta, valores, actitudes, normas y estilos de vida."⁹³ Con ellos y a su interior se forjaron nuevos intereses, nuevas formas de participación ciudadana y, en esa dinámica, los problemas comunes abrieron paso a un potencial solidario que, expresado en múltiples formas de organización social y en una dinámica innovadora en el terreno económico y cultural, dio nuevos contenidos a una sociedad civil en formación y a actores sociales que creaban alternativas propias frente a la ausencia de política sociales y a los vacíos institucionales de carácter gubernamental.

En un orden paralelo, esos acontecimientos permearon la afirmación de una identidad más universalmente nacional, así como la reconfiguración del país como nación de raíces andinas, al acelerar inusitadamente la cholificación y mestizaje en el escenario peruano, al desarrollar creativamente, y en respuesta

⁹¹ Yepes, Ernesto. "De Pizarro a Fujimori". En la revista Páginas. Agosto-septiembre. Centro Bartolomé de las Casas. Lima-Perú. 1990. Pp. 46

⁹² Matos Mar, José. "Desborde popular y crisis del estado, el nuevo rostro del Perú en la década de 1980". Serie Perú problema 21. Instituto de Estudios Peruanos. Lima-Perú. 1985. Pp. 18.

⁹³ Matos Mar, José. Op.cit. Pp 18.

espontánea a la crisis, formas colectivas de presión por soluciones de consenso en que la diversidad y heterogeneidad cultural debían ser tomadas en cuenta.

No se trató sólo de un cuestionamiento a la falta de perspectiva histórica de las clases hegemónicas y del Estado al construir la nación, sino cómo, a pesar de la exclusión histórica de que fueron objeto, a partir de ella y en respuesta a la misma y a los efectos de la crisis, los sectores populares fueron abriendo un abanico de posibilidades organizativa de las cuales germinaba una nueva institucionalidad más democrática e incluyente que les permitió desarrollar diversas estrategias de sobrevivencia presionando, a la vez, por sus demandas e intereses, e interactuando con el Estado, con las clases hegemónicas y con otros sectores de la sociedad.

Esa dinámica influyó sobre el discurso social y político y en la acción social de los gremios de los trabajadores, de los informales, y eventualmente, se articularon con los partidos, municipios u organizaciones emergentes, dando como resultado una gama diversa de procesos sociales en muchas de las regiones del territorio nacional.

a. LAS MIGRACIONES.

La presencia de los sectores populares en el escenario urbano tuvo su origen en las migraciones campesinas de la década de 1950, las cuales se incrementaron en las décadas siguientes, teniendo un punto de aceleración explosiva durante el periodo de la crisis, especialmente en la década de 1980. No cabe duda que la crisis con su secuela de expansión de la extrema pobreza en el campo, las acciones del terrorismo, especialmente en la sierra y en las zonas de mayor rezago, y la política represiva del gobierno que finalmente colocó entre dos fuegos a las poblaciones de cientos de provincias y distritos, fueron el acicate de los procesos migratorios masivos de las dos últimas décadas del siglo XX.⁹⁴ Esas

⁹⁴ De acuerdo al Censo de 1940, el 64% de la población del Perú vivía en las zonas rurales y el 36% en las ciudades; la población total era de 7 millones de habitantes. En 1980, esa distribución espacial se había invertido a 65% de residentes en las ciudades y 35% en las zonas rurales, la población total había crecido a 20 millones, y Lima albergaba a un tercio de la misma. De acuerdo a los cálculos realizados por Carlos Contreras

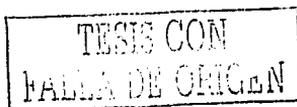
migraciones se orientaron no solo hacia la capital sino a otras ciudades de la república y a regiones agrícolas de reciente dinamismo, como la ceja de selva, sea por el crecimiento en la producción de alimentos como por la atracción que ejerció el cultivo de la coca ligada al narcotráfico. Al respecto, las cifras eran elocuentes ya que más de 200 000 campesinos se dedicaban a la producción de coca, en 1987 se sembraban 93 000 hectáreas y en 1989 ese producto representaba el 4.7% de PIB total.⁹⁵

A diferencia del migrante de las décadas de 1950-1960, que encontraban en las ciudades una relativa posibilidad de progreso con su paulatino acceso a la educación, su incorporación más o menos estable a un empleo y a la lenta pero progresiva modificación de sus viviendas precarias utilizando material noble, el migrante de las décadas de crisis se ha enfrentado a ciudades precarias, ha invadido espacios que se ubican en la periferia de la periferia y sólo ha podido construir sus viviendas con esteras u otros materiales ligeros. Su desafío mayor ha sido enfrentar los problemas de sobrevivencia y de salud. Ha inundado no sólo la ciudad sino las barriadas como micro vendedor ambulante o prestador de servicios, accediendo a la educación con enormes dificultades y no contando en las zonas invadidas con los servicios urbanos básicos.

Al respecto, los pobladores de las barriadas y aún los de otros estratos medios y populares han ido desarrollando la convicción de que el trabajo independiente y cierto nivel de capacitación técnica son los mejores vehículos para progresar que los estudios universitarios. Sin duda este problema tiene relación con los cambios en la valoración del éxito, con las remuneraciones bajas y la gran desocupación de los profesionales universitarios.

y Marcos Cueto, Op. Cit. Pp 253, para 1993 la población peruana sumaba cerca de 22.7 millones. Los mismos autores muestran que en 1941 la población urbana ascendía a 53%, mientras que la rural a 47%, (Pp. 261), mientras que en 1961 llegaban a 49.7% y 50.3% respectivamente (Pp 284); calculamos que para 1993 la proporción cambio radicalmente, la población urbana habría llegado a representar casi un 70% y la rural entre el 25 y 30% de la población total. Por ejemplo, se produjo un retroceso demográfico en el Departamento de Ayacucho como producto de la violencia senderista y la gran represión impulsada por el Estado, allí la población disminuyó drásticamente con respecto al censo de 1980. (Pp.351).

⁹⁵Gonzales de Olarte, Efraim "Una economía bajo la violencia: Perú 1980-1990." Documento de trabajo No. 40 Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Lima-Perú. 1991

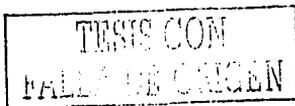


Es fundamental señalar que el migrante, mayoritariamente andino, se trasladó a las ciudades con los elementos culturales de su lugar de origen. Es reconocido por todos los estudiosos e investigadores sociales de la realidad peruana, que en la sierra han sobrevivido históricamente muchos de los rasgos culturales básicos que han sustentado las relaciones de reciprocidad, cooperación e intercambio de la población indígena. La mentalidad del migrante traduce esas y otras referencias culturales y se ha expresado cotidianamente de forma recreada, aunque de manera conflictiva, en un mundo en el que el mercado iba imponiendo formas individuación y competencia.

En ese sentido, la formación de las barridas ha significado un estilo "andino" de apropiación de las ciudades. Los migrantes recrearon los espacios andinos en el sinnúmero de clubes provinciales y distritales que han organizado, ahí recrean sus costumbres, sus fiestas, su música y sus tradiciones, efectúan matrimonios, establecen relaciones con sus paisanos, practican la reciprocidad, piden favores a cambio de lealtad y gratitud; se preservan, asimismo, las identidades locales y practican, a la vez, formas urbanas de comportamiento social. Los clubes han servido y sirven como mecanismos de adaptación al mundo urbano, funcionan como la referencia más cercana al mundo subjetivo de los migrantes que diariamente se confrontan con los espacios conflictivos, inseguros, adversos, nuevos y precarios de las ciudades.⁹⁵

En un recorrido que hiciéramos por algunas provincias del Departamento de Ayacucho, pudimos observar que los pueblos de las provincias y distritos también cambiaron sus referentes de actividad económica, social y cultural, se vieron invadidos masivamente por migrantes provenientes de las comunidades indígenas no sólo de las regiones más cercanas sino de diversas partes de la república. Estos migrantes y la llegada transitoria o definitiva de vendedores de productos, de micro empresarios y prestadores de servicios han ido transformando, a su vez, la vida cotidiana y la cultura andina. Aunque se preservan los elementos culturales propios de la provincia, ella ha sufrido la influencia de las grandes ciudades debido

⁹⁵ En 1993 se calculaba que en Lima existían aproximadamente 6 000 clubes distritales, 120, provinciales y 17 departamentales organizados por los migrantes.



también al retorno temporal de los migrantes y al tránsito cotidiano de personas de otras latitudes. Es indudable que la música andina ahora fluye con el estruendo de la salsa, la música chica y el rock, la vestimenta presenta un perfil más costeño y urbano combinándose con el colorido propio de la vestimenta indígena. Las fiestas locales ahora son motivo de retorno de los migrantes; con su presencia ellas van adquiriendo un sentido diferente y en el que se combinan el turismo con la añoranza por los referentes propios, a pesar de ello, todavía esas fiestas se realizan con los ritos y las costumbres locales de reciprocidad, como la distribución de alimentos y bebidas por las comunidades a toda persona que asista.

Las fiestas de fin de semana organizadas por los jóvenes que se quedaron en la provincia, adquieren el perfil de los eventos sociales masivos organizados en las barriadas de las grandes ciudades alrededor de los salsódromos o discotecas, los mecanismos provincianos de ordenamiento social a cargo de las instituciones del Estado aún parecen ser frágiles y poco definitivos, de manera tal que esas fiestas y eventos combinan lo bueno, lo malo y lo feo: dan sentido a una nueva vida social más abierta al mundo, pero es a la vez una oportunidad para los excesos de comerciantes y residentes, como el uso de locales reservados para la educación, así como la venta y el consumo de bebidas alcohólicas entre los jóvenes.

Lo indio, lo cholo y lo mestizo se combinan ahora en las provincias en un claro testimonio de que los estratos sociales más privilegiados y las aristocracias locales han desaparecido desplazados por esa dinámica social extendida de apropiación andina del país, sus casonas ahora funcionan como oficinas públicas o como lugares donde proliferan estudios fotográficos, oficinas de abogados, contadores y otro tipo de prestadores de servicios.

En un plano más amplio, las migraciones han acrecentado el racismo de los estratos medios y más altos, infinidad de cómicos que se presentan en los programas de televisión ridiculizan soezmente al cholo, las expresiones despectivas son frecuentes y aún parte de la producción literaria, como las

expresadas por el conocido periodista Jaime Baily⁹⁷, muestra palmariamente esa tendencia racista a la descalificación y al desprecio por el cholo en el discurso de sus personajes.

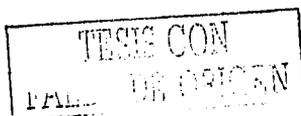
b. LA ECONOMÍA INFORMAL.

En el contexto de la profunda crisis que afectaba al país, esa confrontación de los migrantes con los espacios urbanos revistió un carácter dramático, especialmente por la urgencia de lograr recursos para sobrevivir. El crecimiento inusitado de la economía informal, ocasionó la proliferación en las ciudades de vendedores ambulantes, talleristas y una variada gama de prestadores de servicios, que desdibujaron el carácter "exclusivo" de algunos barrios de las principales ciudades, especialmente el de la capital, y quebraron las relaciones que estaban detrás de las posiciones de poder excluyentes.

Las ciudades se fueron transformando, se fueron "ruralizando". La música, los colores en el vestido, la manera de vivir, de transitar en ellas, el lenguaje, etc., confirmaban la expresión y presencia masiva de los migrantes. Como lo ha expresado Eliana Chávez, "Probablemente sea necesario remitirse a la invasión europea en América Latina y a la inserción dependiente de la cultura indígena en el contexto internacional a partir del siglo XVI, para entender mejor el proceso de mestizaje, los movimientos migratorios y las estrategias del empleo que la población rural desarrolla cuando llega a la ciudad... La migración no sólo significó el traslado de un territorio a otro, significó fundamentalmente transformaciones sustantivas en la cultura peruana. El rostro de la ciudad es eso, lo que hoy llamamos informales y sectores populares cuyas raíces indias y campesinas explican en parte el nacimiento de una nueva cultura".⁹⁸ Finalmente, el país retomó y adquirió su carácter andino

⁹⁷ Baily, Jaime: "No se lo digas a nadie". Seix Barral, 1994. Barcelona-España.

⁹⁸ Chávez, Eliana. " El empleo en los sectores populares urbanos: De marginales a informales". Varios Autores. De marginales a informales. Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO) – Centro DE Estudios de Democracia y Sociedad (CEDYS. Lima-Peru, 1990)



A diferencia de los que emigraron durante el periodo de 1950-1960, los que lo hicieron en las décadas de 1970 a 1990, invadieron masivamente los espacios urbanos como trabajadores informales, conquistaron su propio mercado laboral en las calles y avenidas compitiendo con una abigarrada gama de pequeños y micro vendedores ambulantes y prestadores de servicios. El impacto social y cultural de ese proceso, dimensionó una transformación cualitativamente más profunda del escenario peruano que los acontecimientos lejanamente similares ocurridos en los doscientos años de vida independiente.

Ese impacto puede analizarse haciendo referencia a algunos de los cambios culturales más palpables en la vida cotidiana de las ciudades, porque al tratar de conquistarlas y buscar un horizonte laboral, "Los cholos irrumpieron masivamente, se apoderaron definitivamente de las calles, plazas y rincones de la ciudad imponiendo su presencia abigarrada y colorida. Transformaron los usos y costumbres de una Lima lánguida y evocativa... Cambiaron la clave melancólica de los valeses y boleros por la sonoridad de cumbias y rocks andinos que reemplazaron en su memoria el dulce lazo musical con que los huaynos ataron a las primeras generaciones de migrantes a sus predios nativos. Se hicieron dueños de micros y ómnibus, del vario comercio ambulatorio, de los quioscos de periódicos y comidas, de los talleres de mecánica, de las paraditas y mercados, de los tierra-puertos y cantinas, de los clubes regionales y los centros artesanales e inundaron las pistas con los triciclos y carretas y los mercados con una multitud de objetos diversos y llamativos. Impusieron a las radios los aires sonoros de la... (música)... chicha, la difusión de sus fiestas dominicales, sus saludos a las familias que dejaron en las alturas, al tiempo que penetraron en los diarios obligándolos a difundir los espectáculos de sus coliseos y peñas, los problemas de la vida provinciana y regional, la actividad de sus clubes y la celebración de sus fiestas patronales. Introdujeron el gusto por la zampoña y la flauta, la quena y los charangos, pero aprendiendo el secreto del órgano y la guitarra eléctrica convirtieron a sus "jilgueros" y "mirlos" en "chacalones" y "chapis", y con ellos la chicha, un paradójico sincretismo musical, batió records de venta en los mercados del disco y el gusto. Penetraron en las plazas con sus brujos y adivinadores,

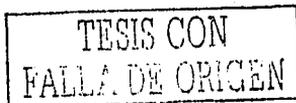
herbolarios y yerberos, charlatanes y mimos callejeros, grupos musicales y vendedores de frutas y de suertes. Invadieron las playas los fines de semana con sus familias y sus ollas de comida. Se enseñorearon en las calles con sus pantalones acampanados, sus correas con hebillas de metal, sus camisas floreadas y sus polos plenos de inscripciones en un inglés secreto y, a veces, indescifrable. Y educaron a sus hijos, cuando los cupos universitarios se estrecharon, en una vasta y descoordinada multitud de Cenecapes y escuelas técnicas y comerciales. Variaron las reglas culinarias, las modas de vestir, la sintaxis del castellano, los horarios de la ciudad, las rutas del tránsito, la geografía de los emplazamientos, los usos de la relación social. En suma, transformaron la cultura urbana y nacional."⁹⁹

Esos procesos no han estado exentos de conflictos y contradicciones con las instituciones del Estado. Los informales se organizaron en gremios por calles, manzanas y distritos para hacer frente a la represión municipal en defensa de los espacios invadidos en la ciudad o, en su lugar, enfrentar su reubicación y responder a la resolución de los problemas vinculados a sus propias actividades.

Paralelamente, también ellos desarrollaron una diversidad de estrategias vinculadas con el establecimiento de una red compleja de relaciones con su lugar de origen, sirviendo de referente a futuros migrantes, particularmente para sus propios familiares, y desarrollando relaciones de cooperación y reciprocidad. "Aprovechan la experiencia previa propia de la producción campesina que los ha acostumbrado a combinar diversas tareas, las actividades agrícolas, la artesanal, y las migraciones estacionales como estrategia para aumentar sus ingresos. Esa ductilidad expresada ahora en el ambiente urbano, se traduce en la extensión de las redes familiares para obtener información y conocimientos para desempeñar actividades independientes o en pequeños establecimientos."¹⁰⁰

⁹⁹ Franco, Carlos. "La otra Modernidad. Imágenes de la sociedad peruana" Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación. (CEDEP). Lima-Perú. 1991. Pp. 33.

¹⁰⁰ Grompone, Romeo. "Las lecturas políticas sobre la informalidad". Varios autores: De marginales a informales. Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO) y Centro de Estudios de Democracia y Sociedad (CEDYS). Lima-Perú. 1990. Pp. 56.



Al hacer uso de tal sistema de relaciones, los informales combinan el desarrollo de tareas y oficios, dividen el trabajo y cooperan para hacer más eficientes sus negocios y ampliar sus niveles de ingreso. subcontratan a parientes y conocidos, y los talleres ya establecidos sirven de referencia a los nuevos migrantes. Sin duda, al interior de esos procesos fueron incubándose y madurando paulatinamente una nueva mentalidad empresarial. Muchos investigadores sociales han coincidido en señalar que el pequeño y mediano empresario, especialmente aquellos que han logrado cierta estabilidad en sus negocios, desarrollan una mentalidad diferente a la del empresario que proviene de las fracciones dominantes tradicionales del país.

"El nuevo empresariado proviene de las clases medias emergentes, de los grupos criollos urbanos y más recientemente –y numéricamente en mayor proporción- de la inmigración chola y mestiza vecindada en Lima y las principales ciudades... Los nuevos empresarios no pertenecen a los grupos dominantes del país ni se asocian con ellos política y culturalmente... (ellos hacen)... un uso más intenso de los recursos naturales e insumos producidos en el país, la localización de sus inversiones no sólo... (se orienta a)... la producción de bienes masivos de consumo sino en sectores de bienes de capital... (desarrollan)... un más alto nivel de productividad por capital y personal disponible... un mayor interés... por reducir costos y bajar precios. una disposición más intensa al aprovechamiento y creación de tecnologías así como a la reparación y perfeccionamiento o innovación de sus equipos. una localización más extendida de sus empresas en el interior del país, al extremo que... ellos inician el desarrollo manufacturero de las regiones"¹⁰¹.

La década de 1980, y más tarde la de 1990, significó una transformación sustantiva del escenario económico, los nuevos empresarios, formales e informales, fueron interiorizando una función antes poco explorada y extendida por las fracciones dominantes previas. Desarrollaron un sentido del cálculo y el riesgo empresarial buscando aprovechar el potencial que presentaba un mercado interno que estaba en movimiento y expansión a pesar de la crisis, desplegaron energías

¹⁰¹ Franco, Carlos. "El Perú de los 90: Un cambio posible". Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación. (CEDEP). Lima-Perú. 1989. Pp. 25.

para involucrar más ampliamente a sus lugares de origen en sus actividades comerciales. Hombres y mujeres, y especialmente los jóvenes, lucharon y luchan denodadamente por abrir espacios para ejercer cualquier actividad económica que los incluya socialmente.

Es indudable que en todos estos procesos sociales coexisten variadas formas de explotación de la fuerza laboral, en la medida en que, por una parte, los nuevos empresarios e informales se ven forzados a incrementar la productividad del trabajo, a desarrollar formas creativas encaminadas a la innovación tecnológica y, entre otros factores, al abaratamiento de los costos de producción. Por otra, ellos se sumergieron en el mundo productivo, comercial y de servicios evadiendo con frecuencia muchas de las normas legales vigentes sobre las prestaciones laborales. Podemos decir que se combinaba, y se combina aún, el abuso con la indefensión de vastos sectores de trabajadores, la libertad de empresa con la codicia.

Así, la economía informal, mediana, pequeña y de microempresarios, recrea las condiciones para que la reproducción de la fuerza de trabajo se realice a costos extremadamente bajos, además de que su gran expansión, parece haber contribuido al debilitamiento de las actividades y capacidad de convocatoria de los gremios de trabajadores ya establecidos.

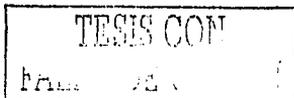
Sin embargo, la importancia de la pequeña y mediana empresa no sólo se ha traducido en el peso mayor ganado en las esferas productivas, comerciales y de servicios, sino en que su incipiente articulación gremial va dando forma a una nueva institucionalidad económica orientada a expresar sus intereses corporativos, definiéndose con una clara preferencia por el desarrollo nacional y el impulso a las exportaciones. En este sentido, dichos sectores se han ido constituyendo en una parte importante de la sociedad civil que presiona e interactúa con el Estado por las políticas encaminadas a dar respuesta a sus expectativas e intereses, tienden, asimismo, a privilegiar políticamente su propia articulación y a establecer vínculos con organizaciones más amplias de composición popular.

4.2. LAS NUEVAS ORGANIZACIONES POPULARES

Con otras características, pero con claros vínculos con los actores sociales que participan en los procesos anteriormente reseñados, el problema de andinización nacional y la afirmación de una nueva identidad en el Perú fueron atravesados por la dinámica organizativa de los sectores populares, que en respuesta a los graves problemas generados por la crisis, reactivaron sus organizaciones sociales previas como las asociaciones de pobladores, juntas de vecinos, etc., y crearon otras nuevas.

La solidaridad que emana de esas organizaciones para resolver los problemas que han afectado a amplios sectores de la población, no ha sido resultado de las acciones políticas emprendidas por las elites y los partidos, ni de las políticas sociales que ha tratado de impulsar el Estado desde arriba y burocráticamente, sino ha sido una respuesta social construida espontáneamente desde abajo que ha comprometido esa tradición cultural indígena, y ha sido permeada por ese potencial solidario andino recreado bajo modalidades urbanas. En medio de la extrema carencia, esos factores de cohesión les ha permitido enfrentar precariamente el desafío de su sobrevivencia, buscar, a la vez, una salida del atraso y esbozar con su cooperación y reciprocidad formas de acceso a una experiencia democrática ampliamente reconocida.

Esas organizaciones han sido apoyadas, muchas veces, por gente independiente de toda filiación política, por algunos militantes de izquierda y por miembros de la iglesia, especialmente simpatizantes de la Teología de la Liberación. Es necesario señalar que, a pesar de la crisis política e institucional, durante los gobiernos de Fernando Belaúnde Terry y de Alan García, el Estado impulsó algunos programas sociales dirigidos a aliviar la situación de los sectores populares más afectados por la crisis. En casi todos los casos, han tenido que convocar y contar con el concurso de las organizaciones populares que mencionaremos seguidamente. La relación que establecieron ha sido atravesada,



como es de suponer, por innumerables conflictos, por intentos de cooptación y/o condicionamiento de la ayuda por los partidos en el poder. Sin embargo, las organizaciones lograron mantener su autonomía, han subsistido a pesar de los cambios de gobierno, manteniendo sus objetivos solidarios y muchas veces ampliándolos. Establecieron relaciones de coordinación con el Estado y obligaron a la creación de instancias institucionales que asumieran funciones de intermediación para canalizar sus demandas e intereses.

De la diversidad de organizaciones que emergieron durante la década de 1980, sólo daremos cuenta de algunas. En primer lugar, las que se desarrollaron para resolver problemas de sobrevivencia, y en las que participaron especialmente las mujeres; en segundo, las que lograron formas de organización consistentes en el mundo rural, como alternativa a la fragilidad o corrupción de algunas de las instituciones estatales presentes en las provincias y distritos de la sierra del país.

a. LOS CLUBES DE MADRES Y DE MUJERES EN GENERAL.

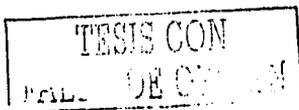
Organizados espontáneamente en los Centros Comunales de las barriadas, muchos de esos clubes han recibido apoyo de activistas sociales de las organizaciones no gubernamentales o de la Iglesia. En ellos se imparten cursos de capacitación sobre aspectos relacionados con la familia y con actividades productivas de micro empresarias. Esos clubes se han constituido en un punto de referencia esencial de la organización sindical de las trabajadoras domésticas donde ellas discuten sus derechos laborales y reivindicaciones. Se han convertido, también, en un espacio social importante de interacción de las mujeres con su comunidad y es a través de ellos que realizan actividades de promoción, prevención de enfermedades, saneamiento ambiental, limpieza pública, además de fiestas, kermeses y otros eventos sociales.

b. LOS COMITÉS DEL VASO DE LECHE.

La Municipalidad de Lima, a la que por primera vez accedieron los partidos de izquierda aglutinados en el frente de Izquierda Unida, convocó en 1983 a los clubes de madres, asociaciones de padres de familia y a otras organizaciones populares, a fin de constituir los Comités del Vaso de Leche para atender a un millón de niños menores de 8 años. Se comprometieron en ese proceso, la Iglesia, miembros del clero y civiles vinculados a la teología de la liberación, activistas de los partidos de izquierda, profesionales especializados y técnicos independientes, e instituciones privadas del país y del extranjero.

En la década de 1980 y en la de 1990, funcionaron alrededor de 7 500 a 8 500 Comités, su evolución estuvo marcada por un esforzado trabajo de las mujeres por mantener su existencia con la limitada ayuda institucional provista por la Municipalidad de Lima y Organizaciones no Gubernamentales, por su sistemática búsqueda de autonomía respecto a los organismos oficiales y su agrupación en una Coordinadora Provincial que fue reconocida oficialmente.

A pesar de los conflictos con los siguientes gobiernos municipales, que buscaron el control burocrático de estas organizaciones, de desencuentro con los partidos políticos vinculados al gobierno central, los cuales trataron de condicionar el suministro de leche al voto en las elecciones. A pesar de los conflictos entre las mujeres —explicables por la grave situación emocional que se produce debido a que en ellas recae el peso mayor de enfrentar la extrema pobreza— y los objetivos coyunturales que los movían, esos Comités lograron mantener una autonomía respecto a los municipios, han aportado formas de gestión propia, son aún un espacio que en la precariedad permiten prácticas cotidianas que han trascendido a la esfera pública, allí muchas mujeres han ejercido un liderazgo nuevo que se ha expresado en su interacción con las instituciones y con el Estado, muchas mujeres han trascendido hacia una presencia más activa en sus organizaciones vecinales, municipales y otras organizaciones sociales.



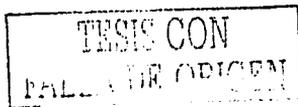
c. LOS COMEDORES POPULARES.

Organizados espontáneamente por iniciativa de mujeres vecinas en los barrios. Igualmente, recibieron apoyo alimentario de la Iglesia y de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. Una vez establecidas precariamente con sus propios implementos domésticos y en locales improvisados, tales organizaciones las proveyeron eventualmente de algunos alimentos básicos e implementos para la instalación de cocinas y comedores. En Lima llegaron a funcionar aproximadamente 4.000 comedores populares que agrupaban cada uno hasta 50 o 60 familias, aunque el promedio fue de 20 a 30 familias. Esos comedores también se organizaron en las provincias y aún en zonas donde la sequía agobiaba a los trabajadores agrícolas, tal el caso de algunas cooperativas cañeras cercanas a Chiclayo y Chimbote

Con características similares a los Comités, la organización de los Comedores Populares pasó por el desarrollo de un liderazgo construido en la lucha cotidiana por la sobrevivencia, por un agobiante proceso que se iniciaba con la instalación precaria de cocinas e implementos domésticos provistos por las mujeres, la creación de una bolsa común y el peregrinaje para conseguir productos baratos en los mercados o en las instituciones de ayuda, abastecerse de combustible, preparar y distribuir los alimentos a un costo que sólo permitía pequeñas mejoras en los locales improvisados, y reproducir el mismo proceso diariamente.

El peso de esas responsabilidades y los conflictos, muchas veces actuaron como disgregadores de ese esfuerzo organizativo; sin embargo, los Comedores Populares lograron articularse en una organización de mayor alcance de carácter provincial, en Lima, y nacional, se relacionaron con las organizaciones vecinales y municipales logrando impulsar proyectos micro empresariales como la instalación de panaderías, talleres de confección, y diversos servicios, y se incorporaron a proyectos comunitarios promovidos por las Asociaciones de Pobladores.

No podemos desconocer que estas tres organizaciones tuvieron un vasto alcance, comprometieron la participación de los sectores más excluidos y



generaron un liderazgo no antes visto entre las mujeres. Es posible señalar, que en la escasez se fue produciendo una suerte de democratización de la vida social, una participación nueva y creativa de los estratos más pobres y empobrecidos en la lucha por su sobrevivencia. Contamos con testimonios de estratos medios empobrecidos que en los barrios de clase media se vieron obligados a crear comedores para garantizar la alimentación de sus familias por los menos una vez al día.

Sin temor a equivocarnos podemos decir que los efectos de la crisis podían haber tenido consecuencias devastadoras de hambre en el Perú, gracias a esta dinámica social espontánea y de solidaridad no se produjo en el país la muerte por hambre y desnutrición; ella suplió con creces la ausencia de políticas sociales implementadas por el Estado. Estas organizaciones han sido el soporte para que los gobiernos pudieran canalizar alguna ayuda a la población en condiciones de extrema pobreza. ellas desarrollaron un trabajo extenuante y con un financiamiento económico exiguo (propio o con el apoyo de Organizaciones no gubernamentales), gracias a su tenacidad fue posible la realización de las campañas de prevención del cólera y otras enfermedades, y fueron las que se hicieron cargo de la limpieza y habilitación de las escuelas y colegio públicos de Lima y de las provincias.

En los primeros años de la década de 1990, algunas dirigentes del organismo coordinador de los Comedores Populares de Lima, como María Elena Moyano, fueron víctimas de la violencia terrorista: ese asesinato y el asedio amenazante que sufrían las organizaciones populares por militantes senderistas, propició que en el mes de agosto de 1991 más de 30 000 mujeres se movilizaran en una marcha de protesta contra el terrorismo logrando convocar y aglutinar en torno a ellas a amplios sectores de la sociedad..

d. LAS ASOCIACIONES DE POBLADORES.

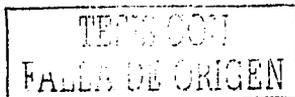
Hemos analizado anteriormente su origen espontáneo y algunos de sus objetivos en el curso de las migraciones de las décadas de 1950 y 1960, aquí abordaremos otros aspectos que las han caracterizado en el periodo de la crisis. Muchas de las Asociaciones de pobladores han ido absorbiendo algunas de las funciones que las instituciones del Estado y los Municipios dejaron de cumplir parcial o totalmente, en relación, por ejemplo, al ordenamiento, la planeación y regulación del crecimiento urbano y a la provisión de servicios básicos.

Las Asociaciones han ido redefiniendo sistemáticamente sus funciones teniendo que abrir espacios para que la diversidad de organizaciones de pobladores pudieran expresarse en ella y participar en la planeación y ejecución de proyectos productivos y actividades comunitarias. Han incorporado, por ejemplo, a los gremios de pequeños y medianos comerciantes, industriales, vendedores de los mercados, informales, a los Comités del Vaso de Leche, los Comedores Populares, Clubes de jóvenes y otros. Estas asociaciones desarrollan actividades que van desde la limpieza y saneamiento ambiental, erradicación y prevención de enfermedades, construcción de bibliotecas y centros comunitarios, postas médicas e instalación de servicios básicos, hasta el diseño, ejecución y promoción de parques industriales para las micro y pequeñas empresas.¹⁰²

Tovar y Zapata plantean que las pautas del liderazgo en estas organizaciones sufrieron cambios importantes. "No se trata de un liderazgo "combativo", "clasista", como en las etapas precedentes, sino de uno capaz de manejo técnico, de interlocución y negociación, cierto dominio de la espacialidad urbana, un potencial de planificación y proyección",¹⁰³ además de convocar y coordinar la ejecución de proyectos, las actividades comunitarias y las de su

¹⁰² Las barriadas que se desarrollaron en Lima en las década de 1950 y 1960, como Carmen de la Legua, San Martín de Porres, Pampa de Comas, albergan en la actualidad entre 200 y 600 mil personas. Villa el Salvador, producto de una invasión masiva de terrenos áridos en el sur de Lima y asistida inmediatamente por el gobierno de Velasco Alvarado, ganó en 1992 el premio Príncipe de Asturias por el trabajo comunitario realizado por la población y sus dirigentes.

¹⁰³ Tovar, Teresa y Zapata, Antonio. "La sociedad mestiza: Vecinos y pobladores en el 90" En Varios Autores: Movimientos Sociales. Elementos para una relectura. Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DEFSCO). Lima-Perú. 1990 Pp. 74



organización. Ese liderazgo, cuya elección se efectúa en asambleas generales de los pobladores, está sujeto a la crítica y, eventualmente, a la censura y reemplazo; ha significado, también, la posibilidad de elección de algunos dirigentes en cargos municipales, y que éstos pudieran contar con el concurso de personas conocedoras de la problemática de su entorno.

Las Asociaciones se han constituido pues, en un espacio de referencia social importante de la comunidad, allí se plasman la presencia de diversos actores sociales, se ejercen tanto una ciudadanía como una democracia incluyente. Estas prácticas han tenido y tienen, sin duda muchas limitaciones, pero frente a la pérdida de referente de legitimidad estatal ocurrida a finales de la década del 80, se constituyeron en los organismos sociales de mayor estabilidad, de solución a los problemas sociales inmediatos y de relativos niveles de planeación de las salidas hacia el futuro.

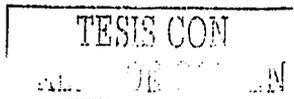
e. LOS MUNICIPIOS.

Su funcionamiento es de larga data, pero su constitución como organismos de elección popular directa y secreta se remonta a 1980, cuando Belaúnde Terry convocó a las primeras elecciones municipales en el país. En general los cargos municipales han sido ocupados por líderes locales, especialmente en las barriadas, en los pequeños poblados, en los distritos y provincias. En las barriadas, ésta parece ser la forma de consolidar un liderazgo construido en el trabajo de varios años, por lo que generalmente existe una relación directa entre las Asociaciones de pobladores y los municipios. El grado de incidencia de las primeras en la propuesta y ejecución de proyectos de todo tipo es significativamente fuerte, por lo que generalmente los municipios priorizan las acciones de mejoramiento y saneamiento urbano, ordenamiento y desarrollo tanto de actividades de corte empresarial como las de carácter cultural, recreativo y asistencial.

En los barrios esas características de los municipios presentan un peso mayor. Puede afirmarse que la participación de la población en la gestión

municipal es más directa, se han abierto espacios democráticos de concertación y crítica, y éstas suelen manifestarse directamente. No ignoramos los profundos desencuentros que pueden darse y se dan, ni los conflictos derivados de intereses partidarios, últimamente frecuentes, y personales. Sin embargo, como experiencia de construcción de nuevas formas de gestión política, la relación entre los municipios y las Asociaciones de pobladores o Juntas vecinales, han constituido el eje de nuevos procesos que van afirmando la presencia de la sociedad civil. La atención de los graves problemas derivados de la precariedad de los servicios urbanos ha generalizado, y en cierto sentido obligado, a la coordinación entre esas y otras organizaciones populares. Con frecuencia esa coordinación es más efectiva en las barriadas más antiguas debido a que sus organizaciones se hallan más consolidadas.

La solidaridad que emana de las organizaciones populares se ha expresado también, en actividades vinculadas con la vigilancia de sus barrios frente a la inseguridad provocada por los asaltantes y ladrones y, en contados casos, en previsión y defensa de la población frente a las acciones terroristas. La población así organizada, ha respondido a problemas relacionados con la fragilidad de las instituciones del Estado por garantizar la seguridad, la vida, la propiedad y el bienestar de las personas. Este tipo de actividades se ha reproducido, bajo otras modalidades, en los lugares de residencia de los estratos medios, sea para la vigilancia, cuidado de jardines, reforestación de los parques, etc.



4.3. EL NUEVO ESCENARIO RURAL. LAS RONDAS CAMPESINAS

No podemos dejar fuera de este análisis un proceso social inédito en el Perú, y probablemente en América Latina. Se trata de aquel que desarrollaron vastos sectores del campesinado en la sierra norte, extendiéndose al resto de la sierra y algunas partes de la costa del país.

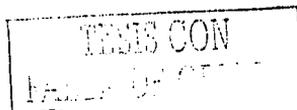
Sabemos que la reforma agraria impulsada por el gobierno de Velasco Alvarado había producido profundas transformaciones en el campo peruano,¹⁰⁴ y un avance importante en la democratización de la sociedad rural, al desaparecer las haciendas y las relaciones patrimoniales que allí se desarrollaban.

En los periodos previos, las organizaciones campesinas habían orientado sus organizaciones a la lucha por la tierra: en la fase velasquista presionaron por la aceleración del reparto y por políticas agrarias que mejoraran la situación del campo y la gestión de las unidades asociativas. A partir de 1975, con los gobiernos de Morales Bermúdez y Belaúnde Terry, se inició la parcelación de las unidades asociativas¹⁰⁵, propiciada ésta por los problemas que mencionamos anteriormente y por el descontento campesino, gran parte del cual aspiraba a ejercer la propiedad privada de las tierras, estimulado en parte por el Estado como por el desarrollo de un mercado de tierras más amplio.

Una nueva y profunda heterogeneidad regional signaba el desarrollo del campo, produciéndose para la mayoría de los campesinos una situación cada vez más adversa, dado que, mientras el 30% de la agricultura se desarrollaba con patrones tecnológicos y culturales más modernos, el 70% mantenía su carácter tradicional, y en la cual existían alrededor de 1'367,000 unidades agropecuarias.

¹⁰⁴ La reforma agraria había beneficiado aproximadamente a 390.684 campesinos y comprendió la distribución de 8'667,276 hectáreas de tierras agrícolas, bajo la forma de unidades asociativas: Cooperativas, Sociedades Agrícolas de Interés Social, y a medianos y pequeños propietarios independientes.

¹⁰⁵ En 1990, de las 619 cooperativas agrarias existentes, 430 habían sido parceladas. En general el proceso de parcelación propició que en el curso de la década más de un millón de hectáreas de las mejores tierras cambiaran de propietario legal. En la costa, esa reversión de la reforma significó la retracción de los avances logrados en las cooperativas más dinámicas, una "recampesinización" de los ex asalariados, y en la sierra y selva, la expansión de la mediana y pequeña propiedad, así como la recomposición de las comunidades campesinas y la difusión del minifundismo. Mejía, José Op. Cit. Pp. 73-85.



En ese contexto, las movilizaciones campesinas adquirieron un nuevo carácter al participar activamente y coordinar con otros sectores de la sociedad durante los paros regionales. El creciente deterioro de las condiciones económicas y sociales en el interior del país determinó que los paros regionales de 1977 a 1979, en el Cuzco, Puno, Arequipa, Juliaca, Huallaga, Marañón, Amazonas, etc., constituyeran el detonante de las exigencias por una política estatal que promoviera el desarrollo de las regiones, impulsara la producción agrícola y apoyara los esfuerzos por industrializar la provincia con apoyo financiero, proyectos de desarrollo de la infraestructura agraria y carreteras. Los Departamentos exigieron, asimismo, una mayor autonomía económica y política para definir sus prioridades, para el manejo de sus recursos naturales, el fortalecimiento de los poderes de representación local y acabar con el centralismo limeño.

Aunque las condiciones del campesinado mejoraron durante los primeros años del gobierno de Alan García, ellos organizaron en las décadas de 1980 y 1990, congresos en casi todos los Departamentos del país, comprometiendo la participación de la mayoría de los gremios, federaciones y confederaciones campesinas, así como de las comunidades, los pequeños y medianos propietarios. En esta dinámica se fueron consolidando las instancias de poder local y formas más amplias de expresión democrática. Sin embargo, la violencia terrorista, la represión oficial indiscriminada y la economía subterránea del narcotráfico, actuaban socavando esas posibilidades democratizadoras de la vida rural. En el mismo sentido actuaron otros problemas, aquellos que provenían del ejercicio autoritario e ineficaz del poder, del abuso y la corrupción de los funcionarios, especialmente de los vinculados al poder judicial y a la policía.

Confrontados a una situación de pobreza, los campesinos eran, además, víctimas de los ladrones de ganado y de otros de sus bienes, en tanto que la policía y los jueces ignoraban sus quejas exigiéndoles coimas y sometiéndolos a engorrosos, largos y humillantes trámites en las ciudades.¹⁰⁶ Estos y otros

¹⁰⁶ Starn, Orán "Reflexiones sobre las rondas campesinas, protesta rural y los nuevos movimientos sociales". Instituto de Estudios Peruanos. Lima-Perú. 1990. Pp. 22.

problemas, obligaron a los campesinos de la sierra norte, especialmente del Departamento de Cajamarca, a buscar alternativas de respuesta organizándose en Rondas Campesinas.¹⁰⁷

Ellas surgieron como una organización de vigilancia y captura de ladrones de ganado y otros bienes, y en la medida en que consolidaron esa función se transformaron en una alternativa de impartición de justicia para vastos sectores del campesinado, en otros casos, también se orientaron a un ajuste de cuentas con otras comunidades para la resolución de antiguos litigios. A partir de la década de 1980, asumieron la responsabilidad de impulsar la ejecución de proyectos de mejoramiento de las comunidades y la autodefensa frente a las incursiones de los grupos terroristas.

La primera Ronda se organizó en la localidad de Cuyumalca, Departamento de Cajamarca, el 29 de diciembre de 1976, pero se expandieron a otras provincias como Hualgayoc, Morropón, Ayabaca, Huancabamba, y más tarde se desarrollaron en otros Departamentos de la sierra y unos pocos de la costa del país. Además de los problemas señalados, contribuyeron a la formación de las Rondas la apertura política del periodo velasquista, las experiencias organizativas y la movilización de los campesinos de la zona y, fundamentalmente, algunos de los rasgos culturales que los caracteriza. En este sentido, muchos científicos sociales que han desarrollado trabajos de investigación y colaborado en la ejecución de proyectos productivos exitosos en el área, coinciden en señalar que los campesinos practican algunas formas de relación en las que prevalecen la reciprocidad y la cooperación, son especialmente sociables y agresivos; el reconocimiento del respeto se sustenta, entre otras cosas, en la tenacidad, la rudeza y la temeridad. Las leyendas sobre bandidos sociales en la zona apoyan ese análisis.

Parte de la información del presente apartado fue consultada en el trabajo de este autor. De acuerdo a él, entre 1970, "solo 10% de los casos criminales fueron sentenciados por los juzgados en la ciudad de Chota, Departamento de Cajamarca" Pp. 37.

¹⁰⁷ La mayor parte de la población de este Departamento es mestiza, casi el 80% del campesinado de Cajamarca posee menos de 5 hectáreas, el ingreso promedio anual era de 2 000 dólares.

También contribuyeron a la formación de las Rondas, la presencia de activistas de izquierda, la labor de la Iglesia a través de catequistas y promotores, muchos de los cuales se convirtieron en dirigentes ronderos. Gran parte de los miembros y activistas de la Iglesia Católica de Cajamarca eran simpatizantes de la Teología de la Liberación.

¿Cómo funcionaban y qué hacían las Rondas?. Se trató de la agrupación de 50, 100, 300 o más jefes de familia, jóvenes mayores de 18 años y, eventualmente, mujeres, que elegían de manera directa a sus dirigentes, se organizaban por turnos para la vigilancia y otras actividades comunales, sus acuerdos se realizaban en asambleas en la que todos tenían voz y voto, los acuerdos y aún la impartición de justicia se tomaban por mayoría o consenso, y su incumplimiento podía provocar la censura y la sustitución de los dirigentes: En el mismo sentido, el incumplimiento por parte de los miembros era sancionado con multas. Los ronderos eran directamente responsables de hacer cumplir las sanciones a los infractores.

Las Rondas resolvían directamente en asambleas muchos de los problemas que correspondía resolver a jueces, policías y otras autoridades: robos, asaltos, deudas, disputas por tierra, por agua, por ganado, maltrato de las mujeres, violación, conflictos familiares, etc., además de hacerse "cargo de pequeñas obras públicas como la construcción de postas médicas, canales de irrigación y el arreglo de caminos".¹⁰⁸ Muchas de ellas han recibido el apoyo de Organizaciones no gubernamentales, así como el financiamiento de instituciones internacionales.

La imposición de castigos variaba según la falta, ellos iban desde la reparación del daño, amonestaciones, ridiculización, multa de uno a más días de trabajo en la comunidad, hasta el castigo físico. Entre 1976 y 1992, las Rondas han dado muerte a 10 personas, generalmente abigeos que habían sido liberados mediante la corrupción de jueces y policías. La violencia ha estado presente en muchos casos en las Rondas, sin embargo casi nunca han actuado de manera

¹⁰⁸ Stern Orin. Op. Cit. Pp. 44

brutal. "Parte de esta autocontención resultaba de la preocupación por evitar cargos legales... pero también predomina en las Rondas un sentido real de los límites y la ausencia de un sadismo gratuito, tan común entre los militares y policías".¹⁰⁹

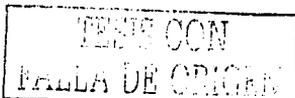
Las Rondas funcionaban bajo la autoridad colectiva de la comunidad y se fueron legitimando en la medida en que presionaron y obligaron a los jueces y a las instancias de gobierno a la impartición de la justicia oficial. Cuando ellas asumieron parte de esas funciones, lo hicieron de manera eficaz, directa, rápida y sin costo alguno para los campesinos. Adquirieron prestigio y se extendieron a otras partes de la región y del territorio nacional. Aún los infractores, una vez cumplida la sanción, podían incorporarse como ronderos.

En la medida en que su influencia se extendió a otras zonas, las Rondas se organizaron en Federaciones provinciales y departamentales. Para 1993, existían alrededor de 4 000 Rondas Campesinas en el territorio nacional y su organización abarcaba los Departamentos de Cajamarca, Lambayeque, La Libertad y Piura, en el norte del país, en menor medida a los de Ancash, Amazonas, Arequipa, Puno, Cusco y Ayacucho, en el centro y sur.

Llama la atención la forma en que las Rondas asumieron la resolución de algunos problemas que afectan a las mujeres y cómo ellas se fueron incorporando a esas organizaciones.¹¹⁰ Estas nuevas organizaciones asumieron la impartición de justicia en relación al maltrato físico y la violación y, en muchos casos eran las mujeres las encargadas de hacer cumplir las sanciones determinadas por las asambleas. Desde el inicio, las mujeres se incorporaron al trabajo de las Rondas; al principio de manera aislada, más tarde, esa participación se fue incrementando en las asambleas, en las marchas de protesta, en los turnos para desarrollar actividades concretas y en la vigilancia para que los hombres cumplieran con los turnos establecidos. En muchas comunidades las mujeres se organizaron como

¹⁰⁹ Starn, Orin, Op cit. Pp. 19.

¹¹⁰ Existe en el Perú, una tradición de participación de las mujeres en los movimientos campesinos y en la de los mineros: en las asambleas e invasiones de tierras en los Valles de la Convención y Lares en el Cusco, en la sierra central, en las marchas de sacrificio de los mineros, el bloqueo de carretera. Sin embargo, casi ninguna de las organizaciones ha asumido la solución de los problemas que las afecta.



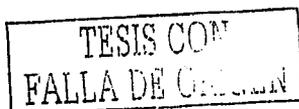
ronderas o como Comités femeninos de las Rondas, y asumieron tareas específicas en la ejecución de proyectos comunitarios. Muchas mujeres han forjado un liderazgo dentro de las Rondas y en las Federaciones.

La Rondas no fueron sólo el resultado del rescate y la revaloración de las tradiciones, normas, valores y la cultura del campesinado, sino, y fundamentalmente, de la recreación de todo lo anterior en una interacción con el mundo actual, al asumir la legalidad vigente e incorporar en sus prácticas muchos formalismos propios de las instituciones del Estado (libros de actas, sellos, etc.). El mismo origen de las Rondas se remonta a la vigilancia de las propiedades de las haciendas y la noción de ronda nos remite a las prácticas cotidianas en el ejército. Es a partir de ese sincretismo que los campesinos criticaron las formas de impartición de justicia y recrearon un sistema original que los comprometía en una relación sustentada en el prestigio que "los identifica como campesinos, como peruanos y como ronderos".¹¹¹

Esa construcción de la identidad se ha traducido en las canciones, en el vestido (poncho y sombrero), en la aspiración de los niños "ronderitos" de llegar a ser buenos ronderos".¹¹² Se trataba de una identidad que emergió de la voluntad colectiva que quería erradicar los males sociales, restituir el bienestar comunal y trabajar para lograr el progreso. No se trató pues de una vuelta a formas comunitarias del pasado para retornar a él, el imaginario político y social estaba permeado por una aspiración de cambio y búsqueda de acceder a la modernización. Las normas únicas y constantes que han regido el funcionamiento de las Rondas han sido el respeto por el otro y la reciprocidad tan conocida en el mundo andino. Ese sentido de dar y recibir no pasa solamente por el desarrollo de relaciones contractuales, sino por el reconocimiento del otro y de la capacidad de ofrecer respuesta a los problemas que éste presente, a la vez que se cuenta con la seguridad de que él y los otros las retornarán recíprocamente con acciones concretas de apoyo

¹¹¹ Starn, *Orin. Op Cit.* Pp 28

¹¹² Huamani, Gisele y otros. "Rondas campesinas en Cajamarca: La construcción de una alternativa." En *Revista Debate Agrario* No. 3. Centro de Estudios Sociales (CEPES), Julio-septiembre 1988. Lima Perú. Pp. 139

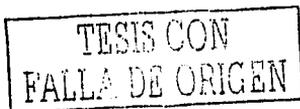


Esa concepción se ha traducido en la relación de las Rondas con el Estado, ellas no pretendieron luchar contra el Estado ni buscaron desconocer las leyes, su lucha ha sido "contra los malos funcionarios" y la forma cómo eran aplicadas las leyes. En la valoración de la rectitud, la honradez y la eficacia, los ronderos tenían la convicción de que ellos "luchaba por nuestra patria, nuestro querido Perú."¹¹³ Los principios de respeto y reciprocidad que ha regido internamente a estas organizaciones se han proyectado en su relación con el Estado y las autoridades; para ellos la interacción debía darse con base en los principios de "Respetos guardan respetos... y a cada cual según sus funciones, tal como lo estipula un artículo del Reglamento de la Federación Provincial de Rondas Campesinas de Cajamarca".¹¹⁴

Muchos fueron los intentos de cooptación de las Rondas por algunos partidos, también el Estado ha tratado de controlar su funcionamiento; sin embargo, ellas han mantenido una autonomía relativa. Al interactuar con el Estado, también realizan gestiones en sus instituciones, presionando y exigiendo eficacia. Se ha tratado, indudablemente, de una relación conflictiva, debido a que fueron creando temor y respeto entre los jueces y policías de las localidades, y la reacción oficial en los Departamentos y en la Capital no ha estado exenta de prejuicio y rechazo. En 1986, las Rondas fueron reconocidas oficialmente mediante un Decreto Ley emitido por el gobierno, lo cual actuó a favor de los campesinos que percibieron como legítimas sus prácticas y sus organizaciones. Han logrado desarrollarse y la lucha por su autonomía ha navegado entre las corrientes que buscaban subordinarlas a las acciones contrainsurgentes; sin embargo, la mayoría de las Rondas resistieron esa posibilidad, aunque sí enfatizaron sus labores de vigilancia frente al terrorismo. Fueron contados los casos, particularmente durante el gobierno de Alberto Fujimori, en que los militares lograron una relativa colaboración de las Rondas del Sur del país incluyéndolas en algunas actividades contra el terrorismo.

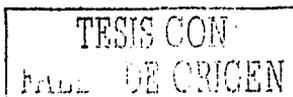
¹¹³ Satarn, Orin. Op. Cit.

¹¹⁴ Citado por Huamani, Gisele y otros.



Es indudable que este tipo de organizaciones han constituido una experiencia inédita en relación con los movimientos campesinos de la década de 1950-1960. La singularidad de las Rondas ha radicado en que ellas han socializado los problemas individuales de inseguridad, para dar respuesta una colectiva en busca de un ordenamiento de la vida social que bordeaba los límites de la sobrevivencia. El bienestar social y la seguridad colectiva se convirtieron en instancias de convocatoria a la solidaridad y a la responsabilidad colectiva, y en el camino de afirmación organizativa, fue constituyendo a los campesinos en actores sociales que buscaban ejercer positivamente sus derechos y obligaciones. En ese contexto, los campesinos aportaron una forma innovadora de ejercicio de su ciudadanía, una práctica social más horizontal y democrática que dignifica, a la vez, formas nuevas de construcción de la identidad y del futuro del país.

No podemos dejar de lado, la posibilidad de que esas alternativas pudieran desbordarse hacia terrenos de lucha incontrolables en el terreno político y social; sin embargo, en el curso de la década de 1990 y hasta la actualidad, debemos referirnos a los factores positivos de esta experiencia organizativa campesina, hacer mención al potencial cultural que subyace en ella y a la capacidad participativa que pudiera representar en los procesos de afirmación institucional del Estado. Veremos sin embargo, que el curso de la institucionalidad política en el país seguirá vertientes distintas a estos gérmenes democráticos más extendidos, reproduciendo mas bien, formas de ejercicio del poder autoritario ya experimentado en otros momentos de su historia.



CAPÍTULO V

EL FUJIMORISMO: DICTADURA CIVIL-MILITAR EN LA DÉCADA DEL 90

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

CAPÍTULO V

EL FUJIMORISMO: DICTADURA CIVIL-MILITAR EN LA DÉCADA DEL 90

Nos proponemos analizar en este capítulo, algunas transformaciones económicas y políticas ocurridas en el Perú de los 90, de manera particular, nos interesa dar cuenta de la forma cómo con el régimen de Alberto Fujimori se perfiló como una opción autoritaria que ha socavado toda experiencia social democratizadora del país. Cómo su régimen no sólo ignoró sino quebró la frágil institucionalidad estatal y el sistema político partidario hasta el momento construidos en el país, para reconfigurar una institucionalidad a su medida caracterizada por una centralización extrema del poder y su privatización, por el estrangulamiento de la capacidad de decisión de las instancias de gobierno, y el control de las políticas de estado por una cúpula civil y militar incondicional y cercana a él.

Fujimori canceló la posibilidad de un juego político partidario abierto a las fuerzas políticas que disputaron en la contienda electoral de 1990, en abierta oposición a la política económica que llevó a la debacle económica y política del país durante los últimos años del gobierno de Alan García. En el curso del primer quinquenio de esta década, y basado en la implementación de una política populista-autoritaria, Fujimori se apoyó en una dinámica social que involucraba a vastos segmentos empobrecidos de la sociedad más dispuestos a la adhesión social que al ejercicio de la política.

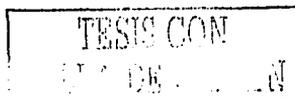
Para ello no fueron necesarios objetivos mayores, como el impulsar mecanismos que tendieran a transformar las movilizaciones sociales en formas de expresión política y abonar a la consolidación del sistema político partidario. Por el contrario, a los dos años del gobierno de Fujimori se había producido el colapso

del sistema de partidos,¹¹⁵ y la reorientación del curso de la experiencia política y cívica socialmente adquirida hacia la adhesión, movida por la esperanza, a quien se presentaba con el único capaz de resolver las aspiraciones sociales contenidas. Las acciones del régimen alimentaron esa adhesión social utilitaria al poder establecido, mas no a la acumulación de una experiencia social que tendiera a la búsqueda de acuerdos y consensos, que fortalecieran el sistema político y reafirmaran la democratización del país.

Este fue un régimen que en respuesta a las aspiraciones sociales de bienestar y de un ordenamiento básico, expropió el discurso popular y el ejercicio de una ciudadanía aún en formación, para legitimar no sólo la implementación de las políticas neoliberales más ortodoxas y extremas que se hayan aplicado en América Latina, sino sustentar su crítica a toda organización partidaria que no fuera la suya y denostar a la endeble institucionalidad estatal. Fujimori ha recreado las experiencias dictatoriales previas para imponer un control autoritario de la sociedad, reorganizando la vida política del país en la perspectiva neoliberal, sometiendo esta vez a su mandato, y al de su asesor Vladimiro Montesinos, a todas las fuerzas armadas, y subordinando a diversos actores de la sociedad: empresarios, amplios segmentos de las clases medias y sectores rurales y populares empobrecidos, en abierto apoyo a los intereses del capital financiero internacional vinculados a las fracciones dominantes del país.

Nos interesa analizar, aquí, los aspectos esenciales de la política económica fujimorista, y enfatizaremos en aquellas medidas de carácter político relacionadas con el sistemático estrangulamiento de la institucionalidad estatal y el recorte de sus funciones sociales básicas, como soportes de esa opción autoritaria-neoliberal asumida como respuesta a la crisis social y de representación política agravadas durante el gobierno de Alan García.

¹¹⁵ Tanaka, Martín. "Los espejismos de la democracia. El colapso del sistema de partidos en el Perú" Instituto de Estudios Peruanos. Lima-Perú. 1998

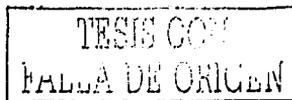


1. NEOLIBERALISMO Y LAS POLÍTICAS DE CHOQUE.

En la percepción de uno de los sociólogos más connotados del país, se puede dimensionar la crisis social y política que afectó al Perú y que alcanzó en el régimen de Alan García una profundidad sin precedentes: "El descontento se generalizó a todos los sectores sociales...se aceleró el proceso de desintegración de las estructuras institucionales en cada ámbito de las relaciones de poder: en las estructuras productivas, en la estructura de relaciones políticas, en las estructuras sociales cotidianas y en las de clasificación social de la población...El discurso político neoliberal se hizo rápidamente dominante, pervadió la subjetividad de todos los sectores sociales, lo que fue, obviamente, impulsado por la desintegración del "campo socialista" y el eclipse de su discurso. Los grupos políticos de contestación del orden social vigente entraron en rápida declinación y desintegración y en general todas las organizaciones políticas fueron afectadas por una crisis de representatividad. El pragmatismo se convirtió pronto en la orientación de la psicología social...Una parte importante de la población y en particular de la juventud sintió el hundimiento de su precario piso social y la reducción o simple desaparición de sus horizontes. En esas condiciones, la insurrección senderista encontró todas las condiciones para extenderse rápidamente hasta aparecer como un riesgo inminente de poder."¹¹⁵

Veamos los antecedentes inmediatos a la elección del gobierno de Fujimori. La adhesión radical al neoliberalismo, puesta a prueba en un país de indios, cholos y mestizos y no de suizos, había llevado al candidato presidencial Mario Vargas Llosa a desarrollar un discurso político enardecido que parecía reproducir la soberbia señorial de la vieja oligarquía, de alcanzar la modernización mediante la reproducción del modelo neoliberal y de justificar el atraso del país por la pervivencia de patrones culturales propios de la población

¹¹⁵ Quijano, Amílcar. "El Fujimorismo y el Perú". Documento mimeografiado. Lima Perú. 1995 Pp. 7



indígena de muchas regiones del territorio nacional. El objetivo era, "hacer del Perú una Suiza en América". En cambio Alberto Fujimori, sin programa ni un discurso pomposo triunfó en una sociedad andinizada, chola, que parecía encontrar en él a una persona similar, emergente de la condición de sus padres migrantes, con dificultades para expresarse en castellano y, aunque de origen japonés, un "chino acholado" vivaz, acriollado, "achorado."¹¹⁷

Muchas son las explicaciones de ese triunfo, y en parte las analizamos anteriormente. Aquí nos interesa señalar, que en el período previo la descomposición del aparato institucional del Estado también involucró a sectores de las Fuerzas Armadas con la corrupción y el narcotráfico. Comprometidos en la lucha contra la subversión habían llevado adelante la estrategia de "tierra arrasada", lo cual sujetaba a los militares a futuras situaciones políticas de enjuiciamiento por comisiones de derechos humanos u organismos jurídicos nacionales o extranjeros. Muchos de sus cuadros criticaban la beligerancia de las organizaciones políticas y sociales, asumían que el caos y el desorden debían ser acabados mediante la imposición de mano dura y la ley, pero a la vez exigían las garantías políticas de "manos libres" para desarrollar las acciones contrainsurgentes contra Sendero Luminoso y el MRTA; con este propósito, la cúpula militar habría elaborado "el Plan Verde".¹¹⁸

Por su parte, segmentos de la burguesía, aglutinada alrededor de Mario Vargas Llosa y Hernando de Soto, habían madurado una estrategia de recuperación económica y política del país, para ellos "las prácticas mercantilistas que procesaban los partidos políticos y el Estado constituían la raíz del problema histórico del país, aquellas debían ser erradicadas y reemplazadas por la liberalización de los mercados y la reducción de las funciones estatales, permitiendo la reinserción del país en las corrientes hegemónicas y el

¹¹⁷ Con la palabra choro se denomina a los mejillones, popularmente se asigna ese término a quien es ladrón; "achorado" significa ser vivo, vivaz, aquel que aprovecha cualquier situación para salir adelante, aún mintiendo.

¹¹⁸ Cotler Julio: "La gobernabilidad en el Perú: Entre el autoritarismo y la democracia". En Cotler Julio y Gompone Romeo. "El fujimorismo. Ascenso y caída de un régimen autoritario." Instituto de Estudios Peruanos. Lima-Perú, 2000. Pp.19.

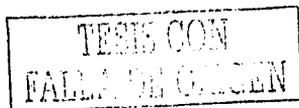
floreamiento de las energías populares dispuestas a impulsar el desarrollo capitalista."¹⁹

Con base en esos planteamiento y, sobre todo, la seguridad política exigida por el ejército para ejercer libremente las acciones contrainsurgentes y recibir todas las garantías de que no serían perseguidos, como estaba sucediendo en países como Argentina y Chile donde el ejército se veía confrontado a la posibilidad de juicios por delitos de lesa humanidad por la persecución y asesinatos cometidos por los militares contra militantes de izquierda y la oposición durante las dictaduras en esos países. "Fujimori habría sido confrontado... (cuando)... ganador de las elecciones...se internó en una de las sedes militares para ultimar los arreglos y no salió de allí sino para asumir el gobierno.... el proyecto calzaba como un guante a sus maneras personales y a sus visiones de poder...Podría decirse que el proyecto militar-empresarial encontró su hombre...(y que Fujimori encontró su proyecto)... No era necesario abandonar inmediatamente el marco electoral, ni las instituciones de la democracia liberal. Por el contrario, eso otorgaría visos de total legitimidad a las medidas de gobierno que se irían tomando (no como imposición) no obstante su carácter autoritario".²⁰

Con el triunfo de Fujimori sobre Vargas Llosa pudimos observar que, de manera descarnada éste se vio frente a un escenario político y social en el que no se le reconocía como portador de los valores de la modernidad y la modernización, su desencanto no pudo ser más dramático, había triunfado un ingeniero desconocido y astuto que tuvo la capacidad de voltear el escenario político a su favor con el apoyo de la izquierda y gran parte del partido aprista en la segunda vuelta electoral. Había triunfado la improvisación frente a un candidato que tenía un programa adscrito a las expresiones mas extremas de

¹⁹ Cotler, Julio "Gobernabilidad y Democracia....En Cotler, Julio y Grompone, Romero. Op. Cit..2000. Pp. 21. Para conocer los planteamientos acerca del "mercantilismo" en la sociedad peruana, sobre la economía informal y el papel de los pequeños y micro empresarios en la economía capitalista, se puede consultar a De Soto, Hernando: "El otro sendero" Editado por el Instituto Democracia y Libertad Lima-Perú. 1988.; y " El misterio del capital. Por que el capitalismo triunfa en occidente y fracasa en el resto del mundo" Ed. El Comercio Lima- Peru 2000

²⁰ Quirano, Anibal. Op cit 1995



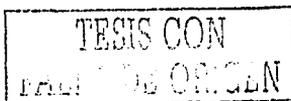
neoliberalismo y que era uno de los mayores representantes de la intelectualidad peruana. Poco más tarde ese programa y aún algunos de sus colaboradores serían asimilados por el fujimorismo.

Frente a la profunda crisis que sobrevino a la heterodoxia populista del aprismo y a la expansión del terrorismo en gran parte del territorio nacional, las aspiraciones de la población se centraban en la posibilidad de lograr la paz, una seguridad y ordenamiento básico de la vida económica y social del país. Este estado psicosocial de la población, la llevaría muy pronto al apoyo mayoritario de las medidas de corte económico, político y militar implementadas por el régimen. Todo o casi todo pasaba por la derrota del Sendero.

Con el gobierno de Fujimori se produjo una adhesión extrema a los mandatos del F.M.I., y la aplicación sistemática y descarnada de las políticas neoliberales en el país. Bajo estos lineamientos, su política económica se orientó a contener la inflación mediante la restricción del gasto público, especialmente el gasto social; la disminución acelerada del empleo y el consumo. Se encaminó, sobre todo, a eliminar las trabas para la operación del capital financiero internacional, buscando la reincorporación del país al sistema controlado por dicho capital, mediante la canalización de proporciones considerables de los ingresos fiscales al pago de los servicios de una deuda externa, que sobrepasaba en 1991, los 24 mil millones de dólares, y de la que anualmente el país pagó como servicios alrededor de 1, 329 millones de dólares. A pesar de esos pagos, la deuda creció a 33, 805mdd en 1996, logrando ser reducida a 28,508mdd en 1997.¹²¹

Durante los primeros años de gobierno, se privatizaron la mayor parte de sectores de la economía en los que tuviera ingerencia el Estado, aún la seguridad social, los servicios públicos y de salud; esto, evidentemente, a costa del empleo de grandes contingentes de trabajadores y de salarios extremadamente bajos, la carencia de servicios urbanos básicos, que agravaron la expansión de la epidemia del cólera y otras enfermedades, y la falta de presupuesto para atender los servicios sociales más elementales como el de afrontar la reparación de las

¹²¹ Contreras, C. y Cueto, M. Op cit. 2000. Pp. 344.



carreteras destruidas por efecto de los desastres naturales provocados por el fenómeno del Niño.

"Se privilegió como objetivos, la reducción de la inflación, la maximización de la producción y el pago de la deuda externa, con el mínimo de intervención estatal y con un sesgo máximo hacia el mercado como institución de asignación de recursos,.... configurándose un modelo radical de la versión del "Consenso de Washington" ¹²² que no se planteaba una aplicación gradual de las medidas económica y financieras de liberalización ni el impacto económico y social que podían generar.

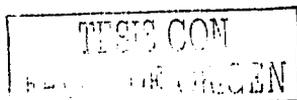
Cuando en agosto de 1990 se aplicaron las primeras medidas que todos las denominaron como "Fujishock", se asumió un nuevo signo monetario el "nuevo sol" en vez del "inti," cuya equivalencia era de un millón de intis, elevándose la inflación de una sola vez de 2, 775 % en 1989 a 7, 649.7% en 1990, precisamente por la aplicación de las medidas de contención inflacionaria mediante la fijación drástica de los precios, por lo que la inflación fue elevada dramáticamente sin una compensación salarial de la misma magnitud. En el curso de los años de 1991 a 1999, la tasa inflacionaria se redujo de 139% a 3.7% respectivamente¹²³. La política de choque había funcionado en este sentido.

Asimismo, se eliminaron prácticamente todos los subsidios, las ventajas tributarias a las exportaciones, el desarrollo rural y la protección de los sectores de más bajos ingresos, además el país se abrió a las importaciones. El Estado se retrajo totalmente de participar en la fijación de los salarios en el sector privado, estableció una baja sustancial en el salario mínimo, y determinó una reducción drástica de los sueldos y el empleo en el sector público¹²⁴. "el número de pobres creció automáticamente de 7 a 12 millones, más del 50% del total de

¹²² Gonzalez de Olarte, Efraim. "El neoliberalismo a la peruana. Economía política, ajuste estructural, 1990-1997" Instituto de Estudios Peruanos. Lima-Perú. 1998. Pp. 41.

¹²³ Contreras Carlos, y Cueto, Marcos. Op. Cit. 2000. Pp. 245.

¹²⁴ Sheahan, John, Op. Cit. Pp. 207.



la población peruana. La estructura productiva fue paralizada, los salarios congelados y el desempleo aumentó bruscamente".¹²⁵

La radicalidad de las medidas implementadas en agosto de 1990 dejó a la población inerte, y aunque ella resistió el impacto cundió la desolación, podían observarse sus rostros pálidos y desencajados en las calles de la ciudad de Lima, era posible palpar que la atravesaba una sensación de pérdida extrema de la noción de futuro, y éste se presentaba incierto y lleno de privaciones sin que nadie pudiera decir cuándo terminaría. Según testimonio de Efraín Gonzáles de Olarte, el propio Ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, al presentar este programa de ajuste estructural a la nación, expresaría dramáticamente en la televisión " que Dios nos ayude".

En marzo de 1991, Federico Dejo calculaba que "una familia de 5 personas podía vivir con un salario mínimo de 400,000 Intis; sin embargo, los empleados públicos recibían 25,000 a pesar de que el salario mínimo fijado oficialmente era de 38,000 Intis. El salario real se había deteriorado en más del 60% desde 1975, más del 65% de la población vivía en condiciones de pobreza crítica, 126 niños de cada mil morían antes de los 5 años de edad, el consumo de calorías per cápita llegaba a sólo el 84% de lo requerido. Sólo el 18% de la población económicamente activa se encontraba adecuadamente empleada, mientras que el 71% sufría de desempleo y subempleo. De acuerdo a las cifras registradas por el Ministerio de Trabajo, 100,000 niños trabajaban en 1989, esa cifra se incrementó a 190,000 en 1990, y según cálculos realizados por el Ministerio de Educación, cerca del 40% de jóvenes en edad de estudiar dejarían de asistir a las escuelas en 1991".¹²⁶

Con un nuevo Ministro, Carlos Boloña, (empresario que durante su gestión como Ministro y luego de ella, expandió sus intereses en el ámbito privado de la Educación Superior y los Fondos Privados de Pensiones, en desmedro del Instituto Peruano de Seguridad Social), esas medidas adquirieron desde enero de 1991 una profundidad draconiana no alcanzada en país alguno, dando por inicio

¹²⁵ Quijano. Anibal. Op. cit. 1995.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

una segunda fase de aplicación de las políticas neoliberales, la cual concluyó con el autogolpe de Estado llevado a cabo en abril de 1992. Con este autogolpe se canceló tanto la vida democrática en el país y la frágil institucionalidad del estado, como la subsistencia de un sistema político partidario, convirtiéndose la política en acciones que reafirmaron lo que muchos estudiosos denominan como la antipolítica.

Sobre esas nominaciones empresariales, Romeo Grompone plantea citando a O'Donnell, que el proceso de "normalización" de la actividad estatal parecía tomar el rumbo de otorgar mayor seguridad jurídica a los ciudadanos en comparación con lo que ocurría en los últimos años del decenio anterior, problema que otros autores como Julio Cotler han dado por llamar la "governabilidad" en el contexto neoliberal. Sin embargo, "continúan estableciéndose circuitos de poder privado, o mejor dicho privatizados, pues muchos de los principales actores ejercen cargos estatales en los que varios derechos y garantías de legalidad democrática no tienen efectividad"¹²⁷

Veremos más adelante las medidas políticas que derivaron de estos acontecimientos, por el momento nos interesa señalar que el autogolpe de Estado auspiciado por Fujimori ahondó la socavada participación legislativa en la emisión de las Leyes fundamentales del país, se impuso el autoritarismo y la dictadura de una alianza civil y militar. En ese contexto, "las privatizaciones fueron puestas en marcha a través de 923 decretos leyes,... los cuales no fueron legislados por el Congreso sino por el Ejecutivo,... promulgados entre marzo de 1991 y diciembre de 1992"¹²⁸; esas privatizaciones incluyeron, además de las ya mencionadas anteriormente, la seguridad social, la energía eléctrica, los teléfonos, las minas de propiedad del Estado y la industria petrolera. A diferencia de otras economías latinoamericanas que habían logrado algunos avances, en el Perú la década del 80 significó, un hundimiento en la pobreza y la violencia¹²⁹, esas presiones crearon

¹²⁶ Dejo, Federico. "La crisis en cifras." Universidad Nacional Agraria- La Molina. Lima-Perú 1991. Pp. 6.

¹²⁷ Grompone, Romeo. "Nuevos tiempos, nueva política. El fin de un ciclo partidario" Instituto de Estudios Peruanos. Lima-Perú. 1995. Pp. 15.

¹²⁸ Gonzales de Olarte, Efraim. Op. Cit. 1998. Pp. 43.

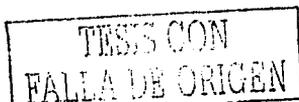
¹²⁹ Sheahan John. Op. Cit.. 2001. Pp.. 205

condiciones para un cambio drástico al que se adhieron los gobernantes de turno de forma extremadamente radical, sin la menor reflexión ética y moral de los costos sociales que podía producir.

Como bien indica Gonzáles de Olarte, la política de estabilización y ajuste, así como la captura de Abimael Guzmán, "el presidente Gonzalo", líder de Sendero Luminoso, en abril de 1992, abonaron para el incremento de la legitimidad del gobierno aumentando en varios puntos la aprobación de su gestión. Los agentes económicos adquirieron confianza, especialmente el gobierno norteamericano, la Banca y los organismos internacionales. Al punto de que el nuevo Ministro Jorge Camet, ex presidente de la Confederación de Instituciones de Empresarios Privados, CONFIEP, (y como Boloña, también empresario que expandió sus intereses durante y después de su gestión en la rama de la Construcción) no se vio en la necesidad de presentar un nuevo programa, simplemente, dio continuidad al anterior bajo la supervisión de Washington.

Esta gestión, junto con la elaboración de una nueva Constitución, en 1993, formaron parte de lo que sería la tercera fase de consolidación de las reformas radicales impuestas. No hay duda de que esas medidas se engarzaban con las aspiraciones sociales de estabilidad económica y, es probable, que muchas de ellas habían terminado por reestablecer la sensación de certidumbre. Sin embargo, la privatización de las empresas se vio acompañada por una privatización de las funciones públicas, ahora bajo la forma combinada de lenta concentración del poder por parte de Fujimori y la expropiación de las funciones de los Ministerios en su persona, a través de su centralización en lo que él dio por llamar "Ministerio de la Presidencia". "En efecto, el 25% del presupuesto del país se destinaba al Ministerio de la Presidencia, que ya contaba con los recursos externos destinados a combatir la pobreza, mientras que la asignación a los gobiernos locales equivalía al 3% del mismo."¹³⁰

¹³⁰ Cotler, Julio : "Gobernabilidad y democracia...." en Cotler, Julio y Grompone, Romeo. Op. Cit. 2000. Pp.38.



Tanto en las fases anteriores como en la que se inició después de su primera reelección, en 1995, el gobierno de Fujimori mantuvo la restricción monetaria, trató de eliminar el amplio déficit fiscal, provocado especialmente por el uso de ingentes recursos públicos para su segunda campaña electoral en pos de su reelección, y estableció un sistema tributario más extendido y rígido. La lógica era que en la medida en que las empresas pudieran moverse en el libre mercado, ellas elevarían sus ganancias, adquirirían eficiencia y se convertirían en generadoras de empleo. Sin embargo, los empresarios nacionales con menos capacidad de renovación tecnológica y competitividad, sobresaltados por la política asistencial orientada a los sectores empobrecidos antes del proceso electoral, se encontraban sometidos ahora a la competencia externa y quebraban, los trabajadores públicos y privados golpeados por el despido y la baja permanente de sus salarios reales y los sectores vinculados con la economía informal, así como los desocupados, pagaban por el costo de esas medidas.

El gobierno no implementó programas sociales para contrarrestar la dureza de las políticas de ajuste; los dos primeros años de gestión el presupuesto asistencial consideraba un 2% del PIB, llegando al 6% en 1995. Influido más por las preocupaciones políticas relacionadas con la reelección, fue puesto en marcha un programa importante de lucha contra la pobreza en los distritos rurales de más alta marginación. Del mismo modo, la inversión pública que hasta 1992 no había sido significativa, se incrementó del 13% entre 1992-1993, al 25% en 1994.¹³¹

Por su parte, no puede afirmarse que el gobierno de Fujimori haya encarado realmente una política industrial extensa, aunque el sector sí logró arrancar al régimen algunas medidas a su favor. Si bien las inversiones extranjeras crecieron en la industria, fueron especialmente importantes en el sector financiero, así como, en la minería, petróleo, teléfonos, electricidad, etc., en los cuales recibieron estímulos especiales por las innovaciones tecnológicas incorporadas. Igualmente, esos y otros capitales externos se asociaron con

algunos nacionales para organización de empresas asociadas con los servicios privados de salud, jubilación y seguros de diverso tipo.

A pesar de ello, la producción industrial sostuvo un crecimiento regular entre 1990 y 1997, el valor agregado de la manufactura creció a una tasa sostenida de 5.4% al año, y aunque aumentaron las importaciones, "a una tasa fenomenal de 21% entre los años de 1990 y 1995, y 17% hasta 1997" el crecimiento sostenido de la demanda interna permitió la absorción de la producción nacional; mientras tanto las exportaciones solamente crecieron a una tasa del 5.2% entre los años de 1990 y 1997.¹³² En los tres años siguientes, el crecimiento del PIB se situó entre el 2.5% y 3%. Era pues evidente la fragilidad industrial de país y su escasa competitividad en el mercado internacional, expresada en el desequilibrio de la balanza comercial, especialmente la de carácter manufacturero.

"En marzo de 1996, la economía dio signos de crisis fiscal y externa, lo que obligó al gobierno a efectuar un reajuste que dio como resultado un crecimiento del PIB per cápita de apenas 0.2%....(tendencia que se sostendría en los años siguientes)... Finalmente, se llegó a un acuerdo definitivo de reestructuración de la deuda con los miembros del "Club de París", comprometiéndose el Perú a pagar 16,767 millones de dólares entre 1996 y 2015, de una deuda que tenía un nivel de 6 mil millones de dólares en 1990. En marzo de 1997 se llegó a cerrar el acuerdo Brady de reestructuración de la deuda con la banca privada, dentro de un hermetismo sólo posible dentro de un sistema político poco transparente".¹³³ Esa reestructuración tan desfavorable para el Perú ha merecido, de acuerdo a Gonzáles de Olarte, el comentario del propio director gerente del FMI, Michael Camdessus, en el sentido de que "el servicio de la deuda peruana se ha establecido en un nivel muy alto"

A diez años de su aplicación las políticas neoliberales extremas mantuvieron algunos soportes sectoriales pero que, como en el pasado,

¹³¹ Sheahan, John, Op. cit. 2000. Pp 208.

¹³² Sheahan, John, Op. cit. 2000. Pp. 126 y 214

¹³³ Gonzáles de Olarte, Efraim. Op. Cit. 1998. Pp. 46

enfrentaban la contracción del mercado mundial; por ejemplo, los problemas de sistemática caída de los precios de las exportaciones mineras a pesar de ser este sector intensivo en capital. Mientras tanto otros sectores como el industrial, o como el sector agrario altamente postrado, carecían de mayores estímulos para incrementar sus exportaciones.

No hubo pues en el régimen de Fujimori una vocación de impulso a la industrialización real de las ramas más dinámicas de la economía nacional, menos aún una vocación para estimular las exportaciones manufactureras y agrícolas, el mercado lo era todo y, por supuesto, someter a la apertura extrema e irrestricta, y a la ley de la oferta y la demanda a una economía en la que no se había forjado las condiciones de desarrollo y, por lo tanto, no tenía condiciones de competir en el mercado internacional, constituía, por no decir menos, una especie de contrasentido en la globalización y suicidio de la economía nacional.

La forma cómo han lucrado los nuevos propietarios extranjeros de las empresas bancarias, la de teléfonos, electricidad, las afores, etc. con créditos restringidos para la industria, tarifas extremadamente altas y cuotas elevadas para los afiliados, son signos de este liberalismo extremo que no ha resuelto los problemas de empleo, sino ha agudizado la pobreza y la exclusión.

Tampoco el régimen abordó seriamente la implementación de programas sociales que abatieran el subempleo y desempleo: Con relación a la política laboral el gobierno se retiró de toda posibilidad mediadora dejando a los trabajadores sujetos a la ley de la oferta y la demanda, y promoviendo la deslegitimación de sus organizaciones como interlocutoras importantes en la relación del capital y el trabajo. Ellas perdieron fuerza no sólo por la disminución efectiva de los trabajadores estables y al alto porcentaje de la fuerza laboral vinculada a las actividades informales, sino, también, debido a que las organizaciones gremiales no lograron formular alternativas nuevas de defensa del empleo y del salario, aunado ello, al empobrecimiento de los trabajadores y, muchas veces, su retorno a métodos individuales de defensa del trabajo, además de la constante campaña de desprestigio montada por el gobierno.

Inspirado, probablemente, en los planteamientos de Hernando de Soto, el gobierno impulsó algunas medidas de promoción de la micro y pequeña empresa. Aún las ONGs nacionales obtuvieron financiamiento del BM, administrado por la banca nacional, para llevar adelante programas de crédito a micro empresarios.

A pesar de las numerosas construcciones escolares, supervisadas por el monstruoso y clientelar Ministerio de la Presidencia, el régimen carecía de un proyecto nacional que plasmara las exigencias educativas actuales de innovación de los conocimientos, así como la difusión, creación, aplicación y adecuación de nuevos conocimientos científicos y técnicos. El programa educativo fujimorista se redujo especialmente a la construcción de locales y a la dotación de equipos de cómputo donados por el gobierno japonés. El Ministerio de Educación había sido reducido a su mínima expresión.

En el mismo sentido, la atención pública a la salud se atenía a la dinámica asistencial de los viejos tiempos, ahora concentrada en la construcción de centros de salud promovidos también por el Ministerio de la Presidencia. No había pues un programa que no sólo cambiara ese sistema, sino lo orientara hacia la prevención, capacitación y atención eficiente de la población. De acuerdo a nuestros propios contactos con las ONGs Flora Tristán, Manuela Ramos, Mujer y Sociedad entre los años de 1992 y 1994, ellas jugaron también un papel importante en la implementación de programas de salud más consistentes, aunque el gobierno planteó a los organismos internacionales que en el Perú se había abatido la mortalidad materno-infantil, viéndose obligadas muchas de ellas a retirarse del país. Lo que sí implementaron los expertos fujimoristas en salud, (de acuerdo a fuentes periodísticas que denunciaron los hechos) fueron programas vastos de esterilización sin el consentimiento de mujeres de diversas zonas rurales más empobrecidas del país. Un aspecto a resaltar es, sin duda, la construcción de carretera y la pavimentación de muchas que vinculan a regiones importantes del territorio, así como a las provincias y distritos con sus capitales, también bajo el nombre del Ministerio de la Presidencia.

2. LA INSTITUCIONALIDAD QUEBRADA, LOS ACTORES Y LOS PROCESOS SOCIALES CONTROLADOS. EL CHINO CHOLO: IMAGINARIO SOCIAL Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA¹³⁴.

Como ya lo expresamos anteriormente, durante el régimen militar (1968-1975) se profundizaron las tendencias industrializadoras que venían desarrollándose en el Perú desde la década del 50, afianzándose con Velasco la democratización de la sociedad tanto por las reformas impulsadas, las migraciones y la acelerada urbanización, como por el desarrollo de una dinámica social más vasta, que involucró a regiones y territorios en apoyo o crítica a las transformaciones promovidas durante su gobierno. Uno de los aspectos centrales de ese proceso es que "gravitó hacia la democratización y nacionalización de la sociedad y el Estado...la ciudadanía comenzó a salir del control privado."¹³⁵

En la década siguiente, ese trasfondo democratizador adquirió una dimensión mayor a pesar de los efectos empobrecedores de la crisis del modelo sustitutivo, del impacto de la crisis internacional y la aplicación de las políticas de estabilización y ajuste de corte neoliberal tendientes a la reversión de las reformas velasquistas y a lograr la reestructuración de la economía. (Morales Bermúdez, 1975-1979, y especialmente Belaúnde Ferry, 1980-1985). En los tres primeros años del gobierno de Alan García, esa tendencia democratizadora parecía tomar rumbo más institucional, sin embargo, la pérdida de legitimidad debido a la aplicación de una política heterodoxa-populista, (1985-1990), terminó no sólo por definir la adhesión conservadora al neoliberalismo, el mismo que se impuso sobre los remanentes populistas de una industrialización sustitutiva básicamente asistida, sino que generó una crisis de representación política partidaria y de los

¹³⁴ Gran parte de los planteamientos que siguen son resultado de nuestras propias observaciones del proceso peruano en este periodo, como de un trabajo titulado: "La institucionalidad quebrada, los actores y los procesos sociales controlados", que presentáramos en el Seminario del doctorado en Estudios Latinoamericanos: "Estado y Sociedad en América Latina", dirigido por el Dr. Marcos Kaplan. UNAM, México 1997.

¹³⁵ Quijano, Amílcar. "Op. Cit 1995.

parámetros sociales de democratización de la sociedad que más tarde se ahondaría en el país.

En esa década, sin embargo, se había perfilado la constitución de un sistema político partidario que propició la apertura de canales de representación y expresión ciudadana. En esa etapa se produjo, asimismo, la emergencia de diversos actores sociales muy dinámicos y procesos políticos, a veces contradictorios, de confluencia y ruptura entre las organizaciones políticas de oposición, las cuales desarrollaban sus acciones permeadas aún por las inercias del pasado inmediato y golpeadas por el debilitamiento y pronta crisis del socialismo real.

Mientras tanto, el movimiento social no encontraba caminos de expresión política, los partidos aún no podían transformar esa fuerza social reivindicativa en formas de consenso y de organización política diversa. Lo social discurría por el terreno de los movimientos y la política seguía un curso bastante ajeno a ellos y sin capacidad de convocatoria. El escenario social ahora más complejo, no encontraba aún el camino político para expresar su desarrollo, aunque sí lo hiciera con una riqueza inusitada para impulsar sus estrategias de sobrevivencia sustentadas en la solidaridad y reciprocidad vecinal.

En ese contexto podemos entender, el desarrollo de identidades diversas surgidas al calor de las necesidades de apropiación eficaz de los recursos escasos y el surgimiento de valores y normas que sobrepasaban el mundo urbano, influyendo y transformando el rural, y convirtiendo el proceso nacional en uno de carácter más universal, más andinizado, más peruano. Es por ello, el escaso impacto de los planteamientos cerrados, lo cual explicaría "el rechazo que en las capas medias y populares generaban el entorno y los postulados liberales de Vargas Llosa, en contraposición al apoyo que brindaron los independientes a las propuestas... (laxas)... y heterodoxas que planteaba

TESIS CON
FALLA DE CARGEN

Fuimori, determinando que éste resultara preferido por el voto ciudadano en la segunda vuelta electoral"¹³⁶.

Con otros contenidos, también la crisis y los acontecimientos sociales descritos anteriormente marcaron el agotamiento de algunas instituciones del estado emergidas al calor de lo que llamaríamos estado de bienestar y proceso sustitutivo de importaciones, agotándose con ello los contenidos fundamentales de la legislación y de las funciones ejercidas por ellas en un periodo de crisis, en la que se acentuaron la ineficiencia y la corrupción.

En ese sentido, el Estado había perdido capacidad de convocatoria y de generación de consenso, el sistema político construido con dificultad durante la década, se enfrentaba a fines de la misma con la crisis partidaria del APRA, con una suerte de desmembramiento de una izquierda que había sido dinámica y fuerte hasta poco más de la mitad del decenio, y con las fuerzas políticas democráticas conservadoras aglutinadas en el Frente Democrático (FREDEMO), frente a las cuales todavía existía expectación y temor.

Contrariamente, en los últimos años de la década, la sociedad se veía afectada no sólo por los efectos devastadores de la crisis, sino que, especialmente la rural, se veía confrontada a dos fuegos por las lealtades exigidas tanto por los grupos terroristas como por las Fuerzas Armadas, quienes silenciarían a diversos actores sociales y tomarían bajo su mando los espacios que correspondían a la sociedad civil. Como bien analizara Romeo Grompone, "el clima cultural impregnaba los razonamientos de pesimismo y fatalidad. Recordemos que en el año que precedió a las elecciones de 1990, se registró una hiperinflación de 2,772%, un crecimiento negativo de -11.0%, el mayor número de muertos en la guerra interna (3,148 personas) y el número de desaparecidos llegó a 1,528. Los salarios privados.... (de los obreros de las

¹³⁶ Cotler, Julio: "La gobernabilidad en el Perú.... En: Cotler, Julio y Grompone Romeo, Op. Cit. 2000. Pp. 23.

empresas)... descendieron al 36.5%, los sueldos privados...(de los empleados en las empresas)... al 27.3% y los sueldos públicos al 27.4%"¹³⁷

En ese contexto, el sistema político requería aún de un esfuerzo que ayudara a la reconfiguración de los partidos como factores de inclusión de los estratos sociales antes no presentes en el escenario social, ideando mecanismos de interlocución y tolerancia entre ellos y la sociedad en su conjunto. Pero, a contracorriente de estas posibilidades, se hicieron evidentes los signos de la crisis institucional del Estado, la legislación, el discurso estatal y el de los partidos políticos parecían haberse vaciado de contenido, se fueron desmembrando los mecanismos de intermediación política y social en una sociedad gravemente empobrecida, y en su lugar, las aspiraciones sociales no lograban un curso consistente de expresión política. Con la casi pulverización de los estratos medios, éstos dejaron sus espacios de interlocución política y alguno de sus segmentos se orientaron hacia las posiciones más conservadoras o, los más empobrecidos, a movilizarse con los sectores populares.

El terrorismo, la represión oficial indiscriminada, el narcotráfico y la violencia cotidiana no sólo agravaron la crisis, sino actuaron socavando los espacios de participación social ciudadana que con esfuerzo construían la población urbana y los campesinos de muchas regiones del país. En medio de esos problemas y contradictoriamente, como analizáramos en el capítulo anterior, la sociedad peruana estaba siendo sacudida por cambios profundos en su composición social y parecía tender a encausar su vida social hacia el desarrollo de una democracia con un perfil más popular, con expresiones de ciudadanía más vastas, más práctica y menos vinculadas a las utopías previas, sin que ello significara un encausamiento claro hacia una participación política de cierto peso organizativo y de consenso.

Esta tendencia aún incipiente, no pudo ni tuvo tiempo, sin embargo, para consolidarse; hacia el año de 1992, precisamente como producto del autogolpe

¹³⁷ Grompone Romeo: "Al día siguiente. El fujimorismo como proyecto inconcluso de transformación política y Social". En: Cotler Julio Y Grompone, Romeo: "El Fujimorismo. Ascenso y caída de un régimen autoritario". Instituto de Estudios Peruanos. Lima-Perú. 2000. Pp. 83

impulsado por Fujimori, el país experimentaría el colapso de los partidos, el socavamiento de los derechos ciudadanos y la merma indiscutida de su capacidad de movilización. El control de los actores sociales y la fragmentación de los movimientos sociales constituirá el escenario en el que se sustentará el autoritarismo, interesado en llevar adelante las políticas neoliberales de ajuste y reestructuración de la economía sin contrapeso político y social alguno, con una convicción gubernamental no sólo antiinstitucional, sino privatizadora del poder.

En las páginas que siguen veremos los procesos de reorganización de algunas de las instituciones del Estado, impulsadas por Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos, como los factores que antecedieron al colapso del sistema político partidario, sea mediante la asignación de tareas que socavaron la marcha del aparato institucional o a partir de la contracción y privatización, con sesgo patrimonial, de muchas de sus funciones fundamentales.

En el primer año de su gobierno Fujimori requirió aún del sistema político partidario para reafirmarse políticamente; sin embargo, en la medida en que la política de ajuste estructural fue generando la noción de estabilidad en la pobreza, él pugnaba por afirmar la idea de ser el único capaz de salvar al Perú, de tal forma que para "el Ejecutivo y los militares el sistema político se iría constituyendo en un obstáculo en la búsqueda de reestructuración y la pacificación, o sea para alcanzar la gobernabilidad del país"¹³⁸.

En esa perspectiva, tanto el presidente como su asesor Montesinos se abocarían a preparar los cambios institucionales básicos que precedieron al autogolpe de estado de 1992. Por una parte, ambos pugnaron por la reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional bajo el mando del segundo, una persona con experiencia militar que, en la época velasquista, había sido acusada de traición por pasar información al gobierno de los Estados Unidos, y que mantenía vínculos con los servicios de inteligencia de este país. Mediante esa reorganización, Fujimori y Montesinos determinaron la distribución de los cuadros militares más afines -como parte de una red de espionaje e inteligencia-

¹³⁸ Cotler, Julio, "La gobernabilidad en el Perú". En Cotler Julio y Romeo Grompone. Op cit. 2000. Pp.28.

dentro de la estructura militar y el aparato institucional del Estado. Para ello requirieron de la depuración de los cuadros menos duros de las fuerzas armadas, opuestos al proyecto y reacios a la ruptura del orden institucional y de ascenso de los mandos militares.

Esa depuración dimensionó un resquebrajamiento de la línea de autoridad dentro de las fuerzas armadas, el establecimiento de mecanismos paralelos de ascenso y de decisiones, y la introducción de nuevos elementos que acrecentaron la corrupción en la institución. En casi la totalidad de los casos, los militares en ascenso debían buscar la aprobación de Montesinos, someterse a su mandato e insertarse en las acciones de contrainsurgencia y en la red de relaciones de sujeción clientelar de los mandos inferiores a los jefes de turno.

El Sistema de Inteligencia Nacional, asumió así la función de vigilancia de los opositores del régimen. fue el encargado de presionar y en muchos casos silenciar y someter a los medios de comunicación, respondió a las aspiraciones políticas del dictador en la medida en que construyó mecanismos para la delación de funcionarios, empresarios, periodistas, dirigentes políticos, líderes sindicales y estudiantiles, además de la instalación de redes telefónicas para escuchar a sus adversarios; tal la situación sufrida por Javier Pérez de Cuellar durante la campaña electoral de 1995 en la que fue reelecto Fujimori.

En el mismo sentido, a la carencia extrema de recursos para el Sistema de Educación Superior se añadió el hecho de que varias universidades públicas fueran puestas bajo el control de las fuerzas armadas, tal el caso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que fuera declarada en reorganización con autoridades y un cuerpo administrativo nombrado por el gobierno, provocando la renuncia o el despido de académicos connotados; la misma suerte corrió la Universidad Pedagógica Nacional-La Cantuta, de cuya residencia estudiantil fueron sacados y asesinados por las fuerzas militares nueve estudiantes y un profesor, o la Universidad Nacional Agraria-La Molina,

cuyo rector fue obligado a renunciar por haber apoyado Vargas Llosa en su campaña a la presidencia.

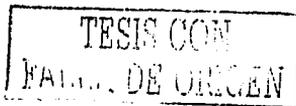
Cabe mencionar aquí, la respuesta creativa de algunos actores sociales frente a esa embestida contra la Educación Superior. El Rector de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, electo más tarde como Alcalde de la ciudad, logró impulsar un sistema de autogestión, lanzando un conjunto de proyectos de desarrollo y prestación de servicios a la comunidad que permitió no sólo mantener el nivel educativo y el prestigio de la universidad en la región, generando un apoyo social importante, sino elevar su capacidad de innovación y mejoramiento de su infraestructura, logrando difundirse esta perspectiva de gestión a diversas universidades públicas del país, como la Universidad Nacional de Ingeniería.

Desde el inicio de la reorganización del SIN, el gobierno concertó una campaña de desprestigio de los partidos políticos y organizaciones sociales, " en efecto, esa decisión encontraba origen en la manifiesta hostilidad contra la 'partidocracia' del Presidente y los militares, compartida por empresarios y algunos intelectuales, porque en dicho sistema se percibía a "politiqueros, populistas y mercantilistas" como figuras que perseguían la satisfacción de intereses personales. en tanto impedían la ejecución del "proyecto nacional" que los primeros se sentían llamados a cumplir."¹³⁹

El autgolpe de estado de abril de 1992, tuvo precisamente esa orientación, se trataba de lograr las transformaciones del aparato institucional del país mediante decretos leyes que no tuvieran que ser discutidas, autoritarias en su contenido y duras en su implementación. Como decía Cotler: "Mano dura a la manera de Singapur."

Como en etapas anteriores, el ejército asumió en este periodo una función dirimente al colocarse como eje central del reestablecimiento del orden, ahora encontraban la justificación para arrogarse el papel histórico de salvaguardar la integridad de la patria. La crisis social ahondada por la insurrección terrorista

¹³⁹ Cotler, Julio, "La gobernabilidad.... O. Cit. Pp.29



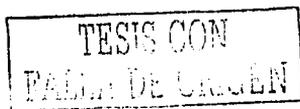
había confluído para que se acentuara la demanda social de orden y una justificación mayoritaria de la población del desempeño autoritario del régimen, pero, también había suscitado un grave relajamiento de la conducta social relacionada con la legalidad.

Sin embargo, la reorganización del ejército, acentuó lo que ya había germinado en él, el deseo de convertirse en el brazo político de un régimen que debía imponer el orden a la vez que sustituía a la sociedad en el papel político que le correspondía: A nivel interno, se extendió en las fuerzas armadas la corrupción, cultivándose en él, el establecimiento de relaciones clientelares y el abuso en el ejercicio del poder tanto interno como externo.

Este férreo control del poder militar tuvo efectos altamente dañinos para la sociedad civil y el frágil sistema de representación institucional, política y social en el interior del país, especialmente en las zonas en conflicto. Devino en el desplazamiento de diversos actores social y de los civiles de los cargos públicos y políticos en las provincias, en la militarización de muchas regiones del país, la división del territorio en zonas de emergencia y la nominación de militares como jefes político-militares de cada región. Ello significó la puesta en marcha de una acción militar contrainsurgente de mayor envergadura de "tierra arrasada" y "manos libres" políticamente avalada, y la ausencia total de control respecto a la violación de los derechos humanos.

Uno de los problemas fundamentales para el futuro de la vida institucional del país, se relaciona con el hecho de que el régimen de Fujimori no solo mostró carencia de referentes institucionales de carácter democrático a ser proyectados socialmente a efecto de coadyuvar a la construcción de una cultura política, sino que se empeñó en difundir con socarrona persistencia un pragmatismo que encubría su autoritarismo-populismo en el ejercicio del poder y en las relaciones de su gobierno con la sociedad.

La crisis del Estado y de las instituciones, devino con Fujimori en la destrucción de las instituciones fundamentales del Estado y la construcción de una "nueva" institucionalidad que reproducía muchos de los vicios de las



dictaduras militares que parecían superadas en el país. Los gérmenes de una institucionalidad democratizadora de corte popular, tan importantes en las décadas anteriores, no constituyeron referente alguno y los procesos sociales fueron considerados por el fujimorismo como posibilidad de uso de clientela tanto para la reorganización institucional como para el mantenimiento de una base social de apoyo al régimen.

Se produjo una clara reversión de los logros alcanzados por los asalariados y los sectores populares, y para ello los métodos utilizados fueron diversos: Autoritarismo, despidos masivos, represión, desconocimiento de los canales básicos de intermediación, eliminación de instituciones sociales, o uso clientelar de las organizaciones, especialmente las que agrupaban a las mujeres.

Se hizo también uso de otros métodos, de aquellos que permitían arrancar del entorno social y de la subjetividad colectiva la parte más sensible de los estados de ánimo y de las aspiraciones. Uno de esos métodos, directamente relacionado con la estrategia autoritaria, ha sido el uso del lenguaje, y Fujimori ha hecho un buen uso de él. Se produjo una apropiación por el régimen del lenguaje cholo, el discurso fujimorista se esforzó por acentuar su diferencia con el lenguaje de "los políticos tradicionales" y los "blanquitos" y ha tenido la cualidad de expresar esa viveza criolla del mundo popular. Fujimori "hacia cholitos"¹⁴⁰ a los blanquitos y a los políticos tradicionales, los castigaba, los humillaba, se aprovechaba de su situación de fragilidad y, a su vez, cuando se acercaba a los sectores populares, "el chino" era como todos los mestizos y cholos, era "achorado".

Con otros referentes, el análisis de Alonso Cueto nos informa acerca de algunos aspectos relativos a la transformación del lenguaje durante los períodos presidenciales de Fujimori. "El período de 1990 a 1995... (enfáticamente diríamos que hasta el 2000)... fue el del desprestigio de algunas palabras y del fortalecimiento de otras. Perdieron influencia o impacto términos como

¹⁴⁰ "Hacer cholito", connota hacerles creer, a la vez que los estafa y engaña.

"democracia", "pluralidad" e "institucionalidad". Ganaron fuerza palabras como "orden", "trabajo" "disciplina". De todas las palabras que usó el presidente Fujimori...hubo una en especial "eficiencia" que adquirió una fuerza inusitada...las formas han contado menos y los resultados más....Y sin embargo, esta nueva cultura de los años 90 supone también la pérdida de vigencia de palabras como "moralidad",...todos saben el precio de las cosas pero nadie conoce su valor".¹⁴¹

Fue necesario superponer las aspiraciones de estabilidad y progreso al lenguaje popular, pero había que reducir sus contenidos a un pragmatismo sustentado en la idea de un poder controlado y a la autorregulación del mercado, los mismos que no tenían que vincularse con la desprestigiada política. Con ese lenguaje paradigmático se distorsionó la percepción de los blancos a criticar, se montó un aparato de desinformación y de persuasión de las masas populares, contra el Parlamento, contra los partidos políticos, contra los sindicatos, contra los políticos, contra las organizaciones.

La búsqueda de certidumbre en la población tendría resultados estabilizadores al principio, pero la factura política de las políticas extremas de ajuste y estabilización y de la derrota de Sendero tendrían un alto costo respecto a la posibilidad de consolidación de la democracia, y a la acumulación social de una experiencia cívica y política en el corto, mediano y largo plazo. Esa certidumbre se constituiría en un factor de legitimidad del régimen, abonando su tendencia a la expropiación de la política hasta entonces ejercida por la sociedad, a la deslegitimación de toda acción política partidaria, a la sujeción de las organizaciones civiles y no gubernamentales mediante controles burocráticos, afirmándose la convicción del régimen de su misión salvadora y su capacidad de sustitución política de la sociedad mediante métodos autoritarios.

El estado fue comprimido a su mínima expresión, el Congreso con la presencia de los grupos opositores representaba un estorbo, por lo que el capital privado nacional como el externo y, especialmente los organismos multilaterales

¹⁴¹ Cueto, Alonso. "El desprestigio de las palabras." Revista Debate, Mayo-Junio 1995. Lima- Perú.

como el BM, el BID y el FMI no parecían poner reparos a la cada vez mayor afirmación del autoritarismo. Tanto fue así, que cuando Fujimori impulsó el autogolpe de estado en abril de 1992, "con el apoyo de casi el 70% de la población",¹⁴² esos organismos y el gobierno norteamericano, así como la OEA, no plantearon grandes objeciones; dieron carta soterradamente abierta a Fujimori para que éste reafirmara la convicción de que su presencia política en el escenario, y la de su Ministro de Economía Carlos Boloña, era suficiente aval para lograr la confianza internacional, por lo que con gran displicencia frente a las reacciones internacionales, él continuaría con su objetivo de ruptura de la democracia mediante la clausura del Congreso y la implementación de las reformas sin oposición alguna, aunque ello significara, poco más tarde, la renuncia de Boloña.

Ese autogolpe fue argumentado por Fujimori con una evaluación positiva de su gestión, remarcando la imposibilidad de gobernar con un Congreso que entorpecía su gestión y capacidad de tomar medidas, además del señalamiento de que las instituciones fundamentales del Estado estaban atravesadas por el caos y la corrupción. En vista de tal situación y del progreso y orden alcanzado con su gobierno, éste requería de una reestructuración de esas instituciones. Con esos argumento Fujimori, no sólo disolvió el Congreso, sino que su reorganización dio cabida a sus más férreos adherentes sin que la oposición encontrara espacios para desenvolverse en el parlamento: reorganizó, asimismo, el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura y el Ministerio Público, así como, el Tribunal de Garantías Constitucionales que en varias ocasiones había declarado inconstitucionales varias de las medidas adoptadas por el régimen; igual camino tomó la Contraloría General de la República y el Poder Electoral, quitándole a éste la autonomía que lo había caracterizado en las elecciones pasadas, a través de la nominación de personas allegadas al régimen.

¹⁴² Degregori, Carlos Ivan. "La década de la antipolítica. Auge y huida de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Instituto de Estudios Peruanos. Lima-Perú. 2000. Pp35.

TESIS CON
FALLA DE CUBIEN

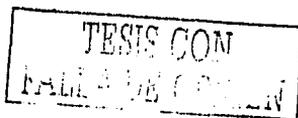
Pero, lo más característico de este régimen autoritario fue que, "las formalidades democráticas perdían importancia ante sentimientos desbordados tanto por el temor como por la desesperanza. Ganaba espacio la idea de tomar medidas rápidas y eficaces, sin consulta y transformadoras que desconocían el marco representativo y donde las instituciones reguladoras del Estado de Derecho para el gobierno y buena parte de la población, se las consideraba como trabas que dadas las urgencias con las que se vivía era conveniente pasar por alto."¹⁴³

El programa neoliberal y la política contrainsurgente no requerían de la rémora opositora, era necesario contar y sentar autoridad y establecer una fluidez en la aplicación de las medidas económicas, como era fundamental garantizar política y jurídicamente todas las consecuencias que devinieran de las acciones contrainsurgentes implementadas por las fuerzas armadas: tierra arrasada, apresamiento sin órdenes judiciales, desapariciones, tortura, asesinatos, juicios con jueces sin rostro, persecución a los abogados defensores, etc. Todo ello bajo la concepción de "orden, tecnología y honradez"

En la Constitución de 1993, se consagraron los principios neoliberales de apertura y funcionamiento de la economía bajo los lineamientos de la libre oferta y demanda, se estableció un presidencialismo más cerrado que daba plenos poderes y discrecionalidad a Fujimori, aumentando su capacidad de imponer las decisiones de estado y la centralización del poder, con el consecuente debilitamiento de la descentralización política experimentada por el país en la década anterior. Con la nueva Carta Constitucional se desarticuló el Congreso reduciéndolo a una sola Cámara de sólo 120 representantes y, diseñada para entonces la estrategia de gobernar el país por mucho tiempo, fue aprobada la reelección presidencial, muy a la medida de Fujimori.

Estos acontecimientos significaron, sin duda, otro escenario político. Los partidos y las instituciones fueron altamente desprestigiados, profundizándose lo que muchos autores denominan como la fase de la antipolítica; es decir, "un

¹⁴³ Grompone, Romeo. "Al día siguiente....." En Cotler, Julio y Grompone, Romeo: El Fujimorismo; Ascenso



conjunto de discursos y prácticas que satanizan la política como actividad pública e institucionalizada y pretenden su reemplazo por mecanismos 'naturales' como el mercado, cuya vigilancia está a cargo de técnicos que brindan soluciones prácticas a problemas específicos".¹⁴⁴

En esa perspectiva, el golpe de 1992 devino en un hecho justificable, el control del Estado fue apoyado por una parte importante de la población y Fujimori encarnaba la fuerza actuante de la crítica. A pesar de que la crítica a nivel internacional se dejó sentir y Fujimori convino con la OEA, después de las presiones que éste ejerciera, y los EEUU en el restablecimiento de Poder Judicial y un Parlamento elegido, sin embargo, no sólo cambió la composición básica de ambos, sino que su organización interna y funcionamiento fueron vaciados de su contenido fundamental para transformarse en un apéndice de él. "Incluso la propia idea de régimen político se encontraba en cuestión en el caso peruano, si por tal entendemos una trama de instituciones y normas jurídicas vigentes y consentidas, a los procedimientos ordinarios y a los usos existentes en la formación y en la ejecución de las decisiones y el control de todas ellas y a la identificación de reglas y pautas de selección e incorporación y circulación del personal político, directivo y sus instituciones"¹⁴⁵

La administración pública fue reducida a su mínima expresión, el Estado fue dotado de un aparato eficiente de captación de impuestos, pero se desmantelaron o fueron despojadas de recursos las instituciones prestadoras de servicios públicos. La burocracia cambió de composición y esa tecnocracia nueva se fue percibiendo como pragmática, tratando de distinguirse y despojándose de toda propuesta política. Desaparecieron los organismos de planificación y fueron las personas leales al presidente las que renovaban el viejo clientelismo político y el populismo al formar un equipo que, controlado por el Sistema de Inteligencia Nacional dirigido por Vladimiro Montesinos, trabajaba en el Palacio de Gobierno,

y caída de un régimen autoritario. Op. Cit. 2000. Pp.84.

¹⁴⁴ Nicolás Lynch, citado por Carlos Iván Degregori. 2000. Op. Cit. Pp. 20.

¹⁴⁵ Grompone Romeo: Al día siguiente.....Op cit. 2000. Pp. 78.

encargándose de planear y distribuir recursos para programas sociales que abonaran a la popularidad de Fujimori.

La construcción de escuelas, caminos, postas de salud, así como, la distribución de computadoras y equipo a las escuelas pasaba por el control directo del Presidente y sus allegados. Como ya se analizamos anteriormente, para dar visos institucionales a estas decisiones autoritarias fue creado el Ministerio de la Presidencia, como mecanismo real de debilitamiento de todos los Ministerios orientados a diseñar y ejecutar la política social (Educación, Salud, Obras Públicas, etc.), y en donde se incubaron los peores procesos de corrupción que haya conocido el país. En un viaje que hicieramos por varias regiones del país constatamos que este Ministerio aparecía con una frecuencia inusitada en todos los anuncios pintados o instalados en las carreteras, como el ejecutor de todas las obras del régimen, no existían pues las otras instituciones del Estado. La red de corrupción que se tejió favoreció a los allegados del régimen relacionando, mediante lazos clientelares, a los burócratas asentados en Lima con los de las provincias y, paralelamente, se idearon mecanismos de penalización para los adversarios.

"Al votar por mí, el Perú ha votado por el orden, la disciplina, el progreso" dijo Fujimori la noche de su elección y esa filosofía positivista se tradujo no sólo en la política económica implementada sino en la devastación de los referentes institucionales que pudieran garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos conquistados. Esos derechos fueron contenidos y casi todos los mecanismos de intermediación y de representación sufrieron un alto grado de debilitamiento o fueron quebrados. Por lo mismo, con Fujimori fueron "desechadas las ideas de pactos y compromisos entre actores sociales y gobierno...La expresión descarnada de intereses se presenta como consenso meramente técnico que no requiere de fiscalización o de control. Si no existen conflictos que se reconozcan o discrepancias que se respeten, la intermediación política aparece desprovista de sentido"¹⁴⁶.

¹⁴⁶Grompone, Romeo. "Los Partidos: Volver a empezar". Revista Cuestión de Estado, Año 3. No. 14-15. Instituto Diálogo y Propuesta. Lima-Perú. 1995.

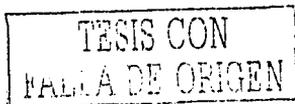
Así, los despidos masivos y la indefensión de los trabajadores se combinaron con la pulverización de los salarios a niveles infimos, la vasta desocupación y subocupación fue aparejada con la reorganización institucional del Estado con vista a la eliminación de legislación laboral y el desmantelamiento de las instituciones que permitían a los trabajadores formular demandas en defensa de su empleo, su salario, de sus organizaciones y sus derechos conquistados, así como, su capacidad de presencia en el debate público.

Durante la década de 1990, y aún hasta la actualidad, el Perú se convirtió en una economía dolarizada, los precios de los productos son internacionales y los salarios son locales. Se produjo un nivel de congelamiento de los salarios tan profundo que casi perdieron significado en gran parte de los sectores medios y bajos de la sociedad. Los peruanos fueron sometidos al más eficaz sistema de cobro e impuestos, pero han ido perdiendo la opción de tener acceso a los servicios públicos básicos como la salud, educación pública, servicios urbanos, "pueden votar, pero no tienen mecanismos para controlar la legitimidad de su voto....pueden consumir bienes y servicios pero, en las precisas palabras de un miembro del Congreso Constituyente Democrático (CCD), sólo en la medida de sus ingresos. El presidente de la comisión de Educación del CCD...para justificar el desmantelamiento y privatización del sistema estatal de educación afirmó "todo el mundo tiene derecho de educarse, hasta donde lleguen sus ingresos".

147

Se fue produciendo una desobrerización extendida." La "informalización" de la economía ha sido la otra cara de la política económica, que ha priorizado el dominio de los sectores financieros en gravísimo detrimento del aparato "formal" de la economía. Se ha producido un crecimiento económico, pero el punto de partida del mismo fue la profunda "desindustrialización" de más de 20 años de crisis y de indicadores que situaban la economía de 1990 al nivel de 1960-65. No se han producido, sin embargo, mejoras significativas en los ingresos; (la) "...precaria "formalización" de la informalidad ...(como tanto pregonara

¹⁴⁷ Quijano. Anibal. Op cit. 1995



Hernando de Soto)...va de acuerdo ahora con esa declarada cultura del orden de la que habló Fujimori la noche de su elección".¹⁴⁸

Gran parte de las instituciones básicas, económico-sociales y políticas previas a 1990, fueron puestas en escombros y estuvieron en retirada. Las organizaciones sociales como las asociaciones de pobladores, trabajaban de manera retraída en proyectos financiados por ONGs internacionales, pero sus organizaciones más amplias habían dejado de estar presentes en el debate público. Los Comités del Vaso de Leche y los Comedores populares actuaban encerrados sobre sí mismos, pasando a depender de los Municipios y de la puesta en marcha de programas de corte paternalista y asistencial impulsados desde la Presidencia.

Con respecto a las Rondas Campesinas, la transformación de sus contenidos originales discurrió por otras vías: El Ejército presionó para que muchas de ellas se orientaran a colaborar con las estrategias de contrainsurgencia, fueron reprimidas si tal apoyo resultaba insuficiente; otras sufrieron los ataques de Sendero y entre dos fuegos optaron por huir o retraerse definitivamente. Son muy pocas las rondas campesinas que aún mantienen algunos de los elementos que les dieron origen, otras, trascendieron con el desarrollo de proyectos de carácter comunitario buscando el apoyo internacional bajo la censura y la lupa de los funcionarios del Ministerio de la Presidencia, aún con ello lograron desarrollar diversos proyectos comunitarios como la instalación de servicios, construcción de escuelas, carreteras, etc.

Se produjo, pues, el desmantelamiento de muchas organizaciones sociales, en particular, las que representaban a sectores de la sociedad civil. Algunas instituciones que sobrevivieron se reconfiguraron lentamente, logrando mayor presencia social y funcionan unas con mayor dinamismo que otras en la precariedad. Había pues un margen muy amplio para el ejercicio arbitrario de cualquier autoridad, "las instituciones y organizaciones de los trabajadores

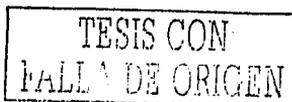
¹⁴⁸ Cueto. A. Op.cit. 1995.

asalariados declinaron dramáticamente, (como la Confederación General de Trabajadores del Perú); los demás sectores tienen...(aún)...numerosas instituciones (clubes de madres, asociaciones de mujeres populares, comedores populares, vaso de leche, asociaciones de pobladores, comunidades rurales), pero...(las caracteriza la dispersión),...sin articulación nacional, con esporádica presencia pública y ambigua ideología social y política. La dispersión institucional expresa la dispersión social, esto es, en la estructura de la sociedad y la crisis de identidad social de esa vasta población".¹⁴⁹

La total hegemonía del discurso neoliberal dentro y fuera del ámbito parlamentario, facilitada por la deserción teórica y política de gran parte de la izquierda y la experiencia desastrosa con el final del régimen aprista, permitieron que al obvio apoyo de la burguesía se sumara la neutralización de la resistencia popular. Los reducidos y dispersos núcleos que la intentaron fueron sometidos con los mecanismos de represión destinados a la guerra sucia contra Sendero. Los partidos políticos de derecha e izquierda vieron agotadas sus posibilidades de convocatoria en los exiguos sectores medios y de las capas populares; todos fueron afectados por una profunda crisis de representación social, originada no sólo en los profundos cambios de la estructura social y de sus instituciones, sino en un universo ideológico que aún los remitía a desarrollar una crítica evocadora del pasado sin poder dar cuenta del presente.

Las FFAA depuradas, sometidas a la vigilancia del SIN y al control autoritario de los grupos que condicionaron y apoyaron a Fujimori, y la Iglesia Católica, en la que priman sus sectores conservadores, aparecían como las instituciones más estables y fuertes a nivel nacional. Por su parte, los grupos empresariales más poderosos y beneficiarios del modelo neoliberal, lograron una organización más consistente en apoyo directo al régimen aunque sin proyecto propio de largo plazo a pesar del alto nivel educativo de los propios empresarios y sus asesores.

¹⁴⁹ Quijano, Anibal. Op. cit. 1995



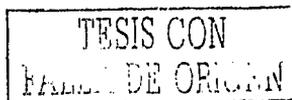
Entre las organizaciones más importantes que los aglutina, podemos mencionar a la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales del Perú, CONFIEP; "la Asociación de Bancos, la Asociación de Fondos de Pensiones, La Sociedad de Comercio Exterior, mineros, productores de hidrocarburos y de electricidad"¹⁵⁰, y efectuarán anualmente sus foros gremiales a través del Instituto Peruano de Administración de Empresas, IPAE y CADE. Mientras que los medianos y pequeños propietarios organizados en la Asociación Peruana de Medianos y Pequeños industriales, se adscribirán a la Sociedad Nacional de Industrias, SNI; a la Asociación de Exportadores, ADEX; y a la Sociedad Nacional de Industrias y Cámara Peruana de Construcción, tratando de competir con el privilegio logrado por el grupo empresarial más poderoso. Subsistieron algunos gremios de profesionales prósperos que en pocas ocasiones se abrieron al debate de problemas nacionales y que estaban fuera de sus intereses gremiales: Colegio de Abogados, de Economista, de Contadores, de Médicos, Ingenieros, etc.

3. LA REELECCIÓN DE FUJIMORI: EL FINAL DEL TUNEL.

La reelección de Fujimori, en 1995, no se produjo gracias a una renovación del programa económico implementado. A pesar del uso arbitrario de los recursos del Estado, la ilegal participación de jefes de las FFAA en la campaña, el estado de emergencia en más de la mitad del territorio y el fraude electoral en muchas provincias, el voto a favor de Fujimori, que alcanzó un poco más del 64% a su favor mientras que Javier Pérez de Cuellar sólo lograba el 21%, fue una expresión de reconocimiento de la restitución de cierto grado de certidumbre, de la derrota política y militar del terrorismo, del control de la inflación y un crecimiento económico inicial cuyos beneficios la población esperaba compartir.

A pesar de encontrarse en la cúspide de su popularidad, sin embargo, los candidatos fujimoristas a las alcaldías de las principales provincias no fueron

¹⁵⁰ Grompone, Romeo: Al día siguiente.....Op Cit. 2000. Pp. 104



electos, como no lo fueron en la capital ni en el principal puerto del país: el Callao; el liderazgo los ejercía el dictador mas no sus seguidores desprestigiados por la corrupción en la que estaban inmersos y por los frecuentes mecanismos de extorsión política a los que habían recurrido frente a la población de las provincias. Como en las elecciones municipales de 1992, cuando debió retirar la candidatura de uno de sus allegados a la Alcaldía de Lima; en 1995 esa falta de endose de la votación sería interpretada por el reelecto presidente como un claro mensaje y reconocimiento de su indiscutible liderazgo y la insustituibilidad de su persona en la conducción del país.

Seguridad y esperanza parecían haber sido el leit motiv del mayoritario apoyo de la población. Pero también, como Alonso Cueto opina: "Los millones de votantes que pusieron un aspa en la cara del presidente Fujimori el 9 de abril, votaron por una realidad tangible: colegios, carreteras, postes de luz. Educados en la adversidad y el engaño los peruanos somos versiones modernas del apóstol Tomás: tenemos que poner el dedo en la llaga para creer en el milagro".¹⁵¹

Aún admitiendo el peso de los recursos del Estado en apoyo a la reelección, los resultados de abril no fueron el antecedente de un pluralismo más acentuado en la escena política, sino, por el contrario, su absoluta restricción. Estamos de acuerdo con diversos analistas, en que en esta coyuntura electoral se canceló el sistema de partidos a través de la cooptación, el seguimiento y control de la oposición por el SIN; con excepción de Pérez de Cuellar los candidatos de los partidos habían logrado poco menos del 5% de la votación nacional. Como bien expresara Romeo Grompone, "un ciclo político había llegado a su fin."¹⁵²

La "eficacia del gobierno en restablecer las certidumbres más elementales de la sociedad lo rodeó de un amplio respaldo y confirmó el vínculo...entre el Presidente y amplios segmentos sociales, particularmente populares...Junto a una lógica de la identidad que juega en las adhesiones y el voto, y que como

¹⁵¹ Cueto, Alonso Op. Cit. 1995.

sabemos se exagera por la fragmentación social y la erosión de la representación, coexisten en los medios populares lógicas que se elaboran desde una mayor integración social, autoafirmación individual y cálculo racional, y aquí el voto no es un simple reflejo de la seducción del líder sino el producto de una relación costo-beneficio desde la que se apuesta o descarta opciones a la mano".¹⁵³

En ese contexto, Pérez de Cuellar, a pesar de sus notables diferencias con los otros candidatos y con Fujimori, consiguió el efecto no deseado. Él constituía un referente civil y democrático de viejo cuño sobrepasada por la enorme complejidad social del Perú y, por lo mismo, despertó en los votantes una sensibilidad respecto a la reproducción de un discurso y modalidad de trabajo muy cercanos a los partidos preexistentes, suscitando temores de que la política y las decisiones públicas -esferas a las que los votantes tienen poco o ningún acceso- dejen de ser un factor de ordenamiento de la sociedad y lo sean de incertidumbre, inestabilidad e ineficiencia.

Quedan en ese sentido muchos espacios de reflexión, sin embargo, coincidimos con Anibal Quijano cuando compara lo ocurrido en Chile con la dictadura de Pinochet y lo que aconteció en el Perú con Fujimori: "Los propagandistas del régimen actual...difunden la idea de estar haciendo, como decían los panegeristas de Pinochet en Chile, una refundación del orden nacional...que el Fujimorismo está desarrollando un proceso de democratización de la sociedad peruana....En primer término, mucho antes de Pinochet, Chile ya era una de las más nacionalizadas sociedades de América Latina... porque los trabajadores (y la sociedad) conquistaron una...amplia ciudadanía," a diferencia del Perú, en el que habían primado la marginación y exclusión por largo tiempo y sólo en las últimas décadas lograba tomar una forma más ampliamente nacional.

¹⁵² Grompone Romeo. Op. Cit. 1995. Pp. 11.

¹⁵³ Córdova, Manuel. "9 de abril. Algo más que un 64%". Revista Cuestión de Estado. Año 3. No. 14-15. 1995. Lima. Perú.

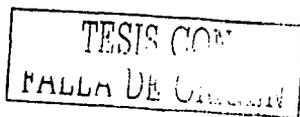
"La dictadura de Pinochet,...reorganizó en efecto las bases sociales de la estructura institucional del poder, político sobretudo. Pero no podía hacer, aunque lo hubiera propuesto, una sistemática desnacionalización de la sociedad o del Estado. No se propuso, en realidad, siquiera una total privatización de los bienes públicos. Ni se renunció al control nacional del país. El carácter no democrático del régimen no podía modificar, ni modificó, el carácter nacional de la sociedad y del Estado. Por eso, cuando los movimientos democráticos de Chile lograron derrotar a Pinochet, pudieron recuperar pronto la ciudadanía y conquistar el control democrático liberal del Estado cuya nacionalidad no estaba en cuestión...El fujimorismo tiene en común con el pinochetismo su carácter dictatorial y represivo...pero actuando en un país con una sociedad e historia política bien diferentes. El fujimorismo no se propone ni va a producir ninguna refundación nacional; por el contrario, se orienta a destruir los procesos de legalidad, descolonización, democratización y nacionalización de la sociedad y el estado. que estaban en curso desde hace varias décadas."¹⁵⁴

A pesar de esas diferencias con el país vecino, en el curso de las elecciones de 1995 parte de los sectores medios y populares, y aún algunos sectores empresariales, concientes de la corrupción que atravesaba al régimen y en protesta de la "interpretación auténtica" que hicieron los diputados respecto a la reelección de Fujimori, -contemplada en la Constitución como una posibilidad pero después de que pasara un periodo presidencial- reiniciaron una lucha democrática que se expresó más nitidamente con " la recolección de un millón y medio de firmas, 10% del padrón electoral,... (llevado a cabo después de la instalación de un Foro Democrático)... para solicitar al Congreso la convocatoria de un referéndum a fin de que la ciudadanía diera su veredicto sobre la legalidad de la interpretación constitucional."¹⁵⁵

Sin embargo, la lucha social seguiría un curso zigzagueante y fragmentado por liderazgos electorales individuales de oposición que devenían de algunas exitosas gestiones en el ámbito municipal de las provincias. Ella iba

¹⁵⁴ Quijano, Amílcar. Op. Cit. 1995

¹⁵⁵ Cotler, Julio: "Gobernabilidad.....Op. cit. 2000, Pp.43



adquiriendo una dimensión más amplia en el ámbito nacional, concatenada ella con los movimientos de protesta contra los acuerdos firmados para resolver los conflictos fronterizos con Ecuador y Chile. Nuevamente se impondría el autoritarismo con su vertiente asistencial y clientelar, pero esta vez, en condiciones adversas debido al impacto causado por la crisis en México y el efecto tequila, de forma tal que entre 1996 y el 2000 el régimen debió frenar el gasto público manteniendo un promedio de crecimiento de la economía del orden del 2.5%, a diferencia del 6 a 7% logrado entre 1993-1995.

La coyuntura del rescate de los rehenes de la Embajada de Japón, tomada por un remanente del grupo guerrillero Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), y la solución de los conflictos fronterizos con Ecuador y Chile, le dieron un gran respiro al régimen al lograr no sólo la aprobación mayoritaria de la población, sino el respaldo de gobiernos extranjeros y diversos organismos internacionales.

En ese contexto, el régimen acentuó las privatizaciones, contaba en 1996 con reservas internacionales elevadas y la tolerancia de los organismos internacionales, por lo que sólo se trataba de dar continuidad a la política ya reseñada. Sin embargo, los altos compromisos adquiridos para el pago de la deuda externa, la escasa recuperación de la economía respecto a la década perdida del 80, las extremas privaciones que significaron para la población las medidas de ajuste estructural, la ausencia de una política industrial que volcara firmemente al país hacia las exportaciones, el papel especulativo de las entidades financieras y los altos costos de los servicios impuestos por las grandes empresas extranjeras que adquirieron a las nacionales, iban colmando la capacidad de resistencia de diversos sectores sociales empobrecidos:

Mientras tanto, en 1998 los industriales clamaban consistencia y continuidad en las políticas neoliberales. En 1999, la elevación del gasto público para la ejecución de obras y programas asistenciales que dieran impulso a una nueva campaña de re-reelección de Fujimori, terminó por crear condiciones fiscales extremadamente difíciles, aunque para solucionar estos problemas

volviera a ser nominado como Ministro de Economía uno de los artífices del liberalismo extremo, Carlos Boloña.

La canalización de recursos para programas asistenciales iría chocando con la carencia de fondos internos, con las demandas sociales de incremento de la capacidad de consumo vía la elevación de sueldos y salarios, y con las aspiraciones políticas de democratización de la sociedad, traducidas ahora en la emergencia de actores sociales que no sólo denunciaban la violación de los derechos humanos en el país, sino en la sistemática movilización de los trabajadores y sectores populares por sus reivindicaciones laborales y la creación de empleos.

Las discrepancias políticas con el régimen habían volcado a diversos sectores de la sociedad hacia la dinámica de nuevos actores sociales que surgieron en el plano electoral, pero ello no significaba el surgimiento consistente de organizaciones partidarias que pudieran competir entre ellas. Resurgieron timidamente algunos partidos previos: El Partido Popular Cristiano y el APRA, y las organizaciones de izquierda que se aglutinaron en apoyo a Pérez de Cuellar entraron después de las elecciones en un proceso de fragmentación mayor, aunque a nivel del Congreso mantuvieron cierto espíritu unitario como oposición.

Por su parte, la sociedad civil todavía no restablecía vínculos estrechos con los líderes de oposición emergentes, mientras que en otros ámbitos parte de la población urbana y rural veía en sus dirigentes el oportunismo y la reproducción de los métodos impulsados por el fujimorismo. Sin embargo, algunos de los movimientos sociales retomaban diversas formas de protesta, pero su dispersión y la falta de liderazgo era aún una de sus características.

Las elecciones del 2000 se realizarían pues, signadas por una coyuntura de carencia de recursos, aunque Fujimori dispusiera de los recursos del Estado sin ningún control. Se sumaba a esa situación, nuevos procesos de recesión provocados por la crisis en los países asiáticos, especialmente Japón, la crisis

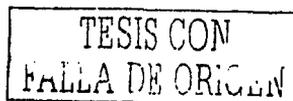
de Brasil y Rusia, además de los efectos devastadores en vidas humanas e infraestructura de la corriente marítima del Niño.

El signo opositor se extendía en el territorio, los sectores más politizados se movilizaban a favor de la necesidad de democratización del país, otros actores surgían al calor de gestiones municipales más o menos exitosas y se constituía en una suerte de dirigentes de frentes populares más o menos amplios. La crítica se combinaba con el malestar social, pero no habían propuestas respecto al futuro sino solo la continuidad neoliberal, como tampoco se lograban consolidar procesos organizativos partidarios; todos, sin embargo, confluían en la necesidad de dar término al régimen de Fujimori. "Dichos dirigentes comandaban movimientos electorales y exánimes partidos que no tienen existencia orgánica, por lo general las lealtades políticas de sus miembros son efímeras y, asimismo, porque la representación que asumen y las credenciales democráticas que presentan son dudosas, en el mejor de los casos."¹⁵⁶

Se producía, sin embargo, la construcción de nuevas identidades políticas y sociales, pero el camino desde la devastación hacia la conformación de un sistema de partidos parecía aún lejano. La reconfiguración de un nuevo sistema político, de búsqueda de confluencias y consensos era aún incipiente en esta coyuntura, por lo que un debate sobre la transición de esta fase de la antipolítica a la de ejercicio de la política es todavía hoy un tema de gran creatividad analítica y desafiante.

Mientras tanto, el SIN y el ejército se encargarían de diseñar una ofensiva que buscaría doblegar a cualquiera de los contrincantes de Fujimori, como Cotler diría, se orientaron a "organizar una guerra sucia contra la oposición". El hostigamiento obsceno, el desprestigio de las personas, el control de los periódicos y la televisión, los juicios a sus propietarios, aunada a la persecución y la eliminación de la nacionalidad de uno de ellos.

¹⁵⁶ Cotler, Julio. "Gobernabilidad....." Op. Cit. Pp. 51



El autoritarismo más abierto se aunó con la difusión de programas soeces respecto a los personajes públicos, el bajo nivel de los programas televisivos de gran audiencia, la ridiculización de políticos, y la banalidad y grosería con que se presentaban a personajes de la vida cotidiana como "la chola y el cholo", no abundaban sino a una baja formación cívica de la sociedad, a la ruptura de los niveles elementales de tolerancia y equidad, a la pulverización de todo referente ético y moral, a la caída del nivel de la cultura política en la sociedad y, por supuesto, a un desmedro de las posibilidades sociales de análisis y enjuiciamiento de las condiciones políticas y sociales del país. Parecía que el Perú vivía no sólo la ausencia de debate, sino un "achataamiento" premeditado de la cultura y de toda noción de la política, sus parámetros estaban siendo reducidos a niveles insospechados.

El fraude electoral montado por el régimen abarcó la fase preelectoral, ayuda alimentaria por voto, donaciones, intimidación, además de la conformación de una comisión de allegados de Fujimori, comandados por Absalón Vásquez, que debía recolectar firmas para la inscripción del candidato, resultó en un gigantesco escándalo público por el millón de firmas falsificadas a nombre de Perú 2000 –refundación del movimiento Cambio 90 que lo había llevado al poder al inicio de la década anterior- que presentaron al Jurado Nacional de Elecciones sin que éste, a pesar de las protestas de diversos grupos de oposición y denuncias ante la OEA y la Corte Interamericana de Justicia, le diera el curso legal para su sanción y la invalidación de las elecciones.

Dada la presión internacional y nacional, en medio del escándalo y las denuncias, el Jurado Nacional de Elecciones no pudo menos que declarar que en la primera vuelta electoral Fujimori había logrado colocarse en una situación de poder competir en una segunda vuelta. Para ésta, la candidatura de Alejandro Toledo había tomado vuelo con el apoyo aglutinado de los líderes de los movimientos electorales de oposición, los grupos de izquierda y la de dirigentes de algunos partidos como el APRA y el Popular Cristiano, pero Fujimori ganaba

su segunda reelección con un fraude avalado por el Jurado Nacional de Elecciones y con 51.2% de los votos mientras que Toledo llegaba al 48.8%¹⁵⁷.

La falta de legitimidad de Fujimori se traducía no sólo en el agravamiento de la situación económica por la cual los empresarios demandaban la profundización de la política económica previa y austeridad en el gasto público, sino en la sistemática movilización social opositora. Toledo se retiró de las elecciones provocando una agudización de las movilizaciones sociales, la cual asumió simbólicamente la necesidad de lavar la bandera nacional ante la falta de escrúpulo y atropellamiento de las mínimas condiciones de ejercicio de la democracia y de la ciudadanía.

Tanto Fujimori como Montesinos se habían convertido en un problema para el gobierno de los Estados Unidos y sus servicios de inteligencia, ellos ya no podían garantizar la estabilidad social que tanto demandaban los organismos financieros y el capital internacional. Los entretelones de esta tragedia son muchos, sólo mencionaremos que habrían sido, de acuerdo a comentarios periodísticos, especialmente en el Diario La República, los propios servicios de inteligencia norteamericanos los que filtraron, a través de miembros de la Marina, los videos donde se consignaban la compra de Diputados de oposición por parte de Vladimiro Montesinos. Esta cloaca se abrió a la luz pública, el país pasó meses tratando de recuperarse de la vergüenza y la ofensa inflingida a la sociedad, enterándose de las dimensiones de una corrupción escandalosa montada inescrupulosamente.

Huida de Montesinos, renuncia del Primer Ministro, huida de Fujimori hacia Japón; en fin toda una pesadilla de la que políticamente parecía difícil que el país y la sociedad se recuperaran; pero este final, fue afortunadamente la bancarrota de un sistema político autoritario que se impuso en el país con el recurso de los métodos de corrupción nunca antes conocido. Es precisamente este conocimiento social el que ha representado un punto de ruptura, un punto de inflexión y de valoración de la legalidad y la necesidad de rescate de la

¹⁵⁷ Contrera C. y Cueto M. Op cit. Pp. 369 - 370.

institucionalidad política y gubernamental, de la institucionalidad como referente básico y de la democracia como un aspecto esencial de la convivencia social.

4. NUEVOS PROCESOS: RESTAURACIÓN DE LA DEMOCRACIA. ALEJANDRO TOLEDO: EL GOBIERNO DE TRANSICIÓN, EL CHOLO CHOLO.

La experiencia dictatorial ocurrida en el Perú en la década de 1990, ponía en "evidencia las consecuencias contradictorias de la globalización en países cuya fragmentación social y política dificulta el desarrollo autónomo del orden institucional, y faculta la intervención externa para instaurar la democracia."¹⁵⁸ Evidentemente este panorama confluía con el históricamente construido, pero también, la sociedad civil peruana había pugnado a lo largo de esa historia por contrarrestar la ceguera de las clases dominantes y sus gobernantes dictatoriales de turno, por abrir espacios de democratización e institucionalidad política en el país.

Ahora, nuevamente, la compleja sociedad peruana pugnaría por la necesidad de reconstrucción de nuevos espacios, por la "recuperación de las instituciones democráticas, el desmantelamiento del sistema autoritario, tarea más compleja que la sustituir personas y realizar reformas políticas de corto plazo, llevar a cabo elecciones transparentes y competitivas asumiendo con realismo la debilidad de los partidos políticos y superar el personalismo de los movimientos independientes, en quienes se cuela el propio estilo fujimorista"¹⁵⁹

La recuperación de la democracia y la institucionalidad del Estado pasó, en el año 2001, por la elección de un Gobierno de Transición por un Congreso en donde el Fujimorismo enmudeció ante la censura nacional y en el que tomaron fuerza la oposición y algunos congresistas independientes. Valentín Paniagua, miembro del Partido Acción Popular y ex Ministro de Belaúnde, logró establecer en el país un sentido de las proporciones de la ética y moral política,

¹⁵⁸ Cotler, Julio, Gobernabilidad....." Op. Cit. 2000. Pp. 59



restituyó la gobernabilidad de la nación, sin que ello significara la reconfiguración de un sistema político acabado, pero finalmente, con dicho gobierno se daba inicio a un proceso de transición de un sistema autoritario a uno en que la democracia y la política, la búsqueda de consenso y el juego político partidario tomarían un lugar en la vida institucional del país. Volvían al país la certidumbre institucional y se rescataban los valores democráticos.

Los actores sociales y la sociedad civil aún deben llevar sobre sus hombros la experiencia de once años de dictadura y nueve de la ruptura del régimen constitucional. Cargan asimismo, la necesidad de remontar los atrasos políticos generados, así como, los rezagos acumulados y la urgencia de construir referentes institucionales y democráticos de mayor capacidad de convocatoria y de participación para las generaciones que se formaron al calor de los procesos sociales y políticos ocurridos en la sociedad en la década de 1990.

Los inicios de este proceso están dándose en la actualidad con enorme dificultad. Alejandro Toledo construyó su liderazgo al calor de la lucha electoral del año 2000 y de los movimientos sociales que terminaron por producir la huida de Fujimori a Japón. Esa presencia en el escenario social no plantea grandes distinciones entre los personajes, uno hijo de migrantes japoneses, el otro hijo de una familia pobre de la provincia que logra remontar la pobreza y salir adelante hasta lograr el éxito que toda persona desea tener. Ambos exitosos profesionalmente, el primero, como Rector de la Universidad Nacional Agraria-La Molina y Presidente de la Asociación Nacional de Rectores, el segundo, como funcionario del Banco Mundial. Uno "chino cholo", vivaz y ahorado, y el otro "cholo peruano", acriollado, amestizado en la búsqueda de progreso; uno jugando mañosamente en la política y haciendo uso rápido de la tradición autoritaria que nos remonta a sus propios orígenes y ancestros, el otro, con el sello de una lucha democrática llevada adelante sin que las consecuencias

¹⁵⁴ Grompone, Romeo. "Al día siguiente----" En: Cotler, Julio y Grompone Romeo: El Fujimorismo. Ascenso y caída de un régimen autoritario. Op. Cit. 2000. Pp77.

estuvieran a su vista claramente, con el empeño mestizo, acriollado, pero con la falta de asimilación rápida de la propia experiencia política en el poder.

Toledo parece reproducir la imagen del Fujimori, aunque le da a su propio personaje un contenido distinto de pertenencia al país, dada la traición del chino que se fue a Japón. Es después de todo un peruano nacido en el Perú; pero, también, pareciera no haberse percatado de la complejidad de la sociedad peruana ni de la situación social y política del país. Los hilos de su relación con los organismos y gobiernos de otros países parecían firmes, pero se han debilitado en la medida en que su capacidad de mantener una legitimidad interna ha descendido no sólo por la reducida eficacia de sus medidas, sino por la sinuosidad de sus propias relaciones con la sociedad.

Ser un gobernante cholo en el Perú, es de por sí un avance en la democratización de la sociedad, pero la sociedad cholificada no encuentra en él aún un referente de civildad, de capacidad de conducción y liderazgo político. Se atraviesan entre sus seguidores el oportunismo y la necesidad de dar continuidad a las relaciones políticas clientelares. En fin, la transición política en el Perú está aún en una fase inicial de construcción.

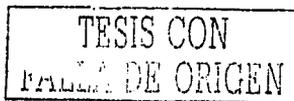
CONCLUSIONES

Queremos esbozar estas conclusiones, reflexionando sobre algunos problemas centrales que han tenido efectos de largo alcance en la construcción de la democracia y la institucionalidad política en el Perú.

La Historia política del Perú en casi todo el siglo XX, ha transitado por la instauración de dictaduras militares que han socavado la continuidad de los gobiernos electos democráticamente, la consolidación de un sistema político partidario, de la institucionalidad estatal, del ejercicio de la ciudadanía y los derechos políticos y sociales de la mayor parte de la sociedad peruana. Han sido regímenes que con distintos métodos, han mermado la posibilidad de enriquecimiento de una experiencia política a nivel social que abonara a la reafirmación de los actores sociales como ciudadanos, a la construcción de una civilidad, de un orden ético y moral, de tolerancia y equidad en el juego político partidario de alcance nacional. Esas dictaduras han resquebrajado, igualmente, la construcción de soportes y referentes institucionales democráticos más estables y confiables para los distintos actores surgidos al calor de los movimientos sociales y de las profundas transformaciones en la estructura social del país.

No pretendemos colocarnos en una posición determinista, solamente intentamos establecer en el trabajo algunas de las carencias acumuladas y los problemas más importantes que han atravesado la Historia del Perú, y que han influido en la construcción de un sistema político que no ha logrado trascender hacia niveles de convocatoria de la sociedad en su conjunto y dar curso a las demandas generales de inclusión, de pertenencia social, -construidas, por ejemplo, a partir de los movimientos sociales hayan sido éstos coyunturales o de largo alcance- y de la diversidad e identidad étnica y cultural, para transformarlas en procesos organizativos de carácter político.

A pesar de su gran interrelación, lo social y lo político han seguido en el Perú caminos generalmente contrapuestos; pero lo que en el trabajo nos ha interesado desentrañar es que la política ha sido excluyente y no ha tenido un



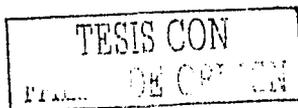
alcance nacional, ella no sólo ha estado ajena a gran parte de la dinámica social de la mayoría de la población peruana, la cual ha discurrido y se ha expresado más a través de sus propios movimientos sociales, sino que los actores políticos no han sido capaces de transformar esas energías sociales en procesos organizativos diferenciados de carácter político, con capacidad para la confrontación y la tolerancia, de dirimir, disentir, de arribar a consensos, etc; en fin, de lograr la construcción más o menos sólida de una sociedad civil capaz de expresarse en los dos terrenos.

En el Perú de la última década, la política ha sido desechada y la ha sustituido el uso de lo social pero no para su articulación organizada, sino para un uso caudillesco y clientelar del poder. Intentamos con este trabajo, aportar elementos para la mejor comprensión de los acontecimientos que se produjeron en la década del 90, y sus secuelas hasta el presente.

1. Los distintos momentos en que se plasmaron los modelos de acumulación capitalista y el desarrollo de la democracia, se conjuntaron en una característica común: ambos se han desarrollado en el Perú con patrones altamente excluyentes y carentes de una visión que consolide nacionalmente a la sociedad peruana.

Los procesos de acumulación que primaron (el agro minero exportador, el sustitutivo de importaciones y el neoliberal excluyente), y los regimenes autoritarios que en distintas etapas gobernaron el país se conjugaron no sólo en las formas de exclusión económica de regiones y grandes segmentos de la población, sino en la difusión social de un sistema dictatorial de ejercicio del poder que se relacionaba más con la estructura de poder autoritario ejercido en la hacienda que con los elementos democráticos que requería un estado capitalista en proceso de modernización. Con distinta dimensión esos modelos dificultaron el tránsito hacia la modernidad económica y especialmente a la de la política.

En este sentido, un aspecto que no puede dejar de ser mencionado aquí, es que el sustento político y social de los modelos agro minero



exportador y sustitutivo de importaciones, pero especialmente su basamento económico propició una tardía y lenta difusión de las relaciones salariales en buena parte del territorio nacional y la escasa capacidad de desarrollo del mercado interno hasta promediar el siglo XX, bloqueando y/o limitando las posibilidades de construcción de un capitalismo dinámico más abierto a los influjos democráticos. Más tarde la exclusión y la pobreza serían parte de un capitalismo difundido en el contexto neoliberal, con sus secuelas de migración y conculcación de los derechos civiles y ciudadanos.

Tales modelos económicos excluyentes y las dictaduras, conjugaron los intereses de las clases dominantes y socavaron el quehacer político y social, abonando al resquebrajamiento de la institucionalidad estatal, de los mecanismos de intermediación social y de los basamentos democráticos que esforzadamente pugnaban por abrir los movimientos sociales y distintos actores de la sociedad, y que con dificultad se restablecían durante los gobiernos civiles.

2. En el curso de las décadas, el cúmulo de problemas económicos y sociales acumulados por las mayorías eclosionaban en los periodos en que se establecían los gobiernos civiles. Con ellos, tampoco las respuestas fueron innovadoras, muchos recurrieron a métodos autoritarios y a las fuerzas armadas para contrarrestar los movimientos opositores, y pocos impulsaron algunas reformas. Por lo menos hasta promediar la década del 60, en esos gobiernos civiles confluyeron una visión democrática conservadora con sus ataduras a los referentes culturales aristocráticos y señoriales de la fase oligárquica.
3. Nunca se produjo en el país, una política económica que realmente transformara estructuralmente las condiciones internas y que la economía transitara hacia una competitividad internacional; por el contrario, el país fue abierto al influjo extranjero sin el contrapeso de políticas internas que ampliaran con consistencia sus márgenes de desarrollo económico y social. Con excepción de Velasco Alvarado, la mayoría de gobiernos civiles o

militares, no tuvieron sino una visión segmentada del país, el sentido de construcción de la nación más o menos integrada devino en algo secundario a las políticas estatales y fue lejana a la preocupación de los estratos dominantes.

4. La integración de la nación en un sentido amplio y diverso, la ampliación del mercado interno, así como la democratización y ciudadanía de los peruanos no ha sido producto de políticas estatales de largo alcance y que tendieran a desarrollar a las distintas regiones del país, sino de procesos migratorios bastos relacionados con la atracción ejercida por algunas ciudades, con el alto nivel de pobreza rural, la conformación de las barriadas y ampliación de las urbanizaciones de clase media.

La lenta democratización de la sociedad y la cholificación de los peruanos, acentuada en las décadas del 40-60, tuvo un correlato estructural que combinaba la gran propiedad agraria con el minifundio, y se tradujo en la lucha campesina por la tierra, por la eliminación de las relaciones serviles y semiserviles en el campo; en las rebeliones, protestas y movilizaciones de militantes apistas del campo y la ciudad, de los universitarios y obreros en lucha por la apertura y democratización de sus centros de estudio y sus derechos laborales, respectivamente.

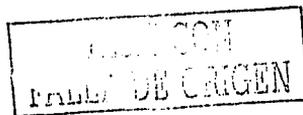
Esos procesos fueron, igualmente, posibles gracias a la lucha por la tierra llevada adelante por los movimientos campesinos de fines de la década del 50 y mitad del 60, la pugna electoral y conformación de partidos políticos que lucharon por el reestablecimiento de la democracia después de la dictadura de Odría, pero sobretudo, y con distinto énfasis y orientación, los procesos reformistas conservadores de 1956 a 1962 y los de 1963 a 1968.

Más tarde, especialmente a partir de la década del 80, tales procesos tomarán una dimensión inusitada debido a la extrema exclusión padecida por el campesinado, al terrorismo y a las acciones contrainsurgentes de las Fuerzas Armadas que colocaron a contingentes amplios de la población urbana y rural de la sierra y selva, entre dos fuegos.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

5. Antes de la década del 50, con excepción de José Luis Bustamante y Rivero (1943 – 1948), la democracia y la ciudadanía no constituyeron sino objetivos marginales de la mayoría de los regímenes políticos civiles que han gobernado el Perú desde 1919.
6. Los gobiernos de Fernando Belaúnde Terry (1963-1968 y 1980- 1985) y el régimen de Juan Velasco Alvarado (1968-1975) fueron, en mi opinión, los de mayor democratización del país; el primero, en la perspectiva política e institucionalidad democrática; el segundo, en términos económicos y sociales. Con distinto signo político y proyectos de desarrollo, ambos contribuyeron a una mayor integración del territorio nacional y a la constitución de una identidad más abierta al mundo andino y a las regiones de la selva peruana.
7. La historia política peruana ha sido altamente contradictoria y zigzagueante, debido a las dictaduras militares que han conculcado los derechos ciudadanos, la vida democrática e institucional del Estado: Sánchez Cerro, entre 1932-1933; Benavides entre 1933 a 1939; Odría; entre 1948 a 1956; la Junta Militar de gobierno de 1962; Velasco Alvarado, entre 1968 a 1975; y Morales Bermúdez entre 1975 a 1980). Sólo tres de ellos impulsaron medidas que tendieron a la apertura de mayores espacios de acceso de la sociedad a mayores servicios (Benavides, Odría) y a una clara democratización de la vida económica y social (Velasco Alvarado). Por su parte, algunos gobiernos civiles han asumido posiciones altamente autoritarios o dictatoriales. (Leguía, 1919 a 1930; Prado, 1939-1945 y 1956 a 1962; Fujimori, 1990 al 2000)

A pesar de las diferencias, y exceptuando a Fujimori, los gobiernos civiles han constituido un retorno a niveles de tolerancia política e institucionalidad democrática. Pero Leguía y Fujimori optaron por el recurso del golpe de estado apoyados por el ejército, para asumir el control directo del Estado y las funciones ejecutivas, legislativas, sometiendo incluso al poder judicial.



- 9 Mientras que las dictaduras militares se constituyeron articuladas en su mayoría al poder económico vigente, con la consecuente ruptura del orden institucional y democrático, también es cierto que solo uno de esos regímenes ha desarrollado políticas modernizadoras de alcance nacional (Velasco Alvarado), a diferencia de la mayor parte de los gobiernos militares y, especialmente, los civiles electos democráticamente.
- 10 Respecto a los gobiernos civiles, tenemos que entre 1919 y 1930, Leguía inició su gobierno mediante elecciones, pero propició un golpe de Estado el 4 de julio de 1919, disolvió el Congreso y promovió la elección de otro que lo apoyara, ejerció su mandato autoritario y populista reforzando el intervencionismo centralizado del estado, restringiendo los poderes de representación municipal y reafirmando sus tendencias dictatoriales al promover la persecución de sus opositores, con la cárcel y el exilio, durante sus dos periodos presidenciales.

Este régimen fue, sin embargo, el escenario para el despliegue de un debate político que influiría en la historia del país, y que se inició con el surgimiento de las corrientes nacionalista-radical y socialista con el APRA y Víctor Raúl Haya de la Torre y el Partido Socialista y la Central General de Trabajadores del Perú con José Carlos Mariátegui, y las tendencias conservadoras de Víctor Andrés Belaúnde y José de la Riva Agüero.

Los dos gobiernos de Manuel Prado (1939-1943 y 1956-1962), si bien reestablecerán los aspectos esenciales de la vida institucional y política del Estado, en el aspecto de la política económica constituyeron una suerte de prolongación de las políticas impulsadas durante las dictaduras de Benavides y Odría. Ambos periodos presidenciales, se caracterizaron también por el recurso de la fuerza militar como factor dirimente de los conflictos sociales y como factor político de contención de los movimientos y actores sociales de oposición.

Bustamante y Rivero (1945-1948) resultó, en términos de la apertura política y la construcción de la democracia, un punto de ruptura con los

LIB. CON
FALLA DE ORIGEN

regímenes anteriores. Fue además, el primero que logró establecer vínculos reales con las fuerzas sociales progresistas del país (el APRA) movilizadas a favor del cambio; fue el primer régimen, que, aún con la inexperiencia política, sus ataduras aristocratizantes y una gran oposición de las fuerzas conservadoras de la oligarquía, la iglesia y del ejército, logró dar sentido a un juego político parlamentario, a un sistema democrático e institucional del estado y a un sistema jurídico más moderno.

Nos hemos referido a Belaúnde Terry en sus dos periodos presidenciales. Lo consideramos una suerte de continuador de los antecedentes democráticos de Bustamante y Rivero, con una línea conservadora y reformista atados a concepciones viejas. Durante su segundo gobierno se acentuaron, sin embargo, la crisis del modelo sustitutivo, la crisis económica mundial y sus efectos en el país, el terrorismo y lo que Matos Mar ha calificado como el desborde popular, produciéndose una de las transformaciones más profundas en la estructura social peruana y los movimientos sociales más innovadores de las últimas décadas.

El gobierno de Alan García, dio continuidad a la institucionalidad democrática, pero fue el régimen en el que las políticas proteccionistas y de sustitución de importaciones llegaron a su límite, la institucionalidad estatal experimentó niveles de desgaste extraordinarios y el sistema de representación político entró en una crisis sin precedentes, perdiendo su capacidad de convocatoria política y social, agudizándose los procesos sociales anteriores y profundizándose la crisis política, problemas que serán la antesala para las aspiraciones dictatoriales fujimoristas. .

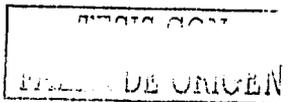
- 12 Fujimori, fue electo democráticamente en 1990 con apoyo de las fuerzas sociales de izquierda, el APRA y otros sectores medios y populares que se oponían al discurso neoliberal extremo de Mario Vargas Llosa, pero como Leguía, dos años después promovió un autogolpe de Estado que le daría el control del Ejecutivo, de un Congreso reformado y afín a él, además de subordinar al Poder Judicial y a todas las instituciones del Estado a su

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

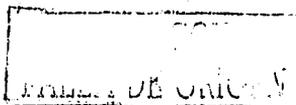
mandato y al de su asesor, sometiendo a la sociedad y a los movimientos sociales a un control comandado por el Servicio de Inteligencia Nacional, y más profundamente que Leguía, estableciendo una alianza con los militares para instaurar una dictadura civil-militar en el país.

Uno, Leguía, le dio impulso a la industria y a la modernización del país, fortaleció el poder oligárquico impulsando la extendida penetración del capital norteamericano en la economía; el otro, Fujimori, adscrito de manera extrema al neoliberalismo, abrió la economía al proceso de globalización, fortaleciendo al capital financiero internacional y a las empresas extranjeras. El primero, dejó al país en medio de la crisis económica de 1930, y del caos político y social y, a pesar de las movilizaciones, rebeliones y protestas, le sucedieron dos dictaduras militares (Sánchez Cerro y Benavides) donde sólo el APRA y, en menor medida el Partido Comunista podían ser el contrapeso civil de esa alianza oligárquica con los militares.

- 13 Fujimori, accedió al poder en medio de una institucionalidad y democracia debilitados, y con un movimiento social innovador en sus referentes culturales de solidaridad en la búsqueda de la sobrevivencia y el bien común. Pero para Fujimori esos referentes sociales no tuvieron peso alguno, hubo en él un interés por lograr el desplazamiento de la política para hacer un uso clientelar de lo social. Tampoco se trató para él, de orientar al país hacia una consolidación de la democracia y del sistema partidario; por el contrario, la crítica a ellos se convirtió en el motor de su proyecto autoritario, impuesto en alianza con los militares. La noción de proyecto nacional pasaba, pues, por la imposición de un orden que emanaba de un poder autoritario concentrado, sin la búsqueda de consenso. La democracia, como el sistema político partidario y las instituciones del Estado resultaban siendo un estorbo y el control de toda oposición devino en la cancelación de toda acción política partidaria e institucionalidad democrática, en el impulso de la antipolítica y el autoritarismo sin contrapeso.



- 14 Aún con el peso desafiante de resolución de sus demandas más sentidas de sobrevivencia, aún con la experiencia de crisis del sistema político en los últimos años de 1980, a pesar de la grave crisis económica y social y del éxito de Fujimori en la estabilización de la economía y erradicación del terrorismo, la sociedad peruana empezó el largo camino de reconstrucción de sus propias demandas sociales e instancias de mediación y representación. "Cambio 90", el movimiento fundado por los seguidores de Fujimori y que había atraído las lealtades populares y empresariales, había agotado esa posibilidad de constituirse en el referente político. La cada vez más profunda corrupción, el centralismo del poder, la discrecionalidad concentrada, el autoritarismo, comenzaron a ser ya no contrapuestos con las aspiraciones sociales de orden, sino con la necesidad de democratización del país.
- 15 La caída de Fujimori no ha sido producto de una demanda internacional importante, ha sido resultado de un intenso y arduo proceso de reconstitución de los actores sociales, viejos y emergentes. La reconfiguración política del país ante la nominación por el Congreso del Gobierno Provisional, que gobernó el país por casi un año, da cuenta de esa capacidad de constitución y recreación de los actores. De un lado, la institucionalidad estatal pudo ser reestablecida con el apoyo mayoritario de la población, de otro, el arribo a la democracia y al funcionamiento pleno de los Poderes del Estado dio legitimidad a Paniagua y a su gabinete.
- 16 En el 2001, la sociedad civil se enfrentó a una elección presidencial y parlamentaria donde no sólo había que sancionar las veleidades políticas de Alan García sino impedir la vuelta del Fujimorismo. Volvieron al escenario, el APRA, el Partido Popular Cristiano y un debilitado Acción Popular. Se desarrollaron nuevos movimientos sociales que precisamente lograron aglutinar a la oposición, y que para efectos electorales Alejandro Toledo ha dado por llamar "Perú Posible", aunque hasta ahora no signifique el inicio organizativo de un partido político. Las formas de lucha partidaria han estado marcadas por la prudencia y la tolerancia.



- 17 El Juego partidario, la búsqueda de alianzas, consensos, la erradicación de las dictaduras, la construcción de un referente sólido a la organización y funcionamiento del Estado y a la presencia política de los partidos, es cada vez una aspiración más nítida en amplios sectores de la sociedad. Todavía las formas partidarias para gran parte de la población no constituyen un atractivo importante; para los sectores populares y campesinos de gran parte de las provincias todavía este proceso no se ha extendido y fortalecido lo suficiente.
- 18 Como antes Velasco Alvarado, Alejandro Toledo marca el ascenso cholo al poder, sin embargo, no creemos que esto garantice un cambio sustancial en las políticas públicas de corte neoliberal, expresa eso sí, una profunda andinización del país y una suerte de democratización de la política. Sin duda que su régimen reproducirá muchos de los vicios anteriores, pero también constituye un referente distinto que finalmente lleve al país hacia una transformación institucional y transición democrática más estable y duradera.

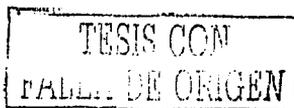
TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

BIBLIOGRAFIA.

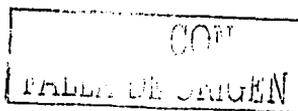
- 1 Adriansén, Alberto "Tragedia e ironía del socialismo peruano". Revista Pretextos No 1, agosto. División de Investigaciones den Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo. DESCO. Lima- Perú. 1990.
- 2 Álvarez, Elena. "Política económica y agricultura en el Perú 1969-1979". Instituto de Estudios Peruanos. Lima-Perú, 1983.
- 3 Anaya, Enrique. "Imperialismo, industrialización y transferencia de tecnología en el Perú". Ed. Horizonte, Lima-Perú, 1977.
- 4 Ballón. Eduardo. "Movimientos sociales: itinerario de transformaciones y lecturas" . En Movimientos sociales: Elementos para una relectura. DESCO. 1990. Lima-Perú.
- 5 Banco Central de Reserva: "Anuario Estadístico 1950, 1956".
- 6 _____ "Cuentas Nacionales y Memorias 1950-1960, 1960-1968"
- 7 Bonilla, Heraclio. " El minero de los Andes". Instituto de Estudios Peruanos. Lima, Perú. 1974.
- 8 Burga, Manuel y Flores Galindo, Alberto: "Apogeo y Crisis de la República Aristocrática". Ediciones Rikchay Perú. Lima Perú. 1995.
- 9 Cabrera, Humberto. "La crisis y la política de estabilización". Ed. Fundación Friedrich Ebert. Lima, Perú. 1978.
- 10 Cabieses, H y Otero, C. "Economía peruana: ensayo de interpretación". DESCO, Lima, Perú. 1977.
- 11 Calderón, Fernando. "Movimientos sociales y política. la década de los ochenta en América Latina" Ed. Siglo XXI. México. 1995.

- 12 Caravedo, Baltasar "Desarrollo desigual y la lucha política en el Perú, 1948-1956. La burguesía arequipeña y el Estado peruano" Instituto de Estudios Peruanos. 1980. Lima Perú.
- 13 E. H. Carr. ¿Qué es la historia? Ed. Planeta. Barcelona- España. Pp.144
- 14 Contreras, Carlos y Cueto, Marcos. "Historia del Perú Contemporáneo" Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad del Pacífico, Instituto de Estudios Peruanos. Lima Perú. 2000.
- 15 Córdova, Manuel. "9 de abril, algo más que un 64%". Revista Cuestión de Estado. año 3. No. 14-15. 1995. Lima. Perú.
- 16 Cotler, Julio: "Clases, Estado y Nación en el Perú". Instituto de Estudios Peruanos 1976. Lima Perú.
- 17 Cueto, Alonso. "El desprestigio de las palabras." Revista Debate. mayo-junio Lima- Perú. 1995.
- 18 Chávez, Eliana. " El empleo en los sectores populares urbanos: De marginales a informales" . Varios Autores. De marginales a informales. Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO) – Centro de Estudios de Democracia y Sociedad (CEDYS. Lima-Perú. 1990
- 19 Dabat, Alejandro. "La economía mundial y los países periféricos en la segunda mitad de la década del sesenta". En revista Teoría y Política no. 1. abril-mayo, México. 1980.
- 20 Dejo, Federico. "La crisis en cifras." Universidad Nacional Agraria- La Molina. Lima-Perú 1991
- 21 DESCO. "Boletín informativo: resumen semanal". 1 al 22 de febrero de 1980. Lima, Perú.
- 22 _____ "Perú 1968-1973:cronología política". Lima- Perú. 1974.

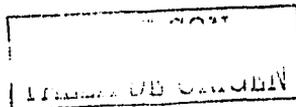
- 23 Degregori, Carlos Iván. "Sendero luminoso: 1. los hondos y mortales desencuentros, 2. Lucha armada y utopía autoritaria". Documentos de trabajo no. 4 y 6. Instituto de Estudios Peruanos. Lima-Perú. 1986.
- 24 _____. Auge Y caída de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. En "la década de la antipolítica. Instituto de Estudios Peruanos. Lima-Perú. 2000.
- 25 Fernández Santillán, José: "Sociedad civil y derechos ciudadanos". En la Revista Letras Libres. Febrero 2001, Año III, número 26. México.
- 26 Fitzgerald E.V.K. La Economía Política del Perú: 1956-1978. Instituto de Estudios Peruanos. Lima-Perú, 1981.
- 27 Franco, Carlos. "La otra modernidad." Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación. (CEDEP). Lima- Perú. 1991.
- 28 _____ "El Perú de los 90: Un cambio posible". Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación. (CEDEP). Lima-Perú. 1989
- 29 Gonzáles de Olarte, Efraín y Samamé Lilian, "El Péndulo Peruano: Políticas económicas, gobernabilidad y subdesarrollo, 1963-1990". Consorcio de Investigación Económica. Instituto de Estudios Peruanos. Lima.Perú. 1991
- 30 Gonzáles de Olarte, Efraín. Una economía bajo la violencia. Perú 1908-1990" Documento de trabajo No. 40. Instituto de Estudios Peruanos. Lima Perú. 1991.
- 31 Grompone, Romeo. "Las lecturas políticas sobre la informalidad". Varios autores: De marginales a informales. Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO) y Centro de Estudios de Democracia y Sociedad (CEDYS). Lima-Perú. 1990
- 32 _____ "Los partidos: volver a empezar". Revista Cuestión de Estado, año 3. no. 14-15. Instituto Diálogo y Propuesta. Lima-Perú. 1995.



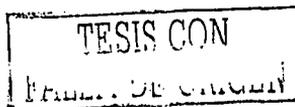
- 33 Guerra-García, Francisco. "Las tareas pendientes." Revista Debate. Instituto Apoyo. Mayo-junio, Lima-Perú. 1995.
- 34 Huamani, Gisele y otros. "Rondas campesinas en Cajamarca: la construcción de un alternativa," Revista Debate Agrario no 3, (CEPES), julio-septiembre. Lima-Perú. 1988.
- 35 Iguñiz, Javier. "Perspectivas y opciones de la economía peruana ante la crisis". Ensayo presentado en el coloquio: Perspectivas y opciones de las economías latinoamericanas. Lima-Perú. 1983.
- 36 Jiménez. Felix. "Estado, economía y mercado: paradigmas teóricos, crisis y proyectos de modernidad en la economía peruana." En Estado y Sociedad: relaciones peligrosas. DESCO. Lima-Perú. 1990.
- 37 Klaren, Peter. "La formación de las haciendas azucareras y los orígenes del APRA". Ed. Moncloa. Lima- Perú. 1973.
- 38 López, Sinesio. "El Estado oligárquico en el Perú: un ensayo de interpretación". Revista Mexicana de Sociología. año XI. Vol. XI, no. 3, julio-septiembre 1978. Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. México.
- 39 _____ "El Perú de los 80: Sociedad y Estado en el fin de una época". En Varios Autores: Estado y Sociedad: Relaciones peligrosas. Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo. DESCO. Lima - Perú. 1990
- 40 _____ "Perú 1995: transición sin consolidación democrática". Revista Cuestión de Estado, año 3. no 14-15. Instituto Diálogo y Propuestas. Lima Perú. 1995.
- 41 Madueño Paulette, Ruth. "Identidad y nación en el Perú: apuntes para un análisis". En Identidades y Nacionalismos, libro coordinado por Lilia Granillo. Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. Departamento de Humanidades. México. 1993.



- 42 _____ "La crisis económica y las políticas de estabilización en el Perú, 1975-1979". Reporte de investigación. Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. Departamento de Sociología. México. 1988.
- 43 _____ "Un reformismo renovado: el gobierno militar de la primera fase. Perú 1968-1975". Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. Departamento de Sociología. México, 1988.
- 44 _____ "Fujimori: la institucionalidad quebrada, los actores y los procesos sociales controlados" Trabajo presentado en el Seminario Estado y Sociedad en América Latina dirigido por el Dr. Marcos Kaplan, en la Facultad de Filosofía y Letras. Doctorado en Estudios Latinoamericanos. UNAM 1997. México.
- 45 Malpica, Carlos. " Los dueños del Perú". Ediciones Peisa. Lima, Perú. 1975.
- 46 _____ "El desarrollismo en el Perú: década de esperanzas y fracasos, 1961-1975". Ed. Horizonte. Lima-Perú. 1975.
- 47 Manrique, Nelson: "Violencia e imaginario social en el Perú contemporáneo",. En " Tiempos de ira y amor". Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo. DESCO. Lima Perú. 1990.
- 48 Matos Mar, José y Mejía, José Manuel. "La reforma agraria en el Perú". Serie Perú problema no. 19. Instituto de Estudios Peruanos. Lima-Perú, 1980.
- 49 Matos Mar, José "Desborde popular y crisis del estado. el nuevo rostro del Perú en la década de 1980". Serie Perú problema 21. Instituto de Estudios Peruanos. Lima-Perú. 1985.
- 50 Méjia, José Manuel " La neorreforma agraria". Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC), Cambio y Desarrollo, Instituto de Investigaciones. Lima Perú. 1990.



- 51 Melgar Bao, Ricardo: "El movimiento obrero Latinoamericano".- Alianza Editorial. 1988. España.
- 52 Planas, Pedro: "Los orígenes del APRA, el joven Haya" Okura Editores. 1986. Lima Perú.
- 53 Pipitone, Ugo: "La salida del atraso: Un estudio histórico comparativo". Centro de Investigación y Docencia Económica y Fondo de Cultura Económica. México 1994. Pp. 14.
- 54 Portocarrero, Gonzalo. " De Bustamante a Odría: El fracaso del Frente Democrático Nacional" 1945-1950. Ed, Mosca Azul, Lima Perú.. 1982.
- 55 Quijano Obregón, Aníbal. "Imperialismo y lucha de clases en América Latina". En Movimiento obrero y acción política. Ed. Era. Serie popular. México 1975.
- 56 _____ "El fujimorismo y el Perú." 1995. (Mimeografiado).
- 57 Revista: "Economía y Política". No. 1, septiembre-octubre. Lima-Perú. 1979.
- 58 Roca, Luis. "Viejas ataduras con nuevos nudos. apuntes sobre el capitalismo monopólico y la política económica actual". Ediciones populares de los Andes. Lima- Perú. 1974.
- 59 Roel, Virgilio. "Proceso y crisis de las economías peruana y norteamericana. mimeo. Lima-Perú. 1979.
- 60 Sánchez, Luis Alberto: "Apuntes para una biografía del APRA". Tomo I. Ed. Mosca Azul. 1978. Lima Perú.
- 61 Sheahan, John. "La Economía peruana desde 1950. Buscando una sociedad mejor" Instituto de Estudios Peruanos. Lima Perú. 2001



- 62 Starn, Orin. "Reflexiones sobre las rondas campesinas, protesta rural y los nuevos movimientos sociales". Instituto de Estudios Peruanos. Lima-Perú. 1990.
- 63 Sulmont, Denis. "El movimiento obrero peruano, (1890-1980)". Reseña histórica. Ed. Tarea. Lima-Perú. 1980.
- 64 Thorp, R; Bertram, G. "Perú 1890-1977: Crecimiento y Políticas en una Economía Abierta". Ed. Mosca Azul.. Lima, Perú. 1985.
- 65 Tovar, Teresa y Zapata, Antonio. "La sociedad mestiza: Vecinos y pobladores en el 90". En Varios Autores: Movimientos Sociales. Elementos para una relectura. Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO). Lima-Perú. 1990
- 66 Yépes. Ernesto. "De Pizarro a Fujimori". En la revista Páginas. Agosto-septiembre. Centro Bartolomé de las Casas. Lima-Perú. 1990
- 67 Zárate, Carlos. "El FMI y la política económica en el Perú". Tesis de maestría en Economía. CIDE. México. 1978.